



COMENTARIOS
DE LA CONSTITUCION
DE
LA CONFEDERACION ARGENTINA

COMENTARIOS DE LA CONSTITUCION

DE

LA CONFEDERACION ARGENTINA,

CON NUMEROSOS DOCUMENTOS ILUSTRATIVOS DEL TEXTO

POR

D. F. SARMIENTO

DIPUTADO AL CONGRESO CONSTITUYENTE, ELECTO A UNANIMIDAD
DE SUFRAGIOS POR LA PROVINCIA DE SAN JUAN,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (1868-1874)

"¿Queremos ser federales? Seámoslo al menos como lo son los únicos pueblos que tienen esta forma de gobierno."

"¿Queríamos, acaso, inventar otra forma federal desconocida hasta hoy en la tierra?"

ARGIRÓPOLIS.

PRÓLOGO DEL Dr. CLODOMIRO ZAVALÍA

Pie de Imprenta de la 1ª. edición
SANTIAGO DE CHILE
IMPRENTA DE JULIO BELIN I CA.
Setiembre de 1853

BUENOS AIRES

Talleres Gráficos Argentinos de L. J. ROSSO — Sarmiento 779





PROLOGO DE LA PRESENTE EDICION

Sarmiento debió ser uno de los autores de la Constitución. San Juan lo eligió por unanimidad de votos para representarlo en la magna asamblea reunida en Santa Fe; pero acontecimientos que él calificó en su hora con la dureza que le era habitual impidieronle desempeñar un mandato tan honroso y para el cual estaba excepcionalmente capacitado. Una inclinación innata a la cosa pública lo puso en contacto con ella, primero en las columnas de la prensa y luego a través de los distintos escenarios en que su figura imponente se movió estrepitosa durante medio siglo. Sin la disciplina y el sosiego que el aprendizaje del derecho común exige, se lanzó detrás de las cuestiones de derecho público a impulso de una determinante casi siempre de enjundia política. Un prodigioso don de enterarse de los problemas que su inquietud atraía a la mesa de la cotidiana lucubración derivaba fácilmente hacia las soluciones repentistas y de ocasión que matizan la mole de su obra sesuda y trascendental.

Había vivido intensamente el período anterior a 1853. En las vigiliass del destierro constituía su preocupación dominante la forma cómo habría de estructurarse el sistema institucional con que se dotaría al país, una vez extirpada la tiranía, cuyos excesos tenía dispersa en los países circunvecinos a una generación brillante que se preparaba desde lejos para afrontar la ta-

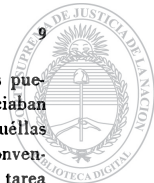


rea que cerraría el ciclo abierto en 1810. Cuando las dianas de Caseros anunciaron el advenimiento de la libertad, desde Chile, Bolivia y Montevideo empezaron a regresar los proscritos, dentro de cada uno de los cuales venía un estadista. La mayoría de los convencionales que, a fines de 1852, arribó a Santa Fe procedía de esa falange; ninguna provincia dejó de investir con la representación constituyente a sus hijos más preclaros, recién regresados del destierro. Es claro que Sarmiento formaba en ese grupo, y su presencia en el Congreso habría realizado, si esto es posible, su importancia.

Los acontecimientos se encargaron de alejarlo del recinto, pero no de la cuestión. Apenas sancionada la Carta, se apresura a comentarla poniendo a contribución el inapreciable bagaje de su experiencia, de su patriotismo y de su sagacidad.

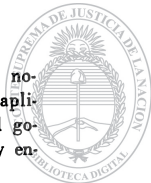
Se trata, como es comprensible, de la acotación marginal de textos cuya filiación doctrinaria y exacto significado le fué posible a Sarmiento poner de manifiesto, con más o menos visión acerca del coeficiente de realizabilidad que cada uno de aquéllos ofrecía. Sólo después de setenta y cinco años de vigencia puede abrirse juicio sobre las bondades e inconvenientes de un código político. Los aciertos como los errores han podido ya hacerse visibles en ese lapso que es, sin embargo, en la vida de los pueblos, el mínimum dentro del cual resultan prudentes las apreciaciones dirigidas a destacar la destreza de los que intervinieron en la sanción.

Es fácil situarse en el ambiente que existía al iniciarse los trabajos constituyentes. El alivio sobreviniente en los espíritus a la caída de la tiranía confundíase con el deseo de que se fundara un orden de cosas en el cual no volviera a ser posible la existencia de gobiernos que actuaran fuera de las normas escritas. Los que durante el destierro — Sarmiento entre ellos — habían templado su alma en la adversidad, enriquecieron, también, su bagaje científico familiarizándose con doctrinas institu-



cionales que, ya por esa época, hacían la felicidad de otros pueblos. Seguramente, en lo íntimo de su patriotismo, acariciaban durante los largos desvelos el deseo de ver implantadas aquéllas en el país. Y como si, de antemano, hubiese existido el convencimiento de que a nadie mejor podía elegirse para la tarea constituyente que a aquellos hombres, todos, o casi todos, fueron investidos por las provincias de la magna representación con que llegaron a Santa Fe a fines de 1852. Pocas veces habrá sido elegida con mayor acierto una asamblea política. Cada uno de sus miembros ocupaba con títulos indiscutibles su asiento; y la reunión de todos constituía la expresión genuina de lo que el país, en ese momento, tenía de más representativo y prestigioso.

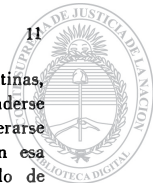
Como por un cauce natural se llegó, sin discrepancias, a la adopción del sistema federal de gobierno. Parecería que hubiesen sido investidos los constituyentes de un mandato imperativo al respecto. Es que, en realidad, si no estaba consignado ese mandato en fórmulas escritas — que no fuesen los pactos pre-existentes, — existía en la propia convicción de cada uno de los constituyentes, adquirida sin esfuerzo al contemplar retrospectivamente el panorama histórico, en el cual aparecía con rasgos nítidos la personalidad de las provincias. Fueron, pues, los diputados a Santa Fe con la noción inequívoca de que representaban entidades soberanas de derecho público dispuestas a ceder una parte de las prerrogativas inherentes a tal condición para dar nacimiento a una entidad artificial que las comprendiera a todas y estuviese investida de la autoridad suficiente para poder cumplir las funciones que le incumbirían dentro del sistema. Para alcanzar los beneficios del desenvolvimiento económico, cultural y social del país resultaba indispensable la existencia de un poder que abarcase las actividades generales, porque, de lo contrario, desarrollándose aisladamente en aquellos aspectos las provincias, se habrían malogrado en gran parte sus energías. De ahí la creación de un organismo artificial en el cual se depositaron los resortes capaces de resolver los problemas comunes. Sarmiento tenía, por su conocimiento tan



preciso de las instituciones norteamericanas, una perfecta noción de las posibilidades que en nuestro país existían de aplicarlas con éxito. En ningún momento duda de que sólo el gobierno federal era compatible con las aspiraciones de paz y engrandecimiento que en todas partes se alentaban.

Las provincias siguieron el mismo proceso en que se basa la organización social. El hombre, sujeto de derechos, necesita forzosamente deponer una parte de ellos en favor de la colectividad que se encarga de velar, mediante los resortes propios de la acción gubernativa, por el respeto del resto de su acervo jurídico. Exactamente lo mismo hicieron nuestras provincias: eran dueñas, sin duda alguna, de un cúmulo de facultades y de recursos en potencia; pero necesitaban asegurar la realización de los beneficios que reportaría la comunidad de los pueblos comprendidos dentro de los límites históricos del antiguo virreinato, consolidada en un poder con la suficiente cohesión para evitar que se malgastasen estérilmente los esfuerzos aislados. Así nació el poder central. Bryce ha caracterizado con acierto insuperable el proceso de ese nacimiento en lo que a los Estados Unidos de Norte América se refiere. “La distribución de poderes — dice — entre el gobierno nacional y los de los Estados se ha efectuado de dos maneras: de una manera positiva, concediendo ciertos poderes al gobierno nacional y negativamente, imponiendo ciertas restricciones a los Estados. Hubiera sido superfluo *conferir* poderes a los Estados, porque conservan todos los que no les han sido negados expresamente. Un jurisconsulto encontraría igualmente innecesario imponer *restricciones* al gobierno nacional, porque este no puede ejercer poderes que no le correspondan expresamente”. He aquí sintetizada con claridad la noción del federalismo. Desde que se empezaba por conceder, era necesario que existiera la entidad que hacía la concesión (los Estados particulares); pero no era indispensable, ni resultaba posible, que preexistiese la entidad concesionaria que nacía y se formaba, precisamente, con la substancia que traía consigo la concesión.

Resulta, pues, intergiversable, en presencia de un razona-



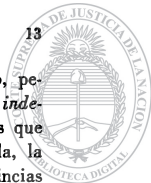
miento semejante, la preexistencia de las provincias argentinas, las cuales, como ya se ha dicho, consintieron en desprenderse de una parte de su potestad gubernativa. No ha de considerarse en pugna con este enunciado la circunstancia de que en esa época algunas provincias dispusieran y sigan disponiendo de recursos muy escasos. Nadie como Sarmiento se ha detenido a poner de manifiesto el hecho; lo hace con crudeza, a la vez que con pasión, ya que las páginas que dedica al asunto constituyen un alegato en contra del designio formalizado después de la jura de la Constitución de hacer de Buenos Aires la Capital definitiva de la Nación. “Conocida es ya la insignificancia y nulidad de varias de las provincias que figuran en el mapa político... Hay diez, por lo menos, sin renta, sin material de ejército, sin hombres notables en suficiente número, sin industria floreciente... Si Buenos Aires se divide en dos provincias, si el núcleo de población y de riqueza que tiene la República se desbarata, ¿qué elemento de poder, de recursos y de fuerza queda para hacer frente a las emergencias del porvenir?... Si hoy hay trece provincias impotentes, ¿cuántas habrá cuando se le añada otra de campañas pastoras con una villa por capital, con suburbios por todo territorio?... Si Buenos Aires pesa demasiado en la balanza política, en lugar de una desmembración ruinosa para todos, resistida tenazmente por los que tienen derecho a ello, ¿no valdría más pensar en agrupar provincias según su colocación y necesidades, en vez de constituir quince nulidades incoherentes y casi imposibles, tan incapaces de bastarse a sí mismas, como impotentes para defender la Nación, formar cinco o seis Estados relativamente fuertes, unidos por una administración de justicia común? La Constitución no cierra esta vía y, por el contrario, la prevé, indicando sólo que sea facultativa y no compulsoria dicha reunión de una o más provincias en una sola”. El tema tiene en el libro un desarrollo extenso y vivaz. Nunca creyó Sarmiento que las provincias, salvo Buenos Aires, fuesen capaces de hacer algo grande. El cuadro, desde 1853 a la fecha, poco ha variado en lo que a tres o cuatro de aquéllas se refiere;



pero, sin contar con que algunas otras han progresado considerablemente, el acierto en la elección del sistema federal no puede ser puesto en duda, desde que el estacionamiento de algunos de nuestros Estados autónomos proviene de circunstancias que les son exclusivamente imputables.

Lo que interesa, sin embargo, al punto de vista que viene desarrollándose es el concepto de la preexistencia indiscutible de las provincias como entidades de derecho público y de la aptitud en que se encontraron de delegar una parte de sus facultades soberanas, de su potestad gubernativa. Es la manera *positiva* a que Bryce hace referencia y que dió nacimiento al gobierno nacional, cuya consolidación exigía que las entidades particulares estuviesen impedidas de realizar ciertos actos. Esto último es la manera *negativa* en el proceso morfológico del federalismo. Se comprende que la Constitución no se haya detenido a conferir poderes a las provincias, desde que los tenían todos, con excepción de los que expresamente delegaban. Del mismo modo, habría sido pueril imponer restricciones al gobierno central, toda vez que quedaban expresamente enumeradas las únicas facultades que podían ejercitar. En nada pusieron más cuidado los constituyentes que en especificar dichas facultades. La enumeración es prolija y obedece al nítido concepto que aquéllos tenían de las modalidades del sistema federal. La extensión del poder de la Nación podía preverse y circunscribirse, en tanto que la extensión de atribuciones de cada provincia debía quedar necesariamente ilimitada, sujeta a las contingencias del futuro, a las necesidades que la evolución general determinara.

No es posible dudar de que fué éste el concepto de los hombres de la organización nacional. Gorostiaga, uno de los más eminentes de entre ellos, miembro ya del Congreso nacional que acababa de instalarse en 1862, pudo decir: "La autoridad delegada en la Constitución por el pueblo argentino ha sido confiada a dos gobiernos enteramente distintos: el nacional y el provincial. Como el gobierno nacional ha sido formado para responder a grandes necesidades generales y atender a ciertos intereses comunes, *sus poderes han sido definidos y son en peque-*



ño número. Como el gobierno provincial, por el contrario, penetra en todos los detalles de la sociedad, *sus poderes son indefinidos y en gran número*; se extienden a todos los objetos que siguen el curso ordinario de los negocios y afectan la vida, la libertad y la prosperidad de los ciudadanos. Las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. El gobierno de las provincias viene a ser la regla y forma el derecho común. El gobierno federal es la excepción". Estas palabras encierran, fuera de toda duda, la interpretación más auténtica del espíritu que presidió la obra de los constituyentes.

Surge de lo expuesto la noción intergiversable de que los poderes del gobierno central han sido definidos y enumerados *limitativamente*, en tanto que las provincias han conservado una porción considerable de facultades que no pueden definirse ni enumerarse, por cuanto dependen y se refieren a cuestiones suscitadas en el curso ordinario de los sucesos, esto es, a todo aquello que forma el orden natural en la vida de los pueblos. Todas las necesidades, pues, que provienen del progreso general, de las exigencias del bienestar colectivo deben ser atendidas por la entidad primaria de gobierno que es la autoridad local, por ser la que está en contacto más directo con el medio en que aquellas necesidades se producen. Sólo cuando la resolución a adoptar se refiere a cuestiones que interesan por igual a todas las provincias, vale decir, a la República, entra a actuar el poder central. Ya hemos de ver, sin embargo, cómo se procedió siempre en contra de aquella regla, contribuyendo a crear, de ese modo, la causa mayor de las deformaciones que en la práctica sufrió nuestro federalismo.

Los hombres reunidos en Santa Fe — y los que, como Sarmiento, seguían desde fuera los debates — tuvieron en todo momento presente, como una obsesión, la idea del engrandecimiento futuro del país sobre la base de asegurar el orden y la tranquilidad general. Todos sus afanes tendían a ello; y desde



el Preámbulo hasta el último artículo de la Carta trasciende esa constante preocupación. No hay duda, pues, de que adquirieron, ante todo, el convencimiento de que la manera más segura de alcanzar aquella aspiración era adoptando el sistema federal. También se advierten esos propósitos en la historia institucional norteamericana. A través de Story es fácil ir viendo cómo nace y se desarrolla el convencimiento de que “la separación de los poderes en comunidades soberanas e independientes, *sin la fiscalización de un gobierno central*, comprometía la paz y la seguridad común”. La confederación de los trece Estados nació, pues, desde el día siguiente a la emancipación, antes de la cual ya, sin embargo, Franklin la había propuesto, aún para el caso en que se realizara una conciliación con Inglaterra; pero los acontecimientos vinieron bien pronto a demostrar que no habían sido acertadas las primeras medidas adoptadas en favor y como consecuencia de la unión. En primer lugar, anota *El federalista*, la falta absoluta de todo poder coercitivo en manos del gobierno central fomentaba la actitud disolvente de algunos Estados y “esto sólo ya era bastante para quitar toda fuerza a la Unión, considerada como gobierno superior, si se puede llamar gobierno a lo que no posee ninguno de los *atributos enérgicos* del poder”. Es, en efecto, esencial a la estructura del federalismo que el gobierno central disponga del poder coercitivo suficiente para hacer efectiva la vida en común de las entidades particulares y tenga, además, en sus manos la facultad de realizar los fines generales de la unión. Hamilton, uno de sus más grandes defensores, señaló los inconvenientes y trastornos que provendrían de no conferir al gobierno central atribuciones adecuadas al carácter nacional de su gestión. “Un gobierno — dice — cuya constitución le haga incapaz de que se le confieran todas las facultades que un pueblo libre puede delegar a todo gobierno, sería un depositario inseguro e inconveniente de los intereses nacionales”. Es, pues, tan esencial en el sistema federal que las entidades particulares conserven un caudal de atribuciones que define su soberanía, como que el poder central esté organizado sobre bases tan sólidas que hagan posi-



ble la realización de los grandes fines de engrandecimiento y bienestar general que le están encomendados.

Sarmiento fué siempre un enamorado de semejante sistema institucional; sólo que, al celebrar su adopción por nuestros constituyentes, no admitía que hubiese en ello otra cosa que el entusiasmo que las instituciones norteamericanas producían: resultaba pueril atribuir a nuestra ascendencia española, a la herencia del sentimiento particularista, siquiera sea una parte en la razón determinante de aquella actitud.

Cualquiera que sea la importancia que llegue a asignarse a la influencia que el sistema institucional norteamericano tuvo en el ánimo de nuestros constituyentes, no puede existir duda acerca de que la posibilidad en que éstos se encontraron de ver funcionando en la realidad de la vida instituciones acerca de las cuales la doctrina era aún balbuciente y fragmentaria, es lo que les permitió tener con tanta nitidez el concepto de un sistema gubernativo que sigue, aún hoy, siendo abstruso para muchos tratadistas. Para no citar, a este respecto, sino a un autor con el que nuestros estudiosos están más familiarizados, véase lo que Orlando expresó en sus conferencias de 1924: "Ningún tema de derecho público europeo ha dado lugar a tan formidables disputas y a tan profundas incertidumbres como el tema del Estado Federal. En cierto sentido, a los juristas europeos, a la escuela dominante de Europa, se ha presentado como a los matemáticos *el problema de la cuadratura del círculo*. Frente a la doctrina tradicional del derecho público que nosotros hemos examinado, criticado y combatido, *el Estado federal representaba una verdadera anomalía*". ¿Cómo era posible, entonces, suponer que esos hombres que habían vivido en las privaciones del destierro, sin otros libros sobre ciencia política que los dos o tres que por entonces habían llegado al Río de la Plata, ninguno de los cuales contenía una exposición concreta del sistema federal, pudieran haber procedido en la concepción básica de



su obra y en la articulación del pormenor de las instituciones, sin la mirada permanentemente fija en el gran país septentrional? El panorama de los Estados Unidos, ya por entonces en la senda de su actual grandeza, debió ser para nuestros constituyentes la concreción más sugerente de un sistema institucional respecto del cual había más experiencia práctica que doctrina.

Pueden aislarse, sin embargo, nociones capaces de fundamentar la doctrina científica acerca del sistema federal. Su definición, desde luego, puede enunciarse así: el sistema federal de gobierno consiste en la coexistencia de dos voluntades gubernativas sobre un mismo territorio, la nacional y la provincial, y en que la primera existe por una delegación de facultades hecha por las entidades particulares a fin de constituir una entidad central de gobierno que se encargue de realizar las iniciativas relacionadas con los intereses generales, conservando las entidades particulares una porción suficiente de facultades para cumplir los fines de su subsistencia como autoridad local. Se trata de la armonía de dos poderes; y el juego normal y coordinado de los mismos es lo que revela en la práctica la bondad del sistema.

Ahora bien: son postulados inequívocos del sistema federal los siguientes: 1º Que es tan vital para el afianzamiento del federalismo que el gobierno central disponga del poder suficiente para llenar los fines generales de la unión, como que las provincias ejerciten realmente las facultades que no delegaron en aquél; 2º Que en el terreno estricto del derecho público las entidades particulares deben considerarse preexistentes, toda vez que son las que conceden una parte de su poder y es con esta substancia que nace y se organiza el concesionario, esto es, la entidad central federativa; 3º Que las facultades del poder central han sido previstas y están *limitativamente* enumeradas; 4º Que las facultades de las provincias no pueden preverse en su totalidad y son todas aquellas que, no habiendo sido delegadas, se relacionan con los problemas suscitados por el orden natural en la vida de los pueblos; 5º Que en caso de duda acerca de si corresponde a la Nación o a las provincias una facultad



no expresamente enumerada en la delegación, debe entenderse que corresponde a la entidad particular.

Tal es la teoría del federalismo. Véase, ahora, cómo se ha cumplido entre nosotros durante los tres cuartos de siglo que han transcurrido desde su implantación y desde que Sarmiento, fresca aún la tinta de su enunciado escrito, expusiera, como corolario de la obra de la convención, las brillantes páginas que ahora se reeditan.

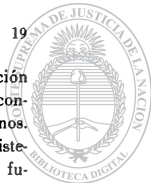
La forma en que las circunstancias hicieron que se desenvuelvan las actividades del país después de 1853 ha contribuido de manera poderosa a deformar en el hecho el sistema federal. Actualmente puede afirmarse de un modo inequívoco que las provincias vienen desempeñando un papel muy inferior a aquel que les tocó realizar en el momento de la organización constitucional del país y al que les corresponde como consecuencia de la misma. Es tan pujante la preponderancia del poder central, que hay provincias donde ha estado durante varios años sin reunirse la Legislatura sin que se notara su inacción. Tal es el extremo a que se ha llegado en el camino de permitir que el Congreso federal legisle sobre todas las materias que se relacionen con el progreso y bienestar de la población.

Debido a la poca iniciativa de los gobiernos provinciales, a la escasez de sus recursos y a lo precario de su crédito — tan crudamente puesto de manifiesto por Sarmiento, — el Congreso nacional ha tenido que estar legislando en todas las épocas sobre asuntos que son del resorte indiscutible de la soberanía local. No cabe suponer que existiera un designio preconcebido de absorción. Hombres de provincia, en su mayoría, los senadores y los diputados no podían ser sospechados de un propósito de debilitamiento de las instituciones provinciales por simple afán de fortalecer el poder central. Nada de eso. Las circunstancias en que se desenvolvía la vida de la Nación contribuyeron a deformar *ab initio* el federalismo, mediante la actuación prepon-



derante del Congreso solicitado de continuo por las exigencias que el desenvolvimiento general iba planteando. No era posible descuidar la colonización de nuestros territorios inmensos, ni la construcción de ferrocarriles y otras obras públicas, ni el fomento de la instrucción primaria, ni la asistencia social en todos sus aspectos y gradaciones. De modo que el Congreso fué haciendo en obsequio del interés general todas aquellas cosas que debían primordialmente llevarse a cabo por las provincias y que, ante su impotencia, habría resultado imperdonable que no las tomara a su cargo el Poder legislativo nacional. Es así cómo durante setenta años ha venido legislando el Congreso en forma tal que puede considerarse prácticamente abolida una gran parte del poder de legislación reservado a las provincias. Basta tener presente que las actividades del poder central — leyes o decretos — han reemplazado la acción provincial. En efecto, son servicios nacionales los que tienen a su cargo las comunicaciones y los transportes, una parte cada vez mayor de la instrucción primaria, toda la secundaria y superior, la higiene y salubridad públicas, la defensa de la agricultura y ganadería, la asistencia social en cuanto se traduce en leyes de protección gremial, la construcción de puentes y caminos, la sistematización de las obras de riego, etc. Todo esto da idea de los límites estrechos a que ha quedado reducida la iniciativa de las autoridades provinciales.

No es aventurado sostener, por lo tanto, que nuestro sistema institucional está profundamente alterado. El federalismo argentino sufre, en efecto, deformaciones hijas de las circunstancias, pero no por eso menos deplorables y funestas para el porvenir de la República. Acontece, a menudo, que las generosas concepciones de los hombres de gobierno no logran en la práctica un desarrollo acorde con el concepto jurídico, con el principio filosófico, o con la norma sociológica, que las inspiraron. Respecto de las instituciones argentinas no es posible ya negar que los constituyentes, con toda su sabiduría y previsión, no pudieron tener la noción de la forma en que se desarrollaría la vida de la Nación. La existencia efectivamente autónoma



y preponderante de las provincias y su permanente gravitación en el desenvolvimiento del país — principio esencial en la concepción del federalismo — no se ha cumplido, ni mucho menos. Antes, por el contrario, puede proclamarse la quiebra del sistema, sin que ello implique desaliento y resignación para el futuro. No, puede todavía reaccionarse y debe reaccionarse. Los tiempos mejores para las instituciones provendrán, no cabe duda, de una política encaminada a que el punto de vista provincial pese realmente en los destinos nacionales.

Es indispensable destruir la creencia, por demás arraigada, de que el poder central es el único factor de adelanto y bienestar. Salvo aquellas cuestiones que llevan en sí la posibilidad de ser encaradas con un criterio extensivo a todo el país y de ser resueltas en armonía con las necesidades generales del mismo, — enumeradas en los incisos del artículo 67, — todas las demás actividades gubernativas relacionadas con aquel adelanto y bienestar corresponden a la soberanía local.

Las provincias deben reasumir la plenitud de las atribuciones que tienen designadas en la constitución. Provenirá de aquí un gran provecho para las instituciones, que repercutirá en la política nacional, cuyo desenvolvimiento tendrá que hacerse algún día sin prescindir, como ahora puede hacerse debido a la absorción de los poderes federales, de los sentimientos y tendencias nacidos en el seno de la vida provinciana.

Tal es el cuadro de la vida institucional argentina, es decir, lo que en la práctica resulta el federalismo. Y cabe preguntar si ello significa que este sistema de gobierno no respondía a los antecedentes históricos. Al mismo tiempo es necesario establecer si es de desearse el afianzamiento del actual orden de cosas, al margen, por completo, del federalismo, o si, por el contrario, debe tenderse a que este sistema sea una realidad en el país.

No ha de ser dudoso para los que hayan sostenido que el unitarismo era lo que convenía como forma de gobierno, que la



experimentación institucional ha demostrado que el sistema federal estaba reñido con los antecedentes históricos y con las modalidades del pueblo argentino. Desde luego, si la razón principal de que el poder central haya gravitado y absorbido tanto es que las provincias — como Sarmiento lo afirmaba — no estaban en condiciones de llevar a cabo el mínimum de acción gubernativa que define la entidad autónoma, resultaba fácil en el momento de la organización, y dentro de aquel criterio, partir de esa comprobación inequívoca para llegar, por un cauce lógico, a la adopción del sistema unitario. Apreciando el hecho con criterio simplista, es evidente que habría que confesar el desacierto con que procedieron los constituyentes al implantar un sistema institucional reñido con las modalidades del ambiente. Pero es que, si se profundiza el análisis, pueden hacerse comprobaciones suficientes para demostrar que han sido circunstancias fortuitas las que hicieron que una porción considerable de la acción gubernativa estuviese a cargo de las autoridades nacionales, en vez de repartirse entre éstas y las de carácter local, en orden a lo que resulta del espíritu y la letra de la Constitución nacional. Desde luego, si no fuera, como es, la capital de la República una ciudad populosa con atractivos de toda índole, el Poder central, que reside en ella, no se habría fortalecido tanto ni tenido, en consecuencia, la gravitación desmedida que ha sido causa de la deformación del federalismo. Los constituyentes no contaron con que el distrito federal llegaría a tener en un momento dado más de la quinta parte de la población total del país, así como también que, al lado de la importancia derivada del hecho de ser la sede de las grandes reparticiones públicas, concurriría la que proviene de un extraordinario movimiento comercial. Buenos Aires ha seguido concentrando en su seno las manifestaciones más palpitantes de la vida argentina, que se reducía a un mínimum cada vez más medroso en los centros mediterráneos. Insensiblemente fué trasladándose a la urbe inmensa toda la inquietud del país, produciéndose el fenómeno lamentable de que los hombres mejor dotados para la función pública estaban siempre dispuestos a abandonar los



escenarios provinciales deslumbrados por la perspectiva de vivir en la metrópoli. Fueron, de ese modo, quedando privadas las provincias de los servicios de aquellos de sus hijos que mejores condiciones habían acreditado para compartir la acción directriz del gobierno. Salvo excepciones, el elenco gubernativo ha resultado siempre, en el orden local, inferior a las exigencias de la administración pública, dándose el caso de algunas provincias, en pleno florecimiento económico, privadas actualmente de clase gobernante, debido a que sus hijos más preclaros viven fuera de ella.

Ha sido, pues, de este modo que la función legislativa, principalmente, ha estado y sigue estando en las provincias, salvo excepciones, en manos de ciudadanos no tan sólo sin aptitudes, sino preocupados del logro de ventajas políticas, antes que de servir los intereses vitales de la sociedad que están llamados a proteger. Los grandes gobernadores que ha habido en las provincias argentinas, si al mismo tiempo no eran jefes indiscutidos de partido, tuvieron que luchar con oposiciones legislativas que esterilizaron su acción. La obra de gobierno fué haciéndose cada vez más reducida; y como el Congreso no podía permanecer indiferente ante un espectáculo en el que el progreso y bienestar aparecían detenidos por la desidia de los legisladores locales, se inició un proceso de absorción de facultades que ha ido acentuándose hasta producir la situación actual, en la que todos aparecen ya conformes con que sea la acción federal la que provea a las necesidades más primarias de la vida.

Como de una política semejante provienen beneficios materiales que satisfacen las urgencias del mayor número, existe una como complacencia en mantener y aún perfeccionar una situación en la cual solamente muy pocos advierten lo que en ella hay de funesto para el porvenir institucional del país. Poco pesa en esa vorágine de despreocupación e inconciencia el sobresalto de los que, apegados todavía a las exigencias del sistema institucional que nos rige, pretenden que en la vida del país tenga más influencia la acción de los estados particulares. Hay momentos en que se llega a aceptar que la noción del federa-



lismo, tal como la concibieron y realizaron en la Carta los constituyentes, queda tan sólo para ser expuesta en la cátedra universitaria, a tal punto parece complacer a la mayoría del país el hecho de que siga a cargo del poder federal una porción cada vez más considerable de la tarea gubernativa.

Todos estos aspectos del problema institucional están tratados en las páginas elaboradas, como siempre, de apuro por el genial estadista, apenas terminada la obra constituyente. “No “bien hubimos abierto — dice Sarmiento — la primera página “de la Constitución federal, sancionada por el Congreso de “Santa Fe en Mayo y jurada por las provincias en Julio, cuando nos vino de súbito la idea primordial que encierran las “siguientes páginas”. Y estas se suceden en la vorágine de un pensamiento superior, torturado, a veces, por el recuerdo de los pasados sinsabores o por la inquietud de los nuevos días. Hay allí conceptos, como todos los suyos, originales y sugestivos. ¿Cuál habría sido su juicio, de vivir en esta época en que acaba de celebrarse el 75º aniversario de la Constitución? Es indudable que más de una de sus apreciaciones categóricas, teniendo tan sólo por delante los textos vírgenes aún de experimentación, habrían tenido que ser modificadas en presencia de la realidad. Se saben, por ejemplo, sus categóricas objeciones al artículo 110, que declara a los gobernadores de provincia agentes naturales del gobierno central; viendo detrás de esta cláusula la influencia indudable de Alberdi, agregó a la divergencia ideológica el encono personal: nada desvirtuaría más el sentido del mecanismo federal que esa delegación, contraria al modelo ofrecido por los Estados Unidos, donde son funcionarios especiales los que tienen a su cargo el cumplimiento en los Estados de los mandatos emanados del poder federal; sin embargo, durante setenta y cinco años, ningún acontecimiento demostró, entre nosotros, que la solución inspirada por Alberdi traía el germen de perturbación que Sarmiento le asignaba. También, en este mismo sen-



tido, podría aludirse a su poca visión del problema de la capital definitiva de la República.

Tres son los motivos que le indujeron a escribir los *Comentarios*: 1º) fijar puntos dudosos; 2º) poner de manifiesto el acierto de muchas cláusulas; 3º) destacar los pocos errores cometidos (tan fundamentales, sin embargo, a su juicio, que “inutilizan” toda la obra constituyente). Hay en la concepción del libro un punto de partida que exhibe al filósofo político en toda la ponderación de su juicio: una Constitución — enuncia — debe ser posterior a la efectiva posesión de los derechos que trata de proteger; de otro modo, sólo se habría hecho una obra artificial y expuesta a malograrse al contacto con la realidad. Anota también Sarmiento, como punto a considerar cuando se elabora una carta institucional, la tendencia de los gobernados a exagerar sus pretensiones de libertad. Fijados estos puntos de partida, se interna en la selva de la articulación constitucional, abriéndose paso a golpes de su dialéctica formidable. Asoma, a menudo, en el comentarista el apasionamiento que dirigió los pasos del luchador de la víspera contra la tiranía; el mismo lo dice: “Las pasiones políticas tienen eso de peculiar: ni consultan la conveniencia, ni se someten al análisis de la lógica”. Se habría indignado, empero, si alguien hubiese puesto en duda la sinceridad de sus *Comentarios*. Pero, con todo, tratándose de Sarmiento, el saldo más útil de su obra proviene del choque permanente de su espíritu combativo con el medio en que le tocaba actuar.

→ Cuando Sarmiento, en 1853, destacaba, una vez más, las excelencias del modelo norteamericano, daba, como es natural, el valor que en las experimentaciones institucionales tiene el transcurso del tiempo. “La Constitución Federal de los Estados Unidos — dice — ha recibido la sanción del tiempo y, en su



“transcurso, pasada por la criba del examen cada una de sus frases, cada una de sus cláusulas, cada una de sus palabras. Centenares de volúmenes se han escrito comentándola, ilustrándola, y durante sesenta años los Tribunales federales han dado decisiones judiciales sobre las materias regidas por aquella “Constitución”. Es interesante, entonces, conjeturar, según antes se ha dicho, el juicio que habría merecido a un observador tan sagaz y autorizado el espectáculo de la Constitución Argentina después de su experimentación, puesta en contacto con el ambiente y expuesta a las asechanzas que derivaban de una deficiente educación cívica. Los trece Estados que originariamente formaron la Confederación de 1778 habían llevado bajo la dominación inglesa una existencia institucional intensa; el trance a la vida independiente y organizada no fué para ellos, como para nuestras provincias lo fuera, la revelación de un mundo nuevo, en el que la efectiva posesión de derechos tan preciosos como el del sufragio, constituía ya en los Estados Unidos una realidad, en tanto que, entre nosotros, era apenas una promesa que ¡ay! no tardaría en desvanecerse.

Sarmiento pudo contemplar antes de su muerte el saldo útil que era dable computar después de treinta y cinco años de contacto entre los textos que comentara en 1853 y la realidad de nuestra vida político-institucional. Es lástima que no quedara un “post-escritum” a los *Comentarios*. Desde luego, es seguro que tuvo tiempo para convencerse del indiscutible acierto con que expresó en el “Prólogo” de su libro que la Constitución norteamericana se adoptaría como aquellos específicos que vienen envueltos en la instrucción de cómo deben usarse.

Y sigue el grande hombre seduciéndonos con sus originales enunciados. A su juicio, una Constitución no puede considerarse la regla de conducta general para todos los hombres; para la masa popular tienen más importancia las leyes ordinarias, los jueces que las aplican y la policía de seguridad. “Son las clases



“educadas — agrega — las que necesitan una constitución que asegure las libertades de acción y de pensamiento, la prensa, la tribuna, la propiedad, etc.; y no es difícil que estas (aquellas: las clases educadas) comprendan el juego de las instituciones que adoptan”. Poca noción tienen, en efecto, nuestras masas populares de la clase y efectiva extensión de los derechos que les acuerda la Carta; o ignoran que determinada garantía existe o exageran la extensión de aquéllas, acerca de las cuales se instruyen a través de la interesada exposición que se hace en las tribunas de la propaganda política-electoral. No es posible negar, sin embargo, que la verdadera consolidación de un sistema institucional exige primordialmente el contacto con el pueblo, sólo que, debido al profesionalismo político, aquél resulta a merced de los que lo ejercen sin otra finalidad que la obtención de resultados circunscritos y transitorios.

La experimentación de nuestro sistema institucional ha puesto, indudablemente, de manifiesto la necesidad de revisar una parte de su articulado. Mucho se viene insistiendo por dar forma a una aspiración que no ha logrado aún concretarse por los que, además de afanes políticos, ponen de manifiesto una efectiva preocupación por el bien público. Los proyectos hasta ahora presentados demuestran, en efecto, hasta qué punto están ausentes de la mente de sus autores las preocupaciones de orden superior; es decir, aquellas que, alzándose por sobre las necesidades que suscita la brega electoral, pongan la mirada en los problemas realmente fundamentales de que depende el bienestar general. El ambiente en que actualmente se desenvuelve la vida nacional no es, por lo demás, el más propicio para emprender una tarea cuya eficacia depende, en gran parte, de la serenidad de los espíritus. Estos continúan todavía agitados por la violenta transformación producida en nuestros hábitos políticos durante los últimos lustros. La efectiva ingerencia del pueblo en la elección de sus mandatarios ha fundado un nuevo orden de



cosas que se caracteriza por una tensión, hasta ahora desconocida, en el ritmo de la actividad democrática; el sistema institucional está siendo puesto a prueba, y muchos preceptos que desde la vigencia de la Carta no habían sufrido el choque con la realidad, adquieren sentido a través de la interpretación judicial. Hay, sin duda, en la escena un gran animador que imprime al mecanismo institucional una vibración, que podrá parecer forzada, pero que servirá para consolidarlo; será como la prueba del fuego que pondrá de manifiesto las excelencias de la obra imperecedera de los hombres que, en el recogimiento augusto de Santa Fe, articularon el Código político que ha permitido el engrandecimiento de la República.

Muchas veces, durante setenta y cinco años, ha sido necesario buscar en la obra múltiple de Sarmiento una guía para la interpretación constitucional. El grande hombre está siempre en la escena. De tal manera fué estrepitoso su paso por ella, que dura todavía el fragor de su actividad y retumba aún la austera sonoridad de su voz, como si se prolongara todo él en cada escuela, en todo debate institucional, en cien polémicas, en tanto volumen. Pareciera, en efecto, que, erguida aún su figura sobre el llano de la patria, el sol de su gloria la proyectara largamente, y que a su sombra fueran más lozanos los frutos de esas semillas que él arrojara pródigo y sin sistema.

Clodomiro Zavalía.

PRÓLOGO DE LA EDICION DE 1853



No bien hubimos abierto la primera página de la Constitución Federal, sancionada por el Congreso de Santa Fe en mayo, y jurada por las provincias en julio, cuando nos vino de súbito la idea primordial que encierran las subsiguientes páginas. “Eureka”, pudimos exclamar, no en relación a nosotros, sino con respecto al Congreso, por cuanto es, en efecto, el Congreso, quien ha señalado y abierto un camino anchísimo, al adoptar no sólo las disposiciones fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos, sino la letra del preámbulo y de gran número de sus disposiciones constituyentes.

Permitasenos una palabra en explicación de nuestros motivos actuales para examinar la obra del Congreso de Santa Fe, y de nuestro silencio antes de ser discutida y adoptada la Constitución. De lo primero es motivo suficiente nuestro deseo de fijar puntos dudosos que su texto encierra, hacer resaltar la oportunidad y acierto de muchas de sus cláusulas, y poner de manifiesto los poquísimos pero capitales errores que inutilizan, a nuestro humilde juicio, toda la obra. Por lo que respecta a nuestro pasado silencio, baste tener presente que habíamos sido nombrados Diputados al Congreso Constituyente, por elección unánime de nuestro país, y descartados por una política asustadiza e invasora; haciéndose por ello cuestión de decoro la de



andarnos desde Chile entrometiendo en emitir opiniones sobre lo que se nos había impedido hacer como función de nuestro carácter propio de Diputado.

No es tanto el texto de las constituciones políticas lo que hace la regla de los poderes públicos, como los derechos de antemano conquistados, y las prácticas establecidas. De aquí viene que en Inglaterra no hay Constitución escrita, y es el país constitucional y libre por antonomasia; de aquí procede también que en los Estados Unidos sea un hecho conocido que la Constitución no ha sido traspasada por la administración sino dos veces, y aun éste es punto muy disputado entre los estadistas. En los otros países, empero, la Constitución precede a la posesión de los derechos que asegura, sirviendo sólo de báculo para atravesar, no sin dificultad, por el fango de costumbres y malos hábitos que obstruyen el camino.

El arbitrario de la administración se desliza tras ella, disculpado y justificado por la exageración de las pretensiones de libertad de los gobernados, que no pocas veces sostienen con mayor tesón lo que es pura licencia y libertinaje político, que verdaderos derechos populares, y libertad real. De este hecho hemos visto muchos casos en Chile, no obstante estar constituido de veinte años a esta parte. Procede el mal de fuente conocida. ¿Quién me dice a mí que tal o cual es el sentido genuino de tal artículo de la Constitución y su preciso y estricto valor? ¿El gobierno? ¡Bah! Es porque así le conviene. ¿La oposición? Es porque son facciosos y quieren desquiciar el poder. Incriminándose así los partidos, no hay, pues, autoridad generalmente acatada; porque no hay decisión del caso, no hay jurisprudencia. Otros veinte años más de tanteos dejarán establecida una escuela administrativa que puede estar más o menos de acuerdo con el espíritu o la letra de la Constitución.

No sucede así, empero con la Constitución Federal de los Estados Unidos. En posesión aquellos países de las libertades inglesas, aseguradas por una larga práctica, y confirmadas por la resistencia formidable que opusieron a los avances de la Coro-



na, la Constitución era simplemente el prontuario en que quedaban consignados los hechos dominantes y los principios que los regían.

Pero de nada nos serviría el conocimiento de estas verdades, si parase en eso sólo. La Constitución Federal de los Estados Unidos ha recibido la sanción del tiempo, y en su trascurso, pasando por la criba del examen cada una de sus frases, cada una de sus cláusulas, cada una de sus palabras. Centenares de volúmenes se han escrito comentándola, ilustrándola, y durante sesenta años los Tribunales federales han dado decisiones judiciales sobre las materias regidas por aquella Constitución.

A tal grado de perfección llega hoy esto, que los partidos políticos no discuten cuestión alguna que a la Constitución se refiera, ni a la mayor o menor laxitud en la práctica. Todos los partidos están de acuerdo sobre lo que en el resto del mundo es motivo o pretexto ordinario para las revoluciones y el despotismo.

Ahora, pues, si nuestro país se constituye bajo el sistema federal, y si adopta en su carta constitucional hasta la letra de aquella otra Constitución, ya discutida, ya fijada, ya probada, resulta necesariamente que toda la labor de aquella sociedad, que toda su ciencia y experiencia viene, a la par de la Constitución, a servir de apoyo a la nuestra. La Constitución vendría a ser, pues, para nuestros males, lo que aquellas tisanas que traen, envolviendo el frasco que las contiene, la instrucción para enseñar la manera de usarlas.

Sirva esta simple comparación para mostrar lo que nos hemos propuesto en los *Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina* que principiamos, y es aplicar al texto de sus cláusulas las doctrinas de los estadistas y jurisconsultos norteamericanos, y las decisiones de sus tribunales. Una vez eohados en este camino, la práctica de la Constitución se simplifica, fijando el sentido genuino de sus disposiciones, ya para que los encargados de ejecutarla no se arroguen atribuciones que no



les confiere, ya para que los que han de obedecerla no pretendan, como sucede de ordinario, derechos que ella no asegura.

Dicesenos que los pueblos no están en estado de usar instituciones tan perfectas. Si hubiésemos de juzgar por ciertos hechos de la República Argentina, diríamos que esos pueblos no están preparados sino para degollar, robar, haraganear, devastar y destruir. Pero hay otro orden de hechos que muestran que esos pueblos en nada ceden a los otros americanos, en cuanto a capacidad de comprender el juego de las instituciones. Ahora una Constitución no es la regla de conducta pública para todos los hombres. La Constitución de las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican y la policía de seguridad. Son las clases educadas las que necesitan una Constitución que asegure las libertades de acción y de pensamiento; la prensa, la tribuna, la propiedad, etc., y no es difícil que éstas comprendan el juego de las instituciones que adoptan. Para el ejercicio de una Constitución cualquiera, no hay sino dos personajes de por medio, el mandatario, y el ciudadano; los dos aptísimos para instruirse, y saber si está o no en los términos de la Constitución, el intento sostenido por cada uno.

Toda duda a este respecto la resuelve el comentario; no el nuestro, a fe, que no hace más que desflorar las cuestiones, sino el comentario norteamericano, que es allí autoridad y texto para la enseñanza de colegios y universidades; pues la Constitución se enseña y profesa, como toda arte liberal, por pertenecer a esa clase las reglas y práctica de los grandes principios que responden a alguna de las cualidades nobles de nuestro ser.

Hemos seguido las doctrinas de Joseph Story, consultando su grande Comentario, en todo los puntos constitucionales que son de idéntica contextura con los que nuestra propia Constitución abraza (1).

(1) Commentary of the Constitution of the United-States, with a preliminary review of the constitutional history of the Colonies and States, before the adoption of the constitution, By, Joseph Story.



Cuando aquél se refiere a los antecedentes nacionales, hemos debido acudir a la fuente de todas las instituciones modernas, las libertades inglesas, de cuyas leyes fundamentales es sapientísimo comentador el juez Blackstone.

Para la apreciación de las variantes de nuestra Constitución hemos apelado a fuentes diversas que van señaladas en nota al pie, a fin de que el lector estudioso pueda consultarlas, y aún procurárselas; pues es de suma importancia para el publicista, el estadista, el jurisconsulto, y aún para los fabricantes de proyectos de constituciones que conozcan la importancia íntima de cada frase de la Constitución norteamericana, y la relación y dependencia en que se hallan unas de otras, por donde no es permitido, sin riesgo, suprimir una frase por parecer innecesaria, desligar un período por hallarlo mal sonante al oído, etc.

Si hay fecundidad con esta aplicación de la ciencia y práctica norteamericana a nuestra Constitución, mil trabajos del género pueden emprenderse, y en pocos años enriquecernos con una literatura constitucional, de que carecen por lo general los otros países constituidos. El asunto que tratamos nos traza el plan de la obra, que se reduce a seguir el orden de colocación de los artículos de la Constitución según se presentan; anticipando, sin embargo, aquellos otros que a los primeros hacen referencia, sin lo cual no podría tratarse de una sola vez un punto cualquiera. Hemos insertado en el texto de la obra numerosos documentos ilustrativos de las cuestiones suscitadas, para completar las ideas, y ofrecer modelos de las leyes que rigen el caso, o pruebas de los asertos avanzados. Van estos documentos en letra diversa de la del texto, a fin de que pueda el que no quiera entrar en tan mínimos detalles de un golpe, reservar esos documentos para consultarlos cuando lo hubiere menester.

La extensión de la materia no nos permite acometer la obra de un solo golpe, y esperar su terminación para publicarla; razón por la que presentamos esta primera parte, que ya contiene lo esencial. El ensayo que ofrecemos al público, aunque escrito



en la calma de la tranquila expectación de acontecimientos, para nosotros normales, no quita que de vez en cuando nuestras doctrinas busquen su piedra de toque en los hechos peculiares al país que va a constituirse.

La noticia del desenlace del sitio de Buenos Aires encontrónos a medio concluir esta parte primera de nuestro trabajo, de manera de tener sólo que suprimir un *quizá*, un *acaso*, donde los hechos presumibles pasaban ya, precipitados por la mano del tiempo, a ser hechos históricos; y termináramos aquí nuestra advertencia, si el estado de malestar en que quedan las provincias y la capital no hiciera oportuno entrar de paso en las causas de ese estado que amenaza prolongarse, sostenido por preocupaciones de que se echa mano para extraviar a los pueblos, y por el anuncio oficial de doctrinas de filosofía histórica que pretenden explicar los desmanes de una política de terquedad.

El doctor Saens, diputado por Buenos Aires al Congreso de Tucumán, informaba a sus comitentes, en febrero de 1817, de detalles íntimos de la época, que reproduciremos para aquellos que dan mucha fe en 1853 a iguales recriminaciones contra Buenos Aires, emanadas de la misma fuente. "Considere esa Noble Asamblea, decía (la de electores de Buenos Aires) cómo habrá de arribarse a una decisión, cuando los acuerdos no son provisionales, cuando se agitan las pretensiones de un pueblo contra otro, y de muchos contra la capital. Santa Fe quiere ser una intendencia independiente, y Buenos Aires ve sensiblemente *amontonarse* (1) de día en día su campaña por el contagio que le comunica ese pueblo, debiendo esperar, antes de mucho tiempo, *ser asediado*, y aún saqueado. La Rioja está separada de Córdoba, y ésta no quiere estarlo de ella. Jujuy ha protestado despo- blarse si no se muda el gobernador. Salta y la campaña de ésta sostienen a todo trance a Güemes. Santiago del Estero no se ha puesto a son de intendencia, pero nadie ignora lo que ha costado la tranquilidad de que goza".

(1) ¿Vino de esta palabra amontonarse, montonera?



“Los pueblos quieren repartirse con perfecta igualdad las ventajas de la libertad; pero no quieren contribuir con las cargas necesarias: muchos de ellos no quieren dar un recluta, ni un real para los ejércitos (de la Independencia)... Sólo en la provincia de Mendoza (San Juan incluso) se observa una disposición general y uniforme a contribuir para los apuros de la guerra”.

“Lo más irritante es que ni aún se consideran obligados a agradecer sus sacrificios a la capital. No sólo se consideran con derecho sobre los fondos de aduana, y aún sobre los municipales, sino que ha habido diputado que me ha sostenido que, por ser Buenos Aires el Estado en general, debían emplearse en pagar sueldos a los diputados del Perú (hoy Bolivia) por ser pobres. Cuando así se opina, se da la razón a Salta, o su *caudillo Güemes*, que quitó los fusiles al ejército, llamándolos de su Provincia; que desmembra para ella exclusivamente los fondos de sus cajas, bajo la misma denominación; que se resiste a dar un gaucho para el ejército, y retiene con escándalo todos los recursos, diciendo que los necesita para su defensa. Si se les pregunta a los que quieren disponer de los productos de la recocha de Buenos Aires con qué dotarán los tribunales que se habrían de establecer en su provincia en el caso de federación, responden que esas contribuciones se han de establecer en relación a la riqueza: es decir que la capital los pague (1)”.

Los motivos de 1817 subsisten, pues, y a ellos se agregan los que ha acumulado el lapso del tiempo, no sin que se inventen otros puramente personales que agravan más y más la situación.

Manifiestos y declaraciones terminantes han establecido ya esta situación. El Congreso contestando a nota del director de 21 de julio se expresaba en estos términos que establecen la cuestión personal: “El Congreso no tiene por qué disimular una

(1) Informe del Dr. don Antonio Saens, Diputado en el Congreso del Tucumán a la Junta Electoral de Buenos Aires. 1º de Febrero de 1817.



circunstancia característica de la manera de ser argentina; y que tal vez lo sea de todo pueblo que tras una noche de adversidades sociales, pugna por vivir a la luz del orden y de las leyes. Consiste esa circunstancia en ser tan necesario el Código dictado por la sabiduría y el patriotismo de un cuerpo de delegados de la Nación, como la presencia de un hombre, de su acción y de su influjo personales. *Ese hombre es V. E...*” Dice con razón V. E. “que su nombre está unido a la Constitución de la Confederación Argentina y pasará ligado con ella a la posteridad”. Tanto el Congreso como los pueblos reconocen esta gloria y este mérito alcanzados por V. E. Y por esta misma razón, la justicia hacia V. E. como el egoísmo perdonable de los pueblos, que quieren que esta Constitución sea una realidad en el tiempo más próximo posible, hacen que sea imposible admitir la idea de la separación de V. E. del lugar que ocupa y en el cual es todavía tan necesario”.

Por una coincidencia que tiene algo de fatídico, el mismo día la Legislatura de Buenos Aires acordaba lo siguiente: “Pero jamás, podrá aceptar al general Urquiza como el medio necesario para fijar las relaciones ulteriores de unos y otros pueblos, ni menos como la autoridad legal que represente el poder público de las provincias de la Confederación Argentina. El se ha mostrado constantemente como el primer enemigo público del gobierno de Buenos Aires: ha repelido todo género de proposiciones que tendieran a hacer cesar la guerra, queriendo sólo subyugar a su voluntad absoluta la suerte de la provincia de Buenos Aires. Aún en los últimos momentos de la guerra, cuando ya se sentía absolutamente vencido, ha preferido librarse él y su ejército de todos los azares consiguientes a una disolución y fuga precipitada, antes que tentar siquiera un arreglo de paz a nombre de esos pueblos, cuyas fuerzas había arrastrado a los combates. Las Provincias de la Confederación, por otra parte, comprenderán sin duda que el general Urquiza es por sí la dificultad más positiva para unir los pueblos de la República; y que el gobierno de Buenos Aires no podrá, ni deberá jamás esperar



que él renuncie a las pretensiones que mostró desde el primer día que pisó el territorio de esta Provincia. V. E. por otros medios, y sin la necesidad de reconocer en el general Urquiza el conducto oficial de las relaciones entre unas y otras Provincias, puede manifestarles que desea la paz en toda la República como el primer elemento para arribar a la organización de la Nación”.

Así la cuestión de organización se encarna en un nombre propio, y a sostenerlo o eliminarlo se consagrarán todas las fuerzas en pugna. Cuestión secundaria a la luz de los principios; pero agente activo siempre en los trastornos de las naciones. Las esperanzas del porvenir se agrupan en torno suyo para los unos; todos los terrores de un pasado horrible se reviven a su solo nombre para los otros. Para Buenos Aires es un elemento extraño, cuya aceptación considera la abdicación de su propia existencia y todos los razonamientos del mundo no borrarán las huellas hondas que en la animadversión local han dejado una insurrección de vándalos, y un sitio que reputa de conquistadores.

Nos excusaremos de analizar las causas de estas posiciones extremas e inconciliables, en que se colocan las provincias y la capital. Las pasiones políticas tienen eso de peculiar; ni consultan la conveniencia, ni se someten al análisis de la lógica. Son fuerzas de impulsión que marchan fatalmente a resultados casi siempre ignorados de los que acercan; pero que hacen avanzar o retroceder las sociedades. No hubo razones más concluyentes para la segregación del Paraguay, del Uruguay, de Charcas, Potosí, Cochabamba, etc., etc. Centro América con más reducido territorio se fraccionó en tres estados, y no ha podido volver más tarde a reincorporarse, no obstante la ruina completa de las fracciones.

Marchamos, pues, fatalmente a la desmembración. El espíritu de la prensa de las provincias lo revela, sin apercibirse de ello: los actos oficiales lo establecen de ambas partes. Todo el andamio de la separación se funda en la ilusoria esperanza de que Buenos Aires buscará más tarde la unión. Sin embargo, dos



veces ha vencido Buenos Aires a los que iban a buscarlo, y ha detenido sus legiones triunfantes en San Nicolás de los Arroyos, prueba de que ningún interés propio lo impulsaba a ir más adelante.

El tiempo dará sus resultados. Por ahora creemos sólo oportuno indicar algunos hechos primordiales que rigen o regirán la marcha lenta de los sucesos. Animan a las provincias temores de lo presente y esperanzas de un mejor porvenir. Quieren constituirse a todo trance los pueblos, quieren constituirlos a todo trance los que se han encargado de ello. ¿Podrán hacerlo?

Todo poder tiene por base la renta. Cinco millones de fuertes constituyen la de Chile, y cinco millones de fuertes ha gastado siempre la República Argentina en sostener su administración. Constituían antes el monto total de esta renta las entradas de aduana de Buenos Aires, llenando su déficit las emisiones de papel moneda.

La renta de Aduana queda ubicada en Buenos Aires, y poder humano alguno puede sacarla de allí, por las mismas razones que ninguna combinación política sacaría la aduana de Valparaíso. En la embocadura del Plata ha de haber siempre un punto de carga y descarga para el comercio. Ese punto lo ha señalado en la margen derecha del río la conveniencia mercantil. Tiene a su respaldo un país productivo de las materias de exportación, por esfera de acción una ciudad consumidora apoyada en la tradición de un siglo, y los ríos y caminos interiores que se reúnen a su frente o a su respaldo. Hay, pues, un mercado. A destruirlo pueden consagrarse mil medidas ruinosas, más para los que lo intenten que para el mercado mismo. Alejando destruyendo a Tiro, fundaba a Alejandría en las mismas condiciones; es decir, reparaba una falta.

La libre navegación de los ríos que afluyen al Plata, lejos de introducir cambio desfavorable a Buenos Aires, en la economía interna del comercio, no hace más que darle mayor auge. Para que un cargamento europeo pase de la isla de Martín Gar-



cia, es preciso que el mapa señale más arriba una ciudad de cien mil almas, o millones de población consumidora de artefactos. Mientras esto no suceda, y aunque sucediera, por las condiciones de la navegación fluvial, la carga y descarga se hará siempre en Buenos Aires, para que el comercio americano y no el europeo, apropie la cantidad y la especie de mercaderías que conviene a cada localidad. Esta es la función que desempeña Valparaíso en el Pacífico, no obstante y a causa de la libre navegación de los mares. En Valparaíso se truecan las mercaderías europeas, y los productos diversos de la costa; aunque esa costa se llame Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Centro América, etc., etc. Estas son leyes inmutables del comercio. El Paraguay y Corrientes, el interior por tierra, o por los ríos, tienen, pues, su centro comercial en Buenos Aires, a despecho de la política y de las divisiones territoriales.

Sucede otro tanto con las emisiones de billetes que representan crédito. El crédito requiere, por base, para usarlo, y aún para abusar de él, centros comerciales, Nueva York, Londres, Liverpool, París. Las provincias han rechazado durante cerca de treinta años el papel, por el instinto que lo rechaza siempre de los puntos donde la agitación comercial no viene en auxilio del temor natural de conservarlo en cajas, sin poder cambiarlo, y seguir los azares de su depreciación ganando, y perdiendo en ella. El papel es una inmensa deuda, echada al porvenir. Otra emisión de papel, desmejorando la situación del ya existente, tomará por punto de partida para cotizarse: 1º el valor existente, y 2º la nueva depreciación que ella misma obre. Si las onzas se cambian hoy en Buenos Aires por 300 pesos papel moneda, subirán a quinientos con la concurrente emisión; pero ésta a su turno principiará a cotizar las onzas a 600 pesos. Las leyes del crédito, como las del comercio están fuera del alcance de la voluntad de los hombres. La política sólo las favorece, cuando se somete a esas leyes.

De estos principios, que por obvios no hacemos más que apuntar, resulta que el establecimiento de un nuevo gobierno en



las Provincias debe hacerse renunciando a aquellas dos fuentes de renta señaladas por la Constitución. Ocurrirá en su defecto "a las contribuciones que equitativamente imponga el Congreso". Sabemos que San Juan y Tucumán han recibido ya su asignación de contribución. Esto es sólo el principio. Se necesitan tres millones anuales para el sostén módico de una administración.

Buenos Aires tiene antecedentes que le harán someterse a la separación a que la fuerza, por no consentir en obedecer al enemigo que ha rechazado tantas veces. Los habitantes de Buenos Aires, como los de todos los centros comerciales, no salen de su país y de su centro: no viajan; no se irradian a la circunferencia. Así es como no se ven porteños en las provincias; así es como Buenos Aires no tiene intereses que lo saquen de su territorio. Buenos Aires, además, se ha habituado a vivir en todos tiempos de sí mismo, y a hacer la representación de la nacionalidad argentina con sus propios fondos, entrando en ellos los de aduana. No discutimos teorías, sino que presentamos hechos. Los ejércitos de la Independencia, excepto el de San Martín, fueron todos sostenidos y pagados por Buenos Aires. La guerra del Brasil la sostuvo él solo, y a la de Montevideo tan ruinosa, las provincias no contribuyeron sino con *autorizaciones* para hacerla. Creemos que desde 1810 en adelante Buenos Aires no ha pedido jamás a las provincias dinero para hacer los gastos nacionales. Desde 1823 en adelante había la costumbre de autorizarlo a recibir embajadores y representar el nombre argentino.

Si Buenos Aires es separado *de oficio*, no se hace más que continuar un hecho que existe, sin los gravámenes que él le impuso, y que están consignados en su papel moneda. El nuevo gobierno establecido en el interior exime a aquella provincia de hacer erogaciones en nombre de todos, y devuelve al gobierno general el encargo de sostenerse y sostener la representación nacional. Sabemos que Buenos Aires ha solicitado ya, y se le ha negado, entenderse por otro conducto que el de su enemigo. La providencia se guarda todavía el secreto de estas extrañas anomalías!



Buenos Aires ha obtenido un triunfo, y a asegurarlo consagrará todo su esfuerzo. Su triunfo no es sobre el general Urquiza, accidente de poca consecuencia en los males internos del país. Hay algo que va más allá de la existencia de los hombres. Buenos Aires ha fenecido una faz histórica, y las provincias no la distraerán de sus propósitos puramente provinciales e internos. Hace veinticinco años que la sociedad fué desquiciada, y hoy entra de lleno en sus antiguas bases.

Desfavorecen la posición de Buenos Aires estas causas de disolución. No bien afianzado el sometimiento de las campañas, su ancha exposición al interior las abre a las tentativas de revuelta que la enemiga de los poderes provinciales provocará en ella; lucha de descomposición, de desorden y de vandalaje, en que puede de nuevo sucumbir la sociedad culta y propietaria; pero que a su vez puede despertar toda la energía de un pueblo que tiene veinte años de tradición de males sufridos, por la misma causa. El constitucionalismo de Lagos y sus secuaces puede ser de muy buena ley para los que hallarían su cuenta en aceptarlo. Desgraciadamente para Buenos Aires la Constitución, sostenida por los restos de los antiguos desalmados que tanto la hicieron sufrir veinte años, se asocia fatalmente a la Confederación pasada, al arbitrario, al sitio, y las recientes calamidades. Cuanto Buenos Aires reputa hostil a su regeneración estaba en el ánimo público del lado de la Constitución, y pervierte las ideas.

Tradiciones, hombres, partidos, localidades, se ponen, pues, frente a frente, esperando atraerse y absorberse, cuando no hacen más que dividir y deslindar dos campos hostiles. Cuanto mayores y más unánimes sean las recriminaciones de una y otra parte, tanto más ancha es la línea de separación. ¡Ni una sola voz en Buenos Aires por las Provincias! ¡Ni una sola voz en las Provincias por Buenos Aires!

Las provincias volverán a intentar una nueva invasión sobre Buenos Aires; y entonces se resolverán las complicaciones



de la nueva situación en que se colocan. Entonces, jugando sus restos a los azares de una guerra social, los pueblos que apoyan la actual desmembración cumplirán otra ley que hace tiempo está obrando: la despoblación y empobrecimiento de los puntos mal poblados por la colonización, y la reconstrucción de una nueva sociedad argentina en rededor del centro comercial y a las costas de los ríos. No creemos avanzado anunciar este desenlace. El gobierno de las provincias se instituye provisoriamente para pasar después a Buenos Aires; y este paso no puede hacerse sino por la conquista, esto es desposeyendo a Buenos Aires mismo o a sus habitantes de su derecho al suelo que posee, para que lo administre la persona a quien adhieren las provincias y a cuyo rededor se agrupan.

Si esta conjetura no es fundada, las provincias sin alucinarsen con una reincorporación que ellas mismas imponen a condiciones onerosas y repugnantes para Buenos Aires, deben mirar francamente su situación. Cada río de los que forman el estuario argentino ha dado nombre a una república fraccionaria. Hay la del Paraguay, la del Uruguay: la República Argentina trae su origen de la boca del río de que Buenos Aires es único ribereño. ¿Querrían también despojarlo de sus nombres propios? ¿No se formará una nueva confederación del Paraná? ¿Quién puede asegurar desde ahora adónde irá a detenerse la escisión obrada por el fatal convenio de San Nicolás? Parte del virreinato de Buenos Aires se llama hoy Bolivia, Uruguay, Paraguay, y los que los pueblan se envanecen de ello. Nosotros hemos sido en menos de cuarenta años, Provincias Unidas, República y Confederación Argentina. Acepten francamente los pueblos los resultados a donde van. La guerra a Buenos Aires para introducir en el Fuerte al general Urquiza, pues ésta es la cuestión, o la Confederación del Panamá, si un gobierno no se afirma y establece fuera de Buenos Aires.

Esta elaboración será penosa y lenta, como todas aquellas en que las pasiones del momento fuerzan la naturaleza de las



cosas a producirse. Mientras la desesperanza tarda en dar sus consejos, hemos querido en el siguiente trabajo mostrar a Buenos Aires y a las provincias que en la Constitución dada en Santa Fe hay elementos de organización que pueden ser fecundos, si de una parte se depone la exageración de la repulsa, y de la otra la exageración de la compulsión. Hay un campo neutro entre Buenos Aires y las Provincias, en todas partes menos en la Bajada del Paraná.

Terminaremos estas indicaciones reproduciendo el voto de centenares de argentinos, emitido hace ya un año. La verdad en política es como los libros de la Sibila. Desechada una vez por entero rechazada por segunda vez, la tercera es fuerza aceptarla por su precio primitivo, aunque una parte de ella haya dejado con el lapso del tiempo de aplicarse completamente a las circunstancias.

Manifestaciones de los argentinos residentes en Santiago

“Los abajo firmados, comisionados por sus compatriotas residentes en Santiago, para que fijasen las bases sobre las cuales, dejando a cada individuo la libertad de acción y la opinión particular que pueda formarse sobre la marcha de los acontecimientos que tienen lugar en nuestro país, habrían de hacer concurrir sus esfuerzos, su inteligencia y sus deseos en común en nombre de la Patria, y de la confraternidad argentina; y versándose las cuestiones actuales sobre hechos, que se prestan a interpretaciones diversas, de las cuales puede nacer la división entre los pueblos argentinos, la guerra misma, y la frustración de las esperanzas de organización que nos han sostenido en medio de tantas vicisitudes y contratiempos, hemos convenido, después de maduros y prolongados debates, fijar los puntos principales que dejamos consignados en los artículos siguientes:

“1º Entendemos y debemos entender por *organización nacional* el convenio mutuo, las concesiones recíprocas por las



cuales las provincias argentinas debidamente representadas en Congreso Soberano Constituyente, reuniéndose en un cuerpo de nación que lleve el nombre glorioso que nuestros padres nos legaron, se constituyan según los principios y las formas, que emanan del derecho común y no nos haga una excepción, o una anomalía entre las naciones constituidas.

“2º En consecuencia de esto, debemos rechazar con todas nuestras fuerzas, y reunir nuestra acción colectiva, a fin de impedir, en la esfera de nuestra capacidad, toda tentativa, toda tendencia a poner en riesgo la unidad territorial, ya por la desmembración de una o más provincias, ya por la división en toda la República, aunándose en un cuerpo las provincias, y Buenos Aires en otro.

“3º Para llegar al fin deseado de organizarnos en un cuerpo de nación e ilustrar el juicio y dirigir al bien la voluntad de los pueblos, debemos aconsejar a los que ejercen autoridad que propendan a mantener la paz en la República, encerrándose los gobiernos en los límites de sus jurisdicciones, respetando los derechos de las otras provincias, permitiendo la libre circulación de escritos, que sin faltar a las leyes ordinarias, debatan el pro y el contra de las cuestiones que se agitan, relativas a la organización nacional.

“4º Que los argentinos residentes aquí, y a su ejemplo y amonestaciones los escritores y publicistas que se propongan ilustrar la opinión pública, huyan como del uso de un arma vedada, de concitar los celos de unas provincias con otras, y desviar la opinión pública del objeto primordial que es constituirnos en un cuerpo de nación, y para ello la próxima e inmediata convocación de un Soberano Congreso Constituyente.

“5º Que para mejor fijar estos puntos, debemos declarar que el convenio de San Nicolás no es *en derecho* un acto consumado, desde que una de las partes contratantes no lo subscribió; y que por tanto, cualesquiera que sean sus ventajas o desventajas, la existencia de este pacto no debe ser mirada como obstáculo



para que nuevos convenios, o la adopción de nuevas bases, concilien los intereses divergentes, ni una bandera para que en pro ni en contra vuelva a ensangrentarse la República.

“6º Que la navegación libre de los ríos y la nacionalización de las aduanas exteriores deben considerarse como principios incorporados en el derecho nacional argentino, y no cuestionados por nadie.

“7º Que estos puntos primordiales sean sometidos a la consideración de los argentinos residentes en Santiago, y demás puntos de la República de Chile, como asimismo a nuestros compatriotas de cada una de las provincias, a fin de uniformar la opinión sobre puntos que, mal comprendidos, pueden acarrear consecuencias de infinita trascendencia, con desdoro de nuestro nombre en el exterior, hartamente abatido por los pasados extravíos, y dignos del menosprecio si, no obstante tan terribles lecciones, aún diese nuevos motivos de escándalo.

“Tales son las conclusiones a que la Comisión ha arribado y que somete a la consideración de sus comitentes para que se dignen resolver lo que juzguen conveniente”.—*Santiago, octubre 28 de 1852.*—*Juan Gregorio de las Heras. — Gabriel Ocampo. — Domingo F. Sarmiento. — Juan Godoy.* — Suscribieron esta manifestación en *Santiago*.

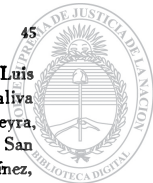
General de la Independencia: J. Gregorio de las Heras, Buenos Aires; Manuel Barañao, Buenos Aires; teniente coronel de la Independencia: Vicente Moreno, Mendoza; coronel de la Independencia: Pedro R. de la Plaza, Mendoza; teniente coronel de Lavalle: Lino Almando, Mendoza; teniente coronel del Ejército Grande: Domingo F. Sarmiento, San Juan; ingeniero de Chile: J. Antonio Alvarez Condarco, Tucumán; canónigo: Julián Navarro, Buenos Aires; canónigo: José Lorenzo Güiraldes, Mendoza; Pedro N. Herrera, Alcibiades de la Plaza, Mendoza; Santiago S. Cortínez, San Juan; Andrés Videla, Mendoza; L. Zuloaga, Mendoza; Francisco L. de la Barra; Jacinto Rodríguez Peña, Buenos Aires; Hilarión María Moreno, Buenos Aires; Honorio



Jurado, Mendoza; Abrahan Sireley, Rioja; Marco Antonio Lloveras, San Juan; Pedro Pablo Pastoriza, San Juan; Gregorio Güiraldes, Mendoza; José Arrieta, Argentino Oriental; Alejandro de la Rosa, San Juan; Jerónimo de la Rosa, San Juan; Estanislao Tello, San Juan; Juan Godoy, Mendoza; Demetrio Rodríguez Peña, Dr. Gabriel Ocampo, La Rioja; coronel Thompson, de los ejércitos de la Independencia, argentino naturalizado; Pedro Núñez Ortiz, Córdoba; Estanislao Espinola, San Juan; coronel Lorenzo Luna, Rioja; Francisco Villarino, Buenos Aires; N. Monasterio, Mendoza; capitán Pedro Plaza, Santiago del Estero; Francisco Guzmán, Mendoza; José Sosa, Mendoza; Julio Gardel, Buenos Aires; Juan Lavaissé, Santiago del Estero.

Valparaíso.—Vocal de la Junta Gubernativa en 1810, doctor Nicolás Rodríguez Peña, Buenos Aires; General de la Independencia, Ramón Antonio Dehesa, Córdoba; J. Victor de Achával, Tucumán; Luis E. Tello, San Juan; Máximo Viera, Buenos Aires; Manuel Miereles, Buenos Aires; Wenceslao Moyano, Mendoza; Eustaquio Pico, Buenos Aires; Dr. Felipe Ambroci, Buenos Aires; Hermenegildo Alvarez, Córdoba; Ignacio de las Carreras, Buenos Aires; Osvaldo López, Tucumán; Federico A. Toledo, Buenos Aires; Mariano Sarratea, Buenos Aires; Abel Quiroga, San Juan; José M. González Vélez, Córdoba; Emilio Bunge, Buenos Aires.

Copiapó.—Dr. Antonio Aberastain, San Juan; Carlos Branizan, Buenos Aires; Julián León, Mendoza; Natal Luna, La Rioja; Antonio López, San Juan; Angel Torino, Salta; Marcelino de la Rosa, Tucumán; Pedro Gordillo, Rioja; Juan Zaballa, San Juan; P. Argot, Catamarca; Samuel García, Rioja; Eusebio Guerra, Buenos Aires; César Valaguer, San Juan; Pantaleón García, Rioja; Dr. Ramón Ocampo, Rioja; Elías Araujo, Catamarca; Dr. Indalecio Cortínez, San Juan; Manuel J. Gómez, San Juan; Melitón Moreno, San Juan; Domingo María Garramuño, San Juan; Martín Rivadavia, Buenos Aires; Zacarías de Reina, Mendoza; Sigifredo Barchieri, Catamarca;



Manuel T. Castro, San Juan; Lisandro Puch, Mendoza; Luis Aberastain, San Juan; Manuel José Lima, San Juan; Ataliya Lima, San Juan; Vicente Lima, San Juan; Eleuterio Ferreyra, Córdoba; Manuel Peralta, Córdoba; Hilario F. Laval, San Juan; Martín Pádez, Buenos Aires; Hermenegildo Martínez, San Juan; Pedro Astorga, San Juan; J. M. Farfan, Mendoza; Dr. Gallardo, Buenos Aires; Dr. Enrique Rodríguez, Córdoba; Dermidio Ocampo, Catamarca; José Sayago, Córdoba; Gumer-sindo Ascunsulo, Córdoba; Ramón Rodríguez, Córdoba; Manuel Tanco, Catamarca; Benjamín Bates, Mendoza; Joaquín Villanueva, Mendoza; Manuel Aberastain; Juan Carranza, Córdoba; Luis Mendoza, Mendoza; Benito Quiroga, San Juan; Ignacio Larra, San Juan; Posidio Pereyra, San Juan; Cipriano Cáceres, Córdoba; Restituto Sosa, Mendoza; Zoilo Castillo, Rioja; Domingo de Oro, San Juan; Valentín García, San Juan; Marcelino Pasos, Rioja; Edmundo Herrera, Catamarca; Juan Ortiz, San Juan; Francisco Arias, Córdoba; Griseldo Roselot, San Juan; Ángel Pastor Vega, Catamarca; Facundo Ordoner, Córdoba; Régulo Martínez, San Juan; teniente coronel Manuel Heredia, Córdoba; Vicente Heredia, Córdoba; Dolores Heredia, Córdoba; Gerónimo Heredia, Córdoba; Jesús Santander, Mendoza; Flavio Cano, San Juan; Juan de Dios Villafañe, Rioja; Roberto Maure, Mendoza; Benicio Cocio, San Juan; Mariano Silva, Tucumán; Domingo Miranda, San Juan; Mariano Luna, Rioja; Abelardo Páez, Santiago del Estero; Lisandro Godoy, San Juan; Emilio Godoy, San Juan; Bartolomé Díaz, Rioja; Manuel Miranda, San Juan; J. M. Castro, San Juan; J. Dolores Gil, San Juan; Antonio Morales, San Juan; Inocencio Matos, Córdoba; Victorino Jaimez, Córdoba; José E. Castro, San Juan; Manuel Plaza, Rioja; Juan G. Marquez; Faustino Espínola, San Juan; Román Aberastain, San Juan; Francisco Antonio de la Vega, Catamarca; José Benito Albasey, Córdoba; Zacarías Coutiño, Catamarca; Pastor Torres, Córdoba; José M. Agüero, Córdoba; Manuel del Pino, Salta; Nicolás Román, Tucumán; Silvestre Galván, Rioja; Ramón Ruiz, San Juan; José María



López, San Juan; Samuel Sayano, Córdoba; Eulogio Castro, Córdoba; Rito Quintero, Córdoba; José Domínguez, Tucumán; Rafael Sayago, Córdoba; Juan de Dios Martínez, Córdoba; Julián Tames, Tucumán; José Guzmán, Salta; Bernardo Figueroa, Tucumán; Eliseo Posse, Tucumán; Rufino Luna, Tucumán; Belisario Figueroa, Tucumán; Hermenegildo Guzmán, Salta; Francisco Montenegro, Catamarca; Napoleón Macul, Tucumán; Ladislao Graña, Salta; Nicolás Páez, Catamarca; Manuel Sardines, Tucumán; José M. Gómez, San Juan; Manuel Beron, Corrientes; Manuel Plaza, Salta; Manuel Ramos, Catamarca; Dolores Olivera, Catamarca; José María Martínez, San Juan; Manuel Unsaiga, Santiago del Estero; Francisco Aguila, San Juan; Martín Balmaceda, San Juan; Pedro Cruz, San Juan; Pedro Albarracín, Catamarca; Manuel Terrada, Buenos Aires; Lucio Lasear, San Juan; José Vargas, San Juan; Santiago Cruz, San Juan; Benjamín Luque, Córdoba; Juan Balmaceda, San Juan; Francisco Javier Sandez, San Juan; Blas Brisuela, La Rioja; Abel Peragallo, San Juan; José Carranza, Córdoba; Lindor Peragallo, San Juan; Dionisio Peña, Salta; Estanislao Román, Tucumán; Dolores Besasi, Rioja; Isaías Córdoba, Catamarca; Tomás Brisuela, Rioja; Pedro Caballero, San Juan; José Luis Berasai, Rioja; Patricio Pérez, Tucumán; Miguel Aráoz, Tucumán; Juan Luna, Rioja; Aníbal López, San Juan; Manuel Aguirre, Tucumán; Juan Selada, Tucumán; José Maidan, Tucumán; Santiago de Brisuela, Rioja; Andrés Calderón, Rioja; Julián Peralta, Catamarca; Fidel Pereira, San Juan; Secano Quintero, Catamarca; Nicolás Brisuela, Catamarca; Mariano Pages, Catamarca; Francisco Ocampo, Catamarca; Julián Carriso, Catamarca; Abraham Dávila, Rioja; Justo Pastor Dávila, Catamarca; Manuel Suvita, Tucumán; Nicolás de la Fuente, Rioja; Hermenegildo Pina, Buenos Aires.

Lima.—Juan José de Sarratea, Buenos Aires; Alejandro Billa, Buenos Aires; coronel Espinosa, argentino oriental.

Cobija.—Ignacio Seguro, Salta; Manuel Tula, Salta.

Arica.—Guillermo Beringhurts, Buenos Aires; Jorge Tesanos Pinto, Salta.

PREAMBULO

Declaraciones, derechos y garantías de la Constitución argentina de 1853



Nos, los representantes del Pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia:— ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Confederación Argentina.

PARTE PRIMERA

CAPÍTULO ÚNICO.

Declaraciones, derechos y garantías.

Art. 1º La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.



Art. 2º El Gobierno federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano.

Art. 3º Las Autoridades que ejercen el Gobierno federal residen en la Ciudad de Buenos Aires, que se declara Capital de la Confederación por una ley especial.

Art. 4º El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación de las aduanas, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional.

Art. 5º Cada Provincia confederada dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria gratuita. Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación. Bajo estas condiciones el Gobierno federal garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Art. 6º El Gobierno federal interviene con requisición de las legislaturas o gobernadores provinciales, o sin ella, en el territorio de cualquiera de las Provincias, al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior.

Art. 7º Los actos públicos y procedimientos judiciales de una Provincia gozan de entera fe en las demás y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.

Art. 8º Los ciudadanos de cada Provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las Provincias Confederadas.

Art. 9º En todo el territorio de la Confederación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales registrarán las tarifas que sancione el Congreso.

Art. 10. En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.

Art. 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio



de una Provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Art. 12. Los buques destinados de una Provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito.

Art. 13. Podrán admitirse nuevas Provincias en la Confederación; pero no podrá erigirse una Provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las Provincias interesadas y del Congreso.

Art. 14. Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar, y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Art. 15. En la Confederación Argentina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice.

Art. 16. La Confederación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra consideración que la idoneidad. La Igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Art. 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Art. 18. Ningún habitante de la Confederación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado



por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente; es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, los azotes y las ejecuciones a lanza o cuchillo. Las cárceles de la Confederación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.

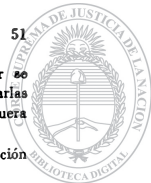
Art. 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Confederación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Art. 20. Los extranjeros gozan en el territorio de la Confederación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Confederación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite alegando y probando servicios a la República.

Art. 21. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día que obtengan su carta de ciudadanía.

Art. 22. El Pueblo no delibera, sino por medio de sus Representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición.

Art. 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declara en estado de sitio la Provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Pre-



sidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Confederación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Art. 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados.

Art. 25. El Gobierno federal fomentará la emigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.

Art. 26. La navegación de los ríos interiores de la Confederación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la Autoridad Nacional.

Art. 27. El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.

Art. 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Art. 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los Gobernadores de Provincia, *facultades extraordinarias*, ni la *suma del poder público*, ni otorgarles *sumisiones* o *supremacías* por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced del Gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.

Art. 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, pasados diez años desde el día en que la juren los pueblos.

La necesidad de reformar debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

Art. 31. Esta Constitución, las leyes de la Confederación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que tengan las leyes o constituciones provinciales.



- CAPITULO I

El Preámbulo



"Nos, los representantes del pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: — ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Confederación Argentina."

El preámbulo de las constituciones políticas es el resumen, digámoslo así, de todas sus disposiciones, el objeto que éstas se proponen asegurar, y como una tesis que todos los párrafos siguientes vienen a comprobar. Todas las constituciones escritas, y emanadas de la voluntad del pueblo, por medio de la ciencia de sus legisladores, llevan esta introducción; y cuando en la Asamblea constituyente de 1848 en Francia se propuso la moción de suprimir todo preámbulo, M. Lamartine en un elaborado discurso hizo sentir la conveniencia y la necesidad de esta declaración previa de los objetos y fines de una constitución, para asegurar y fijar la inteligencia e interpretación de sus disposiciones, por aquella declaración de principios constitutivos y constituyentes,



que dejan consignados el espíritu de los legisladores que la dictaron, y los fines que se propusieron alcanzar. El preámbulo de las Constituciones es, pues, no sólo parte de la ley fundamental, sino también la pauta, y la piedra de toque para la resolución de los casos dudosos, conformando su interpretación y práctica con los fines para que fueron adoptadas las subsiguientes disposiciones, y el espíritu que prevaleció en su adopción.

El preámbulo de la Constitución argentina en particular encierra una doctrina que debemos señalar. Haciendo a un lado indicaciones novedosas, renunciando la comisión de Constitución a toda vana pretensión de originalidad, adoptó la letra del preámbulo de la Constitución federal de los Estados Unidos. Esta abnegación personal en los miembros del Congreso, aquel rechazar frases de otra composición, aunque expresivas de ideas y fines parecidos, hacen patente el intento de imponer a la obra nueva de federación sudamericana el sello de la autoridad, de la sanción, y del prestigio de la constitución que le había servido de modelo. En las sesiones en que la Constitución se discutía uno de los miembros de la Comisión que redactó el proyecto, declaró ser éste una *adaptación* de aquella constitución a nuestra federación propia.

De esta declaración y del texto literal del preámbulo y principales disposiciones resulta un hecho de consecuencias inmensas. Por él, el derecho constitucional norteamericano, la doctrina de sus estadistas, las declaraciones de sus tribunales, la práctica constante, en los puntos análogos o idénticos, hace autoridad en la República Argentina, pueden ser alegadas en juicio, sus autores citados como autoridad reconocida, y adoptada su interpretación como interpretación genuina de nuestra constitución. El Congreso quiso que la joven federación, inexperta en la práctica de la forma de gobierno que abrazaba, no se lanzase en la nueva carrera a tientas, y sin guía, y la dotó desde luego de toda la ciencia y de toda la práctica de la única federación que existe. Una redacción del preámbulo o del tenor de las primordiales disposiciones, revestida de nueva fraseología o perifraseda y apartada de su letra actual, habría dejado a la especulación novicia de nues-



tros estadistas, o a las tentativas de una práctica incipiente, el fundar la legítima interpretación que debe darse a los conceptos y frases, dando así entrada al arbitrario de las opiniones y a los errores de la inexperiencia. Pero si la Constitución norteamericana ha producido ya resultados que todas las repúblicas acatan, y las viejas monarquías envidian, si sesenta años de ejercicio han fijado sus quilates al crisol de la discusión, la crítica y las decisiones judiciales ¿qué arbitrario o error puede admitirse en la ejecución de las mismas disposiciones, concebidas en los mismos términos?

Nos los Representantes del Pueblo con el objeto de constituir *We the People in order to form* la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz *a more perfect union, establish justice, insure domestic* interior, proveer a la defensa común, promover el *tranquillity, provide for the common defence, promote the* bien general, y asegurar los beneficios de la libertad para *general welfare and secure the blessings of the liberty to* nosotros, y nuestros hijos... ordenamos, decretamos y *establish, and our posterity, do ordain and esta-*blecemos esta Constitución para la Confederación Argentina".

blish this Constitution for the United states of America".

El sentido y alcance de aquellos conceptos en inglés, es el sentido y alcance de los mismos en castellano; el comentario norteamericano pasa a ser argentino; la práctica norteamericana regla y las decisiones de sus tribunales federales son antecedente y norma de las de los nuestros. El Congreso ha dado, pues, una Constitución y una jurisprudencia; instituciones nuevas, apoyadas en una práctica antigua. Esto es grande y nuevo en los fastos constitucionales.

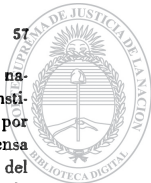
En conformidad con esta doctrina, nuestra tarea en los puntos idénticos o análogos de ambas constituciones federales es atenernos estrictamente a las doctrinas que tienen el apoyo de los más eminentes juristas, la autoridad de tribunales de justicia, la sanción de la experiencia más próspera y luminosa, y el consenso de un gran pueblo que está hoy al frente de la civilización



en cuanto a la aplicación de sus resultados a la mejora y felicidad del mayor número, y que es nuestro tipo en cuanto a instituciones federales; porque sería monstruoso, por no decir ridículo, pretender que las mismas ideas, expresadas con las mismas palabras, para fines idénticos, hubiesen en nuestra constitución de producir diversos resultados, o tener significado distinto; mucho más cuando la primera tiene en su apoyo una larga experiencia, lo que debió darle nuevo valor a los ojos de aquellos que la aceptaron; pues, lo propicio de los resultados ya conocidos, bonifica y responde de que fué la mente de los legisladores asegurar esos mismos resultados para los pueblos que se proponían constituir.

Traerá además, para el logro de nuestro propósito, la adopción de este sistema, el inspirar la confianza necesaria en asertos que, a no venir revestidos de la autoridad que les prestan las fuentes clásicas de que emanan, sentarían plaza de meras opiniones individuales, tan controvertibles a los ojos de los demás, como pudieran serlo las objeciones que hubiese de oponerles una crítica poco ejercitada en estas materias.

Es máxima admitida, dice, comentando este mismo preámbulo el juez Story, en el curso ordinario de la administración de la justicia, que el preámbulo de un estatuto es la llave para entrar en la mente del legislador, en cuanto a los males que requieren remedio y a los objetos que han de alcanzarse, mediante las disposiciones del estatuto. "Acúdese a él cuando la parte dispositiva ofrece dudas o ambigüedades". "No hay razón, pues, para que en la ley fundamental o Constitución del gobierno, no se preste igual atención a la mente del legislador, según está consignada en el preámbulo; y en conformidad a esto vemos que los estadistas y los jurisconsultos se han referido constantemente a él para la exposición de sus cláusulas". Pero el preámbulo no debe, según el mismo comentador, ser citado para ensanchar los poderes confiados al gobierno general, o a alguno de sus departamentos. No confiere *per se* poder alguno, ni puede por implicancia, extender los poderes dados expresamente. No puede deducirse de él facultad alguna de las que la Constitución no ha



otorgado expresamente. Su verdadera función es explicar la naturaleza, extensión y aplicación de los poderes que la Constitución confiere, sin crearlos en su esencia. El preámbulo, por ejemplo, declara ser uno de sus objetos “proveer a la defensa común. Nadie duda de que esto no extiende los poderes del Congreso, para adoptar las medidas que juzgue útiles para la defensa común”. Cítanse con encomio las palabras del Justicia Mayor Jail, relativas a este preámbulo. 1. Formar una unión más perfecta; 2, establecer la justicia; 3, asegurar la paz interior; 4, proveer a la defensa común; 5, promover el bienestar general; 6, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad”. “Sería halagüeño, añade, a la par que útil, poner de manifiesto las relaciones que cada uno de estos objetos tiene con los demás, y mostrar cómo ellos comprenden colectivamente, todo lo que, mediante la Divina Providencia, es necesario para hacer próspero y feliz a un pueblo”.

Pero antes de entrar al estudio de los párrafos que son comunes al preámbulo de ambas constituciones, hemos creído oportuno detenernos a examinar lo que es peculiar al de la República Argentina, principiando por la denominación con que la Constitución designa el país o el Estado que va a constituirse.

“Confederación”

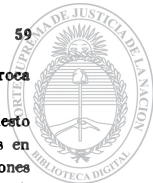
Los más fundamentales principios de gobierno están comprometidos en el uso de esta palabra *Confederación*, con que se designa la República que forman las Provincias que en otro tiempo se llamaron Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Es una Confederación de la República Argentina? ¿Quiere sólo indicar la Constitución que lo era tal, hasta el momento de promulgar la Constitución federal? ¿Continúa después de su sanción y adopción, siendo una Confederación? ¿Qué es, pues, una Confederación?

Una confederación es, en el sentido genuino, diplomático y jurídico de la palabra en todos los idiomas del mundo, una



asociación o liga entre diversos estados, por medio de un pacto o tratado. Las colonias inglesas de Norte América se confederaron entre sí para resistir por las armas a las pretensiones del Parlamento inglés que quería imponerles derechos, no estando ellas representadas en dicho cuerpo; pero la Confederación de colonias cesó desde que se constituyó un Estado federal de todas las colonias, por medio de la Constitución de 1788, y entonces la antigua Confederación pasó a ser una Unión de Estados con el nombre de Los Estados *Unidos* de la América del Norte. La palabra confederación implica la idea de un tratado celebrado entre Estados o gobiernos. Hablando Story de la Constitución de los Estados Unidos, dice: “Es un acto del pueblo, y no de los estados en su capacidad política. Es una ordenanza o establecimiento de gobierno, y no un pacto, aunque fuere originado en el común consentimiento”. — “Su obvio objeto fué sustituir a una *confederación de estados*, un gobierno del pueblo; a un convenio, una constitución. — La constitución fué adoptada para formar una unión más perfecta, que la de la (pasada) *confederación*”. — ¿Desde qué punto de vista, pues, ha de ser mirada la Constitución de los Estados Unidos? ¿Es un mero pacto, tratado o *confederación de estados*, componiendo la Unión?” “El pueblo ordena y establece una *constitución*, no una *confederación*”. “La distinción entre una constitución y una *confederación* está perfectamente conocida y entendida”. — La última, una pura *confederación* al menos, es un mero tratado o liga entre estados independientes, y *no obliga* sino durante el beneplácito de cada uno”.

“Los únicos lugares donde las palabras *confederación*, o *pacto* se hallan en la constitución, se refieren a asuntos de diversa naturaleza, y manifiestamente en contra-distinción a constitución — así en la sección décima del primer artículo, declara “que ningún estado podrá entrar en alianza o *confederación* alguna” — y en el artículo 6 que todas las deudas contraídas antes de la adopción de esta constitución serán válidas contra los Estados Unidos, bajo esta *constitución*, como bajo la *Confederación*”. El lenguaje del artículo 3º de ésta era: “Los dichos



estados entran cada uno en una firme *liga* de amistad recíproca para su común defensa, etc.”

Los vicios que la Confederación había puesto de manifiesto en los pocos años que estuvo en práctica han sido resumidos en estos capítulos. — 1º El principio de regular las contribuciones por cuotas proporcionadas al valor de las tierras, que era mirado como injusto, desigual e inconveniente en su operación. — 2º La falta de una garantía mutua de los gobiernos de estado, que pudiese precaverlos de las insurrecciones domésticas, y de usurpaciones destructivas de su libertad. — 3º La falta de un poder directo para levantar ejércitos, que se le objetaba como tan contrario al vigor y prontitud de acción, como a la economía y justa distribución de las cargas públicas. — 4º El derecho de igual sufragio para todos los estados, de modo que al menos en punto de riqueza, población y medios estaban iguales en la escala de representación con los más grandes. De esta circunstancia podía y debía provenir que una mayoría de Estados conteniendo solamente un tercio de la población de los Estados Unidos, podía dominar los intereses y derechos de los otros dos tercios. Aun más; era constitucionalmente posible, y ocurrió de facto, que aun los votos de nueve estados podían no comprender la mayoría del pueblo de la Unión. La minoría por tanto poseía un voto negativo contra la mayoría. — 5º La organización de todos los poderes del gobierno en una sola asamblea, sin una separada o distinta distribución de funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Objetábase que o bien todo el edificio había de desmoronarse por su propia debilidad intrínseca, o acumulando todos los atributos de la soberanía, crear en el país la más execrable forma de gobierno en la forma de una aristocracia irresponsable. — 6º La falta de un poder *exclusivo* en el gobierno general para emitir papel moneda, y de este modo evitar que fuese inundado el país por papel sin valor, que destruye toda fe pública, como también la moral privada. — 7º La votación demasiado frecuente requerida por la confederación en el oficio de miembros del Congreso, con lo que se malograban, para los consejos públicos, las ventajas que resultan



de una larga experiencia, y conocimiento de los negocios públicos. — 8º La falta de poder judicial coexistente con los poderes del gobierno general”.

¿Cuál es, pues, en vista de declaraciones tan formales y expresas, el significado de la denominación *Confederación Argentina*, dada en la Constitución a la reunión de las antiguas Provincias Unidas del Río de la Plata? ¿Era el ánimo de los legisladores aceptar las consecuencias políticas que trae consigo la conservación de aquella denominación en la Constitución misma?

Es tanto más importante fijar el sentido de esta palabra, cuanto que muchos hechos anteriores tenderían, por su forma y apariencias, a establecer que, no obstante la Constitución, la República Argentina continúa siendo una confederación de estados o de provincias, aunque esta interpretación conduzca al absurdo y a la negación misma de los objetos y bases de la Constitución.

Desde luego, en el preámbulo se establece que la Constitución es dada conforme “a pactos preexistentes” aludiendo principalmente al de 1º de enero de 1831 y al Convenio de San Nicolás. En el primero se establecía una verdadera confederación, puesto que los que la estipularon eran meros agentes diplomáticos, enviados por los gobernadores de provincia, y revocables a su beneplácito. El Pacto o convenio de San Nicolás revestía las formas de un tratado celebrado entre provincias, o sus gobernantes, para crear un poder general provisorio, y echar las bases de la Constitución; y aun la circunstancia de dar a cada Provincia dos diputados para ser representadas en Congreso, parece argüir en favor de la idea de una confederación, pues no el pueblo es el representado, según su número, sino las demarcaciones provinciales. Todavía corroboraría este intento, la circunstancia de ser revocables esos mismos diputados, por los gobiernos de las provincias que los enviaron, lo que los colocaría en el simple rango de agentes diplomáticos, celebrando conferencias, que deben conducir a la celebración de un tratado.

Aun en el caso de la Confederación que precedió a la cons-



titución federal de los Estados Unidos, se suscitó esta cuestión de la incompatibilidad de una representación igual para estados de población desigual. En 1776 se pasó a los Estados un nuevo proyecto de Confederación por el cual los Estados no tendrían sino un voto para determinar las cuestiones. Franklin, que a la sazón era Presidente de una convención de Pensilvania, redactó una *Protesta* que fué elevada al Congreso, en la cual se establecían los principios que prevalecieron en la Constitución de 1788, que rige hasta hoy. Insertaremos este documento, por lo que hace a nuestro propósito.

“Nos, los Representantes del Estado de Pensilvania, reunidos en convención, habiendo considerado debidamente el plan de Confederación formado en el Congreso, y sometido a los diversos Estados para su asentimiento o disentimiento, declaramos el disentimiento de este estado a dicho plan por las razones siguientes:

“1º Porque la fundación de toda confederación, destinada a ser duradera, debe establecerse en principios de justicia y equidad, sin dar ni quitar ventajas a ninguna de las partes contratantes.

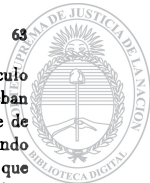
“2º Porque por la naturaleza de las cosas es justo e igual, que los diversos Estados de la Confederación sean representados en Congreso, y tener votos, en proporción a su importancia, según el número de sus habitantes, y la parte y grado de fuerza que suministran al cuerpo unido; por tanto, el artículo 7º, que da un voto a los más pequeños Estados, y no más a los más grandes, cuando la diferencia entre ellos puede ser de diez a uno o mayor, es injusta, e injuriosa a los Estados más grandes, desde que todos ellos están obligados por otros artículos a contribuir en proporción a sus respectivos recursos.

“Porque la práctica seguida hasta hoy en el Congreso, de conceder un solo voto a cada colonia, fué tomada al principio bajo la convicción de su impropiedad e injusticia, y para ser corregida más tarde, y fué desde entonces y después reconocida, solamente como un expediente temporal, para servir en los negocios ordinarios, hasta que pudiesen obtenerse los medios de



rectificarlo. Así aparece claramente de la resolución del Congreso, datada en septiembre de 1774, que fué el día de su reunión, cuya sanción está concebida en estos términos: “Que al determinar cuestiones en este Congreso, cada colonia o provincia tendrá un voto, no estando el Congreso en posesión, ni hallándose en aptitud de procurarse materiales adecuados para verificar la importancia de cada colonia”. Aquella importancia se ha supuesto desde entonces hallarse mejor en el número de habitantes; pues el Congreso no sólo convino en ello al dictar su resolución, sino que por su presente Confederación, ha juzgado que la amortización de los billetes, y los gastos comunes serían en proporción a dicho número de habitantes, cuando pudiese averiguarse, lo que no se ha hecho todavía; y aunque las colonias más grandes se remitieran a aquella temporaria desigualdad de representación, esperando que pronto sería rectificada, nunca se entendió, que por la mencionada resolución, se daba poder a los Estados más pequeños a fijarles para siempre aquella desigualdad, como lo intentan ahora combinándose para votar el artículo diez y siete, privando así a los Estados más grandes de su justo derecho, reconocido en la misma resolución. Habiéndonos dado ya los Estados pequeños, una muestra clara de la injusticia de que son capaces, y de los posibles efectos de su combinación, es de suyo razón suficiente para que no nos determinemos a ponernos en su poder, conviniendo en este artículo, en cuanto está conexo con los que conciernen a las cuotas de cada Estado; desde que siendo una mayoría de Estados en Congreso, pueden ellos por los mismos medios, en cualquier tiempo privar a los Estados más grandes de una parte en la disposición de nuestra fuerza y riqueza, y el manejo de nuestros comunes intereses.

“Pero como las colonias más pequeñas pudieran objetar que, si se concede a las más grandes un número de votos en proporción a su importancia, las pequeñas se verían en el mismo peligro de ser dominadas o gobernadas por ellas, no deseando nosotros tener la menor influencia o poder que sea injusto, desigual o desproporcionado a las cargas que debemos soportar,



ofrecemos por tanto nuestro consentimiento al dicho artículo diez y siete tal como está, con tal que las cuotas con que deban contribuir las provincias más grandes, sean puestas en un pie de igualdad con las de las pequeñas, en cuyo caso, contribuyendo todas igualmente, tendrían derecho a votos iguales. No es que querramos con esto excusarnos de conceder adicionales subsidios cuando nos parezca requerirlos nuestro común interés; pero dejando al Congreso el derecho, con respecto a estos auxilios adicionales, de hacer requisiciones, como lo tenían nuestros pasados reyes, nos reservamos para nosotros mismos, el derecho de juzgar de la propiedad de estas requisiciones, o de cumplir con ellas o rehusarlas en parte, o en el todo, como lo juzguemos oportuno, y de modificar nuestras concesiones, con las condiciones que juzgaremos necesarias, de la misma manera, que podían hacerlo antes nuestras Asambleas, con respecto a las requisiciones de la corona; porque nos parece justo y razonable, que retengamos el derecho de disponer de las fuerzas que poseemos, sobre la igual proporción, contribuida por nuestro Estado, en los términos arriba dichos, para el común servicio, con todos los poderes necesarios para acudir al mismo, según las circunstancias, para nuestra particular seguridad y esto tenemos el intento de hacerlo en adelante, a menos que no se nos concedan votos en el Congreso, proporcionados a la importancia de nuestro Estado como fué entendido originalmente”.

Esta protesta, emanada de la representación de Pensilvania, fundada en principios de justicia tan obvios, autorizada por el nombre de Franklin, no tuvo efecto en la Confederación definitiva de 1777, por el carácter mismo de la forma de gobierno adoptada, pues siendo simplemente una *confederación* de los Estados que concurrían en el propósito, un tratado de alianza para protegerse y no dañarse entre sí; cada Estado debía ser igualmente representado por agentes diplomáticos, reservándose cada uno de ellos remover su agente cuando lo juzgase oportuno. El mal éxito de este orden de cosas produjo al fin el gobierno federal, basado en la Constitución que lo creaba, y por la cual



caducó la anterior confederación, que tan malos resultados había producido.

Todos los hechos que acabamos de apuntar no son empero parte, cualquiera que su forma y apariencia sea, a dar y conservar a la República Argentina, aun después de constituida federalmente, la condición de una confederación, en el sentido que esta palabra envuelve; y vamos a demostrarlo, a fin de evitar que se dé una interpretación recta a una palabra falsamente usada.

La palabra Confederación, como designación de la República Argentina, fué introducida en el lenguaje oficial por el Tirano, como tantas otras palabras vacías de sentido, o significando lo contrario de la aplicación que él les daba, que entraron en nuestro vocabulario político; y si bien cuerpo soberano general no la legalizó, aceptáronla y adoptáronla las Legislaturas de las Provincias, en la época en que sólo eran ecos de la voluntad de los que juntamente con el Tirano común ejercían el poder discrecional. La República Argentina no fué una confederación, ni podía serlo en realidad. Las trece colonias inglesas que se unieron y confederaron para oponerse a un avance de parte de la metrópoli, eran estados independientes entre sí, gobernados por la corona inglesa directamente, o por el intermediario de cartas, y de concesiones de territorios. Hallábanse las unas con respecto a las otras, en circunstancias idénticas a los virreinos del Perú y Buenos Aires entre sí, las presidencias de Chile, Quito, etc.; colonias españolas dependientes sólo de la corona de España. En todos los hechos emanados de la guerra civil en la República Argentina, si bien han tenido por bandera, pretexto o motivo, el constituir la República bajo una u otra forma de gobierno, nunca se pretendió hacer de sus provincias otros tantos Estados, aunque provisoriamente, y en la expectación de la convocación de un Congreso, quedasen sin gobierno general, que se conservó siempre, no obstante, en lo tocante a entretener las relaciones exteriores. Ningún documento público emanado del consentimiento real o asumido de las Provincias Argentinas establece una Confederación; pues el pacto de Santa Fe de 1831,



es sólo provisorio, y mientras se reúne el Congreso que debe constituir la República bajo la forma federal.

Debe, pues, decirse, al precisar el sentido y mente de la constitución que analizamos, que la palabra *Confederación* que aparece en ella es sólo una voz legada por la pasada Tiranía, sancionada por el hábito, impuesta por contemplaciones a consideraciones del momento, y adoptada sin aceptar su importancia política. Si confederación fuera, entonces la Constitución que emanase del convenio de los gobiernos sería “un contrato que impone obligaciones mutuas, y deja un derecho independiente para construir, inspeccionar y juzgar de sus obligaciones a las partes contratantes”, o “una liga o mero tratado entre estados independientes, que no obliga sino durante la buena voluntad de cada uno”. “Una Confederación reposa en artículos de convenio, de que cada parte es, o puede ser el juez supremo, en cuanto a sus propios derechos y obligaciones; mientras que la Constitución crea una forma permanente de gobierno, en la que los poderes, una vez otorgados, son irrevocables, y no pueden ser reasumidos ni retirados cuando se quiere”; y del contexto general de la Constitución Argentina resulta que más poderes se han delegado al Gobierno General que los que la Constitución de los Estados Unidos delega; pues, como resulta de la historia y antecedentes de ambos países, el primero era en su esencia menos federalizado que el último. Ahora, si la Constitución de los Estados Unidos no soporta la idea de una confederación, coexistente con ella o emanada de la misma, y la rechazan sus estadistas y jurisconsultos, ¿podrá sostenerse que en la República Argentina subsiste una Confederación, en el sentido que el asentimiento común da a esta palabra?

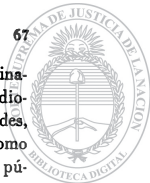
En el informe con que la Comisión de Negocios Constitucionales acompañó el proyecto de Constitución Argentina, se encuentran estas palabras explicativas de la mente del texto: “Ellos se forman (los poderes) de aquella soberanía que de manera alguna podrían emplear bien las provincias *confederadas* si parcialmente se los reservasen. Por otra parte, esos poderes nacen de la *elección popular*. El pueblo de la *Confederación*,



republicano y representativo, nombra a los miembros del Congreso y a la persona del Jefe que pone en ejercicio las leyes, administra el país y sostiene la dignidad nacional”.

Vese, pues, en la explicación, como en el artículo que comentamos, la coexistencia de palabras que se excluyen, *confederación* y *elección popular*, quedando establecido que el uso de la palabra Confederación es simplemente un hábito, que se conserva por la misma razón que se introdujo. “No se encuentra en parte alguna de la constitución, dice de la de los Estados Unidos el juez Story, cláusula que establezca un pacto, o de otro modo deje lugar a interpretarla como tal”. Por el contrario, en el preámbulo habla de ella enfáticamente, como una solemne ordenanza y establecimiento de gobierno. Su lenguaje es “Nos, el pueblo de los Estados Unidos, *ordenamos y establecemos* esta *constitución* para los Estados Unidos de América”. El pueblo *ordena* y *establece*, no contrata ni estipula entre sí. El pueblo de los Estados Unidos, no el pueblo designado de un *estado particular*, con el pueblo de los otros estados. El pueblo ordena y establece una “*constitución*”, no una “*confederación*”. La distinción entre una constitución y una confederación está bien conocida y entendida.

Puede aplicarse el mismo raciocinio a la Constitución argentina, y sacar del espíritu de su preámbulo las mismas consecuencias que Story, y con él todos los estadistas y jurisconsultos norteamericanos, para convencerse de que Constitución es lo contrario de Confederación”. “Nos, dice aquella en su preámbulo, los Representantes del pueblo de la Confederación Argentina, *ordenamos y establecemos* esta Constitución para la Confederación Argentina”. Los Representantes del pueblo *ordenan* y *establecen*, no contratan ni estipulan entre sí. Representantes del pueblo de la Confederación Argentina, no el pueblo designado de una provincia particular, con el pueblo de las otras provincias. Los Representantes del pueblo ordenan y establecen una *constitución*, no una *confederación*. La distinción entre una constitución y una confederación está, pues, bien conocida y entendida.



No podemos vencer nuestra repugnancia contra denominación tan falsa en su acepción natural, como históricamente odiosa. La Confederación es una época de terror y de iniquidades, que debiera quedar aislada y solitaria en nuestra historia, como aquellos monumentos fúnebres que conmemoran calamidades públicas. Pero dar al Tirano la gloria de imponerle al país que cubrió de sangre y de crímenes, nombre perdurable, y este nombre ser además una falsificación y un contrasentido! ¿Por qué no llamarnos, como en el Acta de la independencia, Las Provincias Unidas del Río de la Plata, traducción de Los Estados Unidos del Norte de América? Habría habido en ello elevación y propiedad; restablecimiento histórico, y verdad en las palabras.

Si a esta demostración se objetase que en la República Argentina existía la Confederación, y sólo se trataba de constituir-la, replicaremos que en los Estados Unidos existía también, y mejor definida y especificada una Confederación. "Si hubiese sido, vuelve Story, el designio de los constructores de la constitución o del pueblo que la ratificó, considerarla como una mera *confederación*, descansando en estipulaciones de un tratado, es difícil concebir que no hubiesen dado con los términos propios para expresarlo. Los Estados Unidos no eran novicios en materia de pactos de este género. Los artículos de la *Confederación*, aunque bajo muchos respectos nacional, eran por lo general de un carácter puramente federativo, y fueron tratados como estipulaciones entre estados, bajo muchos respectos independientes y soberanos". "Esta Constitución, decía el presidente Monroe en 1822, fué adoptada con el objeto de remediar todos los defectos de la Confederación... La Confederación era un pacto entre estados separados e independientes; dependiente de los gobiernos de los estados, en los poderes que obraban interiormente la ejecución de aquellos artículos".

Queda, pues, establecido, a nuestro juicio, que la palabra Confederación usada en la Constitución Argentina es simplemente una denominación introducida por el uso oficial de la época que precedió a la Constitución, y conservada por consideraciones de hecho, pero sin darle el sentido político que ella



envuelve. Es designación de un país *Confederación Argentina*, correspondiente a *Estados Unidos*; siendo digno de notarse esta contraposición, llamándose *unidos*, estados que no lo estaban antes entre sí, sino por convenios puramente federativos, y *Confederación* la reunión de las provincias en que se subdividía una demarcación gubernativa que no conoció nunca otro gobierno que el de la centralización en un solo cuerpo político.

Debemos añadir para terminar este punto que la frase "*Representantes del pueblo*", en lugar del pueblo, reunidos en Congreso por la *voluntad* y elección de las *Provincias* que la componen", no introduce cambio ninguno al valor de las declaraciones que están resumidas en el preámbulo de ambas constituciones, ni dan a la palabra *Confederación* valor ninguno político.

Verdad es que los autores de la Constitución han huido cautelosamente de usar el lenguaje que se le sugería: "la confederación adopta..., la confederación garantiza..." (lo que habría puesto el sello de la ignorancia a lo que es fruto sólo de la necesidad), diciendo el gobierno de la confederación sostiene, etc., la constitución garantiza...

Dilucidado este punto, procederemos por anticipación a señalar otros períodos en que el Preámbulo de la Constitución Argentina establece diferencias o abraza mayor número de propósitos.

"En cumplimiento de pactos preexistentes"

Los dos párrafos añadidos al preámbulo de la Constitución Argentina son de una alta importancia, y fijan con precisión el espíritu de muchas de las subsiguientes disposiciones. El primero establece como base, que los Representantes del pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias (obran) *en cumplimiento de pactos preexistentes*.

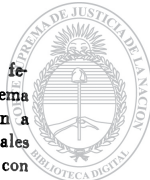
Esta añadidura hecha a los principios generales, y esta subordinación de la soberanía que los Representantes invisten por



su carácter y mandato, establecen un punto que requiere dilucidación.

La generalidad de la frase *pactos preexistentes*, le da una latitud que deja consignado un principio general, y no una simple referencia a hechos determinados; y aunque sean estos últimos los que parezca haberse tenido en mira *inmediatamente*, no son menos importantes las aplicaciones generales a que da lugar la generalización del principio, pues si bien pudiera alegarse que los Representantes se refirieron a ciertos pactos preexistentes entre las provincias, desde que no creyeron oportuno especificarlos, la frase abraza todos los pactos preexistentes que ponen límites a la voluntad nacional, a su territorio, o sus relaciones en general con el resto del mundo. De un hecho particular suele deducirse un principio general, que establece la base de criterio para juzgarlo moral o científicamente, pero nunca podrá decirse en buena lógica que la fórmula de un principio proclamado haya de circunscribirse en su aplicación a los hechos especialísimos que motivaron inmediatamente su proclamación. Así, pues, tenemos por inconcuso que la modificación que los Representantes del Pueblo impusieron a la voluntad de los pueblos (obrando), en cumplimiento de pactos preexistentes, sin especificar ninguno, abraza todos los pactos que ligan la fe nacional, ya sea entre unas y otras provincias, ya entre la República y las otras naciones de la tierra, en aquella parte que tales tratados contienen disposiciones fundamentales, y reconocimiento de principios.

Pertenecen a los convenios entre las provincias, relativos a la Constitución, el pacto celebrado en Santa Fe en 1831 entre las cuatro provincias litorales de los Ríos Paraná y de la Plata, como asimismo el Convenio de San Nicolás que arregló las bases de la representación. El pacto litoral no contiene, propiamente hablando, sino disposiciones transitorias, y el reconocimiento de la supremacía del Congreso Argentino para estatuir sobre todas las cuestiones de interés general, según se establece en las atribuciones del Congreso. El convenio de San Nicolás que declara vigente el primero no estatuye tampoco otro principio



subsistente que el que ya había dejado consignado el pacto federal, a saber, que la Constitución nacional sería bajo el sistema republicano, representativo, federal, añadiendo la prohibición a los gobiernos de las provincias de dar instrucciones especiales a sus Representantes en Congreso; quedando así autorizados con toda clase de poderes para el desempeño de su misión. La forma de gobierno adoptada en la Constitución parte de esta base, y es dada "en cumplimiento de pactos preexistentes".

De los convenios que la República ha celebrado con otras naciones emanan también modificaciones y límites a la Representación, comprendidos, como creemos haberlo establecido antes, en aquel cumplimiento de pactos preexistentes. No se diría que los miembros de una familia acataban y respetaban más los arreglos que para transar sus negocios particulares habían celebrado entre sí, que no los que en el nombre colectivo tenían ligada su fe para con otras familias; y lo que puede decirse de los individuos se aplica con la misma exactitud a las naciones entre sí, en lo que establece principios generales.

Así, pues, debemos considerar como "pactos preexistentes": el tratado celebrado con la Inglaterra y aprobado y sancionado por el Congreso de 1826, en la parte que asegura a los súbditos de aquella nación, establecidos o por establecerse en el territorio de la actual República Argentina, el derecho de adorar a Dios, según sus ritos nacionales. Este tratado en observancia después de veinte y siete años ha creado hechos, hábitos, intereses argentinos, y legalizado la existencia aun entre sus propios nacionales del principio asegurado con reciprocidad por aquella estipulación, y la Constitución, reconociendo los derechos que tan larga práctica ha asegurado, ha debido tenerlo presente entre los "pactos preexistentes", para conformar sus disposiciones a lo que es ya ley de la República y hecho consumado. Estas consideraciones le daban un lugar prominente en su Preámbulo como uno de los derechos anteriores a ella e incorporados en su texto.

Tiene el mismo carácter el tratado celebrado con Inglaterra por el Encargado de las Relaciones Exteriores, y ratificado



por las juntas provinciales, para la abolición y supresión del tráfico de negros, y como una consecuencia la abolición de la esclavitud, a que tiende manifiestamente; pues de su contexto emanan obligaciones aceptadas y principios generales reconocidos, que debían por tanto tener su representación en el Preámbulo.

De la generalización necesaria del principio resultaría igualmente el reconocimiento de los “pactos preexistentes”, en lo que se refiere a demarcaciones territoriales por lo que hace a fijar la extensión de la Confederación Argentina, entrando en esta clasificación el reconocimiento de la independencia del Uruguay, y como puntos que requieren aún para su perfección la sanción de un Congreso Legislativo, el tratado de límites con el Brasil, sobre la base acordada del *uti possidetis*, la renuncia de soberanía sobre el Paraguay, y otras cuestiones del mismo género.

“Para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”

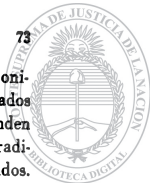
El otro principio, añadido al preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos que sirvió de guía, es la amplificación de los beneficios de la libertad, entre otros objetos primordiales que la Constitución Argentina se propone asegurar, no sólo para nosotros y nuestra posteridad, sino *“para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”*.

Esta añadidura hecha a un texto conocido y acatado muestra, como la anterior, el intento de hacer resaltar, desde el preámbulo, el espíritu que ha dictado las subsiguientes disposiciones constitucionales, y la latitud que se propone darles. Tal declaración importa una invitación hecha a todos los hombres del mundo a venir a participar de las libertades que se les aseguran, una promesa de hacer efectivas esas libertades, y una indicación de que hay tierra disponible para los que quieran enrolarse en la futura familia argentina. En una palabra: la República Argentina se declara en estado de colonización, e in-



corpora en sus instituciones la expresión de este sentimiento, el deseo de verlo satisfecho y los medios seguros de verificarlo.

Los Estados Unidos se hallaban en situación igual en el momento de constituirse; tenían como la República Argentina inmensos territorios vacíos, y como nosotros el deseo de verlos cuanto antes habitados y convertidos en elementos de poder y de riqueza. El hecho práctico ha mostrado en cuánto ha contribuido al pasmoso y rápido engrandecimiento de aquella nación la latitud dada a la incorporación de nuevos ciudadanos en el Estado, los beneficios de la libertad asegurados a *todos los hombres del mundo* que quisiesen habitar su suelo. Pero sus legisladores al formar la Constitución no creyeron necesario proclamar, como principio, lo que para ellos era simplemente un hecho práctico, emanado de su historia y de sus antecedentes. Ingleses, holandeses, franceses y hasta suecos habían sido los primitivos pobladores de diversos estados de los que componían la Unión, y por la tradición colonial, por el hecho permanente estaba sobreentendida en el asentimiento común esta igualdad de beneficios para los que ya se habían establecido, o los que hubiesen en adelante de ir a establecerse. En el célebre interrogatorio, ante la Cámara de los Comunes en Inglaterra en 1766, hecho a Franklin, enviado por Pensilvania para pedir la revocación de la ley sobre papel sellado, preguntósele: “¿Qué número de habitantes blancos creéis que hay en Pensilvania?” — Supongo, contestó, que habrá cosa de ciento sesenta mil. — ¿Cuántos son alemanes? — Quizá un tercio; aunque no puedo hablar con exactitud. — ¿Han servido algunos de esos alemanes en Europa como soldados? — Sí, muchos de ellos, en Europa y América. — ¿Están ellos tan disgustados como los ingleses, con la ley del papel sellado? — Sí, y mucho más; y con razón, porque hay casos en que ellos deben pagar el doble”. El hecho, pues, y el derecho eran preexistentes a la constitución; y la afluencia de nuevos pobladores, de que comenzó a tomarse razón en 1788 después de creado el nuevo gobierno nacional, no fué sino la continuación en escala ascendente a aquella anterior práctica.



No sucede así, empero, entre nosotros. El sistema de colonización, a cuya acción por tres siglos deben su origen los estados americanos de habla española, ha dejado errores que propenden a perpetuarse, leyes que es preciso derogar de un golpe, y tradiciones que, a dejarlas obrar, traerían los más funestos resultados.

España cerró sus colonias a todos los hombres de otra estirpe, idioma y creencia que los suyos propios, de donde resultaba un sistema de instituciones exclusivas y prohibitorias que conculcaban todos los principios de libertad de acción y de pensamiento, sin los cuales la población del territorio es imposible, el gobierno una tutela o una tiranía, y la pobreza, la debilidad, y por tanto la inferioridad como nación, un estado permanente y crónico. Las leyes de Indias están montadas sobre este principio de la exclusión en América de toda otra raza y creencia que la española; y el sistema de reparto de tierras está mostrando que no se contó con una pronta y rápida colonización. Por más que se haya repetido cien veces, fuerza es consignarlo aquí para esclarecimiento de los principios constituyentes. Adquirida la Independencia a costa de sacrificios de vidas y de fortunas, que en la República Argentina exceden con mucho a lo que otras de las secciones americanas necesitaron sacrificar: víctima ésta casi medio siglo de guerras civiles espantosas por su inmoralidad, ruinosas por sus estragos, y la desaparición de toda sombra de seguridad para las vidas o las propiedades; arrastrada por el desenfreno de sus últimos gobiernos en guerras extranjeras, y desavenencias que trajeron bloqueos y perturbaciones profundas en la industria; vecina de estados que la exceden con mucho en recursos, población y fuerza numérica, y puesta en contacto inmediato, por el comercio y sus pasados desaciertos, con las grandes potencias europeas, la República Argentina ha debido sentir su desamparo, su abandono y soledad en medio de las inconmensurables extensiones de país que posee, a la orilla de los estupendos raudales que la surcan; y al contemplar su inferioridad numérica, cuando se compare con las otras naciones, y la superabundancia de tierra que le ha cabido como herencia, ha debido preguntarse si no hay medio de acelerar la ocupación



del suelo, de acercar las distancias que hoy separan los pequeños cuanto lejanos grupos de población con que cuenta, de centuplicar los capitales, y ayudar a la acción del tiempo, demasiado lenta para la población actual abandonada a sí misma. La experiencia de menos de un siglo en los Estados Unidos, la similitud de situación geográfica, de climas templados, y aun de gobierno, ha debido traer a los ánimos el pensamiento de seguir sus huellas, y aproximárseles no sólo en la forma adoptada de gobierno, lo que sería poco hacer, sino en la aplicación de los medios prácticos de acrecentar rápidamente la población y la riqueza; dos elementos de la fuerza y espectabilidad de las naciones, cuando son vivificados por la libertad, que despierta en el hombre la energía moral, intelectual y física, y por las garantías que son la salvaguardia de la propiedad y de la vida, que son como la causa y el efecto de la libertad. La cláusula, pues, en que amplifica los beneficios de la constitución y de la libertad, que ella asegura “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, constituye en sí un principio fecundo, una declaración de la mente y extensión de las disposiciones que van a quedar consignadas en el texto de la Constitución, que se declara por este hecho no sólo calculada, consultando la felicidad de la generación que la estipula y la de sus descendientes, sino también la de los otros habitantes que fueren viniendo de otros países a habitar su suelo, y llenar el vacío deplorable de población y de propiedad que hoy se deja sentir.

Por los escritos contemporáneos suelen rastrearse a veces las preocupaciones que dominaban el espíritu público de un pueblo en un momento dado, y que muchas veces dejan rastros imperecederos en sus leyes. La constitución francesa de 1848 se resiente toda ella de estas influencias de las preocupaciones del momento, como la cláusula de nuestra constitución que prohíbe las ejecuciones a cuchillo y a lanza responde dolorosamente a esta cuerda de los hechos posibles y recientes.

Séanos permitido, para abundar en el comento de este párrafo, citar la exhortación final de *Argirópolis*. “En cuanto al



mecanismo federal, no hay otra regla que seguir por ahora que la Constitución de los Estados Unidos. ¿Queremos ser federales? Seámoslo al menos como lo son los únicos pueblos que tienen esta forma de gobierno. ¿Queríamos acaso inventar otra forma federal desconocida hasta hoy en la tierra? Entremos en un régimen cualquiera que salga de lo provisorio, de lo arbitrario, y el tiempo, la tranquilidad, la experiencia irán señalando los escollos y apuntando el remedio. Todos los pueblos marchan en esta vía. El elemento del orden de un país no es la coerción; son los intereses comprometidos. La despoblación y la falta de industria prohíjan las revueltas: poblad y cread intereses. Haced que el comercio penetre por todas partes, que mil empresas se inicien, que millones de capitales estén esperando sus productos, y crearéis un millón de sostenedores del orden... Las preocupaciones populares pueden ser modificadas y dirigidas... Infundid a los pueblos del Río de la Plata que están destinados a ser una gran nación, que es argentino el hombre que llega a sus playas; que su patria *es de todos los hombres de la tierra*, que un porvenir próximo va a cambiar su suerte actual, y a merced de estas ideas, esos pueblos marcharán gustosos por la vía que se les señale, *y doscientos mil emigrantes* introducidos en el país, y algunos trabajos preparatorios, darán asidero en pocos años a tan risueñas esperanzas. Llamáos los Estados Unidos de la América del Sud, y el sentimiento de la dignidad humana y una noble emulación conspirarán en no hacer un balón del nombre a que se asocian ideas grandes”.

“Constituir la unión nacional”

Explicadas ya las variantes del texto norteamericano, o las aparentes discrepancias que hemos tratado de resolver, entraremos ahora en aquella parte en que ambos textos, como dos raudales, se confunden en uno solo, a bien que en esta parte podemos marchar a la sombra de claras autoridades, y, sin separarnos de las doctrinas y de los maestros que nos sirven de guía, dar



para la común inteligencia las razones de conveniencia en que las cláusulas del preámbulo están fundadas.

La Constitución expresa haber sido adoptada primeramente, con el objeto "de constituir la unión nacional". Ningún pueblo de la tierra ha presentado en nuestros tiempos necesidad más imperiosa de constituir una unidad nacional que la República Argentina. Las naciones cultas de la Europa han tenido sus días de borrascosa anarquía: los Estados Unidos tuvieron un período, antes de constituirse definitivamente, en que cada uno de los trece estados pudo creerse desligado de todo pacto permanentemente obligatorio con los demás: la América del Sud toda ha pasado por una serie de sacudimientos más o menos prolongados; pero ninguno de estos ni de aquellos estados ha permanecido durante cuarenta años en la más completa dislocación, sin autoridad regular que protegiese en todos los ángulos de la República, no ya la libertad sino la existencia de la sociedad misma. Cuarenta y más años en que no han estado los pueblos que hoy componen la federación ni unidos, ni separados, sino que sufriendo los males de todos los sistemas, no han podido gozar de una sola de sus ventajas. Los pueblos que hoy componen, decimos, la federación, pues los que compusieron el estado primitivo, son jirones de un vestido despedazado, que han ido quedando, uno en pos de otro, por los zarzales entre cuyas espinas ha pasado este dilacerado cuerpo. La experiencia ha sido larga, terrible y sangrienta, y ojalá que todavía no haya de continuarse, para revelar a los ojos del mundo atónito que hay males que no tienen cura, legados que son una maldición, e incompatibilidades entre ciertos modos de ser, y las condiciones esenciales de toda sociedad que se excluyen mientras existen. "Admiránse, decía Tocqueville, al ver agitarse a las nuevas naciones de la América del Sud, hace medio siglo, en medio de revoluciones que sin cesar renacen, y todos los días esperan verlas entrar en lo que llaman su *estado natural*. Pero, ¿quién puede asegurar que las revoluciones no sean en nuestro tiempo, el estado más natural a los españoles de la América del Sud? En este país, la sociedad se revuelca en el fondo de un abismo, de donde sus



propios esfuerzos no pueden sacarla. El pueblo que habita aquella bella mitad de un hemisferio parece obstinadamente empeñado en desgarrarse las entrañas sin que nada sea capaz de distraerlo. El aniquilamiento la hace caer un instante en el reposo, y el reposo la entrega bien pronto a furores nuevos. Cuando me pongo a considerarla en este estado alternativo de miseria y de crímenes, estaría tentado a creer que el despotismo sería para ella un bien, si bien y despotismo pudiesen unirse una sola vez en mi pensamiento". (1)

Tan tristes pronósticos, que van hasta amenazar la existencia de nuestra raza, y la serie de horrores por que hemos pasado y pueden repetirse, debieran excitar a los pueblos y gobiernos para quienes está calculada esta constitución, a unirse estrechamente entre sí, y someter sus deseos e intereses a las reglas en ella prescritas. Todo concurriría a este propósito. Y si no, ¿quién puede, ya sean individuos o pueblos, desear la prolongación del estado de cosas que ha precedido? Régulos arbitrarios se han sucedido unos a otros; y ¿qué han dejado en pos de sí? El olvido ha ocultado la sangrienta tumba de los unos, el desprecio y el odio persigue todavía la lejana existencia de los otros; y ruinas y desastres señalan aquí y allí el punto en que vivieron algún tiempo, dividida su existencia entre las zozobras del miedo, y la satisfacción de pasiones destempladas. Motivos peculiares requieren en la República Argentina que la unión nacional sea constituida. Si el malestar de aquellos países se ha prolongado por tan desmesurado tiempo, es porque encierra en su seno peculiares fuentes de desunión. La despoblación es una, las distancias que median entre las provincias es otra, y la mayor de todas, la influencia que en cada localidad ejercen los hombres sin principios y sin virtud que se alzan con el poder. Cada provincia está como una familia en campos

(1) *La Democratie en Amérique*, por Alexis de Tocqueville. Esta obra como examen concienzudo e imparcial de la práctica, de los efectos, ventajas y vicios de las instituciones norteamericanas, goza de una gran reputación en los Estados Unidos, y ha obtenido nueve ediciones en Francia. Debe consultársela para el estudio de las instituciones americanas.



solitarios. Si la asaltan malhechores, ¿a dónde acudir por amparo? ¿Quién la oirá, para correr en su auxilio? Si estas consideraciones, a que da abrumante peso cada página de nuestra historia, no fueran bastantes, las cuestiones de intereses materiales vendrían con cifras enormes en su apoyo. Los varios elementos administrativos requieren rentas para su creación y sostén; y las provincias se han consumido y aniquilado en tan largo lapso de tiempo en la ruinosa tentativa de bastarse a sí mismas, y establecer con sus propios elementos toda la maquinaria de un gobierno. Se han erigido juzgados, y alzadas en cada provincia, lista civil y militar, poderes ejecutivos y legislativos, ejércitos y sistemas de rentas propias, con lo que, no bastando las escasas entradas, los que más coactivo poder ejercían, han concluido por hacer de él una industria, y de la fortuna pública y privada una explotación, convirtiendo la pretendida independencia de las provincias en verdaderos bajalatos orientales que pudieran venderse en el mercado, según los emolumentos que producen. No ha sido mejor la suerte que ha cabido a Buenos Aires. Los cien millones de papel moneda son una sola de las minutas que puede presentar de sus quebrantos. Las necesidades reales de la República que ha representado mientras las provincias se esterilizaban a sí mismas, y los desórdenes y dilapidaciones inseparables del predominio sin restricciones de la voluntad de un solo hombre, han disipado no sólo la fortuna del presente, sino que han gravado el trabajo y la adquisición de las generaciones venideras, de quienes se han tomado prestadas esas centenas de millones, que hoy giran en papeles casi sin valor, porque aun no han nacido los que están condenados a pagarlo.

Una de las más urgentes razones que impulsaron a los trece Estados federados entre sí, a reformar su pacto de alianza simple, y convertirlo en la constitución de un gobierno federal fué que "cada estado era arruinado en sus rentas, como en su comercio, por los otros vecinos, ya con reglamentos para excluir sus productos, ya con el contrabando para dejar burladas iguales disposiciones. Si dos estados vecinos tienen el mismo género de



cultivo, y si los medios de producir no son iguales, se recurre inmediatamente a dictar medidas para corregir el mal". ¿Quién podrá contar un día, las hostilidades, las gabelas, expoliaciones y destrucción recíproca a que por cuarenta años han estado sometidas las provincias, suicidándose a sí mismas, arruinando sus recursos y embarazando las vías de comunicación con todo género de trabas, impuestos, prohibiciones y monopolios?; y todo esto era requerido por la loca pretensión de constituir gobiernos separados e independientes, por la necesidad de expoliaciones de los régulos inmorales, y la impotencia de los pueblos para resistirlos, a causa de su aislamiento.

Sin la alteración de una sola palabra cuadran a nuestra propia situación las observaciones del *Federalista* (1). "El hecho del ilimitado intercurso sin derecho ni restricciones, entre todos los estados, es por sí mismo una bendición del más inconcebible valor. Esto hace que cada uno mire por los intereses de todos, saque sus operaciones de los estrechos límites de su propio exclusivo territorio. Sin entrar aquí a examinar hasta dónde el gobierno general posee el poder de hacer o ayudar a la construcción de caminos, canales y otras mejoras generales, es claro que si no hubiera un gobierno general, el interés de cada estado para emprender o promover por su propia legislación proyectos semejantes, sería mucho menos poderoso; desde que no habría certeza en cuanto al valor y duración de tales mejoras, fuera de los límites del propio estado. La conciencia de que la unión de los estados es permanente, y no será turbada sólo por rivalidades y conflictos de política; que el capricho o el resentimiento no separarán a un estado de sus propios deberes, como un miembro de la unión, dara un carácter sólido a todas las mejoras. Independientemente del ejercicio de una autoridad única para este propósito, pudo preverse fácilmente que los caminos se-

(1) THE FEDERALIST. Publicación periódica, contemporánea de la Constitución de los Estados Unidos, redactada principalmente por Alejandro Hamilton, profundo estadista, y cuyos conceptos son hasta hoy de un gran peso y autoridad en materia constitucional. Hay varias ediciones inglesas y una en francés. En 1850 se ha publicado la última en los Estados Unidos.



rían acortados y mejorados, las comodidades para los viajeros multiplicadas y aumentadas; una navegación interior por todo el costado oriental abierta por toda la extensión de nuestras costas; y por canales y mejoras en la navegación fluvial, un campo sin límites abierto al espíritu de empresa y a la emigración, al comercio y a los productos, por todos los estados interiores, hasta los límites extremos de los territorios del Oeste”.

Otra consideración aducida por el *Federalista* de los Estados Unidos y del todo aplicable a nuestra situación es la que sugiere la situación ribereña de varias provincias argentinas. “Por lo que hace al comercio, decía apoyando la constitución, tan importante en estados navegantes, y tan productivo para los agricultores, se percibe fácilmente que ni el uno ni los otros pueden ser protegidos de una manera adecuada, si no media la vigorosa y uniforme operación de un gobierno general. Cada estado o provincia trata de promover por sus propias medidas sus intereses propios, sin pararse en el daño de los otros. La situación relativa de estos estados; el número de ríos que los intersectan; la facilidad de comunicación en todas direcciones; la afinidad del lenguaje y costumbres: el hábito familiar de tratarse, todas estas circunstancias conspirarían a hacer cosa llana el tráfico ilícito entre ellos y la frecuente infracción de los reglamentos comerciales de cada uno”.

Resúmense las ventajas de construir la unidad nacional en estos puntos de muy alta importancia y de aplicación a nuestro suelo. “La extensión del territorio no es incompatible con una representación general de todos los intereses y población que contiene — ni con la debida consideración a las ventajas o desventajas peculiares a alguna de sus partes —, ni con la rápida y conveniente circulación de los datos útiles a todos. Un gobierno general suministra más eficaz protección contra los enemigos exteriores — puede asegurar más ancha esfera a las empresas y al comercio —; puede dar por todas partes mayor independencia a todos los grandes intereses de la sociedad, la agricultura, el comercio, las manufacturas, la ciencia — puede administrar justicia más completamente y con más perfección —;



puede aplicar a objetos de interés público mayores rentas, sin opresión y sin recargo de contribuciones — puede economizar más, satisfaciendo en grande una necesidad pública, que lo que puede hacer cada estado o provincia para satisfacer con respecto a sí, la misma necesidad —; un gobierno general puede reunir y aprovechar los talentos y experiencia de los hombres más hábiles en cualquiera parte de la unión en que se hallen — seguir una política sujeta a principios uniformes —; puede armonizar, asimilar y proteger las diversas partes y miembros, y extender a cada uno el beneficio de su provisión y precauciones — puede aplicar las rentas del todo a la defensa de una parte especial”.

“Afianzar la justicia”

Con nada más notable por su verdad, sabiduría y elocuencia podemos entrar en la explanación de este punto, que con las palabras del Juez Hopkinson: “La recta y pura administración de justicia es de primordial importancia para todo el pueblo. Otros actos del gobierno no son de atinencia tan universal. Quién será Presidente, y qué tratados o leyes generales habrán de hacerse, es cosa que no ocupa sino a cierto número de individuos; pero esto no siempre afecta al interés privado, ni a la gran masa de la comunidad. Mas el arreglo de las controversias privadas, la administración de la ley entre hombre y hombre, la distribución de justicia y derecho al ciudadano en lo que le atañe y concierne privadamente, toca a la puerta de cada hombre, y es esencial a su bienestar y felicidad. Por esto considero lo judicial de nuestro país, como el más importante de los ramos del Gobierno, y su pureza e independencia lo que para cada hombre es de más altas consecuencias. Mientras la justicia esté honorablemente protegida de la influencia del favor, o de cualquiera clase de temor, venga de donde venga, la situación de un pueblo no puede ser del todo insegura y mala. Pero si un juez ha de estar por siempre expuesto a persecucio-



nes o acusaciones, por su conducta oficial, por meras sugerencias del capricho, y ser condenado por la simple voz de la preocupación, bajo el especioso nombre de sentido común, ¿podrá mantener aquella mano firme y segura que sus altas funciones requieren? No; aunque sus nervios fuesen de hierro temblaría en posición tan azarosa. En Inglaterra la completa independencia de lo judicial ha sido considerada, y en verdad se ha encontrado ser, la más segura y mejor salvaguardia de la verdadera libertad, asegurando el gobierno de leyes conocidas y uniformes, obrando con igualdad sobre todos. Ha sido, sin embargo, sugerido por políticos adocenados, y acaso de más alta esfera, que aunque este mismo poder judicial es muy necesario en una monarquía para proteger al pueblo de la opresión de una corte, no existen las mismas razones en nuestras instituciones republicanas; que es además inconsistente con la naturaleza de nuestro gobierno, que alguna parte o ramo de él estuviese independiente del pueblo, de cuya fuente deriva todo poder. Y, como una junta de Representantes viene más frecuentemente de esta misma fuente de poder, ella reclamaría el mejor derecho para conocer y expresar la voluntad de aquél, y por tanto el derecho de inspeccionar los otros ramos. Mi doctrina es precisamente la contraria”.

“Si se nos pidiere declarar dónde es más importante la independencia de los jueces, si en una monarquía o en una república, yo diría que en la última. Todos los gobiernos requieren, a fin de darles estabilidad, firmeza y carácter, algunos principios permanentes, alguna base establecida.

“La falta de ésta es la grande deficiencia de las instituciones republicanas; sobre nada puede contarse; ninguna confianza se puede poner ya sea en el interior o en el exterior, en un pueblo cuyos sistemas, operación y política están cambiando continuamente con la opinión popular. Si, no obstante, lo que a la justicia toca, se establece independiente; si la regla de justicia descansa sobre principios permanentes y conocidos, esto da a un país el carácter y la seguridad que es necesaria absolutamente en sus relaciones con el mundo y en sus negocios propios.



Esta independencia es además requerida como una seguridad contra toda opresión. Cada página de la historia demuestra que la tiranía y la opresión no han estado confinadas a sólo los absolutismos, que han sido libremente ejercidas en las repúblicas antiguas y modernas; con esta diferencia, que en las últimas la opresión ha salido de algún súbito estallido de pasiones o preocupaciones, mientras que en las primeras ha sido sistemáticamente calculada y ejecutada, como un ingrediente y un principio de gobierno. El pueblo no destruye deliberadamente, y volverá a la reflexión y justicia, si no se mantiene viva e irritada la pasión por medio de arteras intrigas; pero mientras dura el acceso, es más terrible e ilimitado en sus devastaciones y crueldad, que el tirano más monstruoso. Es en su propio beneficio y para protegerlo contra sus propias pasiones que es necesario tener algún ramo de gobierno firme, independiente, inmovible, pronto y dispuesto a resistir a sus excesos. Si hemos oído hablar de la muerte de Séneca, bajo la ferocidad de Nerón, también hemos oído hablar del asesinato de Sócrates, víctima de la ilusión de una república. Un poder judicial firme e independiente protegido, y protegiendo por medio de las leyes, habría arrancado al uno al furor de un déspota, y preservado al otro de la demencia de un pueblo”.

Para tan altos fines la Constitución argentina se propone afianzar la justicia; aunque no se nos alcanza el motivo de la substitución de la palabra *afianzar*, substituida a “establecer” que expresaba mejor la idea, ya de dar seguridad a la administración de justicia, ya de fundar el edificio del poder que debe ejercerla; pues si bien la justicia ha existido antes entre nosotros, como en todos los países, el establecimiento del poder, es lo que incumbe sólo a la constitución. De todos modos “la justicia, como dice a este mismo propósito el juez Story, debe ser siempre uno de los más grandes fines de todo gobierno sabio; y aun en los gobiernos arbitrarios tiene grande extensión su práctica, al menos en lo que respecta a las personas particulares, como la única seguridad contra la rebelión, las venganzas privadas, y la crueldad de la muchedumbre. En los gobiernos



libres, empero, se la encuentra en la base misma de todas sus instituciones. Sin que la justicia sea libre, plena e imparcialmente administrada, ni nuestras personas ni nuestros derechos, ni nuestra propiedad pueden ser protegidos. Y si éstos, o alguno de ellos no fuesen reglados por leyes ciertas, y no fuesen sujetos a principios seguros, y administrados según cierto sistema, ni enderezados, cuando fuesen violados, por ciertos remedios, la asociación perdería todo valor, y los hombres volverían a un estado de salvaje y bárbara independencia”.

Estas admoniciones tienen para la República Argentina su especial e inmediata aplicación. Este país como ningún otro de la tierra en los tiempos modernos sale de un período larguísimo, de verdadera supresión de todo lo que constituye la administración de justicia. Veinte años la estatua de Temis ha estado cubierta con un velo; y la vida, la propiedad, la honra, la libertad, hasta los gustos, las opiniones, los colores mismos han permanecido librados a caprichos sangrientos. Muy a los principios de nuestra revolución, el Paraguay, arrancado a la comunidad de pruebas y de sufrimientos por donde estaba destinado a pasar el resto de la familia de los pueblos del Plata, vió con sorpresa al principio, con espanto después, resumirse en un abogado tirano la administración de justicia y la inquisición política. El doctor Francia juzgaba en primera y última instancia las causas criminales y civiles, hallando en las opiniones de las partes contendientes, en el país de que eran oriundos, si eran españoles o argentinos en clasificaciones injuriosas inventadas por el juez mismo para vejar a las partes, razones legales suficientes para confiscar en provecho del Estado la propiedad disputada, y aplicar penas, destierro y prisiones, con martirio, en causas puramente civiles.

Observa Montesquieu que nunca se cometieron en el mundo injusticias más atroces como cuando los emperadores se entrometieron en administrar justicia, y para comprobación del aserto, e ilustración del caso, insertamos a continuación una sentencia del dictador del Paraguay, como una muestra de actos iguales cien veces repetidos en la República Argentina. Juris-



prudencia, lenguaje, desahogos, epítetos todo es igual. Al leer la parte final, sobre todo, de esta bachillería atroz, cree el lector tener por delante la *Gaceta Mercantil* o los *Mensajes de Rosas* o las notas de los régulos de provincia. Basta cambiar el “español europeo” por el *salvaje unitario*, para trasladar fielmente el espíritu de esta pieza singular, en que se ve la codicia del tirano, robando una propiedad, en sentencia en que todos los hechos están falsificados, seguro el impostor omnipotente de que nadie ha de contradecirlo. Es curioso observar cómo un fingido odio contra los españoles en 1830, veinte años después de vencidos y olvidados por los patriotas (exterminados a su turno), es el escudo con que se trata de justificar aquel tejido de iniquidades, como en la República Argentina el odio a los salvajes unitarios fué la capa con que se disfrazaban las expoliaciones y crímenes más escandalosos.

Providencia oficial del Dictador Francia.—“El artificioso procedimiento que han observado los europeos españoles Juan Pérez y Alejandro García, para que la parte de caudal perteneciente al primero de resultados de la compañía, y comunidad de bienes en que han vivido por el dilatado tiempo de treinta a cuarenta años, no recayese en el Estado por falta de herederos, y se confundiese en beneficio de su consocio y su familia, se convence claramente, en primer lugar, con el hecho de que después de la revolución fraguó al citado Pérez un testamento cerrado, haciendo a un hijo menor de edad de su compañero García llamado José Gale, la donación de dos mil pesos, la que aun debe reputarse capciosa, por no haberse querido dar a saber esas calidades de futura sucesión, con que se hizo, y que solo se dan por insertas en la escritura posterior de la misma donación sin especificarlas, y sin querer tampoco el citado consocio manifestar aquel testamento, evadiéndose con decir, que no habiéndolo encontrado entre los papeles del finado, no había si lo había roto, o quemado, lo que no podía ignorar, atendida la íntima familiaridad y comunicación con que vivían juntos en una misma casa, presumiéndose por todo esto fundadamente, que esta es una ocultación maliciosa, para que no se descubran cosas importantes, especialmente no habiendo hecho Pérez otro testamento en tantos años corridos después hasta su muerte. Lo segundo porque con el mismo objeto fraguaron después costear y establecer en compañía una casa de curtiduría en Guayaibití destinada únicamente, para que el citado



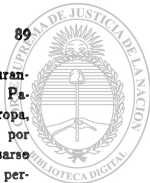
Galo con los dos mil pesos donados y su tía Francisca Machain con otros dos mil pesos, según expone el propio García curtiesen cueros de su cuenta, y para su beneficio, sin que el finado Pérez reportase utilidad alguna, habiéndoseles franqueado la curtiduría con cargo solamente de hacer las mejoras, que sin señalarlas se pretextan o se fingen, las cuales aun cuando fuesen ciertas, eran inútiles para Pérez respecto a que no ha servido, ni habían de servir sino para provecho de los agraciados con el usufructo, en cuya conformidad, es creíble hubiesen curtido algunos miles de suelas pues que solo en la casa del mismo García se han encontrado muy cerca de tres mil, concluyéndose de aquí que el establecimiento de la curtiduría no fué sino un bello arbitrio para beneficiar a dicho José Galo. Lo tercero porque consiguientemente a estos hechos la estancia, que con multitud de ganados ha tenido el otro hijo llamado Manuel Antonio en la costa abajo, y que según la voz común ha corrido como cosa suya propia, debe prudentemente y con sobrado fundamento juzgarse, que no teniendo de donde adquirirla, igualmente fué habida con auxilio y dineros dados por Pérez; porque aunque habiendo sido preso como reo de Estado el referido Manuel Antonio, su padre Alejandro García intentó venderla como propia haciéndola ofrecer a Pedro Trigo por conducto de su hijo mayor el mencionado José Galo en seis mil doscientos pesos; es más bien de juzgarse, que el pretender apropiarse dicha estancia solo fué otra medida fraudulenta para precaver, que como pertenencia de su hijo fuese embargada de resultados de su prisión, y de lo contrario sería forzoso concluir que ocultó esta finca en su manifestación de bienes, en cuyo inventario no aparece, sin que valga por lo mismo decir que la compra de tierras para la estancia se hizo por Antonio Recalde, lo uno porque siendo este también europeo español y además cuñado del propio García, no puede ser considerado sino como instrumento idóneo para cooperar a encubrir el oculto manejo, bien fuese figurando la compra de la tierra en nombre propio, o traspasándola privadamente al hijo de García, de quien siempre ha sido reputada, y lo otro porque el engaño ha quedado ya descubierto con el hecho de haber el mismo García intentado vender las tierras y los ganados una vez que se le abonase el principal gastado, ofreciendo darlo no solo al fiado sino al plazo, que quisiese Trigo, como este ha declarado bajo juramento, manifestándose en esto el empeño que tenía en verificar a su nombre la enajenación de cualquier modo que fuese, lo que no le correspondía hacer con una finca ajena que no fuese suya, ni de su familia. Lo cuarto por ser una prueba evidente de fraude y ocultación el que habiendo Pérez girado en compañía y vivido en comunidad de bienes con el citado García tantísimos años con la circunstancia de que como soltero a quien no se le conocieron gastos extraordi-



narios, no podía haber hecho mayor dispendio en la sociedad, y que además tenía dinero aun para emplear miles en beneficiar a los hijos de su compañero, se figure ahora haber muerto sin dejar un medio real para enterrarse, y que el consocio con la larga familia, que por ello debe haber hecho crecidos gastos, se alce con todo el caudal habido durante la compañía a más de ser también increíble, que el mismo García no tuviese más dinero, que los doscientos treinta y cinco pesos manifestados como propios habiendo sido ambos reputados entre los más acaudalados comerciantes, no debiendo tampoco darse el menor crédito a cualesquiera cuentas, o declaraciones que hubiesen maniobrado entre los dos, y que deben suponerse figuradas, o forjadas para ocultar y substraer la parte del caudal de Pérez de su pertenencia al Estado, así por todo lo que se ha dicho, como por ser ya muy conocidas la desaforada falacia, malas artes, y diabólicas maquinaciones, que usan los europeos españoles, para engañar, encubrir sus fraudes, y sus intentos de engañar, y así es que se les ha visto en América violar atrozmente y con imprudencia sus tratados y convenios, y es también público y bien sabido en Europa, y en América, que un español europeo se fué a España titulándose Marqués de Guaraní, y fingiendo torpemente que iba con comisión de este Gobierno enviado al rey de España, cuya ficción y brutal mentira habiéndose descubierto, se le hubo de imponer en el Tribunal de Alcaldes de Corte como falsario insolente la pena del último suplicio, que al fin se reservó para el caso de quebrantar el destierro a que fué confinado; pero aun sin salir de los del círculo o parentela del propio García, aquí mismo se ha visto, que el europeo español Miguel Guanes casado con prima de su mujer no solo negó con juramento la remisión clandestina que hizo a Corrientes de una partida de onzas de oro, sino que también para encubrirlo, hizo fingir como fingió, y le remitió por su especial encargo el otro europeo español Isidoro Martínez de aquella vecindad una cuenta falsa e imaginaria; pero después convencido el mismo Guanes por las cuentas anteriores de dicho Martínez, que demostraban no quedar en su poder dinero alguno perteneciente a Guanes, así como por la contrariedad e implicancia de dicha cuenta fingida, con lo que este había declarado de ser los efectos remitidos por aquel procedentes de un libramiento dirigido contra Pedro Quesney, no tuvo más arbitrio, que confesar, que efectivamente había remitido las onzas, reconociendo haber jurado falso, y no solo él juró falso, sino que además hizo jurar falsamente al conductor europeo portugués Manuel Rodríguez, que habiendo también negado primeramente la llevada de las cruzas, después lo confesó igualmente bajo el juramento expresado, que solo había jurado falso, por inducción y sugestión de Guanes, de suerte



que es bien manifiesta la propensión y facilidad de los europeos españoles a fingir, y forjar papeles y cuentas falsas, fraguar mentiras, y hasta jurar falso siempre que conduzca a sus intereses, o a sus depravados fines y planes de iniquidad, la que tampoco ha parado en esto, cuando a más de las repetidas conjuraciones que han maquinado aquí y la descomunal o más bien ridícula patraña del fingido Marqués de Guaraní enviado a España ha llegado al extremo de envenenar a los patriotas, lo que se observó en el europeo español Burguez, a quien por eso se le privó hacer el oficio de curandero a que se había metido, y se observó igualmente en el malvado europeo suizo atea Juan Renger, nativo del Villorrio de Arau, que vino a introducirse al Paraguay en clase de médico, y complotándose íntima y estrechamente con los europeos españoles y con el francés Sagüier espía realista descubierto, que se metió a boticario, sospechándose que al modo que este había sido destinado desde Europa, envenenaba también a los patriotas, como lo hizo con muchos individuos de tropa muertos con su asistencia, y con el Tesorero de guerra, a más del espíritu de seducción que bien manifestó el pérfido falsario y desagradecido Renger, reprobando al sajón Guitaro Leman el tener relaciones, o correspondencia con los patriotas, diciéndole que se retirase de ellos, y que mejor vida se pasaba con los europeos; por todo lo cual el Gobierno, para no tener que acusar a este inicuo suizo y mandarlo ahorcar como asesino envenenador y seductor, nunca quiso acceder a la pretensión que hizo de quedarse aún aquí sin duda para continuar el malvado atosigando, y aun ver si algún día se le proporcionaba la ocasión de atosigar al propio Dictador según lo había hecho con tantos individuos de tropa, y con el mencionado tesorero que se redujo a agonías mortales luego de la bebida o brebaje, que le hizo tomar, retirándose aquel malhechor desde el mismo instante sin querer volver jamás a su casa ni aun con repetidos llamamientos, y como lo hizo igualmente el referido Burguez con el clérigo Orué, que del mismo modo estuvo a morir desde el momento en que le administró su droga aunque nada de lo dicho debe parecer extraño, hallándose comprobado que el facineroso Renger era un maldiciente y calumnioso enemigo aun de los americanos patriotas de otros Estados; pues que en la carta que dirigió de Buenos Aires a la mujer del citado Recalde en 20 de septiembre de 1824, interceptada juntamente con la escrita a su hija Angela, le decía entre otras cosas estas formales palabras: *En Buenos Aires no me hallo, los porteños han tomado todos los vicios de todas las naciones europeas, sin tener una de sus virtudes. Este pueblo parece una casa arruinada, que han pintado por afuera de nuevo. Con la primera tormenta está todo en el suelo; y a este modo el mismo Juan Renger cometió también la infamia propia de bribones desalmados de ir fin-*



giendo en otro países una caterva de embustes y mentiras, desfigurando hechos, ocultando su conducta, maldades y fechorías en el Paraguay, y procurando desconceptuar al Dictador, a sus oficiales y tropa, todo por su depravada inclinación, y coligación con los europeos, y por encontrarse enconado de no habérsele consentido quedar para casarse como quería con la hija de dicho Recalde estando ya conocida su perversidad, a fin de que no continuase haciendo a los patriotas la guerra sorda de envenenamiento, por lo que fué también echado y despedido de la asistencia al cuartel de pardos, en donde casi todos los que enfermaban morían infaliblemente, luego que les administraba su brebaje, habiendo de este modo despachado a más de veinte de ellos en sólo dos meses de asistencia, cesando esta mortandad con su expulsión de dicho cuartel, de todo lo cual bien se deduce que el intento de los europeos españoles complotados con el maldito suizo, acérrimo contra la independencia de América, ya que no tuvieron buen suceso sus conspiraciones y tramas, ha sido ver si podía ir despachando callada y disimuladamente a los patriotas y especialmente a los más decididos, que cayesen en sus manos, y tuviesen la imprudencia o simplicidad de tomar sus bistrabajos preparados y confeccionados secretamente entre ellos, y todo esto a más de sus otros insidiosos manejos, instigaciones, maledicencia, seducción y sordas maniobras bien sabidas y conocidas, lo que no es solamente en el Paraguay pues que últimamente han sido expulsados y desterrados de toda la República de Méjico todos los europeos españoles por sus maquinaciones y malignidad. En consideración de todo y de que durante la expresada sociedad se construyeron dos casas grandes, a saber la una de la habitación de García y la otra al frente de ella no obstante su deterioro, y la ruina que le amenaza de la zanja que se le acerca del río; se adjudica esta última a la Tesorería del Estado por finiquito y cancelación total de la negociación de compañía entre él y el finado Pérez, declarándose por consecuencia al primero libre de todo otro cargo o responsabilidad por razón de la sobre dicha negociación, y quedándole así aplicados todos y cualesquier otros bienes y acciones que hayan restado pertenecientes al mismo Pérez incluso los pocos manifestados en el inventario y la curtiduría con la deuda de José Luis Pereira, y el producto y existencias de la compañía que tuvieron con el difunto europeo español llamado también Manuel Rodríguez, cuyos papeles, documentos y cuentas se le devolverán para que use de ellos como le convenga. Asunción y julio 19 de 1830.—FRANCIA”.



Y este sistema ha durado cuarenta años! En la ominosa Confederación introdujose con el despotismo y la barbarie, no ya sólo el abandonar la vida y la propiedad de los ciudadanos a merced de la política, sino que entre las atribuciones de la *suma del poder público* entraba necesariamente la usurpación de las funciones de la judicatura, para administrar la justicia el jefe del Estado, destruyendo todo refugio a los intereses particulares, y alentando la codicia, la envidia, la venganza que hallaban en la apelación al soberano juez, cebo y recompensa. Es inútil recorrer la escala descendente que desde la bóveda del edificio llegaba a sus partes más accesorias, desde los centros del antiguo foro argentino, Córdoba y Buenos Aires, hasta las provincias y aldeas oscuras, en que algo peor que la pasión política, la estupidez del embrutecimiento, daba su fallo resolutivo sobre las arduas cuestiones de derecho, que no pocas veces ponen a prueba la experimentada práctica de los jurisperitos. Basta decir para no tocar más esta llaga dolorosa de nuestro país, que hemos oído a uno de esos régulos lamentarse de que aun quedasen, en la provincia que barbarizaba, restos de instituciones judiciales, codiciando para sí la usurpación consumada en otras y el abandono de las cuestiones entre particulares a aquel sentido común que reprobaba en la materia el juez Hopkinson, y que sólo es perversión cuando alumbra la codicia, la astucia, o la ambición de un tiranuelo omnipotente.

No es sólo de la tiranía política de lo que salvaría a las provincias argentinas el establecimiento y afianzamiento de la justicia en toda la extensión de su territorio, sino que también llenaría más que ningún otro poder los vacíos y las necesidades que por todas partes se hacen sentir. Sería inútil este trabajo, y tan aplicable a cualquier país de la tierra como al que es el objeto especial de la constitución que comentamos, si por una pretensión ociosa de afectada elevación huyésemos de tocar de cerca el cuerpo que se intenta engalanar con tan noble ropaje.

Formada la federación argentina de las provincias de una colonia, atrasadísimas las unas, despobladas muchas, apartadas entre sí todas, las tradiciones y el personal del foro están recon-



centrados en Buenos Aires y Córdoba. Provincias hay que no cuentan morando en ella cuatro personas que hayan cursado estudios legales y en no pocas la judicatura está por necesidad librada al buen sentido, a las inspiraciones de la conciencia, y a veces al favor y a los planes políticos. Pero todas estas provincias tienen organizados, por la forma al menos, todos los tribunales, desde el juzgado de paz hasta los jueces supremos. La reducida esfera en que obran aquellas imitaciones de lo que debiera ser una administración de justicia, la estrechez del círculo en que se mueven los individuos encargados de ella, el número limitado de los idóneos, la falta de abogados, y las influencias tanto locales que de ello resultan, como las políticas que pesan sobre todo, establecen un caos, que se resuelve por el más espantoso desorden e inseguridad. Un cuerpo nacional de jueces llevaría la luz a estos rincones oscuros en que las nociones de la justicia se pervierten, y donde prevalece la violencia o el poder de la fortuna. Una organización de tribunales nacionales establecería además, en sus gradaciones ascendentes, vínculos de unión y de dependencia entre ciertas porciones del territorio que hoy no existen, reconcentrada cada provincia en lo que llamaríamos su independencia y soberanía, si una ruda experiencia no hubiese mostrado que no es más que su desamparo, su aislamiento y abandono a su propia suerte. Aquella poderosa federación, que es hoy el modelo de todas las libertades como el teatro de todas las prosperidades, está dividida en nueve circuitos judiciales, en cada uno de los que entraría la República Argentina toda, y quedaría mezquina en capacidades jurídicas y en número de habitantes. Un miembro de la Suprema Corte que se reúne en diciembre en Wáshington preside dos veces al año a un tribunal de apelaciones tenido en cada distrito, y sucesivamente en cada estado de los que lo componen (1). ¿Por

(1) Forman el 1er. distrito. Maine. N. Hampshire, Massachusetts y Rhode Island.

2º Vermont, Connecticut y Nueva York.

3º N. Jersey y Pensilvania.

4º Delaware, Maryland y Virginia.



qué las provincias argentinas no se agregarían en Distritos judiciales, para que anualmente viniesen jueces probos y llenos de ciencia, extraños a las influencias de lugar, superiores a toda intimidación, a enderezar los entuertos de una justicia de aldea, y los extravíos de las pasiones o los errores de la ignorancia? Así, pues, la administración de justicia nacional está destinada a curar las inmundas llagas del aislamiento y de la oscuridad provincial, y establecer un vínculo de unión que ligue a unas provincias entre sí, y a todas con la capital; a llevar una antorcha que alumbré en los ángulos más secuestrados del territorio, descubra, denuncie y cure; a prestar amparo a todos los derechos oprimidos en cada localidad y cuyos clamores quedan sofocados por la violencia misma que los arranca; a difundir en fin por todo el territorio las luces que están acumuladas en el foro de Buenos Aires y de Córdoba, llevando a todas partes las prácticas, formalidades y garantías de la administración de justicia, extirpando los abusos, uniformando los procedimientos y creando el conjunto de usos, derechos y autoridades que sólo constituyen una nación y aseguran la libertad de sus moradores, como su prosperidad y engrandecimiento.

Ni paran ahí las ventajas de institución tan salvadora. La justicia es la forma visible del derecho, y la justicia, debidamente administrada, concluye por familiarizar a cada hombre con la idea de sus deberes y de sus derechos, y con la idea del derecho es con lo que los hombres han definido lo que eran licencia y tiranía. "Ilustrados por ella, dice Tocqueville, de quien tomamos estas palabras, cada cual ha podido mostrarse independiente sin arrogancia, y sumiso sin baja. El hombre que

5° Alabama, Luisiana y Kentucky.

6° N. Carolina, S. Carolina y Georgia.

7° Ohio, Indiana, Illinois y Michigan.

8° Kentucky, Tennessee y Missouri.

9° Mississippi y Arkansas.

Los Estados de Florida, Texas, Iowa, Wisconsin y California no han sido aún ligados a circuito alguno, pero las cortes de Distrito tienen el poder de cortes de circuito. Tiénese una corte local de circuito en el distrito de Colombia (la capital). El Justicia Mayor o Presidente de la Corte Suprema actúa también como juez de Distrito de aquel Distrito.



obedece a la violencia se doblega y se rebaja; pero cuando se somete al derecho de mandar que reconoce en su semejante, se eleva en cierto modo sobre el que manda. No hay hombres grandes sin virtudes, como no hay gran pueblo sin respeto a los derechos; puede decirse que no hay sociedad; porque, ¿qué es una reunión de seres racionales cuyo único vínculo es la fuerza?"

En un país como el nuestro, que sale del reino desenfrenado de la violencia y de la fuerza brutal, es preciso levantar muy alto por todas partes el pendón de la justicia y del derecho. Así la Constitución Argentina ha establecido en los tribunales de justicia un poder superior a todos los otros poderes, en cuanto ellos son en definitiva los intérpretes de la constitución, y por tanto los jueces que han de resolver todas las cuestiones de derecho y de hecho que del ejercicio de aquellas emanan; y este es un punto capital para que lo dejemos pasar inapercibido.

La teoría es sencillísima. El poder judicial es independiente de los otros poderes, y coexistente con ellos. Su oficio es aplicar las leyes, en todos los casos contenciosos: la Constitución es la ley suprema, luego la aplicación práctica que de sus disposiciones hagan los otros poderes recae bajo la jurisdicción y el fallo del Supremo poder judicial, en los casos que se reputen agredidos derechos que motiven acción, y pidan amparo. Esta doctrina era ya perfectamente reconocida por Wáshington, en el momento de principiar su primer circuito los Jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dirigiéndoles la siguiente nota. "Caballeros: Siempre he estado persuadido de que la estabilidad y buen suceso del gobierno nacional y, por consiguiente, la felicidad del pueblo de los Estados Unidos, dependería, en mucha parte, de la interpretación de las leyes. En mi opinión, por tanto, importa que el sistema judicial sea no sólo independiente en sus operaciones, sino tan perfectamente como sea posible en su formación". Los términos de la Constitución Americana y los de la nuestra coinciden tan perfectamente en establecer la jurisdicción de los tribunales supremos de justicia para la interpretación de la constitución, que podemos sin restricción reproducir las doctrinas recibidas para la una como perfec-



tamente emanadas de la otra. Oigamos al Juez Story: “La constitución declara (art. 6) que *Esta* Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se sancionaren con arreglo a ella, y todos los *tratados*, etc., serán la *Suprema ley* de la tierra”. También declara (art. 3) que “el poder judicial se extenderá a todos los casos en ley y equidad que emanen bajo esta constitución, las leyes de los Estados Unidos y tratados celebrados, o que hubieren de celebrarse bajo su autoridad. Declara además (art. 3) que el poder judicial de los Estados Unidos “será depositado en una Corte Suprema, y las otras cortes inferiores que el Congreso ordene y establezca de tiempo en tiempo”. Aquí, pues, tenemos expresa y determinada provisión sobre cada punto. Nada es imperfecto, ni nada deja en implicación. La constitución es la ley Suprema; el poder judicial se extiende a todos los casos que ocurran en ley y equidad bajo aquella; y las cortes de los Estados Unidos son, y en último resorte, la Suprema corte de los Estados Unidos es, la investida con el poder judicial. Ningún hombre puede dudar o negar que el poder de construir la Constitución es un poder judicial. El poder de construir un tratado es igualmente claro, cuando el caso suscita controversia entre individuos. El mismo principio puede aplicarse, cuando el sentido de la constitución lo pide, a una controversia judicial; porque es función propia del poder judicial construir las leyes. Si pues, ocurre un caso, bajo esta constitución, que sea susceptible de examen y decisión judicial, vese que el mismo tribunal está nombrado para dar la decisión”.

Si a la palabra Estados Unidos, substituímos la palabra confederación; si a los arts. 6º y 3º, substituímos los arts. 31 y 97 que estatuyen idéntica cosa, resulta la misma doctrina y las mismas autoridades rigiendo la materia de ambas federaciones.

La opinión dada por Alejandro Hamilton en el *Federalista*, que era el órgano de las ideas que prevalecieron en la formación de la Constitución Norteamericana, es igualmente concluyente. “La Constitución, decía, define la extensión de los poderes del Gobierno general. Si en alguna época la Legislatura general traspasase sus límites, el departamento judicial es un estorbo



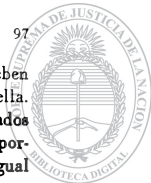
constitucional. Si los Estados Unidos se exceden de sus poderes, si dictan una ley que la constitución no autoriza, es nula; y el poder judicial, los jueces nacionales, que, para asegurar su imparcialidad, han sido hechos independientes, la declaran nula. Por otra parte, si los Estados traspasan sus límites, si dictan una ley que sea una usurpación del Gobierno general, la ley es nula, y jueces rectos e independientes lo declararán. Todavía más: si los Estados Unidos y los estados particulares se chocasen, si se disponen a pelear, ellos pueden hacerlo, y disposición gubernativa alguna puede evitarlo”.

Para completar el sentido de estas disposiciones, añadiremos el conciso juicio pronunciado por el Justicia Mayor Jail. “¿Puede preguntarse, dijo en un caso judicial, cuál es el preciso sentido y latitud en que las palabras *establecer la justicia* (o afianzar como quiere nuestra constitución) es aquí usada o entendida? La respuesta a esta pregunta resultará de las provisiones hechas en la constitución con respecto a este párrafo. Ellas están especificadas en la segunda sección del tercer artículo (art. de la nuestra), donde se ordena que el poder judicial de los Estados Unidos se extenderá a diez descripciones de casos, a saber: 1º A todos los casos que ocurran bajo esta constitución; porque el sentido, construcción y operación de un pacto debe ser siempre verificado por todas las partes, y no por la autoridad derivada solamente de una de ellas. 2º A todos los casos que emanan de las leyes de los Estados Unidos; porque como tales leyes, constitucionalmente sancionadas, son obligatorias para cada estado, la medida de la obligación y obediencia no ha de ser decidida y fijada por la parte de quien son debidas, sino por un tribunal que derive su autoridad de ambas partes. 3º A todos los casos que nazcan de tratados celebrados bajo su autoridad; porque, como los tratados son pactos celebrados por toda la nación y obligatorios para todos sus ciudadanos, su operación no puede ser afectada o regulada por leyes locales, o cortes de una parte de la nación. 4º A todos los casos que afecten a embajadores o a otros ministros públicos y cónsules; porque, como son empleados de otras naciones, a quien esta nación está obligada a



proteger y tratar conforme a la ley de las naciones, sólo la autoridad nacional puede conocer de los casos que les afectan. 5º A todos los casos de almirantazgo y de jurisdicción marítima; porque, como los mares son la conjunta propiedad de todas las naciones, cuyos derechos y privilegios relativos a él son regulados por la ley de las naciones o los tratados, tales casos pertenecen necesariamente a la jurisdicción nacional. 6º A controversias en que los Estados Unidos sean parte; porque en los casos en que todo el pueblo está interesado no sería igual ni prudente dejar a un estado (provincia en nuestro caso) decidir y medir la justicia debida a los otros. 7º A controversias entre uno o más estados; porque la tranquilidad doméstica requiere que las contiendas entre estados sean pacíficamente terminadas por una judicatura común; y porque en un país libre la justicia no debe depender de la *voluntad* de uno u otro litigante. 8º A controversias entre estado, y *ciudadanos* de otro estado; porque en caso de que un estado (esto es, todos los ciudadanos de él) tenga demanda contra los ciudadanos de otro estado, es mejor que pueda proseguir su demanda ante una corte nacional, que ante una corte del estado al que tales ciudadanos pertenecen, por el peligro de las irritaciones y acriminaciones, provenientes de aprensión, de sospecha o parcialidad.

Porque en los casos en que algunos ciudadanos de un estado tengan demanda contra todos los ciudadanos de otro estado, la causa de la libertad y los derechos del hombre prohíben que los últimos sean los únicos jueces de la justicia que a aquéllos se les debe, y el verdadero gobierno republicano requiere que ciudadanos libres e iguales tengan libre, franca e igual justicia. 9º Entre ciudadanos de un mismo estado reclamando tierras por concesiones de diferentes estados; porque, como son puestos en cuestión los derechos de los dos estados a la concesión de la tierra, ninguno de los dos estados puede decidir de la controversia. 10. A controversias entre un estado y los ciudadanos del mismo, y estados extranjeros, ciudadanos o súbditos; porque, como cada nación es responsable de la conducta de sus ciudadanos hacia otras naciones, todas las cuestiones concernientes a



la justicia debida a naciones extranjeras, o sus súbditos, deben ser verificadas por una autoridad nacional y depender de ella. Esta sucinta inspección de los poderes judiciales de los Estados Unidos deja en el ánimo una profunda impresión de la importancia de ellos para la conservación de la tranquilidad, la igual soberanía y los iguales derechos del pueblo". (1)

Quedaría sólo por establecer lo que constituye un *caso* en el sentido de la cláusula. "Es claro, responde el Juez Story, que el departamento judicial está autorizado para ejercer jurisdicción en la plena extensión de la Constitución, leyes y tratados de los Estados Unidos, toda vez que una cuestión tocante a ellos asuma tal forma que el poder judicial sea capaz de actuar sobre ella. Cuando ha asumido tal forma entonces se convierte en un caso; y entonces, y sólo entonces el poder judicial se la avoca. Un caso, pues, en el sentido de esta cláusula de la Constitución, ocurre cuando algún asunto tocante a la Constitución, leyes o tratados de los Estados Unidos es sometido a las cortes por una parte que establece su derecho, en la forma prescrita por la ley. En otras palabras, un caso es una instancia en ley o equidad, seguida conforme al curso regular de los procedimientos judiciales; y cuando envuelve alguna cuestión, que se suscita bajo

(1) La Suprema Corte instituida por la Constitución Argentina, y nuestros jurisconsultos deben tener siempre por delante la serie de decisiones que durante sesenta años ha ido pronunciando aquel tribunal supremo, sobre los diez puntos contenciosos que constituyen su jurisdicción, que son los mismos, en los mismos términos con las mismas palabras que señala nuestra Constitución. El Congreso, las Legislaturas de Provincia, los ministerios públicos, como es práctica en los Estados Unidos, debieran tener bibliotecas, conteniendo estos depósitos de ciencia y experiencia, excusándose con la simple consulta de los casos, reclamos y cuestiones impertinentes los unos, dictámenes errados o injustos los otros.

Las principales obras son: *Condensed Reports of the Supreme Court of United-States*, containing the whole series of decisions of the court, from their organisation to 1827. (6 volúmenes).

Reports of Causes argued and adjudged in the Supreme Court of United-States from 1827 to 1846 by Peters. (16 volúmenes).

Reports of Causes argued and adjudged in the Supreme Court, etc. by Howard from 1845 to 1851 (12 volúmenes).

Reports of causes of Admiralty, etc. (20 volúmenes.)

premo a la falsificación de las instituciones que ha prevalecido hasta hoy en todas las provincias. En casi todas ellas, por leyes escritas o por formas establecidas, ha existido la división e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El hecho práctico, empero, es hasta hoy que las legislaturas y aun los tribunales de justicia en muchas de ellas han sido simples oficinas de autorización y refrendación de los mandatos de los jefes de provincia, no escaseando los actos de violencia pública y notoria, la intimidación y aun las órdenes expresas, cuando han mostrado aquellos poderes disposiciones de obrar en la esfera de sus atribuciones. Los tribunales de justicia nacionales están, pues, llamados por la Constitución a dirimir estos casos, y prestar apoyo y sanción a los actos que, oídas las partes, resultaren conformes al espíritu y a la letra de esta constitución. La frecuencia de estos casos, las decisiones dadas sobre ellos, la publicidad a que está destinado su debate, esclarecerán las cuestiones de derecho constitucional a ellos referentes, estableciendo las doctrinas que hayan de regirlos, y formando la conciencia y la opinión pública a este respecto. La constitución federal de Norte América podía sin grave riesgo suprimir este caso. El desbordamiento del despotismo era para ella un riesgo posible, no un peligro inmediato. La Constitución Argentina es dictada en medio de los tizones aun humeantes de una tiranía nacional y provincial, cuya reaparición ha debido tenerse a la vista.

El segundo es los recursos de fuerza. Siendo la religión católica la de la masa nacional argentina, preexisten con ella a la promulgación de la constitución los tribunales eclesiásticos encargados de dirimir las cuestiones relativas al matrimonio y otras. Los cánones del Concilio de Trento declaran que los impedimentos eclesiásticos son obstáculo no sólo para la realización del sacramento, sino también para la existencia del matrimonio. De aquí viene que aunque la legislación francesa no haya considerado el matrimonio sino como un contrato civil, los canonistas se consideran en el derecho de no reputar válido el contrato matrimonial si existe alguno de los impedimentos diri-



mentos establecidos por la Iglesia, y ella no los ha dispensado, aunque hayan sido absueltos ante los tribunales civiles.

Sea de ello lo que fuere, los tribunales eclesiásticos existen, y ejercen jurisdicción legal sobre los católicos. El recurso de fuerza (1) es, como se sabe, una apelación a las alzadas civiles de los actos y juicios de estos tribunales cuando violan las formas del derecho común, o estatuyen sobre lo que no es de su competencia. El recurso de fuerza preexistía como existían los tribunales eclesiásticos, en virtud de la jurisdicción del poder civil en todo lo contencioso exterior, y la Constitución encarga aquel recurso a los tribunales federales. No incluir esta atribución entre las designadas por la Constitución de los Estados Unidos habría sido imprevisión y falta de estudio de las diferencias normales de situación entre ambos países. El gobierno en los Estados Unidos no ejerce patronato sobre creencia alguna, y no admite por tanto jurisdicción legal de los tribunales de pura conciencia para los creyentes. No es así el Gobierno Argentino, que si bien no es dueño de adoptar o no el culto católico, le sostiene y por tanto reconoce existencia legal a sus instituciones.

“Consolidar la paz interior” — “Proveer a la defensa común”

Estos dos objetos de la constitución forman en el fondo uno solo, a saber: mantener la paz pública dentro y fuera del territorio. Tócanos por fortuna estar colocados en situación geográfica tal, y vivir en época, para la América al menos, tan pacífica, que sólo por culpa nuestra puede encenderse una guerra exterior. Las potencias europeas han abandonado todo pensamiento de conquista, demostradas ya hasta la saciedad, por la economía política y la historia, las desventajas de las lejanas colonias. Si lo intentaran, se neutralizarían las unas a las otras, y no está lejos el día en que se establezca como principio americano la incompatibilidad de la dominación europea en este continente. Si nuestra constitución federal hubiera de ser la plácida aurora de la libertad, acompañada de la prosperidad y

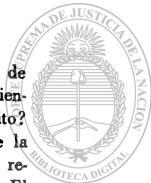
(1) Véase Dr. Castro Argentino sobre recursos de fuerzas.



población rápida de nuestro suelo, acaso la semejanza de instituciones, la similitud de situaciones geográficas descollantes en ambos continentes nos atraería desde luego las simpatías de la poderosa Unión norteamericana; y a su sombra, cual aliados y socios en la gran causa de la libertad humana, ponernos a salvo de las complicaciones con la política europea, único punto de donde fuera permitido temer la necesidad de proveer a nuestra común defensa. Mas la Constitución, de buena fe practicada, es la fortaleza más inexpugnable que podríamos oponer a los enemigos exteriores. ¿Qué pretenden las potencias europeas en nuestros países? Seguridad para sus nacionales y franquicias para su comercio. A ambas cosas provee abundantemente la constitución; y observada fielmente, esos importunos agentes europeos estarían por demás en nuestros países, como lo están en los Estados Unidos, donde se ignora que existan.

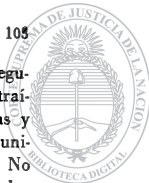
El riesgo no nos viene, pues, de afuera, sino de los desmanes de nuestros gobiernos, y las precauciones, formalidades y sujeciones que la constitución impone a esos gobiernos son los mejores medios de proveer a la defensa común. ¿Qué poder nacional sancionó la desastrosa guerra del Uruguay que ha postrado a dos repúblicas hermanas? ¿Quién votó los millones que se malbarataron en ella?

Es peculiaridad histórica de la República Argentina que nadie le haya hecho guerra, salvo la escarmentada tentativa de 1806, y que sea ella quien la ha hecho en medio continente. La paz exterior es, pues, una condición natural de nuestra época y de nuestra situación geográfica, inalterable por siglos, si se limitan y reglan bajo principios de justicia los actos de nuestros gobiernos. No sucede así por desgracia con la tranquilidad doméstica. Cuarenta años hace que huyó de nuestro país, y todos los esfuerzos hechos para volverla a traer no han sido parte a restablecerla. Atribuyóse a la tiranía, cual remedio heroico, el poder de producirla. La tiranía ensayó sus horrores, sus memorables degüellos y sus expoliaciones, y la tranquilidad doméstica nunca estuvo más lejos de nosotros. ¿Ni cómo era posible esperarla prudentemente del sistema mismo que conculca



las bases de toda sociedad? ¡Pues qué! ¿El confesado designio de exterminar una parte de la población no despierta el sentimiento de la propia conservación para contrariar este propósito? ¿El ultraje de epítetos necios no subleva el sentimiento de la propia dignidad? ¿La opresión y la violencia no excitan la resistencia natural de lo que está deprimido y violentado? El destrozo de la propiedad privada y el despilfarro de los caudales públicos no suscitan el interés de su conservación? La subversión social que coloca el crimen, la ineptitud, la ignorancia, la doblez y la bajeza de esfera en el poder, ¿no concita el universal menosprecio a la autoridad de que se revisten?

Fuerza es, pues, hacer entrar la sociedad en sus quicios, y dar satisfacción a todas las propensiones humanas en su legítima esfera. Es el hombre ser complejo, que obedece a leyes inmutables de justicia, de progreso, de belleza. El palurdo miserable se siente más a sus anchas entre las cosas buenas; lo injusto, lo odioso, lo indigno le lastima y hiere, y aunque su juicio no se forme inmediatamente, es un hecho este que se produce por la historia de todos los pueblos, y que acreditan sus progresos materiales y morales. Nadie osaría hoy degollar en la República Argentina, no obstante que están vivos y con poder los mismos que han degollado hombres durante veinte años. Un grito de horror se alzó en Buenos Aires el día 6 de marzo en que miserables oscuros, avezados en este crimen, ensayaron en el sitio resucitar esta práctica odiosa. Nadie lo había ordenado; fué un crimen póstumo, contra cuya participación protestaron todos. Tres años antes se habría tenido a gala la perpetración de este acto. La conciencia pública, el sentimiento moral, han recuperado, pues, toda su elasticidad a este respecto, y hasta tememos que se nos repruebe recordarlo. Hase hecho la guerra, es verdad; ha habido trastornos y revueltas en todas las provincias; pero para satisfacción de todos los argentinos, reivindicación de su nombre y esperanza de un orden de cosas mejor, en un año transcurrido, ninguna víctima ha sido inmolada deliberadamente a la violencia de las pasiones políticas, por respeto a esa repulsión universal que tales actos inspiran.



La tranquilidad doméstica, pues, si no es un bien asegurado, no es del todo imposible que la veamos establecerse, atraída por el cansancio, reclamada por las necesidades públicas y exigida por la voz muda, pero imperiosa de ese sentimiento universal de reprobación a los actos que tienden a perturbarla. No es de este lugar el examen de las causas que, contra todos los cálculos, han traído la lucha cuando todos se prometían la paz. Baste sólo tener presente que hábitos inveterados de voluntariedad en los que mandan, el miedo, posiblemente exagerado, en los que obedecen de ser pisoteados de nuevo, han traído un conflicto, que a nuestro juicio aboga en favor del orden y de la paz, sobre sus únicas bases posibles — la libertad y las garantías que la constitución se propone asegurar.

“Promover el bienestar general”

“Como los Gobiernos de estado, dice el Juez Story en el comentario de este propósito, son formados para este fin, puede preguntarse, ¿por qué se le anunciaría como a uno de los peculiares o prominentes objetos de la Constitución de los Estados Unidos? Dos respuestas pueden darse a esta pregunta. Los estados (provincias) separadamente no poseen los medios. Si poseyeran medios, no tendrían poder suficiente para ponerlos en ejercicio”.

“Esto nos lleva a observar que el establecimiento de un gobierno general es benéfico no sólo como una fuente de renta, sino como un medio de economía en su recaudación, distribución e inversión. En lugar de una gran lista civil para cada estado, necesaria para desempeñar por sí mismo todas las funciones de una nación soberana, una comparativamente pequeña para toda la nación basta para hacer efectivos sus poderes y recibir e invertir sus rentas. A más de la economía del departamento civil, los gastos de los departamentos militar y naval para la seguridad de los Estados serían infinitamente menores, que si cada uno de ellos se viese forzado a mantener en todos respetos su sobe-



ranía independiente. No se necesitan entonces ni flotillas ni fortalezas, ni puntos dominantes, para guardar unas provincias contra otras; ni cuerpos de empleados para guardar las fronteras de cada uno contra invasión o contrabando”.

“Basta asegurar a expensas comunes los límites exteriores de todo el estado. Además, habría uniformidad de operaciones y arreglo en todos los objetos de común bienestar bajo la dirección de una sola cabeza, en lugar de los multiplicados y a veces opuestos sistemas de distintos estados”.

Hemos escogido de propósito éstos, entre otros muchos razonamientos de Story, no sólo por describir como de intento males argentinos, sino porque es ésta preocupación antigua de nuestro espíritu. Alegábamos razones parecidas para indicar la conveniencia de anexarse el Uruguay a una federación de los Estados Unidos del Plata; hémosla mostrado cada vez que insistíamos contra el Tirano en la necesidad de organizar y constituir la República, y se nos presenta todavía como la demostración de las ventajas de un gobierno general. Si pudiera cada provincia echar una mirada sobre el conjunto de sus gastos públicos en los veinte años pasados, no creería que ella era capaz de tanto. ¿Concebirá Córdoba que ha gastado más de cuarenta millones, en aquel espacio de tiempo? ¿Sabrá nunca Entre Ríos lo que malbarata para levantarse en masa e invadir otras provincias? Pero, la experiencia de este último año ha traído la luz tristemente a todos estos puntos oscuros de nuestra condición íntima. Córdoba, la segunda provincia de la República, la más obstinada en otro tiempo en poner dificultades, no ha podido reunir diez mil pesos para equipar un contingente. Pero no es esto sólo lo que al bienestar general concurre. La República Argentina, para vergüenza de sus gobiernos y castigo de sus propias faltas, es el único estado civilizado del mundo que carezca de servicios públicos y de obras para asegurar el bienestar general. Ni un puente, ni un acueducto, ni un camino, ni un muelle, ni un edificio llevan, en toda la extensión de aquel país, ni el sello de la previsión ni el nombre del estado. Hay dos dilatadas fronteras sin un sistema común de defensa;



como no hay correos en el interior, como no hay cosa que acredite la existencia de una nación.

La formación de un gobierno general habrá curado a las provincias de su llaga interior, los ejércitos provinciales y los males que ellos procuran; el gobierno nacional dará lo que les falta, medios de comunicación entre ellas, y fronteras aseguradas. Estos dos bienes solos bastarían para dejar lucido el objeto del preámbulo, “promover el bienestar general”, independientemente de las mil consideraciones que a este respecto excusamos por evitar prolijidad.

“Asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestros hijos y todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo”.

“Nunca se repetirá demasiado, dice Tocqueville, que nada hay más fecundo en maravillas que el arte de ser libre pero nada hay más duro que el aprendizaje de la libertad. No sucede así con el despotismo. El despotismo se presenta frecuentemente como el reparador de los males sufridos, el apoyo del buen derecho, el sostén de los oprimidos y el fundador del orden. Los pueblos se duermen en el seno de la prosperidad momentánea que hace nacer, y cuando despiertan se encuentran miserables. La Libertad, por el contrario, nace, por lo común, en medio de las borrascas, se establece penosamente en las discordias civiles, y sólo cuando está arraigada se conocen sus beneficios”.

Decíalo contemplando las maravillas que ha creado la libertad en el pueblo que en el preámbulo de su Constitución declaró ser su objeto “asegurar la libertad” y lo repetimos nosotros al despertar de uno de esos sueños fatales, bajo el aguijón de las desgracias y escombros que ha acumulado un despotismo salvaje. Así, pues, derrocada apenas la tiranía, viendo abiertas aún las fuentes de donde emana, conocidos y palpados veinte años sus deplorables efectos, los Representantes del pueblo, reunidos en Congreso, se proponen asegurar los beneficios de la libertad para los pueblos que representan, para sus descendien-



tes y para todos los hombres del mundo que quieran venir a habitar el suelo argentino, lo que equivale a decir que quieren establecerla para que la presente generación la goce, pero de tal manera permanente que alcance a las futuras generaciones, y tan lata y general que cuadre y se avenga perfectamente con las ideas, creencias y libertad individual de los hombres que de todos los países acudan a establecerse en estas comarcas. En este punto, como lo hemos hecho notar antes, resalta especialmente el carácter *colonizante*, si es permitido decirlo así, de la constitución, y su mente de estatuir no ya en relación de la población actual de la República, sino en vista de un cuadro más vasto, y más en proporción con el tamaño, ventajas y situación privilegiada de nuestro territorio. Si Story, al parafrasear proporción idéntica a la que nos ocupa, tiene sobrada razón para notar que, “si hay algo que pueda reclamar la admiración del mundo, es aquel sublime patriotismo, que mirando más allá de nuestro tiempo y nuestros propósitos diarios, trata de asegurar la felicidad permanente de la posteridad, poniendo los anchos cimientos de gobierno sobre principios inamovibles de justicia”, no menos digna de encomio es la solicitud que impulsó a nuestros legisladores a ensanchar esos cimientos más todavía, haciendo parte interesada en esta constitución a los hombres todos del mundo que entraren en los límites de su jurisdicción, reconociéndoles y asegurándoles derechos iguales.

Los pueblos argentinos, y generalmente hablando los de habla española en América, no conocen los beneficios de la libertad, ni aun se dan clara idea de su esencia misma; pero en lo que los primeros aventajan a todos los de su estirpe es en el conocimiento de los males de la tiranía; y esto para pueblos menos empobrecidos, menos desparramados y más numerosos sería ya una grande y sólida base de orden, de libertad y de instituciones. El despotismo, el arbitrario, la omnipotencia de un poder discrecional no se han presentado en país alguno bajo formas tan odiosamente desnudas como en aquel país. La tiranía argentina tuvo la triste gloria de cobrar fama universal, llamando la atención del mundo entero. Sus obras, empero, están



ahí; ruinas, despoblación, miseria, odios, desmoralización e ignorancia. Nada más ha dejado.

La libertad moderna sale de las condiciones de simple perfección de las instituciones, de mero contentamiento del sentimiento de la dignidad humana. Es económica, industrial, base indispensable de la riqueza de los individuos y del engrandecimiento nacional. Vegetan los pueblos que carecen de una parte de las libertades públicas, se extenuan en la oscuridad y la decrepitud los que carecen de todas ellas. Brilla en la escena del mundo Inglaterra, que más libertad ostenta; pasman y asombran los prodigios de engrandecimiento y de riqueza de los Estados Unidos, merced a sus libertades públicas. Los que quieren separar la libertad de la prosperidad de los estados se olvidan de que Holanda, Tiro, Sidón, Cartago, pueblos libres de épocas anteriores, fueron, al mismo tiempo que libres, ricos, emprendedores, navegantes, industriales y comerciantes.

La libertad moderna es, pues, un capital. Legar la libertad a sus hijos es la mejor y más productiva herencia que una generación puede dejar a otra; y al constituir un estado es digna y grave preocupación de sus legisladores hacer efectiva esta bendición que es el origen de todas las otras. Hase dicho en estos días en un libro inmortal que anda en manos de todos: "En la época en que vivimos una nación se crea en un solo día, pues encuentra ya resuelto el gran problema de una civilización completa, sin tener que descubrir nada, bastándole sólo poner en aplicación lo que conviene. Unamos, pues, nuestras fuerzas y veremos todo el partido que podemos sacar de este hecho" (1); y de esta verdad dan testimonio las mismas instituciones que comentamos. En medio de la ignorancia de muchedumbres indisciplinadas, entre los azares de la guerra civil y los avances de poderes de hecho, los mismos que quisieran contemporizar con las dificultades levantan en un país desolado un monumento a los progresos de la razón universal y establecen el código perfecto y sin atemperaciones de las conquistas que en más afortu-

(1) *La cabaña del Tío Tom.*



nadas regiones ha hecho la libertad humana. Si esa constitución no es realizable, ninguna otra, en lo que es fundamental, podría llenar su alto objeto. Será un programa noble y un blanco adonde dirigir en adelante los esfuerzos. Su promulgación sola es ya un antecedente precioso y una semilla fecunda. La tiranía ha regido veinte años, sin contrapeso, sin rebozo. He ahí el código de las libertades que holló; he ahí la regla de criterio para juzgar de cada una de las nuevas tentativas para reproducirla.

Por todas partes se han hecho ensayos para hacer descender los principios fundamentales que la conciencia humana reconoce como bases de todo derecho y de toda justicia a la capacidad del pueblo a que se destinan las constituciones que los truncan, violan o conculcan. El hecho práctico, sin embargo, ha mostrado la vanidad e insubsistencia de tales temperamentos.

Ninguna de esas constituciones bastardas o mutiladas subsiste, es ésta es su mejor refutación. Los estadistas que en sostén del orden han creído deber suprimir libertades, no han tenido tiempo de morir antes de haber visto derrocado el poder que querían resguardar, o restablecidos los absolutismos que creyeron alejar. La anarquía y el despotismo son los dos escollos de todo aprendizaje político. Los excesos del despotismo enseñan a amar la libertad; las perturbaciones y el malestar de la anarquía reclaman el orden, y las constituciones pretenderían en vano economizar estas lecciones, coartando esas mismas libertades que se proponen garantizar. Cuando se dice que un pueblo es capaz de abusar de ellas, se olvida que los que ejercen el poder, siendo parte de ese mismo pueblo imperfecto, están aún más expuestos a los abusos que provocan las resistencias. Las constituciones deben tener, para ser buenas, por base los principios de derecho reconocidos por la conciencia universal, por esfera de acción, no sólo las necesidades momentáneas de la época y sus preocupaciones, sino la más extensa que corresponde al porvenir, y la capacidad territorial para dar lugar al desarrollo de la población y de la riqueza.

Las Constituciones fraguadas para el momento presente son



sólo una valla de hierro echada a los desenvolvimientos sucesivos; y la Confederación Argentina, con escasa población e inmenso terreno, debe medir su capacidad en proporción de los elementos que habrán de desenvolverse más o menos inmediatamente.

Un Gobierno general, pues, y la Constitución que lo asegura deben preocuparse de “asegurar los beneficios de la libertad no sólo para nosotros, sino para nuestros hijos y los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo”.

Observa el Juez Story que “en el sistema federal el gran designio de gobierno por estados es, sin duda alguna, llenar este importante objeto; y que tampoco hay duda de que cuando son bien administrados se adaptan bien a aquel fin. Pero la cuestión no está tanto en saber si ellos conducen a la preservación de las bendiciones de la libertad, como si subministran una completa y satisfactoria seguridad. Si las observaciones que ya se han hecho están fundadas en la experiencia humana, ellas establecen la suposición *de que los gobiernos de los Estados Unidos (o provincias) son incompetentes e inadecuados para subministrar las garantías y contrapesos que un pueblo libre tiene derecho de exigir para el mantenimiento de sus vitales intereses y especialmente de su libertad*”.

Estas sugerencias del buen sentido en países donde las libertades públicas e individuales han sido siempre tan bien guardadas tienen una triste confirmación de hecho en nuestro país. La desorganización de la República comenzó en las provincias; y no menos que en 1812 se estableció en el Paraguay la tiranía más espantosa y destructora. La usurpación de poderes, la abolición de las prácticas de ordenada administración, el trastorno, en fin, principió en las provincias más remotas, mientras se obraba la emancipación misma de las colonias. El Gobierno absoluto nació en ellas, y con el apoyo de sus régulos se generalizó hasta hacerse la ley de la tierra. Ninguna provincia en el espacio de cuarenta años ha podido conservar ninguna de las libertades naturales, y toda nuestra historia muestra que ellas *per se* y aisladamente son incapaces de garantizar sus propias libertades, ha-



biendo, por el contrario, caído bajo la tutela de un Gobierno general que por falta de bases discutidas, y poniendo en conflicto unas Provincias con otras, logró imponerles una voluntad y acción que no emanaba de ellas mismas. El hecho existente de una general tiranía, no resistida por los gobiernos de las provincias, muestra la necesidad de un Gobierno general en que cada una de las provincias tenga parte, y por la acción moral y física del todo sobre cada una de ellas, garantice las libertades que de otro modo no han podido conservarse.

Otro punto que una constitución general asegura, en cuanto a los beneficios de la libertad, es la existencia, seguridad y libertad de las minorías, en favor de las cuales son casi todas las prescripciones y garantías de una constitución; pues ellas son por el momento ociosas para las ideas, partidos, opiniones e intereses que ejercen el poder en un momento dado. La Confederación Argentina, bajo la inspiración de un malvado, ha presentado por veinte años el escándalo de que aun no nos horroizamos suficientemente, no sólo de un gobierno instituido confesadamente para obrar el exterminio, la ruina de todos los que durante el lapso de veinte años, por los diversos motivos que pueden suscitarse, le fuesen opuestos, sino que también una parte de la población profesaba la doctrina de la extinción, humillación y muerte de la otra parte que era conocidamente hostil al sistema sostenido por los gobiernos irresponsables de entonces. En este designio tan espantosamente seguido en ciertas épocas, los pueblos y gobiernos argentinos descendieron a la condición de tribus salvajes, exterminándose unos a otros, según que el éxito de las armas les proporcionaba ocasión, de donde salió en definitiva la ruina de las propiedades, y con el decrecimiento de la población y de la riqueza, la nulidad e impotencia de esos mismos gobiernos y su ruina y descrédito final. Asegurar la libertad es, pues, asegurar el derecho a todas las disidencias políticas, a todas las opiniones, a todos los errores mismos, cuando no se traducen en actos violentos. A este respecto la República Argentina debe una satisfacción a la humanidad ultrajada, y nos es grato reconocer que empieza ya a reparar sus faltas.

CAPITULO II



Declaraciones, Derechos, Garantías

Art. 1º La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.

Después del preámbulo en que están señalados con precisión los fines de la Constitución, el artículo único que le sigue enumera los principios, los medios y los límites de esa constitución. Por los primeros establece los derechos, por los segundos las formas, por los terceros lo que no podrá hacerse, concederse o negarse.

Como sobre preámbulos se ha suscitado duda en varias épocas en cuanto a la oportunidad de estas declaraciones de derechos que el tenor mismo de una constitución deja asentados en su parte dispositiva, y el Congreso constituyente de los Estados Unidos creyó innecesaria en un gobierno libre, en posesión indisputada de esos derechos, constituyéndose precisamente en consecuencia y uso de esos mismos derechos, la consignación paladina de cada uno de ellos; pero al someter la Constitución a la aprobación del pueblo, de todos los puntos de la Unión se pronunció un voto uniforme, pidiendo declaración afirmativa



o negativa sobre todos los puntos que, aunque sobreentendidos en la Constitución, requerían para tranquilizar la conciencia pública declaración terminante y expresa. En un apéndice llamado *enmiendas*, lleva la Constitución de los Estados Unidos la declaración de derechos que las de los estados particulares pusieron al frente, y que la nuestra ha incluido bajo el epígrafe declaraciones, derechos y garantías.

“El principio, decía el jurisconsulto Dupin, en la discusión del preámbulo de la Constitución francesa, el principio que reconoce que hay derechos y deberes anteriores a las leyes positivas es uno de los más morales y más dignos que puede proclamar el legislador humano. Sobre todo en el momento en que pone en ejercicio su mayor poder es cuando más le conviene sentir su propia flaqueza, y reconocer y proclamar que hay un derecho superior y anterior a las leyes que está llamado a dictar. Sí; bueno es que el legislador no se infatúe con su poder hasta el punto de creer que tiene el derecho de hacer y deshacer; porque haciéndolo todo podría acarrear males extremos, y deshaciéndolo todo podría arrebatar bienes que pertenecen a la Humanidad y que le han sido concedidos por su Autor. No hay país, como no hay jurisconsultos, ni magistrados, ni hombres de estado, que no hayan reconocido en todo tiempo y lugar que hay dos clases de leyes y de principios; los primeros son los que entran en la esencia misma de la humanidad, cuyo origen es divino, que están inscritos en la conciencia, no de una asamblea ni de un pueblo, sino de todos los pueblos de la tierra. Este derecho es el lazo de fraternidad entre todos los pueblos. Esto era lo que hacía decir al orador romano “hay una ley que no está escrita, sino que ha nacido con nosotros: *Est non scripta sed nata lex*, y añadía: no es de una manera en Roma y de otra en Atenas, sino que por todas partes es la misma”. Son principios generales que el Creador ha grabado en el corazón de todos los hombres, y que cada uno encuentra en su conciencia interrogándola, y estos principios generales son la regla de todas las legislaciones. Preciso es que el legislador los tenga sin cesar a la vista, a fin de no violarlos; y si por desgracia los viola



o lo altera, es necesario que, sin desobedecer a las leyes que ha dictado, quede lugar a reclamo, y que sea posible decirle más tarde: Habéis violado el derecho; preciso es volver sobre vuestros pasos". (1)

Este mismo sentimiento nos hacía decir en 1851 al amonestar a los pueblos argentinos a tratar de constituirse: "La voluntad nacional, la violencia, los hechos han dado al Estado la forma federal. Las constituciones no son más que la proclamación de los derechos y de las obligaciones del hombre en sociedad. En este punto todas las constituciones del mundo pueden reducirse a una sola. En materia de garantías, seguridad, libertad, igualdad basta declarar vigentes todas las disposiciones de nuestras constituciones antiguas". (2)

Estos principios generales son los que están contenidos en las Declaraciones, derechos y garantías, y con este nombre, o el de Derechos del Hombre, o el de Bill o Carta de los derechos, preceden a todas las constituciones, ya sean monárquicas o republicanas; porque en estos puntos fundamentales la humanidad está de acuerdo, y sólo los presidiarios y los tiranos no los reconocen. Así es un préstamo que se hacen unas constituciones a otras, porque es un tesoro común a la humanidad.

Lo que se alegaba para su omisión en la constitución americana es precisamente lo que en la nuestra le asigna el lugar prominente que ocupa. Decíase que un *bill* de derechos era más adecuado en su naturaleza a una monarquía que a un gobierno profesadamente fundado en la voluntad del pueblo, y ejecutado por sus inmediatos representantes y agentes. En efecto, tal es el origen histórico de estas declaraciones de derechos. La Magna Carta inglesa fué obtenida de un rey por los varones espada en mano; y tal es, entre otros, el Bill de derechos presentado

(1) *Constitution de la République Française*, accompagnée de notes sommaires explicatives du texte, et suivie de diverses pièces, et de quelques Discours prononcés dans la discussion du projet, par M. Dupin, Représentant du Peuple, un des membres de la commission de constitution, 1849.

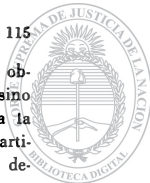
(2) *Argirópolis*.



por los lores y los comunes al príncipe de Orange, como condición de su advenimiento al trono; porque estos derechos, que hoy forman la base de todas las constituciones, son conquistas que han hecho unos pueblos en sus luchas intestinas, y formado más tarde la conciencia del derecho del resto de las naciones civilizadas.

¿Ni cómo podría omitirse esta declaración de derechos en la Constitución Argentina, dictada sobre los escombros aun palpitantes de la tiranía que se había cebado en conculcarlos? ¿Es inútil estatuir que no pagarán derechos en su tránsito por territorio argentino las mercaderías que eran el blanco de exacciones y gabelas? ¿Estaba de más declarar que todo argentino puede entrar y salir de su país, pensar y publicar sus ideas, usar y disponer de su propiedad, asociarse, enseñar y aprender? ¿Es superfluo abolir la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, los azotes y las ejecuciones a lanza y a cuchillo, al día siguiente de derrocado el sistema de todos estos horrores, y de aquellas violaciones de todo principio social?

Pero todavía esta declaración de derechos y garantías tiene para nosotros objetos especiales y variados que llena cumplidamente. La América española, educada bajo un sistema de servilismo, se arrastra y despedaza en convulsiones que se prolongan después de medio siglo, luchando por establecer en su seno las libertades que hacen la gloria y la prosperidad de la otra parte de la América, contra la grosería de los instintos y pasiones desordenadas, contra los resabios y tradiciones de sus antecedentes coloniales. No faltan malos ejemplos en la tierra para cohonestar estas propensiones, ni teorías complacientes que traten de justificarlos. Una declaración de las garantías y derechos que han asegurado a la Unión Norteamericana la prosperidad que se desea para la Federación Argentina es un medio de edificar la conciencia pública, mostrándole los instrumentos de ese engrandecimiento, los límites del poder público, y los derechos de los gobernados que no han de atropellarse, so pena de ser sumidos de nuevo en el abismo de males de que acabamos de



salir. La declaración de derechos tiene, pues, no sólo por objeto poner coto a los desbordes de los poderes públicos, sino educar y edificar la conciencia individual, señalar límites a la voluntad, al ardor, a la abnegación y aun al odio de los partidos, mostrándoles lo que no se debe, ni puede sin crimen desear, querer, pedir o ejecutar. “En un gobierno republicano, dice el estadista Madison, los grandes abusos vienen más bien de la comunidad que del cuerpo legislativo. Las prescripciones en favor de la libertad deben ser dirigidas hacia el lado de donde está el mayor poder, esto es la masa del pueblo operando por la mayoría contra la minoría”. Nuestra historia reciente está ahí para mostrar cuánto importa que el pueblo en general conozca los límites en que es lícito ejercer la acción pública. ¡Cuántos crímenes, cuántas desgracias habríanse ahorrado nuestros anales si la conciencia pública hubiese estado más preparada para distinguir lo que era lícito hacer, de lo que entra en el dominio del crimen, ya sea pueblo, legislatura o gobernante quien lo ejecuta! “Una declaración de derechos, dice el Juez Story, es de real eficacia para contener los excesos del espíritu de partido. Sirve para guiar e ilustrar la opinión pública, y hacerla más lista en descubrir y más resuelta para resistir las tentativas de atropellar los derechos privados. Requiérese más que audacia de carácter para hollar principios que se recomiendan al juicio del mundo por su verdad y simplicidad; y que están constantemente colocados ante los ojos del pueblo, acompañados de la imponente fuerza y solemnidad de una sanción constitucional. La declaración de derechos es una parte del bagaje de los hombres libres, mostrando sus títulos para ser protegidos; y ellos adquieren mayor valor cuando están colocados bajo la protección de tribunales independientes, instituidos como los guardianes de los derechos públicos y privados de los ciudadanos”.

Baste lo dicho para explicación de las declaraciones, garantías y derechos que antepone la Constitución a la distribución y órbita de los poderes que establece, y que todas las constituciones provinciales deben repetir y ostentar a su frente. Estas



declaraciones son los principios constitutivos; la parte dispositiva viene en seguida a arreglar los medios constituyentes.

Para la mejor ilación y dependencia de estos modos que constituyen una sola entidad de gobierno, nos permitiremos invertir el orden de los calificativos.

“Forma republicana”

“La Nación Argentina adopta”... luego la forma adoptada no la crea ni inventa, limitándose cuando más a especificar la manera como la entiende.

La República, en efecto, es un gobierno conocido desde los tiempos más remotos, y que ha venido modificándose con los progresos de la humanidad. Las repúblicas antiguas tenían por base la esclavatura y la conquista: las repúblicas modernas se apoyan en el trabajo de cada uno y en la capacidad general. Las repúblicas antiguas han perecido por su base, la guerra y la desigualdad; las repúblicas modernas se engrandecen por la industria y el cultivo de las artes y ciencias. “La república, pues, es una reunión de habitantes de un mismo territorio, que para asegurar el fruto de su trabajo ponen voluntariamente en común sus fuerzas y su inteligencia a fin de obtener juntos lo que aisladamente no podría” (1). La igualdad de derechos en la cosa pública es la condición esencial de esta asociación; y el ejercicio absoluto del derecho de gobernarse a sí misma, que es asegurar sus vidas, propiedades y propender a su mayor felicidad, se llama *soberanía*. La manera de ejercer la *soberanía* es lo que principalmente distingue las repúblicas modernas de las antiguas. En estas últimas los miembros de la asociación expresaban de viva voz su voluntad, o bien había una clase, o aun una ciudad, como Roma, por ejemplo, que tenía o se arrogaba el encargo de declarar la voluntad de todos, y convertirla en ley. Como la esclavatura y la conquista eran la base de estas socie-

(1) Brillard. *De l'organisation de la République, depuis Moïse jusqu'à nos jours*. 1846.



dades, los ciudadanos podían en su mayor parte consagrar su tiempo a los negocios públicos, trabajando el entretanto los esclavos para los patricios, y enriqueciéndose el pueblo-rey con los despojos de los enemigos. Como en las repúblicas modernas la base de la asociación es el trabajo, no todos podrían asistir a las asambleas públicas, y extendiéndose a centenares de leguas los estados modernos, poquísimos podrían hacer uso de su derecho de arreglar y disponer lo que al bien público concierne. La república moderna es, pues, por su esencia,

“representativa”

esto es, que no pudiendo todos los habitantes de un país reunirse en un punto y en un día señalado a expresar su voluntad, nombran representantes, que vaya uno por cada cierto número de habitantes, a expresar en una asamblea la voluntad de sus representados, mediante su ciencia y conciencia propia de los intereses generales.

Si sucediese que varios pueblos o fracciones de un mismo pueblo, independientes antes, o separados por la disolución de una anterior asociación, quisiesen gobernarse en común, sin confundirse del todo en un gobierno nacional, esta república será a más de representativa

“federal”

según lo establecieren en la constitución que ha de servirles, por mutuo consentimiento, de pacto y de regla para llevar adelante la asociación; y ésta es, en efecto, la forma con que se presenta la República, representativa federal de los Estados Unidos de América, el único modelo de esta forma de gobierno en los tiempos modernos; y por fortuna tan próspero, poderoso y libre, que es de esperar sea el padrón por el cual se guíen todas las asociaciones presentes y futuras que se hallen en libertad de escoger la forma de gobierno que más convenga a la dignidad de hombres libres y civilizados. Ello es que por un don especial de



la Providencia a la República representativa federal, única que presentan los tiempos modernos, se asocian indisolublemente las ideas de libertad, riqueza e instrucción individual, engrandecimiento rápido, poder, prosperidad y tranquilidad imperturbable; mientras que las sociedades como las de Europa, y no pocas de América que esperaron su felicidad de la voluntad de un *soberrano*, de un individuo investido de la *suma del poder público*, o de su facultad de imponer su voluntad, como regla de gobierno, sólo han asegurado trastornos, despotismo, guerras civiles y miseria.

La América española busca, desde su independencia, en la República su forma de gobierno, y la República Argentina ha adoptado la forma republicana representativa, federal, con la Constitución misma del pueblo que hoy es el modelo de esta institución. La forma republicana le viene de la carencia de dinastías, que puedan pretender como un derecho adquirido o heredado, dirigir los negocios públicos; la forma representativa, de la condición de las repúblicas modernas y de la dilatada extensión territorial la forma federal, en fin, de sus reyertas internas que trajeron la disolución del gobierno general durante el virreinato, de su aislamiento en provincias y de la necesidad de ayudarse recíprocamente para la común felicidad, sin que hayan dejado de influir en esto la violencia y la tiranía misma. Pero los hombres de ciencia y previsión han aceptado esta forma de gobierno bajo sus tres modificaciones componentes, ya como un hecho consumado, que sería peligroso contrariar, ya como vulgar preocupación que no debe ser menospreciada, ya como forma rodeada de prestigios de buen éxito, ya, en fin, porque siendo la forma federal o unitaria simple cuestión administrativa, ni la conciencia ni la dignidad personal están interesadas en el triunfo de una o de otra.

CAPITULO III



Art. 2. El Gobierno federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano.

Art. 14. Todos los habitantes de la confederación gozan de los siguientes derechos... de profesar libremente su culto.

Art. 31. Esta constitución... y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de las provincias están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes y constituciones provinciales.

Art. 64. Corresponde al Congreso: 15. Proveer a la seguridad de las fronteras. Conservar el tratado pacífico con los indios, y promover la reducción de ellos al catolicismo.

Art. 83. El Presidente de la Confederación tiene las siguientes atribuciones...

8. Ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de Obispos para las Iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.

9. Concede el paso o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de la Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.

Este es el punto en que la Constitución Argentina se separa completamente, no sólo de la Constitución federal norteamericana que sigue de ordinario en sus prescripciones, sino de las de toda la América española que le han precedido. La gravedad del asunto requiere que nos detengamos con especialidad a señalar las razones que han aconsejado esta desviación y los principios incuestionables en que reposa.



Apenas hay un punto más controvertido entre eminentes publicistas que el derecho de un gobierno o de una nación para prescribir reglas en cuanto a la adoración que debe tributarse a Dios. Así unas constituciones, y entre ellas la de los Estados Unidos, han prohibido al Congreso “dictar ley alguna respecto a un establecimiento de religión, o prohibiendo el libre ejercicio de ella”: otras han declarado ser la religión dominante la iglesia anglicana, permitiendo el libre ejercicio de otras religiones; otras han erigido la religión católica apostólica romana en religión de estado con exclusión absoluta del ejercicio público de toda otra, como la de Chile. Bellísima es la declaración de la Constitución de Massachusets: “Es derecho a la par que obligación de todo hombre en sociedad adorar públicamente y en días señalados al Ser Supremo, Gran Creador y Preservador del Universo. Y ningún vecino será dañado, molestado o coartado en su persona, libertad o propiedad por adorar a Dios de la manera y en los días que a los dictados de su propia conciencia convengan; o por su profesión religiosa o sentimientos, con tal que no perturbe la paz pública u obstruya a otros en su adoración religiosa”. (1)

Es verdad que nadie pondrá en duda, dice un autor, el derecho de la sociedad o gobierno para intervenir en materias de religión si se cree en que la piedad, la religión y la moralidad están íntimamente ligadas con el bienestar de un estado, y son indispensables para la administración de justicia. La promulgación de las grandes doctrinas de religión; la existencia, atributos y providencia de un Dios Omnipotente; la responsabilidad ante él por todas nuestras acciones, fundadas en el libre arbitrio; un estado futuro de recompensas y castigos; el cultivo de todas las virtudes personales, sociales y benevolentes, todos estos puntos en manera alguna deben ser indiferentes en una comunidad, y es difícil concebir cómo existiera sin ellas una sociedad bien organizada”.

(1) The Constitutions of the several States of the Union, and United-States, including the Declaration of the Independence and articles of Confederation.



Acaso a estos puntos esenciales por su costado social, un estadista de nuestra propia creencia añadiría el requisito indispensable de ser estas verdades enseñadas por el catolicismo.

“Bien sé que los gobiernos, decía Royer Collard en la cámara francesa a propósito de la ley del sacrilegio, tienen un grande interés en aliarse con la religión, porque haciendo mejores a los hombres, ella concurre poderosamente al orden, a la paz y a la felicidad de las sociedades. Pero esta alianza sólo comprende lo que de visible y exterior tiene la religión, su culto y la condición de sus ministros. No entra en ella la verdad, que no cae bajo el poder ni bajo la protección de los hombres. De cualquier manera que se conciba esta alianza es puramente temporal, razón por la que varía al infinito, reglada por la prudencia, según los tiempos y lugares, aquí muy estrecha, allá muy floja. Hay religiones del estado, religiones dominantes, religiones exclusivas: pero todo es sólo el lenguaje grosero de la política humana. ¿Créese, por ventura, que los Estados tienen como las personas una religión, que tienen un alma, y que hay para ellos otra vida donde serán juzgados según su fe y sus obras? Esto sería el colmo del absurdo. ¿La inmortalidad de Roma o de Atenas está en su historia?”

Nosotros no miraremos la cuestión sino del punto de vista de la Constitución Argentina, es decir, poniéndonos en lugar del legislador que ha establecido las bases de aquella constitución, cuyas declaraciones, derechos y garantías terminan por esta cláusula. “Esta Constitución, las leyes de la Confederación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y *los tratados con las potencias extranjeras son la ley Suprema de la Nación*”.

Sin que la Constitución lo dijera, los tratados existentes son la suprema ley de la Nación; son cortapisas y límites puestos, por la fe pública empeñada, a la voluntad de un pueblo, que no es libre de violar sus más solemnes compromisos, preexistentes a la convocación del Congreso, que debe obrar en conformidad con los pactos ya celebrados.

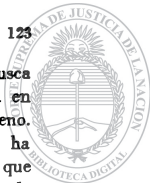
Entre esos tratados que ligan a la Nación, hay uno que tiene acordado en reciprocidad el libre ejercicio de su culto a los



súbditos británicos, y por la generalización inevitable del principio, la práctica lo ha extendido a todos los residentes europeos en Buenos Aires. “Art. 12 (1). Los súbditos de S. M. B. residentes en las Provincias Unidas del Río de la Plata no serán inquietados, perseguidos ni molestados por razón de su religión; mas gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ellas (en las Provincias Unidas) celebrando el oficio divino, ya dentro de sus propias casas, o en sus propias y particulares iglesias o capillas, las que estarán facultados para edificar y mantener en los sitios convenientes que sean aprobados por el gobierno de las dichas Provincias Unidas”. Hanse creado, pues, radicado y establecido derechos que en veinte y cinco años de práctica no interrumpida han creado intereses, propiedades, valores, hábitos y costumbres que exigen, como todo otro derecho y propiedad establecido o radicado en el país, la protección de una Constitución, de una ley general. La Constitución es, pues, inatacable a este respecto. No da nada, sino que reconoce el derecho y el hecho existentes; no quita lo que física y moralmente no le es dado quitar.

Mas sería reducir a un incidente casual la magnitud y generalidad de un principio constituyente. Hemos observado en el preámbulo, cómo deliberadamente, y preludiando a las grandes ideas que va a desenvolver la parte dispositiva de la ley fundamental, al conato de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestros hijos, añaden lo que no venía indicado, y *para todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo*. Para complemento de la idea, debemos añadir que *ese* suelo es un pedazo del mundo que puede contener, enriquecer y alimentar doscientos millones de habitantes, y que no tiene un millón después de tres siglos que se intenta poblarlo, bajo un sistema de ideas de homogeneidad de raza y de creencias. Añádase que de todos los pueblos del mundo cristiano emigran al año un millón de hombres, industriosos, morales y civilizados

(1) *Tratado de amistad, comercio y navegación con Inglaterra*, aprobado por el Congreso en 1825.



que van a climas ingratos a veces, a distancias enormes en busca de tierra para establecerse, y añadir su riqueza improvisada en pocos años a la riqueza del país que los recibe en su seno. Agréguese que estos pueblos se componen de España, que ha enviado sus colonos durante tres siglos a estas comarcas, y que pertenecen a nuestra creencia; de Italia, que envía millares de pobladores a las costas del Río de la Plata y que se hallan en el mismo caso. Pero los Estados alemanes, que contribuyen con los dos tercios de la población que de Europa emigra anualmente, cuentan entre sus derechos el de practicar la religión cristiana según ritos especiales. Francia se halla en igual caso; Bélgica, Holanda, Inglaterra y los Estados Unidos profesan, como dogma inherente a la calidad de hombre, la libertad de seguir las creencias heredadas. El llamamiento a *todos los hombres* que quieran *habitar el suelo* argentino, y el ofrecimiento de asegurarles la libertad, serian sólo limitados a españoles e italianos, o una promesa falaz y engañosa. La República Argentina es un fragmento favorecido de la superficie de la tierra que Dios ha dado por morada a la especie humana. La soberanía nacional sobre tan vasto y despoblado territorio no importa el derecho de mantenerlo despoblado, mientras Dios permite que haya diferencias de ritos en una misma creencia. Los legisladores argentinos dejan a Dios el encargo de remediar los errores de su propia obra, pues errores de Dios suponen incautamente los que creen que Inglaterra, los Estados Unidos y la parte más rica, moral, industrial y civilizada del continente europeo no tienen derecho como los demás pueblos de establecerse en la parte del mundo en donde pueblos más felices que ellos, en punto a creencias, embarazan la población y el cultivo del suelo. El deber de los legisladores es proveer a los medios de engrandecimiento y riqueza de los pueblos para quienes legislan, y el más sencillo que la época ofrece es buscar poseedores para la tierra inculca.

La cuestión tiene, por otra parte, un aspecto legal que no debemos dejar pasar sin poner de manifiesto. Todas las disposiciones legales establecen una obligación y un derecho; y no



hay ley sin sanción. No puede legislarse, pues, sobre punto que no traiga aparejada pena y la practicabilidad de aplicarla. Todo lo que sale de este terreno es extraño a las constituciones y a las leyes ordinarias. Ahora, ¿cuál es la pena aplicable a la práctica de un culto que no sea el de los que legislan? El hecho ha mostrado en América mismo la vanidad de todas estas especulaciones de un espíritu egoísta y mal queriente. Donde hay leyes que excluyen el ejercicio público de otros ritos, hay capillas donde, a la sombra del derecho de propiedad, quedan burladas estas impotentes e imposibles prescripciones, reduciéndose en la práctica los artículos tan conminatorios de las constituciones a una simple cuestión de arquitectura. Así el artículo que dice, "con exclusión del ejercicio público de todo otro culto", puede traducirse así: con prohibición de levantar un frontis con columnas y torres, en el lugar de adoración, y con permiso de poner a la puerta, en letras gordas, aquí se viola la constitución. Hay, pues, una inmoralidad insanable en estas disposiciones, que dejan decoroso lo que se hace a vista de todos, y muestra la impotencia de la ley, que sólo sería criminal e imprudente si osase pasar del umbral de la puerta hasta donde sólo llega en este caso su acción. ¡Qué sería de este principio fundamental del Evangelio: no hagas lo que no quisierais que os hagan a vosotros mismos, si los legisladores de todas las naciones escuchasen estos clamores insensatos que piden que se separen los pueblos no ya por razas y por idiomas, sino por disidencias de cultos de una misma religión! ¿Qué sería de esta tierra creada por Dios para morada de todas sus criaturas si la tiranía religiosa hubiese de separar a los hombres según sus creencias? Tales tentativas insensatas han recibido ya el castigo que merecían.

Francia expulsando a los hugonotes hizo emigrar a Inglaterra y Alemania las industrias que hacían su superioridad industrial y hoy la supremacía inglesa; Inglaterra persiguiendo a católicos, cuáqueros y puritanos, fundó la libertad y la grandeza de los Estados Unidos, su rival poderoso y acaso su sucesor en el comercio del mundo. La América española, en fin, negando



la ciudadanía a los disidentes, mantiene la despoblación de su territorio y con la despoblación la pobreza, la ignorancia y la inmoralidad de masas embrutecidas, frizando entre salvajes y cristianos, cual raza degenerada.

El Gobierno español había ya principiado a conceder ciertas libertades religiosas en sus dominios americanos. A propósito de la real cédula de 1789 para la creación de una compañía marítima para la pesca de la ballena en los mares del Sud, dice el doctor Deán Funes: "Por el artículo 20 de la indicada real cédula se decía que podían continuar en su religión los extranjeros empleados en el servicio de la compañía. Este artículo recibió su esclarecimiento en real orden posterior limitando el permiso a los transeúntes sin domicilio fijo; pues los que intentaren tenerlo debían hacer constar que protesaban la religión católica apostólica romana, y prestar juramento de fidelidad y vasallaje. No hay duda que si un novador tuviese la audacia de propagar en un estado los errores de su falsa doctrina, se haría digno de toda la severidad de las leyes penales: la tolerancia en tal caso sería un crimen. Pero parece que no debe estar en la misma línea la que deja gozar de su fortuna al ciudadano pacífico que no perturba el orden público. "Nosotros, decía el gran Teodorico (el soberano), no tenemos ningún imperio sobre la religión, porque la creencia es libre". Si a más de esta recomendación tiene la de ser útil, son dos las injusticias que se causan, una al ciudadano y otra a la República. España debía estar escarmentada por sus atrasos, desde que con la expulsión de los moros y judíos se vió sin artes, sin industria ni comercio; pero ella entendía que no podía amarse la religión católica sin aborrecer y perseguir a los que no la profesaban. Atribuimos en mucha parte a esta aversión el mal éxito de la compañía marítima. Los ingleses y anglo-americanos eran las únicas gentes de mar capaces por su instrucción, su economía y robustez de sostener con ventaja los duros trabajos que exigía este ejercicio; pero, repugnando entrar al servicio de un reino que en la división de su creencia hallaban el motivo de sus ultrajes y mala hospitalidad,



se echó mano de la marinería española, corrompida con toda la indolencia de que se resentía la nación". (1)

La libertad para nosotros, para nuestros hijos y todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino está llenada fielmente en las disposiciones de la Constitución.

La solución dada a esta cuestión por la Constitución argentina pone a salvo todos los derechos, llena las promesas del preámbulo y, por un temperamento prudente, deja satisfechas las más vidriosas susceptibilidades.

El Gobierno federal sostiene el culto católico, etc.

La Constitución no podía decir sin impertinencia que el gobierno federal *adoptaba* el culto católico; como puede decir que adopta la forma federal. En este caso, recibe o admite una opinión, doctrina o forma, aprobándola o siguiéndola, entre otras opiniones, doctrinas y formas que desecha. Hay un acto de espontaneidad del espíritu, hay deliberación y elección. Pero hablando de cultos, legisladores católicos no escogen entre el protestantismo o el catolicismo. Cuando se quiere establecer una religión del estado, con exclusión o admisión de otros cultos, el legislador dice claro, la religión del estado es la católica; porque es en efecto ésa la que quiere hacer dominar. Alguna constitución, queriendo zafarse de crear una religión de estado, ha declarado existir un hecho, diciendo: "la religión católica es la de la mayoría de la nación", pero no ha dicho que la adopta. Es confundir todas las naciones, adoptar un gobierno lo que no es facultativo desechar, adoptar lo que es y existe, sin crear una religión de estado; engañar que a nadie engañan, y que por el gambeteo innecesario de las palabras, dejan establecido el caos en la regla misma dada para desembrollarlo, y abren el campo a las interpretaciones más contradictorias; porque la religión del estado es la católica, y el gobierno federal adopta el culto católico, son dos frases que expresan la misma idea, salvo la duplicidad ociosa de la segunda, pues ni teólogos ni

(1) *Ensayo de la Historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán*, escrita por el doctor don Gregorio Funes, Deán de la Santa Catedral de Córdoba. Tom. III, 1817.



estadistas sabrían decir si adoptado un culto está adoptada o no la religión que lo ordena; que si tal es la mente de este *qui pro quo*, valiera más decir las cosas a derechas y mostrar por lo menos la sinceridad del error.

Es tanto más chocante hablando de cosas que atañen al cristianismo usar el verbo adoptar cuanto que, a más de haber aparecido en España en el siglo VIII una herejía que se llamó adopciiana, la adopción es un acto legal por el cual se admite un extraño en el seno de una familia, tal como lo practicaron los romanos, lo restableció la convención francesa en 1792 y lo ha reconocido el código civil. Una religión *adoptada*, un culto *adoptado* suena mal en el texto de una ley, y despierta ideas de gracia, de tutela acordada, lo que es faltar al respeto debido a la creencia propia. Yo adopto el culto católico es un dicho que haría por su novedad extraña volver la cara a cuantos oyesen producirlo, y un estado que adopta un culto sólo puede concebirse en las islas de Sandwich o las Marquesas. Esta regla de criterio jurídico viene ya establecida en el código civil chileno, diciendo: "18. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las *haya definido expresamente*, para ciertas materias se les dará en ésta su significado legal". (1)

Como una consecuencia de sostener el Estado el culto católico, resulta que es esta forma la que servirá para las solemnidades religiosas en que el gobierno haya de tomar parte; y para que no haya incongruencia, la Constitución exige que el Presidente sea católico. Bástale a un ministro excusarse de asistir cuando sus creencias particulares se lo prescribiesen. Hase objetado que un ministro de otra creencia gestionaría mal los asuntos del culto. Olvidanse que M. Guizot, protestante, ha sido ministro ocho años en Francia, y ha defendido con tal interés los asuntos de la Religión que el señor Frías, en sus escritos católicos, lo cita como el más fuerte apoyo de las ideas religiosas.

(1) Bello: *Proyecto de código civil de Chile*. Título preliminar, parte 1ª de la ley.



Queda sólo la cuestión económica que nace de esta declaración. El gobierno general toma sobre sí la incumbencia de sostener en toda la federación el culto; dotar las iglesias, proveer los obispados y curatos en conformidad con los derechos que resultan del patronato, la práctica seguida hasta hoy, las rentas consagradas a este objeto o las que hubieren de crearse para dar uniformidad a un sistema general de administración. La Constitución, confiando al gobierno federal el patronato y encargándolo del sostén del culto, como una consecuencia necesaria de aquella atribución, exonera a los gobiernos de Provincia, si no es por delegación, de proveer a este sostén; pero en todo caso ha de hacerse con rentas nacionales, en la manera y forma que lo disponga el Congreso.

En Buenos Aires está de muchos años abolido el diezmo, que es una renta especial designada para el sostén del culto, en sus dos novenos, estando el resto, por convenios celebrados con el jefe de la Iglesia por el Patrono real, cuyas funciones ejercen los gobiernos que representan la soberanía nacional de que estaba aquél investido, destinado a objetos de administración pública. ¿Pertenece la recaudación de diezmos en todo el territorio al gobierno federal? ¿Tocaría sólo disponer de la parte de esta renta que ha quedado consagrada al culto? La Constitución nada apunta a este respecto, y sólo lo indicamos como consecuencia necesaria del punto que analizamos. Es probable que sea abolida o convertida la contribución decimal en el resto de la República, como lo ha sido en Buenos Aires, si no queremos admitir que bajo un sistema general subsista en unas partes esta contribución y en otras no, o se restablezca donde ya está abolida. En la Provincia de Córdoba se cobraban, como es sabido, tres o cuatro diezmos al año, sobre el producto y el capital, para fines extraños al objeto de su institución.

Por la atribución 15, corresponde al Congreso promover la reducción de los indios al catolicismo. Esta atribución está conforme con la disposición fundamental que declara obligación del gobierno federal sostener el culto católico. Si alguna acción ha de ejercer el Congreso sobre los indios para atraer-



los a la civilización, si ha de servirse para ello de una religión, ha de ser aquella cuyo culto está obligado a sostener. Sostiene, pues, con los medios de promoverla, la propagación entre los indios de la religión a que ese culto pertenece.

¿Puede prohibirse a los misioneros de otros cultos cristianos el ejercicio de su ministerio entre los indígenas?

En 1838 se suscitó esta cuestión ante el Encargado de las Relaciones Exteriores que, en virtud de su propia autoridad y juicio discrecional, prohibió a tales misioneros el ejercicio de su instituto. Los misioneros de varias sectas cristianas se esparcen por todo el mundo salvaje para predicar el Evangelio y civilizarlos. Millones de pesos son consagrados anualmente por las sociedades religiosas de Estados Unidos, Inglaterra y otros países a esta benéfica propaganda, que se extiende por el Asia, la América y las islas de la Oceanía. Gracias a su actividad infatigable, han reducido a sociedades a los salvajes de Sandwich, las Marquesas y otros puntos. Como acción civilizadora es eficazísima la de estas misiones, apoyadas en el concurso de sociedades poderosas que las sostienen, y sirviéndose como medio de acción de las artes, la imprenta, el comercio, la agricultura y los goces de la vida doméstica que enseñan a los salvajes.

La cuestión se presenta, pues, bajo estos tres aspectos: 1º ¿Es constitucional el ejercicio de las misiones entre los salvajes? Y nuestro juicio es que sí, porque está en armonía con los dictados generales de la Constitución que sostiene un culto, pero no pone embarazo a otros. ¿Es útil? Los resultados han manifestado por todas partes la eficacia de estas misiones. Habría siempre utilidad en ahorrarse dinero y acción para consumir una obra de humanidad y de civilización, admitiendo el auxilio que espontáneamente ofrecen, para el mismo fin, otras corporaciones religiosas. ¿Habría peligro en admitir en los territorios de la Patagonia y otros anexos a la República, pero habitados por indígenas, la acción independiente de misioneros de otras naciones? Esta es una cuestión de mera política prudencial extraña al asunto que nos ocupa.

Concluiremos estas sugerencias haciendo notar que la reli-

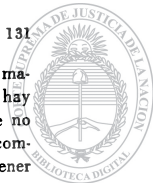


gión católica la protegen, propagan y defienden los ministros de la Iglesia.

“Debemos gemir, decía San Hilario, del error de nuestro tiempo, por donde se cree que Dios necesita de la protección de los hombres, y por el cual se solicita el poder del siglo para defender la Iglesia de Jesucristo. Yo os ruego, a vosotros que os creéis ser obispos, me digáis ¿de qué apoyo se sirvieron los apóstoles para predicar el Evangelio? ¿Qué potencias les ayudaron a anunciar a Jesucristo, y a hacer pasar casi todas las naciones de la idolatría al culto de Dios? ¿Acaso San Pablo formaba la Iglesia de Jesucristo con edictos del Emperador? O los sostenían la protección de Nerón, Vespasiano o Decio, cuyo odio hizo patente el lustre de la doctrina celeste? ... Pero ahora, ¡ah!, ventajas humanas hacen recomendable la fe divina, y tratando de autorizar el nombre de Jesucristo, se hace creer que es débil por sí mismo. La Iglesia amenaza con destierro y prisiones, y quiere hacerse creer por fuerza, después que ella se ha fortificado por los destierros y las prisiones. Ella se glorifica de verse favorecida por el mundo, después que no pudo ser de Jesucristo, sin ser del mundo aborrecida... He aquí la Iglesia en comparación de aquellas que nos la habían confiado y que nosotros dejamos perder”. (1)

El Estado no estatuye, pues, sobre dogmas, sino sobre hechos y sobre rentas. El gobierno federal *sostiene* el culto, lo paga; porque es el Patrono de la Iglesia, porque se impone este deber; porque la mayoría de los habitantes son católicos; porque es de práctica que el culto sea pagado por el Estado; porque hay rentas que le están consagradas, etc. Los habitantes presentes y futuros de la Confederación Argentina, que en la parte ostensible y material no sigan el culto católico, no exigen que su culto sea pagado por el Estado; no pretenden tampoco que se les administren los dineros que espontánea e individualmente consagran a este objeto. Ninguna alteración se ha hecho, pues en las prácticas, usos, hábitos y derechos de las poblaciones

(1) *Histoire ecclésiastique de Fleury*, lib. 16.



católicas nada se les quita, nada se les añade. Si algunos manifestasen el deseo de *no ver* que otros siguen sus ritos; si hay quien pretenda que tiene derecho de estorbar a otros lo que no daña a tercero, ni les atañe, a estos tales debe hacérseles comprender que las constituciones políticas se dictan para contener a cada uno en el goce de sus propios derechos individuales, y estorbarle que ataque, oprima y violento los de otro.

Nos hemos extendido sobre este punto para aclarar ideas confusas y vagas que predominan en algunos puntos lejanos del territorio argentino. Sabemos que en Mendoza algunos sacerdotes piadosos tuvieron escrúpulos de jurar la Constitución, con achaque de que concedía libertad de cultos. Ya hemos visto que la Constitución no concede nada que no estuviese concedido de antemano, *reconocido y consentido* por esos mismos sacerdotes. Pero aun sin eso, debemos observar que no es cuestión de conciencia que pueda en manera alguna ser sostenida por sacerdote alguno, en su carácter de ministro del culto católico, la de la exclusión política de los cultos disidentes. El Jefe de la Iglesia católica, en su carácter de jefe del estado romano, permite la libertad de cultos a judíos y cismáticos griegos en Ancona y Roma, por las mismas razones que la Constitución argentina no los estorba en el territorio de su jurisdicción, a saber porque hay estantes y habitantes que profesan esos cultos en su propio territorio, y no es político expulsarlos, ni prudente oprimirlos. El sacerdocio de Francia, Austria, Holanda y Bélgica, y en casi todos los estados europeos, no ha puesto en duda el deber de los gobiernos de respetar los derechos de la conciencia.

En julio de 1847, nuestro honorable concoleaga el abate Auger, en respuesta a la cuestión propuesta por el Congreso Histórico de 1846, *¿Qué debe entenderse por tolerancia religiosa?*, presentó al Instituto Histórico de Francia una memoria, que insertamos a continuación, siguiendo nuestro plan de apoyarnos en autoridades competentes; y en materia que atañe a la conciencia, para los católicos que escrupulizan sobre tolerancia religiosa, de algún peso debe ser el dictamen de un sacerdote católico, dado en ocasión solemne, ante una corporación sabia,



asegurando que lo “que iba a decir había sido ya dicho por él en presencia de uno de los obispos más piadosos y más llenos de celo de la Iglesia, sin que él ni su Cabildo hubiesen hallado nada mal sonante”. Hemos creído que no estaba de más fijar las ideas a este respecto, para evitar que personas bien intencionadas, pero preocupadas por la educación que hemos recibido de nuestros padres, mantuviesen recelo sobre la justicia y oportunidad de las declaraciones de la Constitución. Casi todos los teólogos españoles e italianos concurren en opiniones exclusivistas, y los fieles de estas dos naciones han recibido de ellos, casi como dogmas incontrovertibles, ideas que están muy lejos de salir del recinto de meras opiniones.

Haremos notar antes, a este mismo propósito, que el docto Arzobispo de Reims, Monseñor Gousset, al frente del Código civil francés que comenta (1), transcribe la carta revisada de 1830 en que se dice: “5. Cada uno profesa su religión con igual libertad, y obtiene para su culto la misma protección. 6. Los ministros de la religión católica apostólica romana, profesada por la mayoría de los franceses, y los de otros cultos cristianos, son rentados por el tesoro público”, sin que lo acompañe de observación alguna, no obstante que el lema de su obra es *Reddite quae sunt Caesaris Cesari, et quae sunt Dei Deo*; y aun en los casos en que, en el comentario del código, prueba que la ley ha traspasado sus límites, en cuanto al fuero interno, añade: “Sin embargo, como se puede seguir la ley civil de que se trata (y esto es aplicable a nuestro caso) sin ir contra las leyes de la Iglesia, es prudente que los pastores se conformen con ella, en razón de los graves inconvenientes que resultarían de estar en oposición con el poder civil. *Videte, fratres, quomodo cauté ambuletis... quoniam dies mali sunt. Paul, ad Eph. cap. 5 v. 15 y 16*”. Lo que es prudente en Francia, donde la constitución va más adelante aun, ¿no sería necesario entre nosotros?

(1) *Le Code civil, commenté dans ses rapports avec la théologie morale ou explication du code civil, tant, pour le for intérieur, que pour le for extérieur, par Mgr. Gousset, archevêque de Reims, ancien vicaire de Besançon.*



Memoria del abate Auger

Al leer, entre las cuestiones propuestas (1) por el Congreso histórico, la que se refiere a la *tolerancia religiosa*, me he regocijado de encontrar ocasión de tratar esta materia, contando hacer oír palabras de caridad y de paz, al transportar a una tribuna enteramente filosófica y literaria doctrina y sentimientos que la cátedra misma había admitido, bien que mas parezca en esto mostrarse el corazón que la severa moral y la verdad escrupulosa.

Dedo declarar desde ahora que mis opiniones no son nuevas, y que ya han recibido la prueba de una publicidad sin límites. Lo que voy a decir aquí ha sido dicho en presencia de uno de los mas celosos y pios Prelados de la Iglesia, sin que ni él ni su capítulo encontrasen nada mal sonante. Lo he desenvuelto en medio de Ginebra ante una numerosa reunión de católicos, cuyos jefes han aplaudido mis doctrinas. Estos antecedentes me animan a levantar la voz con plena confianza, esperando hacerlos participar de mis convicciones y de mis simpatías. Yo busco la verdad; pero ante todo pongo la caridad.

Me permitiré observar, por otra parte, que es muy fácil tratar el asunto tal como se nos propone, por más que la materia sea tan delicada y tan escabrosas sus aparentes dificultades. En efecto, la manera como viene formulada la cuestión aleja todo temor de cuestiones irritantes, y se opone a esa multitud de divagaciones, a que tantas veces se han abandonado los que, escribiendo sobre la tolerancia, se han mostrado no obstante tan intolerantes. El programa se expresa así: "*¿Qué debe entenderse por tolerancia religiosa?*" Trátase, pues, de definir la tolerancia, no de suscribir a falsas nociones, como las que tantos ánimos han perturbado: de establecer principios, no de discutir hechos; de mostrar lo que se *debe* pensar, no de aprobar ni de vituperar lo que se piensa.

Debemos arribar a un punto en que todas las opiniones, todos los intereses, todos los hábitos concurren a mantener el orden público, los vínculos de la familia, la unión de la sociedad; en que cada individuo sea libre de seguir las inspiraciones de la conciencia, desde que deja a los otros el mismo derecho, la misma latitud.

Lejos de nosotros, pues, el examen, ni la discusión de los acontecimientos en que, a los sentimientos religiosos, se han mezclado las pa-

(1) *Memoria sobre la tolerancia religiosa*, publicada en el *Investigateur* del 27 de julio de 1847, por orden del Comité Central del Instituto Histórico de Francia.



aciones humanas, y en que los intereses de partido han tratado de hacerse absolver como si hubiesen estado ligados a los intereses de la moral, a los dogmas revelados. Antioco y los Macabeos, el Sanedrín y San Esteban, los emperadores romanos y tres siglos de persecución, los donatistas y los priscilianistas, los Albijenses y Simón de Monfort, la Inquisición y Hermán Cortés, la Liga y los Hugonotes, la San Bartolomé y el edicto de Nantes quedan fuera de nuestro cuadro.

Ved, pues, cuál es netamente nuestra respuesta a la cuestión del Congreso Histórico. *La tolerancia religiosa es el ejercicio de la caridad cristiana en las relaciones sociales con aquellos que no profesan la misma religión.*

El desarrollo de esta proposición llenará todo el cuadro que nos hemos propuesto. Observad, desde luego, que decimos *las relaciones sociales*. No se trata de las relaciones del orden religioso y espiritual, dejando establecido como un principio que cada uno conserve en el fuero de la conciencia y en medio de los actos de la vida civil sus convicciones y sus creencias. Honramos demasiado a aquellos a quienes querríamos recomendar la tolerancia para pensar o que son indiferentes a todas las religiones, o bien que son poco sinceros o débiles en demasía para aprobar lo que en realidad condenan.

Hemos dicho la *caridad cristiana*, porque antes de ella la palabra tolerancia no fué conocida. El paganismo, que había admitido que *la venganza era el placer de los dioses*, aplicaba esta máxima a cuanto de cualquier modo contrariaba sus opiniones y sus intereses; y si, como los Romanos y los Atenienses adoptaba algún *dios ignoto*, era sólo por política o por superstición. El cristianismo no admite dioses desconocidos, tolera a los hombres que no conocen el suyo; los ama a fin de que lo conozcan.

La caridad es el alma del cristianismo: el cristianismo es todo amor. Ved, en efecto, lo que enseña el Cristo, y esto en la circunstancia más solemne quizá en que tuvo que manifestar su doctrina. Tenía por adversarios a los partidarios exclusivos de la ley de Moisés, que comprendían mal pero que juzgaban según ella. Luego, acusándolo de querer destruirla, y en consecuencia interrogado, debió explicarse netamente, y mantenerse con estrictez en los límites en que sería inatacable. San Mateo refiere así esta grande e imponente declaración de principios: "Habiendo sabido los fariseos que había impuesto silencio a los saduceos, se reunieron en torno suyo, y uno de ellos, doctor de la ley, lo interrogó en estos términos por sondearlo: Maestro, ¿cual es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo: "Amaréis al Señor vuestro "Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y todo vuestro "espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento: Pero ved



"aquí el segundo que es semejante. Amaréis al prójimo como a vos mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas".

Observad que Jesucristo no era interrogado sobre el segundo precepto. Podía, ateniéndose a los términos de la cuestión, no hablar sino del amor de Dios. Pero los fariseos eran hipócritas e intolerantes, y el autor de la ley nueva quería enseñar lo que había venido a establecer en medio de los hombres: *"Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad"*. Los Doctores de la ley, como se decía entonces, habían introducido exclusiones, y los samaritanos, porque eran cismáticos, eran odiados y odiaban (1). Jesucristo escogió entre los samaritanos el modelo de la caridad y del sacrificio, y el buen samaritano es una lección, no sólo para sus correligionarios, sino para los discípulos de la verdadera religión. El nombre de *infiel* era entre los judíos un epíteto de repulsión y de menosprecio, como el de *bárbaro* entre los griegos y entre los romanos. El Cristo anuncia por todas partes que su religión no es de este mundo, y que está destinada a recorrer toda la tierra, y que si él no es enviado a la Judea, hacia *las ovejas perdidas de la casa de Israel*, él envía a sus principales discípulos *para dar testimonio en la Judea, en Samaria, y hasta las extremidades de la tierra*. Su evangelio debe ser predicado a toda criatura, y el que no crea será condenado, el que crea y se bautice se salvará. En fin, da a sus apóstoles esta orden formal: *enseñad a todas las naciones*.

Así es como el jefe de entre ellos vendrá, después de la muerte del maestro, a declarar a los judíos supersticiosos y fanáticos que, *en toda nación, aquel que teme a Dios y hace obras de justicia le es agradable*; y San Pablo, a quien todos los siglos han llamado el grande apóstol, escribe a los romanos: *"No hay distinción entre judíos y griegos, porque todos tienen el mismo Señor, rico para todos los que lo invocan"*. Después, citando al profeta Joel, añade: *"Porque cualquiera que invoque el nombre del Señor se salvará"*.

Con autoridades semejantes, bien podemos hablar altamente de tolerancia, por lo que vamos a presentaros un comentario que nada tendrá de alarmante.

Yo parto, en efecto, de la regla establecida por el legislador mismo, y que está concebida así: *Amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos*; porque encuentro en estas pocas palabras, comentadas por las

(1) Los samaritanos eran para el judaísmo lo que los protestantes actuales para el cristianismo. No obedecían al sumo sacerdote de Jerusalén; no asistían al templo de David y practicaban otros ritos que los de la tribu de Juda.



lecciones multiplicadas del Cristo y de sus apóstoles, la teoría y la práctica de la tolerancia.

Cuando se trata de nuestros propios errores y de nuestras propias faltas, nuestro primer cuidado es atenuarlas en cuanto de nosotros depende. Buscamos la explicación más favorable, y nuestros principios son los que se acuerdan mejor con nuestras inclinaciones, siempre que estos principios estén de acuerdo a nuestros ojos con el sentimiento último que nos hace distinguir lo verdadero de lo falso, el bien del mal, con la conciencia. Así la tolerancia religiosa emana de las doctrinas más conciliantes y los principios más latos.

Cuando solo se trata de nuestros propios errores y de nuestras propias faltas, buscamos disculpa en nuestra ignorancia y nuestras preocupaciones. No sabíamos qué camino debíamos seguir: nos habíamos engañado; habíamos creído tomar el buen camino. Así la tolerancia religiosa que no piensa mal supone que el error que señala es el resultado de la falta de instrucción, de preocupaciones de nacimiento y de mala educación.

Aun cuando nos hayamos engañado, sabemos muy bien poner de manifiesto nuestra buena fe y nuestro celo por la verdad y la justicia. Así la tolerancia religiosa no sólo excusa, sino que estima a los que se engañan de buena fe y que persisten en el error por seguir los dictados de su conciencia.

Por otra parte, nosotros no somos jueces unos de otros; cada uno de nosotros decuna para sí toda jurisdicción sobre sus iguales; porque todos somos *los hijos del padre celestial que hace lucir su sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia y el rocío sobre justos e injustos*. Luego la tolerancia religiosa debe no reconocer sectas ni opiniones, no ver en cada uno de los hombres sino un hermano, y en la universalidad de los hombres sólo una familia.

No llevaré más adelante este paralelo, contentándome con tomar cada una de sus partes para explicarla en el sentido del cristianismo.

He dicho al principio que la tolerancia religiosa está de acuerdo con las doctrinas más conciliantes y con los principios más latos. No he dicho ni digo que renuncie a mantener las doctrinas, y que piense que la moral pueda existir sin el dogma. Nada en mi concepto es más funesto ni más glacial que esta indiferencia absoluta. ¿Cómo queréis que un hombre que no cree en Dios crea en algo? Cómo un hombre que no espera de Dios recompensa alguna por el bien que habrá hecho sacrificará su reposo o su fortuna o aun su propio contentamiento en favor de la sociedad, que tan frecuentemente deja triunfar la intriga, o en favor de los particulares, que tantas veces se muestran ingratos? Es preciso creencias y doctrinas para los sacrificios generosos, para el amor de la patria, para la abnegación de la caridad. Pero la caridad



del cristianismo nos ayuda a escoger entre las doctrinas: ella sabe distinguir entre lo que es necesario creer y lo que queda sujeto a las discusiones de los sabios, lo que no es de dogma. Ciertos espíritus atribulados ven por todas partes un Dios severo, que no tiene en cuenta la debilidad humana, y que castiga sin misericordia, mientras que en mil pasajes de la Escritura está dicho que la misericordia y la clemencia son las perfecciones que más se muestran en el Dios de los cristianos: *supereminet misericordia iudicium*, a punto que parece olvidar su justicia.

Hay teólogos que precipitan sin piedad a la mayor parte del género humano en las llamas del infierno, aplicando mal estas palabras del Cristo; *hay muchos llamados y pocos escogidos*, mientras que *Bulart*, uno de nuestros más sabios profesores, ha escrito: No puede sin error manifestarse decirse que es de fe que los niños (muertos sin bautismo) sufran la pena del sentido: y que nuestro célebre cardenal de la Luzerne, hablando también de los infieles adultos muertos sin haber pecado mortalmente, enseña, según Santo Tomás, que "tenemos derecho de juzgar que estas criaturas no culpables (fuera del pecado original) de un Dios lleno de bondad, son felices en el estado que él les ha dado". Hemos probado, por consecuencia, que es permitido creer que la mayoría de los hombres, compuesta de los elegidos del cielo, de los niños muertos sin bautismo, los infieles muertos sin haber pecado voluntariamente, la mayoría de los hombres será preservada de las llamas eternas. Y sobre otras materias también la verdad cristiana reviste, cuando se la quiere examinar, formas atractivas más bien que aterrantés; ilustra sin rechazar. Ahora la caridad nos ordena adoptar y propagar estas doctrinas conciliantes: pues que, como dice San Pablo: *Dios quiere que todos los hombres sean salvados, y vengan en conocimiento de la verdad*, nosotros debemos y podemos esperar que esos deseos no serán vanos para todos, y que un número demasiado grande usará de la libertad conforme a la voluntad de Dios para que encontremos en el cielo una buena parte de aquellos a quienes los errores de un falso celo excomulgan quizá en la tierra.

En efecto, y esta es nuestra segunda observación, hay una multitud de hombres que no están en aptitud de conocer ciertas verdades, a las que sin embargo la salvación parece estar unida. Si bien es cierto que el cristianismo ha sido anunciado en todos los países del mundo ¿cuántos pueblos hay aún que no han sido suficientemente instruidos para recibirlo y abrazarlo? ¿Cuántos hay que después de haber adoptado sus principios han sido arrastrados por el error o por el cisma, sin que la inmensa mayoría se haya apercibido de ello? ¿Cuántos hay a quienes las revoluciones físicas y políticas, las inundaciones de los bárbaros, las arterías y la



violencia han llevado a perder completamente las huellas de sus antepasados y que, por consiguiente, no siendo responsables de la infidelidad de las precedentes generaciones, son absolutamente semejantes a los que nunca han sido cristianos? El ~~pasano~~ de la Ostrogosia en Suecia, el minero de los montes Urales o de la Siberia, el rico y poderoso Agá de la Nubia o de la Guinea, el temido cacique de las regiones americanas, habrán pasado toda su vida sin saber que existe en Roma un hombre semejante a los otros hombres, y que sin embargo es el representante de Dios, y a quien deben estarle todas las naciones sometidas en el orden espiritual. ¿Y se querría que esos pobres proletarios o esos orgullosos potentados sean, a los ojos del soberano Juez, responsables de su ignorancia? No: Dios es justo, y no ha creado al hombre para perderlo. Ved aquí, además, lo que a este respecto dice el mismo apóstol San Pablo, cuya doctrina no es sospechosa: "Cuando las naciones que no tienen la ley hacen lo que es de la ley ellas son para sí mismas su ley." La teología misma enseña que si un infiel hubiese seguido toda su vida las inspiraciones de su conciencia, y con ella honrado a su Creador y Legislador Supremo, este Supremo Señor, este padre común de todos los hombres haría antes un milagro que dejarlo morir en la ignorancia de lo que es necesario para la salvación.

Pero concluir de aquí, como Voltaire en la Henriada y otras partes, como ese enjambre de vocingleros que se imaginan ser imponentes porque repiten las palabras de un grande hombre, concluir que Dios recibe con el mismo favor los homenajes de todos, que no ha dado al género humano una religión revelada, a la cual están obligados a someterse todos los que la conocen, que es indiferente ser discípulo del Papa o del gran lama, secretario de Jesucristo o de Mahoma, es sacar de quicio los principios que hemos establecido.

Pero concluir que debemos amar a judíos y mahometanos, bonzos y marabouts, luteranos y calvinistas, desearles y hacerles bien, esto es razonar con exactitud, es deducir de los dogmas del cristianismo sabias reglas de conducta, es mostrarse verdaderamente cristiano. El sabio Bergier dice positivamente: "Aunque bien convencidos de la verdad de nuestra religión, no creemos que nos sea permitido aborrecer a los... que profesan otro. Principio que hace quince siglos expresaba San Agustín de una manera encantadora, hablando así a los maniqueos: "Que se encarnicen contra vosotros los que ignoran cuán duros son los trabajos que cuesta encontrar la verdad".

Por otra parte, de tal manera está la tolerancia en el espíritu del cristianismo, y precisamente a causa de ese sentimiento que nos hace excusar en los otros la ignorancia involuntaria por la convicción de nuestros propios errores e imperfecciones, que da fe de ello el testimo-



nio más raro que puede imaginarse. En el Corán (surate la mesa) se expresa así Mahoma: "Tú reconocerás que los que más dispuestos se muestran a amar a los creyentes son los que se dicen cristianos; y esto porque tienen entre ellos sacerdotes y monjes que los apartan del orgullo".

Por lo demás, la estimación es de justicia si con las preocupaciones de la educación observamos en aquellos a quienes creencias diferentes separan de nosotros la rectitud del corazón y la buena fe, que son la virtud. El Antiguo Testamento nos enseña que *Dios es bueno para los que tienen el corazón recto*. Y desde el nacimiento del Cristo, el nuevo nos representa a los ángeles que cantan, *Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad*. Yo amo cien veces más a un protestante de buena fe que a un católico bajo e hipócrita. ¿No fué flagelado Jesucristo por sus maldiciones contra la hipocresía de los escribas que *decían y no hacían* para que se sienta uno disgustado de tomarlos por modelo y acariciarlos. Esas gentes pagan diezmo de *alpiste y de caminos*, y enseñan que se puede dejar morir a su padre de hambre cerca del altar que habrán recargado de ofrendas. ¡Desgraciados! Son sepulcros *blanqueados* que halagan a la vista, pero que por adentro sólo muestran *podredumbre y corrupción*.

Pero dadme un hombre que busca sinceramente la verdad, y que, creyendo haberla encontrado, desecha la doctrina que cree errónea, este hombre lo estimo, y quiero hacer de él un amigo. Se ha persuadido de que el culto católico es una verdadera idolatría, medita en la santa escritura y saca de ella reglas de conducta, mirando como inútil y usurpada la autoridad de la Iglesia; un sentimiento de humanidad lo lleva a pensar que en todas las religiones puede el hombre salvarse. Yo no apruebo sus errores; pero respeto sus escrúpulos, su piedad, su caridad. Trataré de darle ideas justas; sin que para eso tome nunca ni el aire del reproche, ni el tono de autoridad, ni tampoco el acento del menosprecio. Ofreceré mi homenaje a las buenas cualidades, al talento, a los beneficios del que pone con abnegación su persona y sus recursos al servicio de la patria, de la ciencia, del género humano... Así fué como Leibnitz obtuvo el sufragio de Bossuet haciendo él mismo justicia a los papas. Así es como Alemania ha visto en nuestros días a protestantes célebres hacer la historia del papado, y poner de manifiesto la feliz influencia del poder romano en la edad media. Así es como nuestro sabio y piadoso Frayssinous ha hecho el elogio del barón de Stark, aunque bien que persistiese en permanecer en el protestantismo después de haber escrito, con tanta fuerza y con pruebas tan concluyentes, que el mejor medio de reunión para todas las comuniones cristianas era apro-

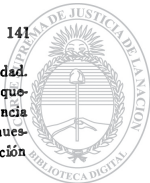


ximarse en cuanto fuese posible a la Iglesia romana. Así es, pues, que, como lo decíamos hace poco, la tolerancia nos enseña no solamente a excusar, sino también a estimar a los que, siguiendo su conciencia, marchan por camino diferente al que nosotros llevamos, y siguen en él por convicción.

En fin y ésta es nuestra última reflexión: nosotros no tenemos derecho para juzgar a nuestros hermanos, sobre todo cuando se trata de lo que pasa en el fuero de la conciencia. La Iglesia misma declara que *no juzga de las disposiciones interiores*. Debemos dejar a Dios el cuidado de *escrutara los corazones y las entrañas*, pues que sólo él tiene el derecho de gobernar el mundo en el orden moral. Los ministros de la religión no son más que sus mandatarios, y cuando se pronuncian sobre las cosas de conciencia lo hacen por confesión de los que los consultan. Trazan reglas generales, según las órdenes de Dios: El es quien juzga y condena. Ahora, durante la vida presente, durante el curso de los siglos, deja usar de su libertad a los hombres, reservándose apreciar un día lo que hayan hecho, y distribuir entonces los castigos y las recompensas. Mientras tanto, *dejemos crecer el bueno y el mal grano, no sea que por arrancar la zizaña arranquemos también el trigo*. En el intertanto pensemos que no hay un pagano, un herético, un impío, un libertino que, si Dios lo quiere, no pueda precedernos un día en el Cielo. En el entretanto, *que brille nuestra luz delante de los hombres de tal manera que viendo nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos*.

Tales son los sentimientos que en el orden religioso deben ocupar nuestra alma, y guiarnos en nuestra conducta exterior. Síguese de aquí que en el orden social nada hay que pueda impedirnos el conservar la paz con todos, en cuanto de nosotros depende; que debemos respetar el orden establecido y someternos a las autoridades existentes, aun cuando sean injustas, como Mauricio, jefe de una legión romana, depuso las armas cuando el insensato, el furioso Maxencio, había ordenado diezmarlos, asesinarlos a todos porque eran cristianos. Debemos mantener los vínculos de la sociedad por la reciprocidad de los servicios, por medio de conexiones, deferencias y muestras de estima y de afección. Debemos mantener los vínculos de familia, y San Pablo prescribe *a las mujeres cristianas permanecer con sus maridos paganos si ellos consienten en vivir con ellas*.

Sin duda que si uno teme por su fe, y que ciertas relaciones conduzcan a discutir sin provecho, es muy permitido alejarse, evitar estas ocasiones peligrosas, huir para escaparse de la seducción de las doctrinas, como huye uno para escaparse de la seducción de las costumbres. Pero



huir es un acto de prudencia que no impide el ejercicio de la caridad. Se cree entonces que es uno menos firme en sus convicciones que aquellos cuya presencia se teme; reconoce su propia debilidad; y la tolerancia se muestra absteniéndose, como en los corazones firmes y fieles se muestra obrando. Huye uno, pero no odia; siendo el temor de la seducción casi una muestra de estimación para aquel a quien se evita.

Luego, esta prudencia que cada uno debe ejercer para sí, ¿no está uno obligado a emplearla cuando está encargado de dirigir, de gobernar, de proteger? Y aquí se presentan los deberes del padre de familia, y los deberes del soberano. Hasta dónde se extienden para ellos los deberes de la tolerancia, y dónde deben detenerse.

Ved aquí los principios generales que estableció el sabio Bergier como base de su exposición, y que nosotros adoptamos en todas sus consecuencias. "La razón y la religión condenan igualmente el fanatismo y la tiranía... Es preciso predicar a todos la dulzura y la moderación." Si todos, en efecto, supiesen mantenerse en los límites de la prudencia y de la justicia los superiores no tendrían necesidad de precaución ni de represión alguna. La regla general es la libertad de conciencia; pero, como lo dice el mismo Bergier, ¿cuando yo tenga el derecho de pensar lo que me agrada, tendré por eso el derecho de enseñarlo? En esta manifestación exterior y a veces pública es donde puede encontrarse el peligro, sea para la moral que atacan ciertas opiniones, sea para la paz y el orden, que podría turbar la oposición de ciertas doctrinas. Entonces es también cuando comienza la intervención de las autoridades encargadas de vigilar por el bien general, y, como lo observa el mismo escritor, "La caridad no obliga ciertamente a favorecer la libertad particular a expensas del bien general". No vacilamos, en vista de esto, en declarar que, si los predicadores del cristianismo hubiesen turbado el orden público, e impedido la ejecución de las leyes, los emperadores romanos habrían tenido razón en reprimirlos. Han errado, sin duda, porque antes de perseguir debieron examinar la doctrina, y porque hecho alguno acusa a los cristianos. Pero en principio, la regla para los soberanos es la conservación del orden público.

Establecidos estos principios sólidamente, examinemos los deberes de los padres de familia y de los soberanos. Las diversas clases de superiores y jefes entran más o menos en estas dos divisiones. Según los designios de la Providencia, el padre de familia debe nutrir no sólo materialmente a sus hijos, sino instruirlos y prepararlos para ser un día hombres virtuosos y ciudadanos útiles. La felicidad de las familias depende de la unión de los que las componen, y esta unión no está asegurada sino cuando la caridad se sobrepone a las pasiones y a los



intereses particulares. Esta es la razón por que el padre de familia está obligado a hacer conocer a sus hijos *la existencia de Dios y la inmortalidad del alma*, como han dicho nuestros legisladores en la época en que el ateísmo creyó triunfar en Francia. El pensamiento de las penas y las recompensas en la otra vida constituye la moral y la virtud al sable de los gendarmes y al patíbulo; y en general los pensamientos religiosos son una prenda de seguridad, y de aquella confianza recíproca que une a todos los hombres, y los lleva a sacrificarse, si es necesario para asegurar el bien común, sus placeres y su fortuna. El padre de familia habrá llenado su deber y conquistado la estimación de los otros y el testimonio de su conciencia acostumbrando a sus hijos a pensar y a obrar según estos principios.

Síguese de aquí que un hombre sinceramente protestante, íntimamente convencido de que su religión es preferible a todas las otras, tiene el derecho de alejar de su casa toda influencia y toda enseñanza que tienda a alterar su fe y turbar la piedad de los que lo rodean.

No se sigue de esto que haya de menospreciar, odiar o exponer al odio o menosprecio de sus hijos a los hombres de buena fe que son adictos a otros dogmas. La caridad le impone el deber de favorecer a los que piensan como él, y de tolerar a los que piensan de otra manera. Por lo que respecta al deber de inspirar a su familia el respeto y la práctica de la religión, ningún padre puede prescindir de ello. Esto es para él el punto capital.

No sucede así con los soberanos. Su principal deber es mantener el orden público, la prosperidad general, de modo, como decía San Pablo, que podamos *pasar una vida tranquila*. Pero ¿hasta qué punto, para llegar a este resultado, debe intervenir un soberano en las creencias y en las prácticas religiosas, ya sea protegiéndolas, ya reprimiéndolas? Débese declarar una religión del estado o dejar a cada religión el derecho de ejercer públicamente su culto? Debe prohibir la enseñanza de las religiones extranjeras y castigar a los que las esparcirían? En una palabra: ¿debe ser tolerante o intolerante para con los actos exteriores?

Remontemonos, desde luego, a los principios: "No es la verdad de las "opiniones, sino la tranquilidad de los estados lo que hace el verdadero "objeto de las leyes coactivas..... Desafiamos a nuestros adversarios "a que nos citen un solo monumento que pruebe que cuando aun los "herejes son pacíficos, la Iglesia quiere que se emplee contra ellos la "violencia". Tales son las aserciones del docto y sabio Bergier. Así, pues, en un estado las opiniones son libres, y sólo los actos están sometidos a la apreciación del gobierno. Así el cristianismo admite que haya muchos cultos en un mismo país. Así tampoco ninguna medida coactiva o al



menos violenta puede tomarse contra ciudadanos pacíficos, cualquiera que sea la secta a que pertenecen, y San Hilario decía: "Si se emplease la violencia para establecer la verdadera fe la autoridad episcopal se levantaría contra este abuso".

Ahora, ¿qué conducta debe guardar el soberano?

Desde luego; un soberano se halla comprendido en la ley general que permite, que ordena debiéramos decir, a todos los hombres según la ley de su conciencia. Ahora, como dice todavía Bergier, "es natural que los hombres que se creen en posesión de la verdadera religión deseen que sea conocida de todos los hombres." Puede, por consecuencia, favorecer la propagación de la religión que el mismo practica, desde que los medios que para ello emplee no vayan hasta el *fanatismo* y la *tiranía*, y nosotros permitiríamos al Zar sostener el cisma greco-ruso, si está convenido de que es esa la *verdadera religión*, y no persiguiese a los católicos pacíficos.

Sin embargo de esto, nosotros admitimos que un gobierno no está obligado a propagar él mismo la religión y que la reina de Inglaterra puede excusarse de ordenar un ayuno público para apartar los azotes que despueblan a Irlanda. Tócale a él, sin embargo, juzgar del estado de los espíritus y de la influencia de las doctrinas religiosas. Si el soberano de un país se convenciese de que el ejercicio público de diversos cultos es un medio de hacer desaparecer las divisiones, hará bien en permitirlo. Si, por el contrario, resultase que por la rivalidad de cultos diversos corre riesgo de ser perturbada la paz pública, queriendo una secta hacer prevalecer sus prácticas contra las convicciones de las masas, hará bien de reprimirla. Así es como el edicto de Nantes bajo Enrique IV y su revocación bajo Luis XIV han podido ser dos actos muy sabios, aunque muy opuestos. Observad, os ruego, que yo no pretendo apreciarlos. Estoy dentro de los límites de lo posible y de las generalidades, que sólo explico por medio de ejemplos.

En cuanto a los medios de represión por los actos que, bajo apariencias religiosas, turban el orden público, es evidente que sólo es permitido lo que es necesario. A pesar de las abominables matanzas y devastaciones cometidas por los donatistas, y principalmente los circuncilianos, San Agustín no quería que se diese muerte a aquellos desgraciados fanáticos desde que habían salido del foco de exaltación en donde habían tomado su deplorable celo; y al oficial encargado de ejecutar las órdenes del emperador le escribía: "Si castigáis de muerte a los culpables nos quitáis la libertad de quejarnos".

Y este es el lugar de observar que, en una multitud de circunstancias, los soberanos han sido arrastrados a la persecución, cuando la re-



ligión servía solamente de pretexto a los actos reprobables que proseguían. "Examinad todas vuestras precedentes guerras, decía J. J. Rousseau, llamadas *guerras de religión*, y no hallaréis una que no haya tenido su origen en la corte y en los intereses de los grandes." La tolerancia religiosa no podía intervenir entonces, y hace mucho tiempo que la matanza de la San Bartolomé ha sido declarada de la competencia del tribunal de causas políticas.

Sea de ello lo que fuere, he aquí nuestro resumen de estas cuestiones tan importantes como difíciles. Hemos dicho: *La tolerancia religiosa es el ejercicio de la caridad cristiana en las relaciones sociales con los que no practican la misma religión*, y lo repetimos ahora cuando se trata de esas *relaciones* sociales de un orden más elevado, de que son jueces los gobiernos. La justicia, sin duda, pero siempre la caridad: *in omnibus charitas*.

Por lo demás, y con esto terminaremos, observad que, según la religión de Jesucristo, estamos obligados no solamente a la tolerancia, sino también al sacrificio; porque a más de la regla que nos prescribe amar al prójimo como a nosotros mismos, el Redentor nos ha dado otra que no es menos obligatoria; "He aquí mi mandamiento: es que os améis los unos a los otros como yo os he amado."

Ahora, él nos ha amado hasta humillarse hasta nacer en un establo; ha predicado la moral evangélica, principiando por practicarla: ha muerto perdonando a sus enemigos, y orando por ellos. Así debemos amar a nuestros hermanos.

Que los soberanos, pues, los padres de familia, los cristianos, cualesquiera que sean, que los amigos de la humanidad, a cualquiera religión que pertenezcan, entiendan de este modo la ley de Dios.

Que prefieran la felicidad de sus hermanos a la riqueza, y que no teman por aliviarlos, escatimar alguna cosa a su lujo, a su superfluo, a su necesario, y que en lugar de especular por aumentar su propia fortuna especulen para aumentar el bienestar de las clases inferiores.

Que con su ejemplo enseñen el respeto de la religión y el temor de Dios, y que lejos de complacerse en escándalos y en intrigas, que son el efecto de las pasiones y les dan pábulo, muestren en todos sus actos la impresión de la conciencia, la influencia del honor, los rasgos de la benevolencia y de la verdadera filantropía.

Que perdonen a sus enemigos personales y pongan en práctica la misericordia y la clemencia en lugar de la recriminación y la venganza.

Que protejan al débil contra el fuerte, como el ilustre Las Casas y sus otros misioneros, de quien el protestante Robertson dice: "Cuando se enviaron a los misioneros a América para convertir a los indios, hi-



que son presente que el rigor con que se trataba a aquel pueblo hacia inútil su ministerio". Que dejen a un lado las preocupaciones de secta y de partido para honrar la virtud donquiera que se encuentre, y que, como lo ha declarado tan noblemente el calvinista Mr. Guizot en la tribuna nacional, a la vista del martirio a que se exponen los apóstoles del Evangelio, no se vea que son jesuitas, sino cristianos. Que cada uno se muestre dispuesto, si fuere necesario, a hacer algunos sacrificios por la paz, por el bien público, por la religión, por la gloria de Dios y la salvación de los hombres.

Así será fácil practicar la tolerancia, y la tolerancia será entonces el sentimiento universal. Entonces, del mismo modo que los *judíos tienen sinagogas en Roma moderna*, así ellos y los otros podrán tener templos por toda la tierra, esperando que un día se conviertan en iglesias. Entonces los hombres se conocerán mejor, se harán justicia y sabrán servirse unos a otros con gozo y apresuramiento. Entonces los soberanos, intolerantes por los desórdenes que turban la sociedad, serán tolerantes por las opiniones que tienden a establecer en ella la unión dejando a cada uno la libertad de conciencia. Entonces el catolicismo no se inquietará ya por el mantenimiento y la propagación de la fe, porque la caridad es el más elocuente de los apóstoles, y bien se puede esperar que luzca el día en que sea cierto decir en práctica y en derecho: Un señor, una fe, un bautismo.

(El abate Auger, Miembro de la tercera clase del Instituto Histórico de Francia).



CAPITULO IV



Art. 3. Las Autoridades que ejercen el Gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara Capital de la Confederación por una ley especial.

Art. 13. Podrán admitirse nuevas Provincias en la Confederación; pero no podrá erigirse una Provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.

Art. 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Ley especial. Art. 2. Todo el territorio que se comprende entre el Río de la Plata y el de Las Conchas hasta el puente de Márquez, y des le aquí tirando una línea al S. E. hasta encontrar su perpendicular... corresponden a la capital y queda federalizado.

"El Congreso os remite igualmente, Señor, los Códices auténticos que contienen la Declaración y las leyes orgánicas de capitalización, centralización de Aduanas y municipalidad". Estas leyes deberán someterse del mismo modo *al examen y libre aceptación* de la provincia de Buenos Aires; porque, sancionadas para facilitar y extender a todo el país el pacto fundamental de la Confederación, que constituye de todo el territorio una Nación compacta a perpetuidad, *la libre aceptación* de la Provincia de Buenos Aires suplirá su lamentada ausencia del Congreso General Constituyente (*Mensaje del Presidente del Congreso*).

No sin grave preocupación de ánimo entramos en el examen y comentario de la disposición del artículo 3º, y de las que a ella se refieren. Un hecho sangriento y preñado de desolación y de ruinas se alza ante la Constitución, como un juez y un acusador implacable.



Mientras estas cláusulas de la Constitución se sancionaban en mayo, la ciudad de Buenos Aires estaba sitiada por el Director Provisorio, y cuando él reconocía, aceptaba y mandaba promulgar esa constitución, continuaba *estrechando* el sitio y el bloqueo, para forzar a Buenos Aires a reconocer su autoridad y obligarla a aceptar la desmembración de su territorio y la erección en él de una nueva provincia. La interpretación de la Constitución no se presta a subterfugio alguno. No puede erigirse una provincia en territorio de otra sin consentimiento de su Legislatura, y no hay de hecho ni de derecho más Legislatura en Buenos Aires que la que defendía la plaza y la integridad del territorio de la provincia. Este requisito del voluntario asentimiento de la Legislatura es un derecho y una garantía reconocida por la Constitución, y una ley especial del Congreso para reglamentar su ejercicio no puede alterar tales garantías y derechos. Cuando el Presidente del Congreso ha dicho en su nota, acompañando la Constitución, que estas leyes especiales, reglamentarias u orgánicas, deberán someterse, como la Constitución, al *examen y libre aceptación* de la Provincia de Buenos Aires, ha entendido decir al *examen y libre aceptación* de la Legislatura de Buenos Aires, cuyo asentimiento requiere la Constitución para poder desmembrar o dividir una provincia.

¿Ha querido el Congreso dar él mismo el ejemplo, al día siguiente de sancionada la Constitución, de la violación más flagrante del espíritu y la letra de esa misma Constitución? ¿Quiere persuadir el Congreso a las Provincias, y a los Estados circunvecinos, que el Director Provisorio, sitiando a Buenos Aires, haciendo derramar diariamente la sangre de sus hijos, imponiendo a las mujeres, a los ancianos y a los niños las torturas del hambre por un sitio y bloqueo, cuyo objeto confesado es este, ¿quiere el Congreso persuadir que tales actos concurren a obtener la *libre aceptación* de Buenos Aires para suplir su *lamentada* ausencia del Congreso General Constituyente ?

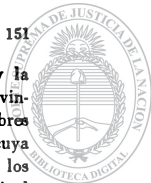
No es posible aceptar esta suposición sin acompañarla de calificativos odiosos. Sin hacer ostentación de tan repugnante hipocresía pudieron suprimir de la Constitución los derechos acor-



dados por ella a las Legislaturas, para el caso en cuestión, en que ni la excusa de imprevisión cabe, pues antes de sancionar tales artículos, y mientras se discutían, llegábase al Congreso el rumor lejano de la resistencia y el aviso de que esa Legislatura cuyo nombre invocaban, detestaba de su obra, no por ella misma, sino por la manera de imponerla.

No siendo posible, pues, admitir sin desdoro del Congreso la idea de que viole así la Constitución, y sea el primero en hollarla bajo sus plantas, debemos buscar la interpretación que más se concilie con la honradez, si ya no con la dignidad de hombres a quienes mancillaría para siempre aquel acto. Para nosotros, el Congreso ha tenido que contemporizar desde el principio con voluntades armadas, contra cuyo predominio nada pueden los poderes puramente morales y desarmados. El Congreso veía trabada la lucha, y convertidos los poderes que se vió forzado a delegar, para transar pacíficamente las cuestiones, en sediciones autorizadas, en asedios, bloqueos y derramamiento de sangre. El Congreso había mandado a su Presidente a entenderse racionalmente con Buenos Aires (1), y su Presidente, por el tratado de 9 de marzo, no reconocido por un acto discrecional del Directorio, se había entendido con la Legislatura de Buenos Aires, reconociéndole sus derechos y su legitimidad innegable. ¿Qué lo quedaba por hacer al Congreso? ¿Plegar la Constitución, ley duradera, a las exigencias de los hechos pasajeros del momento? El Congreso ha procedido como ha podido. Ha fijado en términos precisos el derecho, diciendo: la exigida desmembración de Buenos Aires no puede ser valedera sin el *consentimiento de su Legislatura*; y, condenado a llevar adelante la desmembración, ha declarado primero que al dictar leyes especiales reglamentarias u orgánicas el Congreso no puede alterar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Dictando, pues, la ley orgánica ha dejado a la Legislatura de Buenos Aires el derecho de darle o no el requisito indispensable de su asentimiento para ha-

(1) Sobre el tratado de Buenos Aires debe consultarse la memoria documentada publicada por el Dr. don J. Peña, ex-ministro del Director y Comisionado para el ajuste del dicho tratado.



las provincias que figuran en el mapa político argentino, y la impotencia de las que no son nombres vanos. Hay diez provincias por lo menos sin rentas, sin material de ejército, sin hombres notables en suficiente número, sin industria floreciente, y cuya riqueza está aniquilada en los capitales y en las fortunas de los particulares. Si Buenos Aires se divide en dos provincias, si el único núcleo de población y riqueza que tiene la República se desbarata, ¿qué elemento de poder, de recursos y de fuerza queda para hacer frente a las emergencias del porvenir? ¿Adquiere más vigor el estado fraccionándolo más y más? Si hoy hay trece provincias impotentes, ¿cuántas habrá cuando se les añada otra de campañas pastoras con una villa por capital, y una capital con suburbios por todo territorio? No queremos aplicar a este caso el consejo de Maquiavelo: "E chi divienne padrone di una città consueta a vivere libera, et non la disfaccia, aspetti di essere disfatto da quella, perché sempre ha per refugii nella ribellione, il nome della libertà, e gli ordini antichi suoi, i quali ne per lunghezza di tempo, né per beneficii mai si dimenticano, se non se *disuniscono o dissipano gli abitatori*"... (1). Pero hay una consideración grave que debemos tener a la vista. Las provincias de Cuyo pudieron en una época atravesar los Andes y desafiar en Chile la dominación española y derrotarla; La Rioja asolar con sus millares de jinetes a Tucumán, San Juan, Mendoza; Santa Fe derrotar los ejércitos de Buenos Aires; pero estos esfuerzos y el arbitrario que ha pesado sobre estas y las demás provincias las ha reducido a la nulidad, a la impotencia. Buenos Aires ha sido por treinta años por su población, por sus recursos, por su colocación al frente de la República, el poder que nos ha librado de la humillación, de la invasión y de los ataques de las otras naciones. Disolviendo su unión territorial, reduciéndola a la impotencia, ¿qué nos queda, pues, que presentar al exterior con apariencias de unión, con recursos pecuniarios disponibles, con fuerzas numéricas reunidas? Si Buenos

(1) *Il Principe*, di Nicolo Machiavelli, cap. V., pág. 17, edición de 1815.



Aires pesa demasiado en la balanza política, en lugar de una desmembración ruinosa para todos, resistida tenazmente por los que tienen derecho a ello, ¿no valdría más pensar en agruparse provincias según su colocación y necesidades, y en vez de constituir quince nulidades incoherentes y casi imposibles, tan incapaces de bastarse a sí mismas, como impotentes para defender la Nación, formar cinco o seis Estados relativamente fuertes, unidos por una administración de justicia común? La Constitución no cierra esta vía, y, por el contrario, la prevé, indicando sólo que sea facultativa y no compulsoria dicha reunión de una o más provincias en una sola.

Entonces puede llegar el caso de declarar Territorios aquellas provincias que por su pobreza, despoblación y atraso no se hallan en aptitud de sostener un gobierno regular, ni de organizarse bajo las condiciones que la Constitución requiere. Tales territorios administrados por el Congreso como los territorios de los Estados Unidos, protegidos contra su propia ineptitud y debilidad, dirían en pocos años, inyectándoles la vida y la civilización, estados o provincias nuevas que irían más tarde, y cuando contasen el número de habitantes requeridos, a pedir de nuevo su asiento en el Congreso.

Era un punto de difícil solución saber si entre Estados o provincias que se reunen para constituirse puede exigírsele a uno de los contratantes que desmembre su territorio en beneficio común; pero permítasenos decirlo, por cuanto los hechos han venido dolorosamente a confirmarlo, había algo de irritante, de agresivo y odioso en disponer de la capital de una provincia en ausencia de los interesados; y atribuimos al deseo de salvarse de esta mancha los miramientos y condiciones que el Congreso ha puesto, por la forma al menos, ya que los hechos salían de su esfera, al dictar la ley especial a que aludimos. Que el paso era impolítico y ruinoso, diránlo mejor que nosotros una guerra encendida, las vidas sacrificadas, los millones destruidos y las decepciones y escarmientos encontrados.

En el pacto de Confederación de los Estados Unidos se estipuló que *“ningún Estado sería privado de territorio en beneficio*



de los Estados Unidos”, prueba de que no es lo más natural que las provincias quieran ceder voluntariamente territorio, y mucho menos ciudades a la unión general. En la Constitución vigente hasta hoy, al autorizar al Congreso a reglamentar los territorios pertenecientes a los Estados Unidos, se declaraba, sin embargo, *“que nada de lo establecido en la Constitución pudiese alegarse contra las pretensiones de los Estados Unidos o de los Estados particulares”*. Entre las atribuciones del Congreso se pone “la de ejercer exclusiva legislación, en todos respectos, sobre aquel distrito (no excediendo de diez millas cuadradas) en que por cesión de estados particulares, y con consentimiento del Congreso, se haga la sede del gobierno de los Estados Unidos”. Ultimamente, en la disposición que corresponde *literalmente* a nuestro artículo 13, se establecía, lo mismo que en nuestra Constitución, como requisito para reunir o dividir provincias, el *consentimiento de sus Legislaturas*, y el Juez Story, comentando esta disposición, dice: “la general precaución para que ningún nuevo estado se formase sin la concurrencia del gobierno nacional y la de los estados interesados está de acuerdo con los principios que deben predominar en semejantes transacciones. La particular precaución contra la erección de nuevos estados por la *partición de un estado sin su propio consentimiento* *aquietará las susceptibilidades de los grandes estados*, como los celos de los pequeños, quedan calmados por una precaución semejante contra la unión de varios en uno *sin su consentimiento*”.

Túvose, pues, como se ve, mucho miramiento con las susceptibilidades y celos de los estados federados, y del inciso del pacto de confederación que hemos citado, como de los artículos de la posterior Constitución, se descubre que nadie creyó que un estado particular debía nada a la confederación, y que se hizo en todo caso prevalecer la doctrina contraria. Una frase de la protesta de Pensilvania redactada por Franklin en 1776, que hemos citado, debemos recordarla aquí, para precaver nuestro espíritu de creer derechos lo que sólo son deseos abusivos, poniéndola en boca de la Legislatura de Buenos Aires. “Habiéndonos dado ya los estados pequeños una muestra clara de la injus-



ticia de que son capaces, y de los posibles efectos de su combinación, es de suyo razón suficiente para que no nos determinemos a ponernos en su poder" (1). Si el Presidente del Congreso ha podido decir, al motivar la ley especial de capitalización, que "se abstiene del gran crimen de decapitar al Estado, pero no ha querido reincidir en el error de hacer cabeza de la federación a la más fuerte de sus provincias", debió tener presente que no es justo disponer del bien ajeno porque así nos conviene, y disponer sin la voluntad de su dueño; porque si puede decirse que las rentas de aduana cobradas en un puerto no son siempre propiedad provincial, nadie pretenderá que la ciudad de Buenos Aires no es propiedad de sus habitantes, cuyas personas y casas la forman. Puede tacharse a las provincias o a sus representantes en esta transacción del despojo que han intentado hacer de una capital decapitando una provincia. ¿Cuánto dinero, cuántos desastres, cuántas vidas ha costado la tentativa?

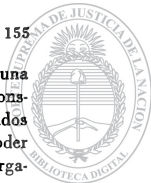
Pero la historia ha decidido ya. La malhadada tentativa de proveerse de capital majestuosa y floreciente, apostándose en las encrucijadas de los caminos, para arrebatarla por asalto, ha sido debidamente escarmentada.

Que el lector nos permita, en medio de la sorpresa de los recientes acontecimientos, que recurramos, para fortificar nuestro espíritu, a los principios inmutables del derecho, como el cristiano piadoso acude a la oración en los días de tribulación y de prueba. En el caos de los hechos para que los pueblos no se extravién, o extraviados vuelvan al buen sendero, quedamos esta antorcha luminosa.

"Legislaturas"

La Constitución pide el consentimiento de las Legislaturas interesadas, para dividir una provincia. Esto hace necesario definir la idea que tal frase representa en países republicanos, representativos, federales. ¿Existían Legislaturas en las provin-

(1) Protesta de Pensilvania ya citada.



cias en el momento de dictarse aquella cláusula? ¿Existía una en Buenos Aires? La Legislatura provincial es anterior a la Constitución, como eran anteriores a la Constitución de los Estados Unidos las Legislaturas de las respectivas colonias. Es el poder primario, normal. El gobernador no entra por nada en la organización. Las leyes del Congreso de los Estados Unidos se refieren a ellas en todos los casos en que la ley necesita disposiciones complementarias para su ejecución. Nuestras Legislaturas crearon el Encargo de las Relaciones Exteriores, y el Convenio de San Nicolás era válido sólo por la autorización previa, y la posterior sanción de las Legislaturas de Provincias.

¿Concurrió la Legislatura de Buenos Aires al convenio de San Nicolás? Un año de desastres, de matanzas, de revueltas y de escarmiento final están hoy susurrando con voz plañidera al oído de la fuerza, de la violencia y de los malos hábitos: "No se violan impunemente los principios fundamentales del gobierno". Ahí están ya en letras de sangre y de vergüenza escritas las páginas de la historia. Al convocar a conferencias en San Nicolás a *gobernadores*, olvidóse que nada válido podían estipular sin autorización de las Legislaturas. Remedióse la falta, dejando lugar a ver que se menospreciaban en la práctica los principios fundamentales de toda constitución. Pero remedióse, con las provincias débiles, haciéndole a Buenos Aires el insulto de prescindir de ella, en una asamblea que para más vejamen se tenía en su propio territorio. Se le hacía esta injuria por motivos pueriles, o por zafarse de sujeciones, mostrando, por toda respuesta a los cargos, el puño de la espada o el cerco de bayonetas que rodeaba a la ciudad. La Legislatura de Buenos Aires puede repetir, para justificación de sus actos posteriores, lo que el primer Congreso norteamericano decía al mundo del Rey de Inglaterra, en la famosa acta de la Independencia:

"El ha disuelto repetidas veces salas de Representantes, por haberse opuesto con noble firmeza a sus invasiones sobre los derechos del pueblo".

"El ha mantenido en medio de nosotros en tiempo de paz



ejércitos permanentes sin el consentimiento de nuestras Legislaturas”.

“El ha intentado hacer independiente el poder militar, y superior al poder civil”.

“El se ha combinado con otros, para sujetarnos a una jurisdicción extraña a nuestra constitución, y no reconocida por nuestras leyes, dando su asentimiento a esos actos de pretendida legislación”.

“El ha violado nuestras cartas, aboliendo nuestras más valiosas leyes y alterando fundamentalmente las formas de nuestro gobierno”.

“El ha suspendido nuestra propia legislatura y declarádose él mismo investido con poder de legislar sobre nosotros, en todos los casos”.

“El ha abdicado al gobierno declarándonos fuera de su protección y haciéndonos la guerra”.

“El ha desolado nuestras aguas, devastado nuestras costas, quemado nuestras poblaciones y destruído las vidas de nuestro pueblo”.

“El está, en este momento, transportando grandes ejércitos para completar la obra de muerte, desolación y ruina”.

“El ha excitado insurrecciones domésticas entre nosotros, y ha tratado de traer los indios de la frontera”.

“El ha convocado cuerpos legislativos en lugares desusados, desprovistos de todo, y distantes de los archivos públicos, con el solo objeto de fatigarlos en el cumplimiento de estas medidas”. (1)

¿Qué oponer a estas siniestras semblanzas? ¿Que el uno era rey, y el otro un general! ¿Que los que allá sostenían la incolumidad de sus Legislaturas eran *norte-americanos*, y nosotros somos solamente *sud-americanos*?

¡No! Los principios del gobierno representativo federal son las columnas del templo que ningún Sansón ha de conmovier

(1) Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de Julio de 1774.



sin quedar sepultado bajo sus ruinas. Debíó consultarse previamente esa Legislatura, con más consideración a ella por acabar de instalarse en el local en que el poder legislativo había sido vilipendiado por la tiranía. Si después del paso atentatorio dado, rechazaba (con justicia) el pacto celebrado, debióse negociar con esa Legislatura, como se quiso y creyó oportuno negociar después, y admitir las propuestas razonables (1). ¡Pero atropellar la Legislatura! ¡Pero, desterrar a sus miembros, en violación del dogma de la inviolabilidad de los Representantes! ¡Pero substituirse el poder provisorio federal al gobierno de una de las provincias!...

¿Había ejemplos de tales atentados en nuestra historia? ¿Puede citarse algo parecido en los Estados Unidos?... Si Rosas, que nada de eso osó, con el descaro de la brutalidad, ha recibido de la historia el execrable nombre de tirano ¿cómo llamaréis al que tales desmanes perpetró?

Pero, no nos lamentemos de ello. Del golpe del eslabón salta la chispa que provee de fuego en las rígidas noches de invierno. La prudencia humana tiene sus reglas, las pasiones su inspiración, la necesidad sus durezas. Sólo la Providencia y la historia obran según leyes inmutables, aunque ponga a veces un siglo de por medio, como digresión, entre la causa y el efecto.

Las violaciones groseras de los principios constituyentes han traído el triunfo de la Constitución, de la libertad que asegura, de la civilización que promete. Buenos Aires, acaso, no siente todavía que ella sola ha hecho triunfar la federación. Hay federación real en un país cuando, como en los Estados Unidos, la Constitución no puede imponerse por la fuerza ni pisotearse las legislaturas provinciales. Hay federación cuando una provincia hace respetar los principios federales. En cuanto a la civilización, no sabemos si las provincias deploran que no haya triunfado

(1) Tratado del 9 de Marzo, concluido por el Presidente del Congreso, y desechado por el Director contra todas las nociones del derecho, contra todas las constituciones y la que estaba sancionando el Congreso disponen, reservando al Congreso la facultad de aprobar o desechar tratados.



el campesino Lagos. En cuanto al orden, deseamos que los gobiernos constituidos muestren sus simpatías por la insurrección de jefes de campaña, traicionando el encargo que la autoridad les había confiado; y, en cuanto a la organización nacional, esperamos que las pasiones se calmen, para saber quién se lamenta de que la guardia nacional, compuesta sin excepción de todos los ciudadanos, haya sabido mantener sus derechos y defender las instituciones; quien gime de que la Legislatura de Buenos Aires en 1852, como la de Boston en 1772, haya seguido sus debates, en presencia de siete mil hombres de línea, y a la boca de los cañones asestados al local de sus sesiones. Tenemos, pues, creado, arraigado, probado el poder legislativo. Los congresos de 1812, 16, 18, 25, 52, nada de durable pudieron hacer; porque carecieron de autoridad moral para dominar o a los régulos que los enviaban o a los pueblos o a sus propios agentes. Rosas hizo de la Legislatura la escoba de sus pies. Estaba reservado a la impresión de la bota del Director Provisorio hacer surgir el Poder Legislativo y, en repulsión de sus cándidas amenazas, elevarse a la altura de un Congreso Soberano, levantar un muro de pechos en torno suyo, despojar de sus ejércitos y sus escuadras a los que osaron insultarlo, someter la insurrección, romper la tradición de la victoria de la fuerza triunfante, y entre el abatimiento de los pueblos y la individual abyección mostrar la entereza, la abnegación, el sacrificio, que sólo constituyen las grandes acciones y salvan a los pueblos.

Interésanos más todavía el triunfo del derecho, y ver la fuerza, la casualidad, la victoria, el éxito puesto de su parte. Los pueblos se educan penosamente. Las exigencias de la necesidad, las inspiraciones de la pasión, del miedo, les sirven de justicia, de derecho. La conciencia se alarma poco con las pequeñeces de la violación de los principios, con tal que se logre el objeto. No: el objeto no se logra, cuando es bueno, sino por medios justificados y buenos. Los medios han de corresponder al fin. Para constituírnos, es preciso principiar por poner en práctica las prescripciones de la Constitución. Hace un año que se la viola. Violada en Buenos Aires, violada en San Juan, violada



en el Congreso, violada en todas partes. ¿En qué día iba a principiarse a respetarse?

Nosotros os lo diremos: después del 14 de julio de 1853, en que se terminó el drama principiado el 25 de junio de 1852, cuando el desleal infractor de los principios, proclamado reo convicto por la deposición de los hechos prácticos, juzgado por el Tribunal del derecho, condenado y sentenciado a hacer penitencia pública, y pedir perdón con la soga al cuello, a la puerta del templo de la Legislatura que holló, proclamó en alta voz:

“LA CUESTION NACIONAL HA DE DECIDIRSE POR EL VOTO ESPONTANEO DE LOS PUEBLOS, QUE DA SANCION A LAS LEYES, Y NO POR LAS ARMAS, QUE SOLO ESTABLECERIAN EL TRIUNFO DE LA VIOLENCIA”. “LA GUERRA CIVIL NADA RESUELVE Y SOLO PRODUCE DEVASTACION Y RUINA”. (1)

¡Hipocresía y miseria!, dirá el vulgo. ¡Virtud y progreso de las instituciones y triunfo de los principios constituyentes!

Pero “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud” (2), y de las hipocresías de la tiranía sale al fin radiante la libertad. Rosas decía lo mismo con respecto a la soberanía del poder legislativo. “Os habéis reunido, decía a los legisladores (¡los manes de Maza presentes!) para deliberar sobre los negocios públicos. Muy reconocido a vuestro eminente mérito, *respetosamente* os congratulo, y someto a *vuestro soberano fallo* los actos de mi administración. Juzgad en vuestra alta rectitud y puro amor a la patria de *mis errores* y de mis aciertos, dignándoos considerar, HH. RR., que en mis deseos e intenciones jamás me ha animado otra mira que el bien y dignidad de la Nación”.

Si las exterioridades de las declaraciones son las mismas, el fondo ha cambiado notablemente. El tirano hablaba ante una le-

(1) Proclama del Director Provisorio al pueblo de Buenos Aires, dos días después de disipadas las tropas con que sitiaba.

(2) Montesquieu, *Pensées diverses*.



gislatura avasallada y envilecida, el Director habla ante el juez que lo condena y castiga: las melifluas palabras del primero hacían crispas los nervios, como el silbido de las víboras; las confesiones del segundo sólo excitan a conmiseración y risa. El uno hablaba con la impunidad de una tiranía triunfante, el otro bajo la humillación de una serie de escarmientos oprobiosos. El día que violó los principios federales, obrando sin consultar a la Legislatura de Buenos Aires, dábase por vencido; porque la omisión mostraba el miedo de ser contrariado en sus propósitos, mientras que la Legislatura de Buenos Aires, asediada de tropas que circunvalaban la ciudad y su propio asiento, tuvo coraje bastante para arrojar al muladar el espúreo enjuague. Si, pues, Buenos Aires está destinado por la Constitución a recibir un día en su seno al soberano Congreso, pueden sus miembros levantar bien alto la cabeza. El templo profanado por veinte años está purificado ya; la sangre del Presidente Maza lavada y vengados sus manes. El 25 de junio, el 11 de abril y el 14 de julio conmemoran victorias del poder legislativo.

El Congreso de las Provincias Unidas, como el Congreso de los Estados Unidos, podrá decir, sin avergonzarse de mentir,

ORDENA Y MANDA

y será obedecido desde el Chaco a Patagones.

CAPITULO V



Art. 4. El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación de las aduanas, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional.

“Todo Gobierno debe poseer en sí mismo el poder necesario para el pleno cumplimiento de los objetos confiados a su cuidado, y la completa ejecución del encargo de que es responsable, libre de todo otro reato, si no es la consideración del bien público y la seguridad del pueblo. En otras palabras, todo poder debe ser proporcionado a su objeto. Los deberes de presidir a la defensa general y de asegurar la paz pública contra la violencia, bien sea extranjera o doméstica, envuelven una provisión para riesgos y casos imprevistos, a la cual no pueden asignarse límites posibles: y por tanto el poder de proveer para esto no debe reconocer otros límites que las exigencias de la Nación y los recursos de la comunidad. La renta es la máquina esencial para procurarse los medios de responder a las exigencias nacionales; y, por tanto, el poder de procurársela debe, naturalmente, estar comprendido en el de proveer aquellas exigencias de la Nación



y los recursos de la comunidad. La teoría como la experiencia de las otras naciones, y la propia y triste experiencia nuestra, durante la Confederación, concurren a probar que el poder de procurar rentas es sin efecto y una mera burla cuando se ejerce sobre Estados en su capacidad colectiva. Si el Gobierno federal, pues, ha de ser de alguna eficacia y un vínculo de unión, debe estar investido con un amplio poder de imponer contribuciones para todo objeto nacional. En la historia de la especie humana se encuentra con harta frecuencia que en el ordinario progreso de las cosas las necesidades de una nación son, en cada estado, de su existencia, iguales por lo menos a sus recursos. Pero si existiese en nuestro propio Gobierno un mejor estado de cosas, aun en este caso debemos esperar revces, y poder proveer a ellos. Es imposible prever todos los varios cambios en la posición, relaciones y poder de las diferentes naciones, que puedan afectar la prosperidad o la seguridad de la nuestra. Podemos tener formidables enemigos extranjeros. Conmociones interiores pueden sobrevenir. Pueden visitarnos calamidades físicas y morales, originadas por plagas, hambre, y terremotos; por convulsiones políticas y rivalidades; por la gradual decadencia de ramos particulares de industria; y por la necesidad de cambiar nuestros hábitos y modos de adquirir, en consecuencia de la competencia o mejoras extranjeras, y de la variable naturaleza de los deseos y necesidades humanas. Una fuente de rentas, adecuada en una época, puede parcial o completamente faltar en otra. El comercio, las manufacturas o la agricultura pueden prosperar en una época con contribuciones que en otra las destruirían. El poder de imponer contribuciones por tanto, para que sea útil, debe ser no sólo adecuado a todas las exigencias de la Nación, sino que también ha de ser capaz de llegar de tiempo en tiempo a las fuentes más productivas. Las Constituciones de gobierno no han de ser calculadas según las necesidades existentes, sino según una combinación de las mismas con las probables exigencias de las épocas, conforme al natural y probado giro de los negocios humanos. Deben tener en sí la capacidad de proveer a las contingencias futuras, según vengan; y éstas, como ya se ha indicado,



son por su naturaleza tan ilimitadas como imposible es limitar sin riesgo aquella capacidad”.

Tales fueron las doctrinas con que el “Federalista” explicaba el alcance del artículo de la Constitución norteamericana que dice: “La Legislatura tendrá poder para imponer y recaudar contribuciones, derechos, impuestos, sisas, para pagar las deudas, y proveer a la común defensa y bien general de los Estados Unidos”.

Los que se alarmaban con la idea de este poder del Congreso, oponían que por lo menos hubiese de limitarse a disponer de los derechos de exportación, dejando a los estados particulares las contribuciones internas; pero se les objetó con razón que los derechos de aduana estaban sujetos a ser esterilizados, como fuente de rentas, por bloqueos y guerras extranjeras. De la naturaleza de los encargos del Gobierno general, como tan hábilmente queda expuesto, resulta la latitud de los poderes del Congreso para proveer a las necesidades ordinarias y a las exigencias fortuitas.

La Constitución argentina arriba al mismo resultado de proveer a las necesidades nacionales enumerando las fuentes de que han de proceder las ordinarias rentas, “y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General”.

“Del producto de derechos de exportación e importación”

Este procedimiento, sin desvirtuar en nada la generalidad del principio, tenía por objeto tomar posesión, digámoslo así, de fuentes de renta que han sido causa, y pudieron serlo en adelante, de irritación, celos y recriminaciones entre las Provincias. Tal es, por ejemplo, el producto de los derechos de importación y exportación de las aduanas. Ha sido un cargo, durante la dislocación de la República, dirigido contra Buenos Aires, por las provincias litorales, el no permitir sus gobiernos el comercio libre de los ríos, y por las provincias del interior con achaque de que las mercaderías salían ya de Buenos Aires



recargadas con derechos que los compradores de las provincias pagaban en provecho de Buenos Aires. El cargo era fundado en principio, aunque en el hecho tuviese atenuaciones que nacían de la naturaleza de las cosas. La libre navegación de los ríos, como un principio de derecho de gentes, es tan nuevo en el mundo, que después del caso especialísimo de la navegación del Rin y del Po, la de los ríos afluentes al Plata es el segundo que consagra el principio. Muy de otro modo pensaba el Brasil al respecto, hasta ayer no más, y es de este año la moción en el Senado de los Estados Unidos de abrir sus ríos a todas las naciones. Sería, pues, más que injusticia, desacuerdo, exigir a un gobierno que se anticipe a su propia época. En cuanto a las provincias del interior, el caso era más sencillo aun. En el aislamiento provincial, cada parte debió quedar con lo que la naturaleza hacía inherente a su posición geográfica. Pero si ha de mirarse esta cuestión desde su verdadero punto de vista, las Provincias se espantarían de sólo considerarlo, si fuera posible ponerles a la vista los millones de pesos que la población de Buenos Aires ha derramado en nombre y por cuenta de esta nacionalidad argentina que ella sola representó durante cuarenta años. Ejércitos, marina, guerras exteriores, diplomacia, y aun los caprichos y prodigalidades de la tiranía salieron del haber de ese pueblo, y la deuda de cien millones que pesa sobre él es sólo parte mínima de las anticipaciones que hizo a nombre de todos, y el déficit, que no alcanzaron a llenar esos derechos de aduanas, escasos para proveer a las necesidades del gobierno que tuvo por cuarenta años el sostén y la aprobación de las provincias.

Sea de ello lo que fuere, los derechos de importación y exportación entran ahora, como en 1826, a formar el tesoro nacional. Este es un principio de justicia fundado en las más simples nociones de economía política. Ninguna provincia pudiera legítimamente reputar de propiedad provincial los derechos que cobre en sus puertos, sino en aquellos que pagan exclusivamente sus habitantes, pues estando unas provincias favorecidas de puertos, y careciendo de ellos las más, tal verificación, a más de absurda, sería imposible, sin caer para remediarlo en el desas-



troso sistema de aduanas interiores de que era la Confederación Argentina el único ejemplo que se conocía en los tiempos modernos. Y como la similitud de situaciones da una fuerza especial al raciocinio, aplicaremos a nuestro propósito lo que en pro de un gobierno general argüía el sabio Story: "Es obvio, dice, de la posición local y tamaño de los varios estados, que algunos de ellos están destinados por siempre a no tener sino rentas moderadas, cuanto basten a sus propias necesidades, y en sentido estricto a sus mejoras domésticas. En relación a otros más favorablemente situados para el comercio y la navegación, las rentas provenientes de impuestos pueden ser más extensas; pero la mayor parte de aquellas debe provenir de derechos sobre las importaciones. Ahora es obvio que en estados separados ninguna renta permanente puede emanar de esta fuente. Las rivalidades de unos a otros y sus varios intereses inducen constantemente a eludir las leyes; las facilidades que ofrecen las numerosas radas, ríos, bahías que intersectan nuestras costas; el fuerte interés de los extranjeros en promover el contrabando; la falta de uniformidad en los derechos puestos por los diferentes estados; los medios de intercurso a lo largo de los límites territoriales del interior de los estados comerciales; estas y muchas otras causas producirían una debilísima administración de todo sistema local de rentas, y harían sus resultados limitados y poco satisfactorios. ¿Qué podría hacer Nueva York con un solo puerto, rodeado por ambos lados de rivales vecinos marítimos con muchos puertos? ¿Qué podrían Massachusetts y Connecticut con el intermediario territorio de Rhode Island corriendo en el corazón de los dos estados por comunicaciones acuáticas admirablemente adaptadas para la seguridad del tráfico ilícito? ¿Qué podrían Virginia y Maryland con el ancho Chesapeake de por medio y sus mil lugares de desembarco? ¿Qué opondría Pensilvania al vivo resentimiento y a la fácil policía de su débil vecino el Delaware? ¿Qué podría hacer un solo estado de los del Mississipi para mantener un tráfico seguro para sí mismo con adecuados derechos protectores? En una palabra, a cualquiera parte del continente que volvamos los ojos, las dificultades de mantener un



sistema de rentas serían insuperables, y enormes los gastos de recolección”.

De todos estos testimonios, de la naturaleza del asunto y de la similitud notable de situación geográfica en ambos países federados, resulta la conveniencia de reconcentrar en una sola administración nacional las aduanas y de consagrar a objetos comunes a todas las provincias los derechos recaudados en ellas.

Establecidos estos sencillos principios generales sobre el poder del Congreso a establecer y recaudar rentas, pasaremos a analizar las otras fuentes especiales que enumera.

“De la venta o locación de tierras de propiedad nacional”

La cuestión incidental que este párrafo presenta es una de las más graves que pueden ofrecerse a la consideración de los pueblos americanos, y el origen de nuestro concepto de males que continuarán sangrando por mucho tiempo, si la luz de los principios económicos no se aplica a esta oscura y oculta afección que ha venido preparando, como un mal interno, las desgracias y calamidades en que han sido envueltas las poblaciones argentinas. ¿Cuáles son las tierras de propiedad nacional? La Constitución nada dice a este respecto. Una ley del Soberano Congreso de 1826 declaró, en la época en que sus decisiones fueron acatadas como legales y legítimas, de propiedad nacional todas las tierras baldías que se reconocían antes de la Independencia como pertenecientes a la corona de España. ¿Ha sido derogada aquella ley? ¿La constitución actual la reputa como subsistente? Nuestro deber en el silencio de la Constitución es exponer simplemente los hechos y los principios que tienen relación con este punto.

Desde luego, debe recordarse que la ley de 1826, que hacía nacionales las tierras baldías incluidas en las demarcaciones provinciales, aunque reconocida como ley nacional en muchas provincias, causó general desagrado en casi todas, acostumbradas a creerlas una propiedad provincial, y persuadidas de que el traspaso de dominio les despojaba de una propiedad valiosa.



Esta misma cuestión alarmó a los Estados que forman la Unión Norteamericana, si bien la Constitución no se expresó mejor que la nuestra a este respecto. La cosa llegó a punto de postergar la ratificación de la Constitución. Algunos estados sostenían que las tierras de la Corona, comprendidas en sus límites respectivos, les pertenecían a justo título, como que habían sido otorgadas por cartas de concesión. Otros estados sostenían que habiendo todos sacrificado sangre y dinero en común para obtener su independencia, el terreno asegurado por el tratado de paz con Inglaterra pertenecía a todos los Estados en común, y debía quedar a disposición del Congreso para el bien común. Nueva York cedió al fin en 1781. Virginia siguió su ejemplo, y por subsiguientes sesiones Massachusetts en 1785 y Connecticut en 1786. En Carolina y Georgia, en épocas posteriores, quedó agotada esta fuente de discordia nacional... “Ya no es sólo una esperanza, decía con este motivo el *Federalist*, en 1788, que el territorio del Oeste sea una mina de riqueza para los Estados Unidos”. Muy explicativa de esta cuestión es el acta de sesión de North Carolina, que empieza así:

“Nos, los abajo firmados, Samuel Tohnston y Benjamín Hawkins, Senadores en el Congreso de los Estados Unidos de América, debida y constitucionalmente elegidos por la Legislatura del Estado de North Carolina,

a todos los que las presentes vieren salud:

“Por cuanto la Asamblea General del Estado de North Carolina el... de diciembre de 1799 sancionó una acta titulada: “Una acta para el objeto de ceder a los Estados Unidos de América ciertas tierras noroeste, en ella descritas, en las siguientes palabras, a saber:

“Por cuanto los Estados Unidos reunidos en Congreso han recomendado frecuente y encarecidamente a los respectivos Estados de la Unión que pretenden tener o poseer territorios vacantes hacia el Occidente, tanto para apresurar el pago de la deuda pública, como para establecer la buena armonía de los Estados Unidos; y deseando también los habitantes de dichos territorios occidentales que se haga dicha sesión, a fin de obtener



más amplia protección que la que ahora reciben; y este estado además deseando hacer plena justicia a los acreedores públicos, como también contribuir a la buena armonía de los Estados Unidos, y cumpliendo con los razonables deseos de sus ciudadanos, *Ordena que la General Asamblea de North Carolina*, que los Senadores de este estado en el Congreso de los Estados Unidos, o uno de los Senadores y uno de los dos representantes de este Estado en el Congreso de los Estados Unidos, quedan por ésta autorizados, con poder para hacerlo, y son requeridos para que hagan escritura o escrituras, de parte de este estado, cediendo a los Estados Unidos todo derecho, título, pretensión que este estado tenga a la soberanía y territorio de las tierras situadas en los límites que por carta corresponden a este Estado, al Oeste de la línea que principia sobre la cumbre de Stone Mountain... etcétera, etc.

El lenguaje de todas las Constituciones de los Estados hablando de destino de tierras públicas es siempre "las tierras concedidas o que hubieren de conceder los Estados Unidos", y en la legislación sobre escuelas y educación superior vense con frecuencia vastas extensiones de tierras concedidas por el Congreso para los objetos especiales indicados, a fin de crear fondos permanentes para su sostén en cada uno de los estados particulares. Cuando el Congreso hubo adquirido la administración de aquel caudal inmenso de terrenos que abrazan toda la extensión del continente, tocando en ambos mares, trazáronse principios fijos para su enajenación, de los cuales no se ha separado un momento (1). Como este es un punto de la más grave trascen-

(1) Las tierras pertenecientes hoy al gobierno general están situadas 1º En los límites de los Estados Unidos, tales como quedaron definidos por el tratado de 1783, y están comprendidas en los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y la parte de Minnesota al Este del Mississippi.—2º En los territorios de Orleáns y Luisiana adquiridos de Francia en 1803, incluyendo la porción de los Estados de Alabama y Mississippi al 31º Sud del Mississippi; y toda la Luisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, y la porción de Minnesota al Oeste del Mississippi.—El territorio Indio, y el distrito llamado Nebraska, el territorio del Oregón, y el territorio entre Oregón y Minnesota entre los 43º y 49º de latitud norte.—3º En el territorio de la Florida, obtenido de España por el tratado de 1819.



dencia para la futura población y desenvolvimiento de la riqueza del país, daremos una breve reseña de las disposiciones definitivas de esta ley, revisada varias veces y últimamente corregida en 1841, que es como rige actualmente. Hasta 1820 se vendieron tierras a plazos; pero la experiencia adquirida aconsejó no hacerlo en adelante sino por dinero contante, fijándose el precio del acre en un dólar y cuarto, por mínimun para la pública subasta (como a 5 pesos cuadra). Las tierras federales, antes de ser puestas en venta, son cortadas, sobre el plano de catastro y sobre el mismo suelo, en cuadrados que tienen una milla. Esto se llama la *sección*. Se la subdivide en cuartos de sección, y este forma el lote de tierras que se pone en pública subasta. No se puede adquirir menos de un cuarto de sección, ni tampoco se deja en libertad de acumular grandes porciones de terreno en unas solas manos. Los efectos prácticos de este sistema se harán más sensibles mostrando las propiedades rurales o quintas en cultivo que hay en varios estados. La provincia de Buenos Aires con cincuenta y dos mil millas de país llano está dividida en poco más de mil propiedades rurales, y el resto del territorio de la República Argentina que reconoce propietarios sigue o debe seguir la misma proporción. La Georgia con 58,000 millas tiene 51,759 propiedades territoriales en cultivo. Kentucky, con 40,050 millas de territorio, tiene 74,777 propietarios de terrenos. Tennessee, con 45,000 millas, 72,710 propiedades rurales. Maine, con 28,920, 46,769. Ultimamente Massachusetts, con 7,800 millas, tiene nada menos que 34,235 *farms* o chacras en cultivo. En todos estos países hay, sin embargo, tierras aun incultas.

Puede chocar a nuestras ideas de ocupación de la tierra y división por leguas esta mezquindad y pequeñez de las propiedades territoriales de los Estados Unidos; pero con aquella pe-

—4. En Nuevo Méjico y California, según el tratado de 1848. El área entera del dominio público, fuera de las tierras del Oregón, California, Nuevo Méjico, Utah y los territorios Indio y de Nebraska, sábase por datos seguros que abraza 424, 103, 750 acres. Como una cuarta parte de este territorio ha sido ya vendido por valor de 133, 339, 879 pesos. El producto neto de la venta de tierras públicas en estos últimos cincuenta años ha sido de un millón de pesos un año con otro.



queñez calculada sabiamente se aviene la riqueza pasmosa de aquel país, su rápido engrandecimiento y el acrecentamiento instantáneo de población. Hemos citado estados nuevos y estados antiguos para mostrar que en todos guardan la misma proporción las divisiones territoriales. Ellas son la obra de la ley y de la prudencia y sagacidad del congreso para descubrir el verdadero secreto de la creación de estados que cada año vienen a incorporarse a la Unión. La República Argentina no ha visto agregarse una sola provincia, ni poblarse sino el sur de Buenos Aires en estos últimos años, mientras se despoblaba de cincuenta leguas por todo el frente que desde el Atlántico hasta los Andes abraza la frontera. Las rentas que al gobierno federal produce la venta anual de tierras es de cosa de un millón de pesos, como hemos dicho. La cantidad de tierras vendidas en los 23 años últimos dan un promedio de más de dos millones y medio de acres al año. Para tomar tierras del estado en los Estados Unidos no se exige formalidad ninguna. Basta ocupar el lote que se quiera para tener derecho de *preemption* sobre él, y darse un poco de tiempo para efectuar el pago. Los títulos se regularizan después, obteniéndolos de la oficina de tierras de Wáshington. En los Estados hay agentes de tierras públicas que ponen en venta tierras, reciben el dinero y dan boletos de posesión que equivalen a títulos, que son registrados después en la oficina de Wáshington.

Los principios en que esta legislación se funda son el fruto de una larga experiencia, en la que los Estados Unidos son el único país colonizador que haya sabido aprovechar con fruto del recurso inmenso que un estado americano posee en las tierras baldías para asegurarse un porvenir de poder, de población y riqueza, que lo exalte en pocos años de la nada al rango de una gran nación. Vamos a exponerlos brevemente, para que se tengan presente en la legislación de la enajenación de las tierras baldías de dominio nacional, según queda indicado en la Constitución. Las tierras baldías pueden ser un disolvente de la sociedad, o una fuente de engrandecimiento, según la manera de enajenarlas.

Desde luego, el primer elemento de prosperidad para la colo-



cación de las tierras son las instituciones políticas, que como las de los Estados Unidos cuadren a las ideas de los emigrantes. Sin libertad de cultos y sin derechos políticos que aseguran la libertad, la vida, la propiedad, el movimiento, los inmigrantes se ocuparán de negocios y artes en los puertos y costas, contando realizar sus provechos para regresar a su país nativo; pero para emprender labrar la tierra, que es un antecedente y un reato que liga al suelo, es preciso que amen ese suelo, y que el porvenir para sí y para sus hijos se les presente tranquilo, risueño y feliz. Todos los Estados sudamericanos poseen tierras baldías, y no han logrado atraer, si no es a sus puertos, emigrantes de los que en número de 300.000 van anualmente y espontáneamente a los Estados Unidos.

2º No se han concedido tierras gratuitamente, porque esta circunstancia les quita todo valor a los ojos de los mismos agraciados, siendo condición de la propiedad que su mérito esté en el precio que cuesta y puede reintegrarse.

3º No han dado a plazos ni con condiciones, que dejan incierto el derecho perfecto de propiedad que sólo nace de la compra.

4º No se enajenan tierras sino después de mensuradas exactamente y divididas en lotes y porciones, que antes de dar el derecho de propiedad aseguren las vías de comunicación, y dejen reservas para objetos de utilidad pública.

5º Se ha fijado el precio de un peso y 25 centavos por el acre, medida que equivale a un solar, fijando este precio, subido para los que querrían acumular tierras sin ánimo de cultivarlas, y bajo lo suficiente para ponerlo al alcance de los hombres de trabajo que con sus ahorros quisieran afincarse.

6º Se ha fijado por lote para la venta de las tierras una porción de un cuarto de milla o un octavo, de manera que el trabajo personal del comprador baste para rozarlas y hacerlas productivas en pocos años.

Las consecuencias de este sistema han sido las más benéficas. No hay en los Estados Unidos una clase del pueblo, destinada como entre nosotros al proletariado, y como consecuencia a la



miseria, a la dependencia, a la degradación y el vicio. El salario, muy subido, a causa del corto número de hombres que quieren trabajar para otros, no es más que el medio de ganar los 51 pesos que cuesta el más pequeño de los lotes que se venden. Así la tierra está al alcance de todas las fortunas, y cada año emigrando del Este al Oeste la población joven y los inmigrantes europeos, se afincan en número de cien mil al año, produciendo esta vegetación y yuxtaposición de nuevos estados que de trece que eran al principio, cuenta hoy treinta y dos, y cuatro territorios a punto de florecer en estados.

7º La tierra poseída con título de propiedad paga contribuciones públicas que serian onerosísimas, estando impuestas sobre el acre, división pequeña, si el propietario quisiese conservarlas sin cultivo.

8º Las facilidades dadas a la adquisición de la tierra estimulan a adquirirla. Basta presentarse en una oficina de venta de tierras, designar el número del lote que se desea adquirir, recibir un boleto de consignación del valor y entrar sin más trámite en posesión del terreno. Todavía hay el medio expeditivo de principiar por apoderarse del terreno, lo que da derecho de preempción en favor del ocupante. Hay por todas partes tierras medidas, y Oficinas y Agentes de tierras del Estado.

En todas estas disposiciones, y otras que omitimos, la federación obra como distribuidora de la materia primera de la sociedad y de la propiedad, que es el suelo. Cuida de que haya para todos, evitando el proletariado hereditario; pone tierras en venta en diversos puntos y en cierta proporción al año, con lo que consigue llevar la población al interior, dejando al interés individual buscar las condiciones de viabilidad, exportación fácil y demás circunstancias que contribuyen a hacer provechoso el trabajo, y guarda además su parte de tierras a las generaciones sucesivas. El agiotaje de tierras, la acumulación en pocas manos, encuentran en la ley trabas y remedios. La explotación de grandes extensiones de terreno para aprovechar las yerbas que nacen espontáneamente no tiene lugar sino en reducida escala y en



parajes inútiles para culturas, tales como las *sabanas* y los terrenos cenagosos.

Todos los pueblos colonizadores que se han desviado de este sistema han tocado a poco en inconvenientes, que en algunas partes han producido no sólo la despoblación y la barbarie, sino que han parado en verdaderos desastres. Tales son los ocurridos en las pampas argentinas, y en el cabo de Buena Esperanza.

La colonización inglesa ha pasado por los mismos embrazos. La población que se mandaba al Canadá dándole tierras gratis pasaba el San Lorenzo y los Lagos para ir a establecerse en los Estados Unidos, donde necesitaban comprar la tierra. Grandes concesiones de terreno en este punto como en South Wales, la tierra de Van Diemen, Swan River, etc., no produjeron resultado próspero alguno, como no habían, en las colonias primitivas de los Estados Unidos, producido las vastas concesiones de terreno. En 1830 Inglaterra adoptó el sistema de colonización norteamericano, y sus resultados han justificado la reforma.

Tan celosos son de estos principios los estadistas americanos, que uno de ellos se lamentaba de su violación aun allí mismo. "Los ciudadanos de los Estados Unidos, decía el autor de *England and America* en 1836, forman hoy una sociedad más dispersa que en el tiempo de Franklin. Cuando Jefferson escribió la declaración de la Independencia, el vasto territorio al Oeste de los Alleghanies apenas se había abierto a nuevos establecimientos. Wáshington se hizo soldado en las luchas con los indios al Occidente de la Virginia, que es ahora la frontera oriental de estados más extensos que las antiguas colonias. Wáshington predijo muchas veces algunos de los males que resultarían de extenderse demasiado hacia el Oeste, a menos de que los Estados del Este y los del Oeste estuviesen ligados por canales y buenos caminos. Sus anuncios fueron olvidados hasta ahora poco, cuando los estados orientales empezaron a alarmarse con el aumento de emigración al Oeste. En aquellos estados, formados de las antiguas colonias, se habla ahora de la inspiración de Wáshington, y se muestran ansiosísimos de establecer medios de comu-



nicaciones con los establecimientos del Oeste; pero les será difícil remediar su propio error. De ellos eran las tierras baldías del Oeste, que pudieron manejar de una manera más ventajosa; pero sólo trataron de satisfacer su vanidad nacional extendiendo la superficie de los Estados Unidos. El resultado es que la población se ha diseminado, no sólo a medida del crecimiento, sino mucho más: que hay menos población en la milla cuadrada, que cuando era sólo una cuarta parte del número actual de habitantes; y que este menor número de población en proporción a la tierra, estando separados unos de otros por mayores distancias, no están también provistos de los medios de intercurso social”.

Hemos creído oportuno poner estos antecedentes para entrar en la cuestión que suscita el texto de la Constitución sobre tierras de propiedad pública. De ellos resulta: 1º que debe en principio aplicarse este nombre a todas las que pertenecían a la corona de España al tiempo de la emancipación de las colonias, adquiridas con la independencia, por la sangre y el dinero de todos los argentinos, y por tanto propiedad común de la Nación, aplicable al bien general, cualquiera que sea el punto del territorio en que estén ubicadas.

2º Que para remediar los males del desorden producido por el antiguo sistema de colonización, debe regir una legislación común a todas las tierras dependientes de un centro común, y sometidas a la dirección exclusiva del Congreso, a fin de que pueda hacer a las mismas provincias concesiones de terrenos, y evitar el desparramo que el favor puede hacer de este tesoro común, y sólo útil por un prudente y económico manejo. En Gobiernos mejor organizados que el nuestro, el abuso de las tierras baldías se ha perpetuado hasta estos últimos tiempos, ya por los cambios de ideas de los ministros, u otras causas menos justificadas. Mr. Ellice, ministro de guerra en Inglaterra, informaba a una comisión del parlamento que en el Canadá “se habían hecho inconsiderada y desastrosamente cesiones de tierras, en masas enormes, a personas ligadas al Gobierno, con gran daño del país, y mayor perjuicio de los habitantes de los alrededores”; que las tierras habían sido concedidas en grandes masas “desde



que era costumbre de cada *consejero u oficial del Gobierno* tomar cesiones de cinco mil a veinte mil acres” y “que muchos de aquellos concesionarios estaban ausentes y otros eran gobernadores de la colonia”.

Las legislaturas de las provincias no tienen interés alguno en que la administración de la parte de tierras públicas incluidas en sus demarcaciones salga de la masa común de la administración de las tierras generales, pues su valor rentístico depende del que se les designe por precio de venta, y es un hecho constante en todas las provincias que las tierras se dan por el favor, o se adjudican a vil precio.

Pueden, pues, definirse así las tierras de dominio nacional:

- 1º Las que existen incultas y sin título de propiedad en las provincias.
- 2º Las que se extienden al Sur de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta el Río Negro. La Patagonia, cuya soberanía pertenece a la República Argentina.
- 4º Los territorios comprendidos bajo el nombre general del Gran Chaco.

De las leyes, pues, que el Congreso dicte a este respecto depende el porvenir, la tranquilidad y el engrandecimiento de la Confederación. Pueden a su impulsión brotar nuevas provincias; pueden extenderse a mayor escala las causas de miseria, de despoblación, de ignorancia y disolución que labran hoy las entrañas de la parte ya poblada. El Congreso de los Estados Unidos fijó este grave punto por su famosa ordenanza de 1787, que ha sido después el modelo de todos los gobiernos territoriales, y tan notable por la concisión y exactitud de su texto, como por su bella exposición de los principios fundamentales de la libertad civil y religiosa. — Esta ordenanza prescribe la igualdad de derechos en la herencia. Confía, mientras la población no pase de cinco mil habitantes, el gobierno a un gobernador y jueces de primera instancia dependientes del Congreso. Pasando de aquel número la población, se instituye una legislatura compuesta del gobernador, un consejo legislativo y una sala de Representantes. En seguida establece el bill de derechos y garantías del ciudadano, tales como las establece y asegura la Constitución de los Estados Unidos. Por otro artículo declara que el territorio y estados que



en él se formen permanecerán por siempre formando parte de la confederación, sujeto a la autoridad constitucional del Congreso; que los habitantes estarán sujetos a impuestos proporcionales para los gastos públicos; sin que las legislaturas del territorio puedan contrariar la primaria disposición del suelo, hecha por el Congreso, ni sus regulaciones, para asegurar sus títulos a los compradores. Provee además que no menos de tres ni más de cinco estados podrán formarse del territorio; y cuando alguno de ellos contenga 60.000 habitantes, podrá ser admitido, por sus delegados, en el Congreso, bajo el mismo pie de igualdad con los estados originales, en cualquier respecto, hallándose desde entonces en libertad de formar una constitución permanente, y un gobierno de estado, con tal que sea republicano y en conformidad con los artículos de aquel convenio. Por fin excluye la esclavatura.

“Tal es el breve bosquejo, añade el Juez Story, de quien extractamos estos rasgos generales, de aquella famosísima ordenanza, cuyos efectos sobre los destinos del país han sido ya abundantemente demostrados en el territorio, por una prosperidad y rapidez de población casi sin ejemplo, por la formación de gobiernos republicanos y por un ilustrado sistema de jurisprudencia. Ya tres estados que componen una parte de aquel territorio han sido admitidos en la Unión; y otros marchan rápidamente al mismo grado de dignidad política”.

“Bajo estas disposiciones, añade, no menos de once estados, en el espacio de poco más de cuarenta años (ahora diez y ocho), han sido admitidos en la Unión, en un pie de igualdad con los estados primitivos. Y no se necesita de un espíritu profético, para predecir que en unos pocos años más el predominio del número, de la población y del poder pasarán infaliblemente de los antiguos estados a los nuevos. Ojalá que siempre sea de hecho, verdadero el patriótico deseo, *felix, prole parens*”.

No abandonaremos este interesante punto sin insertar aquí los puntos más esenciales de las numerosísimas leyes que el Congreso americano ha ido dictando sucesivamente para la mensura, distribución y venta de las tierras públicas; pues que para



nosotros ahí está el secreto de la grandeza creciente de aquella federación y la miseria y disturbios de la nuestra.

Un acta proveyendo a la venta de las tierras de los Estados Unidos, en el territorio Noroeste del río Ohio, y arriba de la boca del río Kentucky (1).

SECCION 1. *El Senado y Sala de Representantes de los Estados Unidos*, reunidos en Congreso, *decretan*: Que se nombre un agrimensor general, cuyo deber será tomar a su servicio un número suficiente de ingenieros como sus tenientes, a quienes hará que sin demora midan y señalen los indeterminados límites de las tierras al noroeste del río Ohio, y sobre la boca de Kentucky, en donde se han extinguido los títulos de los indios, y dividirlos de la manera que se prescribirá en adelante. Tendrá autoridad para hacer reglamentos e instrucciones para el gobierno de sus empleados, hacerles prestar el juramento necesario y deponerlos por mala conducta o negligencia en sus funciones.

SECCION II. *Decretan, además*: Que la parte de dichas tierras que no haya sido ya enajenada por letras patentes, o dividida en cumplimiento de una ordenanza del Congreso, sancionada el 10 de mayo de 1785, y que no hayan sido hasta aquí, o durante las sesiones del congreso, destinadas a gratificaciones militares u otros objetos, serán divididas en líneas de norte a sur siguiendo un meridiano, y por otras cruzándolas en ángulos rectos, de manera de formar municipios de seis millas cuadradas, a no ser que la línea de la última compra a los indios, o los paños de tierra hasta aquí medidos y concedidos, o el curso de los ríos lo hagan impracticable; que sólo entonces será permitido separarse de estas reglas. Las esquinas de los municipios serán marcadas desde el principio con números progresivos; cada distancia de una milla entre dichas esquinas será también distintamente señalada con marcas diferentes de las de las esquinas. Una mitad de dichos municipios, tomándolos alternativamente, será subdividida en secciones, conteniendo, en cuanto sea posible, 640 acres cada una, corriendo una línea paralela de ambos lados, al fin de cada dos millas; y marcando una esquina en cada una de las dichas líneas al fin de cada milla; las secciones serán numeradas respectivamente, principiando con el número uno en la sección nordeste y procediendo al oeste y al este alternativamente, por medio del municipio con números progresivos, hasta completar treinta y seis. Y será del deber

(1) The Statutes at large of the United States of America from the organization of the government, etc., and copious notes of the decisions of the courts of U. S., etc.



de los ingenieros enviados, respectivamente, hacer que se marquen en un árbol próximo a las esquinas hechas como se ha dicho, y dentro de la sección, el número de dicha sección y más arriba el número del municipio en que dicha sección haya sido hecha; y los dichos enviados anotarán cuidadosamente, en sus respectivos libros de campo, los nombres de los árboles esquineros marcados, y los números puestos como queda dicho.

Las partes fraccionales de municipios serán divididas en secciones, del modo indicado y las fracciones de secciones quedarán anexas a ellas, y serán vendidas con la adyacente sección entera. Todas las líneas serán claramente marcadas en los árboles, y medidas con cadenas de dos perchas de seis pies y medio cada una, subdivididas en veinte y cinco eslabones iguales, y la cadena será sometida a un padrón para el objeto. Cada ingeniero anotará en su libro de campo la verdadera situación de todas las minas, criaderos de sal, fuentes saladas, y heridos de molino que lleguen a su conocimiento: todos los cursos de agua sobre los cuales pasa la línea que traza; y también la calidad de las tierras. Estos libros de campo serán remitidos al Agrimensor General, que hará hacer por ellos una descripción de las tierras mensuradas, para ser transmitidas a los empleados que hayan de presidir a la venta. Mandará también por ellos plano exacto de los municipios y fracciones de municipios contenidos en las dichas tierras, describiendo sus subdivisiones y las marcas de las esquinas. Este plano será registrado en libros que se tendrán para el efecto: una copia de los cuales estará abierta, en la oficina del Agrimensor General, para información del público, y las otras copias serán enviadas a los lugares de venta, y al Secretario de la Tesorería.

SECCION III. *Decrétase además:* Que una fuente salada que se encuentra en una caleta que desagua en el río Sciota del costado del Este, con un número de secciones contiguas que compongan un municipio, cualquiera otra fuente salada que se descubra, con la sección de una milla cuadrada en que esté incluida, y también cuatro secciones en el centro de cada municipio, conteniendo cada una una milla cuadrada, serán reservadas, a la futura disposición de los Estados Unidos.

SECCION. IV. *Decrétase además:* Que cuando se hayan medido siete hileras de municipio abajo del gran Miami o entre el río Sciota, y la compra de la compañía del Ohio.... y se hayan levantado y tramitado los planos, en conformidad a lo proveído en esta acta, las dichas secciones de seiscientos cuarenta acres (excluyendo las reservadas) serán ofrecidas en venta, en pública almoneda, bajo la dirección del Gobernador o secretario del Territorio del Oeste, y el Agrimensor General; las que están situadas más abajo del Gran Miami serán vendidas en Cin-



cinnati; las que están entre el Sciota y la compra de la compañía del Ohio en Pittsburg... y los municipios restantes serán ofrecidos en venta, en el asiento del gobierno de los Estados Unidos, bajo la dirección del Secretario de la Tesorería, en porciones de un cuarto de municipio los situados en las esquinas de ellos, excluyendo las cuatro secciones centrales, y las otras reservas arriba mencionadas: *Con tal que* parte alguna de las tierras ofrecidas en venta sea vendida por menos de dos pesos por acre (después se bajó a \$ 1.25).

SECCIÓN. V. *Decrétase además:* Que el Secretario de la Tesorería, después de haber recibido los dichos planos, pondrá aviso, en un periódico de cada uno de los Estados Unidos, de los territorios norte y sur del Ohio, avisando el tiempo de la venta; la cual no se hará antes de dos meses, contando desde la fecha del aviso; y las ventas en los diferentes lugares no comenzarán sino un mes después una de otra. Y cuando el Gobernador del territorio del Oeste, o el Secretario de la Tesorería juzgasen necesario aplazar o suspender las ventas bajo su dirección, respectivamente, por más de tres días, en algún tiempo, se dará aviso por los diarios de tal suspensión, y en qué tiempo habrán de comenzar las ventas de nuevo.

SECCION VI (disposiciones idénticas para la venta de otras tierras ya mensuradas).

SECCION VII. *Decrétase además:* Que el más alto postor, por algún pedazo de tierra vendido en virtud de esta acta, depositará al tiempo de esta venta la vigésima parte del monto del valor de la compra; el cual será descomisado, si la mitad de la suma pujada, incluyendo esta vigésima parte, no fuese pagada a los treinta días al Tesorero de los Estados Unidos, o a la persona que fuese nombrada por el Presidente de los Estados Unidos, para asistir a los lugares de venta con aquel objeto: y sobre el pago de una mitad del valor de la compra el comprador tendrá un año de crédito por el resto; y recibirá del Secretario de la Tesorería o del Gobernador del Territorio del Oeste (según sea) un certificado describiendo la tierra vendida, la suma pagada a cuenta, el saldo debido, el tiempo cuando ha de pagarse dicho saldo; y el todo de la tierra será descomisado si el saldo no fuese pagado; pero si fuese debidamente pagado, el comprador, o su agente u otro representante legal, tendrá derecho a un título por dicha tierra. Y al pago del dicho saldo al Tesorero, en el tiempo especificado, y presentando al Secretario de Estado recibo de ello, sobre el dicho certificado, el Presidente de los Estados Unidos queda autorizado para otorgar título por las tierras al dicho comprador, sus herederos o apoderados. Y todos los títulos serán refrendados por el Secretario de Estado, y tomada razón en su oficina. Pero si hubiese de-



fecto de alguno de los pagos, la venta será nula, todo el dinero pagado hasta entonces a cuenta de la compra será adjudicado a los Estados Unidos, y volverá a disponerse de las tierras así vendidas, como si tal venta se hubiese hecho. *Ordenándose, sin embargo*, que si algún comprador pagase de contado todo el valor de la tierra, cuando hubiese de efectuar el pago de la primera mitad, tendrá derecho a una deducción de diez por ciento, sobre la parte que se le hubiere dado a plazo; y el título se le expedirá inmediatamente (corregido después, haciendo todas las ventas al contado).

SECCION VIII. *Decrétase además*: Que el secretario de Tesorería y el Gobernador del territorio Noroeste de Ohio, respectivamente harán llevar libros en que se registren con regularidad: una relación de las fechas de todas las ventas efectuadas, la situación y número de los lotes vendidos, el precio a que cada uno fué rematado, el dinero depositado al tiempo de la venta y las fechas de los certificados otorgados a los diversos compradores..... Y todas las porciones de tierra vendidas según esta acta serán anotadas sobre el plan general, después que haya sido otorgado certificado al comprador.

SECCION IX. *Decrétase además*: Que todos los ríos navegables incluidos en el territorio de que esta acta dispone serán considerados siempre caminos públicos, y que en todos los casos en que los bordes opuestos de una corriente no navegable pertenezcan a personas diferentes, la corriente y el fondo serán comunes a ambos.

SECCION X a XI (disposiciones sobre salarios, y otras) *Mayo 18 de 1796*. Por un acta suplementaria de mayo de 1800 se permitió la venta de cuartos de sección de trescientos veinte acres, bajo las mismas condiciones.

Por ley de 5 de febrero de 1813, se concedió *derecho de preempción en la compra de tierras a ciertos pobladores* del territorio de Illinois, lo que se generalizó por ley y práctica a todos los demás territorios. Dice así la ley: "*El Senado y Sala de RR., etc., decretan*: Que toda persona o el representante legal de toda persona que habite actualmente, o haya cultivado una porción de tierra situada en alguno de los distritos establecidos para la venta de las tierras públicas, en el territorio de Illinois, cuya porción no sea legítimamente reclamada por otra persona, y que no haya abandonado dicho territorio; tal persona o su representante tendrá derecho a la preferencia para comprar a los E. U. en venta privada dicha porción de tierra, al mismo precio y en los mismos términos, bajo todos respectos, que haya sido o hubiere de ser dispuesto por la ley para la compra en venta privada de otras tierras en dicho territorio, al tiempo de hacer dicha compra. *Con tal que no se venda mas de*



un cuarto de sección a un individuo, en virtud de esta acta. y esta sea limitada a líneas divisorias y de sección que hubieren de tirarse, según la dirección del Inspector general de la división de las tierras públicas. *Con tal que* tampoco ninguna de las tierras reservadas por leyes precedentes, o tierras que se hubiesen destinado para vender en lotes de municipios, o fuera de lotes, se vendan en virtud de esta acta.

SECCIÓN II. Que toda persona que reclame preferencia en virtud de esta acta, para ser el comprador de una porción de tierra, hará su reclamo por escrito, ante el anotador de la oficina de tierras del distrito en que esté situada la porción de tierra, designando particularmente el cuarto de sección que pretende; debiendo el secretario de la oficina de tierras anotar en su registro, después de recibir del reclamante un vigésimo. Y en caso que a satisfacción del receptor de dineros de la oficina de tierras y del que lleva los registros, resultase que la persona que ha presentado su reclamo tiene derecho, según lo dispuesto por esta acta, a la preferencia en la compra de un cuarto de sección, tal persona tendrá derecho a que se le asiente en el registro de la oficina de tierras, presentando su recibo del receptor de dineros públicos, por una vigésima parte al menos del valor de la compra, como en el caso de otras tierras públicas vendidas en venta privada: *Con tal que* de todas las tierras que hayan de venderse según esta acta, sea tomada razón en los registros, por lo menos dos semanas antes de comenzar las ventas públicas, en el distrito en que están situadas; y toda persona que tuviese derecho a la preferencia en la compra de una porción de tierra, que descuide hacer tomar razón en el registro, en el tiempo prescripto, perderá su derecho, y la tierra que reclama será ofrecida en venta pública con las otras tierras públicas del distrito a que pertenecen.

Mayo 20 de 1826. *El Senado y Sala de Representantes de los Estados Unidos* reunidos en Congreso decretan: que para proveer al sostén de las escuelas en todos los municipios, o fracciones de municipio a los que no se haya concedido o apropiado tierras para aquel objeto, en aquellos estados en que la sección número diez y seis u otras tierras equivalentes está dispuesto por ley sea reservada para el sostén de escuelas en cada municipio o fracción de municipio, a los cuales no se hubiese destinado o concedido hasta aquí tierras con aquel objeto, se concederá la cantidad de tierra siguiente, a saber: por cada municipio o fracción de municipio, que contenga una cantidad de tierra mayor que tres cuartos de municipio, una sección: por un municipio fraccional (de menos de seis millas de costado) que contenga mayor cantidad de tierra que la mitad, y menos que las tres cuartas partes de un municipio, tres cuartos de sección (así disminuyendo..... etc.)



Febrero 15 de 1843.—*El Senado, etc.*, decreta: que las Legislaturas de Illinois, Arkansas, Luisiana y Tennessee sean como lo son por ésta autorizadas a dictar leyes para la venta y arriendo simple del todo o parte de las tierras hasta hoy reservadas y destinadas por el Congreso para el uso de las escuelas de dichos Estados, e invertir el dinero que de dichas ventas provenga en algún fundo productivo, cuyos productos serán por siempre aplicados, bajo la dirección de dichas Legislaturas, al uso y sostén de escuelas en los varios municipios, y distritos de campo para los cuales fueron desde el principio reservadas, y no para ningún otro uso o propósito cualquiera. *Con tal que* dicha tierra o una parte de ella, en ningún caso será vendida sin el consentimiento de los habitantes de tal municipio o distrito, obtenido de la manera que las legislaturas de los mencionados Estados ordenen por una ley; y en la distribución de los productos del dicho fondo, tendrá derecho cada municipio y distrito, a aquella parte, y no más, que habrá provenido de la suma o sumas de dinero provenientes de la venta de las tierras de escuelas pertenecientes a dicho municipio o distrito.

SECCION. II. *Decreta además*: Que las Legislaturas de dichos Estados sean, como por ésta son, autorizadas a dictar las leyes y reglamentos necesarios que juzguen oportunos para asegurar y proteger de daño o desperdicio las secciones reservadas por el Congreso, para el uso de las escuelas, en cada municipio, y dictar leyes, si no se creyere oportuno vender, para arrendarlas por un término que no exceda de cuatro años, de manera de hacerlas productivas, y más conducentes al objeto para que fueron designadas.

SECCION. III *Y ordena además*: Que si lo que dicho fondo producir para un municipio o distrito fuese insuficiente para el sostén de sus escuelas, dichas Legislaturas procederán igualmente invirtiendo dicho producto de la manera más productiva y segura, hasta que el total producto del fondo perteneciente a dicho municipio o distrito sea adecuado al permanente mantenimiento y sostén de sus escuelas. *Con tal que* las antedichas Legislaturas en ningún caso empleen los productos de la venta de las tierras en algún municipio o distrito, sin el consentimiento de los habitantes de él, que debe obtenerse como antes se ha dicho.

SECCION. IV. *Y ordena además*: Que cualesquiera ventas de dichas tierras reservadas como queda dicho, que hayan sido efectuadas según leyes dictadas por las Legislaturas de dichos Estados, y que no sean inconsistentes con los principios de esta acta, son por esta ratificadas y confirmadas, en cuanto pueda ser necesario para su confirmación el asentimiento de los Estados Unidos.



Un acta para apropiar los productos de la venta de las tierras públicas, y conceder derechos de preempción, septiembre 4 de 1841.

El Senado Y Sala de Representantes, etc., Que, desde el 30 de diciembre de 1841 en adelante, se conceda y pague a cada uno de los Estados de Ohio, Indiana, Illinois, Alabama, Missouri, Mississippi, Luisiana, Arkansas y Michigan a más de lo que cada estado tiene derecho por los términos de los contratos celebrados entre ellos y los Estados Unidos, a su admisión en la Unión, la suma de diez por ciento del producto líquido de las ventas de tierras públicas, que, después del día arriba dicho, se hicieren en los límites de cada uno de los Estados respectivamente.....

SECCION II. Que después de deducir el dicho diez por ciento, y lo que, por los contratos arriba dichos, ha sido hasta ahora concedido a los dichos estados, el residuo del producto líquido (cuyo líquido producto será considerado, después de deducir del producto total todos los gastos del año para los objetos siguientes: Salarios y gastos de cuenta de la Oficina General de Tierras; gastos de mensuras de tierras públicas, salarios y gastos de las oficinas de Agrimensores Generales; salarios, comisiones, gratificaciones a los receptores y anotadores); el cinco por ciento a nuevos Estados, de todas las tierras públicas de los Estados Unidos, dondequiera que estén situadas, que se vendan después del dicho día 30 de diciembre, serán divididas entre los veinte y seis estados. El distrito Columbia, y los territorios de Wisconsin, Iowa y Florida, conforme a su población para la representación federal según el último censo, para ser aplicado por las legislaturas de dichos estados a mejoras interiores...

.

SECCION. VIII. Que se concederán a cada estado especificado en la primera sección de esta acta *quinientos mil* acres de tierra para objetos de mejoras interiores: *Con tal que* a cada uno, de los dichos estados que hayan recibido concesiones de tierras para dichos objetos no se les conceda más por esta acta que la cantidad necesaria para que, sumada con las ya recibidas haga los quinientos mil acres arriba dichos, eligiéndolos en cada Estado dentro de sus propios límites en la forma y manera que sus respectivas Legislaturas acuerden; y situadas en porciones conforme a las divisiones y subdivisiones seccionales, de no menos de trescientos veinte acres en un lugar, en cualquiera tierra pública; excepto



aquellas que están o sean reservadas de venta por alguna ley del Congreso, o decreto de Presidente de los Estados Unidos, cuyas locaciones puedan hacerse en cualquier tiempo después que las tierras de los Estados Unidos, en dichos estados respectivamente, hayan sido mensuradas, conforme a las leyes existentes. Y será, y es por ésta concedida, a cada nuevo Estado que en adelante sea admitido en la Unión, por el hecho de dicha admisión, tanta tierra como sea necesaria para completarle quinientas mil acres de terreno, con lo que para mejoras interiores hubiere recibido, mientras fué gobierno Territorial.

SECCIÓN IX. Que las tierras concedidas a los Estados arriba nombrados no serán vendidas por un precio inferior a un peso y veinte y cinco centavos, a menos que una ley de los Estados Unidos autorice lo contrario, y que el líquido producto de las ventas de dichas tierras sea fielmente aplicado a objetos de mejora interior en los Estados nombrados respectivamente; a saber: Caminos, ferrocarriles, puentes, canales, canalización; y tales caminos, ferrocarriles, canales, puertos y canalización: serán, cuando estén hechos, libres para el transporte de la mala de los Estados Unidos, y municiones de guerra, y el pasaje de sus tropas, sin pago de derecho alguno.

SECCIÓN X. Que desde la sanción de esta acta en adelante, toda persona cabeza de familia, viudo o soltero, de más de veintiún años de edad, y siendo ciudadanos de los Estados Unidos, o habiendo hecho registrar declaración de su intención de hacerse ciudadano, según lo requirieren las leyes de naturalización, que desde el 1 de junio de 1840, se haya establecido, o se estableciere en adelante en tierras públicas, sobre las cuales se hubiese ya extinguido el título de indios, y hubiesen sido mensuradas, antes de habitarlas y mejorarlas, y que hubiesen erigido en ellas habitaciones será y es autorizado a registrar en el registro de la oficina de tierras del distrito en que dichas tierras estén situadas, un número de acres por subdivisiones legales, que no exceda de ciento y sesenta, o un cuarto de sección de tierra, incluyendo la residencia del solicitante, pagando a los Estados Unidos el precio mínimo de dichas tierras, sujeto sin embargo a las subsiguientes limitaciones y excepciones: Ninguna persona tendrá derecho a más de un derecho de preempción en virtud de esta acta; ninguna persona que sea propietaria de trescientos veinte acres de tierra en cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos, y ninguna persona que deje o abandone su residencia en su tierra propia para residir en las tierras públicas en el mismo estado, adquirirá por esta acta derecho alguno de preempción; tierra alguna incluida en alguna reserva, por algún tratado, ley o decreto del Presidente de los Estados Unidos, o reservadas para salinas u otros



objetos; ni las tierras reservadas para el sostén de las escuelas.....
.....estarán sujetas a denuncia por las disposiciones de
esta acta (siguen otras disposiciones).

“Renta de correos”

El orden de las materias nos lleva necesariamente a tratar en este punto de la administración de correos, cuyas rentas forman según la Constitución, parte del tesoro nacional. Mezquino por demás sería su auxilio, si sólo se tuviese presente el estado actual de este ramo, que es una carga onerosa más bien que una fuente de renta para el Estado. Las pasadas tiranías han dejado hondos resabios que la Constitución se propone extirpar. La institución del correo es uno de los poderosos agentes de la civilización moderna; ellos llevan la vida y el movimiento a los ángulos más apartados de un estado; por ellos el pensamiento, los hechos, las ideas, los datos que interesan a la comunidad se difunden, haciendo partícipes de su conocimiento a los individuos de una nación, y confundiendo en un solo interés y en una sola familia a todos los pueblos de la tierra. Inglaterra sostiene el correo marítimo del mundo, y millones son consagrados a acelerar de un solo día el arribo de las malas de la India. Pero el correo no es una institución puramente material. No basta, más todavía, es inútil, establecer líneas de postas que atraviesen un país, y servir las con esmero y prontitud. No por eso abundarían las correspondencias. Es preciso además que los individuos de un país se crean tan seguros en el uso de la estafeta pública, que miren como no emanados de su mente sus pensamientos, mientras los renglones en que los estampan estén bajo el frágil pero inviolable sello de una carta, y no haya llegado ésta a la persona a quien se transmite. El correo es, pues, una institución de libertad, de conciencia y de fe pública, y estas bases son requisitas hasta para los desahogos domésticos, hasta para los asuntos puramente de negocio. Su falta reacciona sorda pero infaliblemente sobre los pueblos en masa; creando costumbres de reserva, de incomunicación, que al fin afectan al carácter



de los individuos, y se arraigan en las costumbres. Si el correo hubiese sido siempre inviolable en la Confederación Argentina; si jamás hubiese sido interrumpido, veinte años por lo menos de oscilaciones y trastornos se hubiesen ahorrado, y la mitad de las fortunas perdidas habrían tenido medios, ocasión y tiempo de rehacerse. Poner la mano en el correo es atacar en sus órganos vitales la vida y el desarrollo moral y material de los pueblos, no sólo por el mal inmediato e individual que trae, sino por las consecuencias funestas y las desconfianzas silenciosas que engendra. Los países que más prósperos marchan son los que más religioso respeto tienen por esta institución, y no se sabe sino de tres casos en Inglaterra en un siglo, en que, merced al *alien bill*, se haya violado la correspondencia, y esto sólo con extranjeros. Pero no hay país del mundo que haya obrado mayores prodigios en materia de celeridad, generalidad e inviolabilidad de la correspondencia que los Estados Unidos. La extensión de su territorio, lejos de ser un obstáculo al servicio del correo, es un estímulo para hacerlo más general y más rápido. Requiérelolo así la forma de gobierno; requiérelolo la administración, requiérenlo la libertad, la política, los partidos, la industria y el comercio. ¿De cuánto poder, si no, puede ser para un gobierno la facultad de repetir por el telégrafo eléctrico el discurso que está pronunciando el Presidente en las Cámaras, en veinte ciudades a un tiempo, hasta la distancia de doscientas leguas?

En la Federación Norteamericana la administración de correos está confiada a personajes de la más alta reputación. Franklin fué Maestre de Posta, y los que le han sucedido en este destino concurren con los demás ministros a los consejos del gobierno. Así, pues, el correo figura entre los poderes del estado, con la independencia y responsabilidad de administración de tanta consecuencia para la riqueza del país, la buena administración y la libertad de los ciudadanos. El Post Master General, que tiene su residencia en Wáshington, completa y realiza las disposiciones generales de la ley, establece rutas de posta, lugares de depósito y nombra correístas; con conocimiento del Presidente, puede reducir o aumentar el postaje de los efectos con-



ducidos por el correo para el extranjero, con el objeto de arribar a mejores arreglos postales, etc. (ley de marzo de 1851).

Con estos principios tan liberales y con esta preocupación constante de proveer de medios de comunicación a los puntos más distantes del territorio, con tal que haya una familia establecida, se ha logrado que el correo recorra diariamente 178,672 millas, con 4,765 contratistas, para el transporte de las malas, y 18,417 postas habilitadas. Tan sólo en el año 1850 se establecieron 1,979 oficinas nuevas de posta.

Si se considera lo que la mejora de las comunicaciones importa en la Confederación Argentina, se nos disculpará el que entremos en estos pormenores. Todo está por fundarse allí, y el correo tiene para hacerse una institución próspera, y proveer de una renta para el sostén del gobierno general, que pasar por grandes reformas, atraer más la atención de los hombres públicos, sacarlo de la condición servil en que yace su administración, y elevándola en la jerarquía social, reaccionar sobre la desconfianza pública, que lo ha hecho un vehículo infiel y traidor para quienes le confían sus intereses o ideas, y un servidor tardío y sujeto al capricho de las cavilosas de una política inmoral y arbitraria. La Constitución, señalando sus productos como renta nacional, ha querido que se pongan los medios de hacerlo productivo, y estos medios son familiares hoy a todos los pueblos adelantados, por el sistema de *postas baratas*, y previo franqueo, la regularidad infalible de su acción, y el cumplimiento religioso de la garantía constitucional que declara “inviolables el domicilio, la *correspondencia epistolar*, y los papeles privados.” Cumple insertar aquí la ley de Indias que garantizó la seguridad e inviolabilidad de la correspondencia en 1550, para vergüenza de los malvados que tres siglos después, como si la sociedad hubiese retrogradado, han abusado tan cínicamente de la confianza pública. “Los que llevaren de estos reinos cartas o despachos dirigidos a residentes en las Indias los den o remitan libremente a quienes los hubieran de recibir y no tengan obligación de manifestarlos ante ningún Goberna-



dor ni Justicia; y si Nos enviásemos algunas cartas o despachos a los Virreyes, audiencias o Gobernadores, u otras personas para nuestros Ministros y Oficiales, los entreguen y envíen a buen recaudo, y no los abran, lean, ni retengan en su poder, y la misma forma y puntualidad se observe en las que vinieren de las Indias, removiendo y quitando todo impedimento. para que la correspondencia con estos reinos sea libre y sin dificultad, *pena de que el que lo estorbase directa o indirectamente incurra en perdimiento de todos sus bienes para nuestra Cámara y Fisco, destierro de las Indias, y privación del Oficio, que de Nos tuvieren, en que le damos por condenado. Y mandamos que nuestras justicias cuiden del cumplimiento y ejecución*".

"Créditos y empréstitos"

Por las "demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso General", la Constitución entra de lleno en el poder general del Congreso de imponer contribuciones en proporción de las necesidades de la República, y sin limitación a fuente especial y determinada.

Como es de presumirse, la cláusula análoga de la Constitución norteamericana suscitó largos debates, enmiendas, limitaciones y amplificaciones. Eran los Estados de la Unión cuerpos políticos independientes, que sólo se habían asociado para parar a un peligro común, y que por medio de la Confederación, contaron conservar su independencia primitiva, y no ceder a un gobierno general, aun ya desengañados de la imposibilidad de aquel sistema, sino lo estrictamente indispensable para la seguridad común. Es curioso e instructivo el catálogo de redacciones y enmiendas del artículo que declaró definitivamente que el Congreso General tendría facultad para establecer impuestos, derechos, sisas y contribuciones para la defensa y para el bien general de los Estados Unidos. El proyecto de constitución decía simplemente. "La Legislatura de los Estados Uni-



dos tendrá facultad de imponer y recaudar contribuciones, derechos, impuestos y sisas”.

Propusieronse las enmiendas siguientes.... tendrá facultad para llenar los compromisos que ha contraído el Congreso, y satisfacer no sólo las deudas de los Estados Unidos, sino las contraídas por los diversos estados, en la última guerra para la defensa común y el bien general”. Otra... “para el pago de las deudas, y los gastos necesarios de los Estados Unidos, con tal que ningún impuesto, excepto los que sean apropiados al pago de intereses sobre deudas y empréstitos, continuará en ejercicio por más de... año”. Sería molesto repetir todas las modificaciones que experimentó hasta tomar la forma ilimitada que del derecho de imponer contribuciones tiene en la Constitución. Pero nos importa hacer conocer este antecedente para mostrar la pugna contra las facultades del Congreso que querían limitarse para ensanchar la de los Estados particulares, a punto de suscitarse dudas sobre si aquel poder dado al Congreso despojaba a los Gobiernos de los estados del derecho de imponer contribuciones. El Federalista, repugnando esta interpretación, decía: “No hay expresión alguna en el artículo que haga exclusivo de la Unión aquel poder. Como no hay otra cláusula independiente que prohíba a los Estados ejercer el mismo poder. Y en apoyo de los mismos principios añade Story: “Veráse que los gobiernos de los Estados tienen medios completos de protegerse; por cuanto si se exceptúa los derechos de importación y exportación (que la Constitución ha tomado de los Estados, a no ser que sea ejercido con conocimiento del Congreso), el poder de imponer contribuciones permanece en los Estados concurrente y coexistente con el del Congreso”.

Esta coexistencia de poderes iguales es lo que en efecto constituye el carácter propio del sistema federal.

Ultimamente, como fuente de rentas federales, nuestra Constitución indica las operaciones de crédito y empréstito que haga el gobierno con objeto de utilidad común. Obsérvese que el crédito no se ejerce sino pagando o asegurando el pago de lo



ya debido, y que la República Argentina antes de constituirse tiene contraídos compromisos solemnes tanto interiores como exteriores. La solicitud del congreso constituyente norteamericano, como se ha visto, al autorizar al gobierno federal a imponer contribuciones, se contrajo a proveerlo de medios para acudir "*al pago de las deudas*, y proveer a la defensa común y al bienestar general de los Estados Unidos". Estos mismos son los objetos del gobierno entre nosotros, y su atención debe así ser promediada entre el pago de las deudas y la promoción del bien general. Nuestra Constitución ha reconocido las deudas contraídas por Buenos Aires en las guerras que ha sostenido en nombre de las provincias y con autorización de ellas, ya por el Encargo de Relaciones Exteriores encomendado a su gobierno, como por las autorizaciones repetidas y sin limitación dadas por las provincias o sus régulos arbitrarios al gobierno arbitrario que sostuvieron y sancionaron.

La responsabilidad de las deudas contraídas es lo que constituye la nacionalidad de un gobierno; y como nadie puede pensar en mejorar su condición y hacer nuevos gastos sin saldar aquéllas, o darles garantías, las rentas de aduana, que son haber nacional; la venta de las tierras públicas, que son capital y bienes raíces poseídos por la nación; la renta de correos, y fuere productiva, y en déficit de todas estas rentas las contribuciones que imponga el Congreso deben, como en los Estados Unidos, ser destinados primero al pago de las deudas o su rédito y amortización, segundo al fomento del bienestar general.

Los Congresos Legislativos facultados para hacer operaciones de crédito y negociar empréstitos están por este mismo hecho facultados para determinar la naturaleza y extensión de la deuda pública y proveer a los medios de extinguirla.

CAPITULO VI



Art. 5. Cada Provincia confederada dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria gratuita. Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación. Bajo estas condiciones el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones.

Art. 61. El Congreso proveerá a la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el juicio por jurados.

Art. 64. Atribuciones del Congreso:

Dictar los códigos civil, comercial y penal, y de minería, y especialmente leyes generales para toda la Confederación sobre ciudadanía y naturalización, falsificación, etc.

Las constituciones de las provincias son una condición para la federación. “Bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”; y estas instituciones, a más de republicanas representativas, deben estar conformes con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución general.

Sencillísimos son los fundamentos para las constituciones exigidas, cuyos más notables lineamientos vienen ya trazados en la Constitución general a que han de conformarse. Nuestras observaciones no recaerán, pues, sobre los principios, sino sobre la manera de hacerlos efectivos y adaptarlos a la más limitada esfera de acción.



Muy luego de declarada la Independencia, las provincias se organizaron bajo el sistema representativo republicano, fundado en la elección, y en la renovación de los empleados públicos, sometiendo el poder ejecutivo a la dependencia de las legislaturas, de cuyas leyes debía ser simple ejecutor. La historia de treinta años, empero, ha dejado consignados dos resultados constantes. Los jefes de bandas que han trastornado la República sucesivamente han tenido por base las provincias, con mucha anticipación a la época en que el gobierno irresponsable y absoluto se hiciese general y se estableciese en Buenos Aires. Una vez establecida una tiranía, las Legislaturas provinciales han sido sin interrupción, sin distinción unas de otras, el instrumento pasivo y dócil de todos los caprichos del poder absoluto; autorizando y dando formas legales a sus violencias. Hombres honrados han entregado la fortuna, la vida, la libertad de sus conciudadanos a merced de quien ha querido exigirselos. De poco valor sería, pues, la condición requerida si los hechos hubieran de continuar ofreciendo la misma lamentable contradicción con las formas proclamadas. Convendría, por tanto, estudiar las causas de fenómeno tan constante, para ver si pueden ser destruidas o paralizadas.

Ya hemos indicado una, y es el aislamiento pesado de las provincias y las distancias enormes que las separan. Todo lo que en una de ellas se desenvuelve y consuma queda desligado de las demás; el que cae sucumbe, sin que nadie pueda prestarle ayuda. La opresión general que pesó a un tiempo sobre toda la República hacía abortivo el esfuerzo aislado para sacudirla, y los ciudadanos aceptaron la vida y la tranquilidad, a trueque de renunciar a toda acción e influencia en la dirección que la voluntad del tirano imponía a la República, apoyado en las tiranías provinciales. La elección, la prensa, la acción legislativa, lejos de ser un obstáculo, fueron desde entonces instrumentos que más que destruir convenía tener en ejercicio para cohonestar todos los atentados.

La constitución federal se propone remediar estos ma-



les: haciéndose solidaria en las provincias del respeto a las garantías y derechos que ella misma declara; haciendo insensiblemente nula toda absorción de poderes, y autorizando a los tribunales federales a entender en los conflictos de las autoridades provinciales. La organización general es por sí sola un amparo a las libertades provinciales; pues así como la tiranía general sofocaba la libertad que hubiera querido manifestarse parcialmente, así un orden regular de cosas en los negocios generales lleva su benéfica influencia a todos los extremos.

Pero fuera de estas causas exteriores hay otras internas que debemos apuntar. Los rudimentos de instituciones republicanas que poseen no eran, por lo visto, garantías suficientes ni para el orden ni para la libertad, y a poco de ponerse en juego flaquearon por sus vicios mismos. Dejamos a un lado que una buena porción de los vecinos huía de tomar parte en las agitaciones políticas, haciéndose un honor de su alejamiento voluntario de ellas. Sucede otro tanto y más aun con las masas populares, incapaces de ordinario de comprender los intereses públicos, ni de aficionarse por su gestión regular y pacífica. La serie de trastornos por que ha pasado el país; la íntima dependencia en que la fortuna, la vida, el reposo se han encontrado en los vaivenes políticos, han aumentado y aumentarán en lo sucesivo la solicitud de los vecinos sin distinción de edad ni condición para ocuparse de lo que prepara o aleja las calamidades de que luego son víctimas.

Dondequiera que la coerción ha cesado, se ha visto al pueblo acudir presuroso a los comicios electorales. Ha vístose más: y es acudir cuando había plena libertad y alejarse de ellos cuando la antigua coerción se reproducía; sin que falte ejemplo de que la intimidación haya sido vencida a despecho de sus amenazas.

La vida pública no la forman tanto las instituciones como los males que su falta hace sufrir. Todos los pueblos libres de los tiempos modernos han gemido bajo las más desordenadas



tiranías; y las guerras civiles que terminan por el despotismo no son tan definitivas como las que afianzan la libertad.

Veamos los medios prácticos como estas instituciones han funcionado. Acudamos a la raíz del árbol, la elección. No contemos por nada la intimidación que con el poder absoluto puede ejercer una minoría diminuta o un individuo; pero aun en el caso anormal de una mayoría real, las instituciones provinciales existentes no ofrecían garantía alguna para las minorías; y en los gobiernos democráticos ésta es la primera condición de libertad. Las juntas provinciales se componen de corto número de individuos; los jueces son amovibles o nombrados por cortos períodos; y ninguna autoridad hay que preexista o sobreviva a un cambio político en el ejecutivo. De estas causas ha nacido la falta de contrapeso a los poderes que tenían a sus órdenes la fuerza armada, y la subordinación inmediata de los poderes moralmente superiores, pero colocados en inferioridad por la falta de garantías. La elección de Representantes efectuada por listas generales en la mayor parte de una provincia o en toda ella aseguraba, por otra parte, la homogeneidad de la Legislatura, y bastaba que el ejecutivo lo deseara para introducir en su seno sus paniaguados y sostenedores. Así la historia de estos últimos años presenta el cuadro más vergonzoso que ha podido ofrecerse a la contemplación. Poderes legislativos a quienes se fingía tributar todo respeto, verdaderos rebaños reunidos en un redil y movidos en esta o en la otra dirección a voluntad de un pastor.

En las épocas de libertad, los poderes legislativos, como más inmediatamente representantes de la voluntad y opinión pública, tienden por avances sucesivos a ejercer un poder que puede llegar a ser arbitrario. La teoría ha abogado siempre por la representación única como más conforme con los principios; pero la experiencia de medio siglo de ensayos no ha dado hasta ahora resultado ninguno favorable. Una cámara única puede ser resguardada contra la coerción de otros poderes; pero nada hay que la salve de sus propios desbordes, desde que una mayoría



la domine, desde que una pasión de partido la ofusque; y son tan altos los intereses confiados a su guarda, que sus odios, sus aficiones o sus terrores pueden engendrar males que envuelvan en ruina a una parte de la población, o a toda ella a la larga. Atribuimos a esta causa la ineficacia de las Legislaturas provinciales para ejercer el bien y la triste parte que han tenido en los pasados males, autorizando y legalizando atentados que la razón y la conciencia desaprobaban. De aquí ha nacido el expediente de dividir las Legislaturas en dos cuerpos, compuestos de elementos diversos para que se contrabalanceen y corrijan recíprocamente. “La necesidad de un senado viene indicada por la propensión de todas las asambleas únicas y numerosas a ceder al impulso de pasiones violentas y a ser arrastradas a resoluciones destempladas y perniciosas”. Un senado añade una garantía más, tanto al orden contra el espíritu de facción, como a la libertad contra las tentativas de usurpación de poder, por requerirse la concurrencia de dos cuerpos distintos para consumar un designio de trastorno o de usurpación. Pero la mayor de todas las ventajas que un senado asegura es la capacidad y práctica adquirida en los negocios públicos por una más larga versación en ellos, corrigiendo así los defectos de precipitación y falta de conocimientos de los representantes, que, electos por el pueblo, traen deseos irreflexivos de mejora o pasiones del momento, y poco estudio de los asuntos mismos que los preocupan. Un senado además es en muchos casos un freno contra los extravíos de la opinión pública, como contra las influencias gubernativas, dos escollos de que debe huir la ley para ser justa y provechosa. ¿Cómo se consigue este resultado, con los hombres de un mismo país, y sujetos como los demás a las debilidades humanas? 1º Por el solo hecho de la separación en dos cuerpos. 2º Por la diferencia de edad requerida. 3º Por la mayor duración del término de sus funciones. 4º Por la manera paulatina de renovarse los miembros. 5º Por el corto número, lo que da más vigor a la resistencia.

Nuestros ensayos de gobierno representativo nos vinieron de los publicistas franceses, y desde los primeros tiempos de la revolución se han conservado hasta hoy aquellos embriones di-



formas. En épocas de crisis, un cuerpo legislativo único tiene las ventajas de sus mismos defectos, la energía y la unidad. Así el Congreso norteamericano que sostuvo la guerra de la independencia, la Convención francesa que combatió a la Europa entera, la Legislatura de Buenos Aires, que defiende sus instituciones hoy, han llenado su objeto admirablemente. Pero, por la misma causa, en épocas ordinarias son un instrumento demasiado altamente templado. En 1848 Francia volvió de nuevo a la unidad legislativa; y apenas terminada la constitución, un vuelco de la opinión trajo a sus propios enemigos a realizarla. Vióse desde entonces con escándalo la conjuración contra la constitución, el desprecio de la constitución en el seno mismo de la legislatura que ella había creado. Si hubiese quedado un senado de la época constituyente, las leyes atentatorias a la constitución habrían encontrado una barrera, y la constitución se habría salvado. Sea de ello lo que fuere, la verdad histórica es que no existe hoy república con una sola cámara, y que nosotros no debemos encargarnos de hacer a nuestras expensas nuevos ensayos, por ver si realmente no está el vicio en la institución misma.

Se ha observado que cámara de diputados y ejecutivo electos en una misma época traen al gobierno el espíritu de la mayoría que triunfó en las elecciones; por donde, sin estar la legislatura sometida al ejecutivo, participa de sus miras y las apoya por ser las de un partido. El senado, subsistiendo desde un periodo anterior, es una valla a los desmanes de los nuevos arribantes al poder, y un eslabón que liga la presente con la pasada administración, y le sobrevive para ir más tarde a corregir la petulancia del triunfo de una tercera entidad política. La circunstancia de sobrevivir al ejecutivo y de precederle en sus funciones, constituye la fuerza moral de este cuerpo, a la que se agregan la edad y posición social, de ordinario elevada, de los individuos que lo componen.

El hecho es que todos los estados norteamericanos han seguido este sistema de partición, tanto los antiguos como los modernos, y no han tenido ocasión de abandonarlo. Gran número de las constituciones han sido reformadas en varios puntos, me-



nos en éste, y la de Pensilvania, que bajo la influencia de Franklin constituyó una sola cámara, adoptó en 1838 el sistema general, mientras que no hay ejemplo de una legislatura única que haya llenado su misión.

Como las provincias para el cumplimiento de la prescripción de la constitución federal deben promulgar constituciones particulares, estas consideraciones, excusadas para otros fines, no lo son cuando las legislaturas son únicas en todas ellas. La experiencia pasada es un escollo de que debe huirse.

El otro vicio de las legislaturas, aunque sólo relativo, es en muchas provincias el corto número de sus miembros. Los cuerpos deliberantes requieren cierta masa para poder oponer diques a la seducción o a la fuerza. Nótase en los Estados Unidos una diversidad infinita en el número de Representantes. El Congreso federal se compone de 233 diputados, representando cada uno 93 mil habitantes, mientras que la Legislatura de Massachusetts cuenta 356 sobre una población de un millón escaso. Nueva York tiene 128 con tres millones de habitantes. (1)

(1) LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Estados	Población libre	Diputados	Senadores
31	21.832.621	233	62
Maine	583.088	151	31
Hampshire	317.864	286	12
Vermont	313.446	230	30
Massachusetts	994.271	356	40
Rode Island	147.555	69	31
Connecticut	370.604	215	21
New York	3.090.022	128	32
N. Jersey	489.466	58	18
Pensylvania	2.311.681	100	33
Delaware	90.619	21	9
Maryland	546.887	72	22
Virginia	1.231.870	152	50
N. Carolina	753.505	120	50
S. Carolina	514.409	224	45
Georgia	733.448	137	48
Florida	71.650	40	19



Estados	Población libre	Diputados	Senadores
Alabama	634.501	100	33
Mississippi	472.685	92	32
Luisiana	408.440	97	32
Tejas	166.064	66	21
Arkansas	190.847	75	25
Tennessee	906.840	75	25
Kentucky	912.788	100	38
Missouri	647.074	100	35
Ohio	1.997.031	66	22
Michigan	395.703	100	50
Indiana	988.734	75	25
Illinois	888.278	49	18
Wisconsin	304.226	39	19
Iowa	192.122	54	18
California	200.000	36	16
Columbia	48.000	(el Congreso)	
Minnesota	6.192	18	9
Nuevo Méjico	61.632	26	13
Oregón	20.000	18	9
Utah	25.000	26	13

Una observación muy importante debemos hacer, cuando se trata de dar constituciones a todas las provincias que componen la federación; y es la conveniencia de que no coincidan los términos de renovación de los poderes de unas con otras, ni menos con la renovación de la Presidencia o la Cámara de Diputados del gobierno federal, pues en tal caso serían envueltas en el mo-

Los Estados más pequeños, Delaware con 90.000.21.—Florida con 71.000.—40.

En casi todos reina la proporción de un Senador por tres Diputados — los hay de uno por dos — En N. York de uno por diez y lo mismo en Massachusetts.

Las Cámaras de Diputados se renuevan anualmente en 17 estados y en 18 cada dos años. El Senado tiene, respectivamente, el doble, excepto en Jersey y Pensilvania, que se renueva cada tres años, siendo de dos el término de la diputación. Los gobernadores son elegidos por un año en 6 de los antiguos estados, en doce por dos años, en cinco por tres años y en doce por cuatro, prevaleciendo este término en los Estados de reciente formación. Los salarios de estos funcionarios están entre 2000 y 3000 ps. — California 10.000 y Luisiana 6.000 son las únicas excepciones, y ocho estados de 1000 a 1500.



vimiento general y subordinados en la elección los intereses puramente provinciales, en la lucha de partidos nacionales. Este es otro de los elementos que mantienen la libertad en los Estados Unidos. Las renovaciones de los gobernadores de los Estados, por ejemplo, ocurren, diez en 1852, trece en 1853, seis en 1854, dos en 1851, y la del presidente en 1853 y 1857. Así, pues, las provincias pueden conservar su especialidad de Estados, sin ser sus movimientos administrativos meras escenas del drama de la política nacional. Hay una verdadera aritmética de garantías que debe tenerse en cuenta en los períodos de elección de diputados, senadores, gobernadores, y las elecciones generales de la federación.

Otro vicio de nuestras legislaturas ha sido la manera cómo se efectúan las elecciones, y la falta de realidad de la representación con respecto a las localidades. Verdad es que para *ubicar* la elección concurren dificultades generales a todas las provincias, compuestas por lo general de una ciudad en que está reconcentrada la parte inteligente y por posición o ideas menos dependiente de la voluntad ajena, y de villorrios y campañas que reciben la impulsión que se les da. Es condición del buen espíritu de la representación que el elector reputé suyo al representante que elige, lo conozca y trate, y este se considere ligado a sus electores. A este respecto, y en lo que hace al gobierno general, la República Argentina está mucho más adelantada que otros países representativos, pues es condición requisita por nuestros hábitos que el diputado al Congreso sea o vaya de la provincia que lo elige, y cuando hay excepción a la regla, se sobreentiende en el préstamo caridad interesada.

La Constitución de los Estados Unidos exige que el Representante de un Estado al Congreso sea habitante de él, y deploramos la supresión que de este requisito ha hecho la Constitución federal de la República Argentina, acaso por no escupir al cielo. La representación por provincias es lo que constituye no sólo el gobierno federal, sino la realidad de la representación en provincias tan desligadas unas de otras, y las argentinas están en posesión de este derecho y lo han practicado constantemente



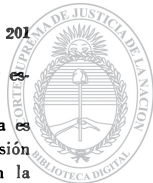
en todos sus anteriores congresos. La ley de elecciones de San Juan lo establece casi en los mismos términos que la de los Estados Unidos.

En el Congreso actual han concurrido diputados por La Rioja, San Luis y Catamarca que ni de nombre conocían estas provincias, y en un congreso donde se proponían hacer prevalecer la voluntad de las provincias, mucho pueden seis diputados que conocidamente representan otra voluntad que la de sus nominables electores. ¿No tienen aquellas provincias un vecino a quien confiar el encargo de representarlas? No sabíamos qué pueda contestarse a esto, si no se supone que los otros miembros del Congreso son hombres extraordinarios por su saber y su fama, clasificación que no aceptarían ellos mismos.

Baste para dar una idea de los abusos a que abre margen esta supresión recordar lo que pasó en San Juan. Anulóse la primera elección de diputados, electos casi por aclamación. La provincia contaba con un número, proporcionalmente crecido, de hombres competentemente calificados para aquel destino (1). La ley exige que sean habitantes del país los electos. El gobernador pidió derogación de la ley *por aquella sola vez*, para proponer la candidatura de nombres desconocidos en la provincia. Afortunadamente nadie concurrió a la elección, y la ley fundamental no fué violada, y sólo después de algunos meses se eligieron los diputados Carril, Aberastain y Godoy, oriundos o habitantes de la provincia. La intención era falsificar la representación y hacerla no de la voluntad de la provincia, sino de las miras políticas de los gobernantes.

A las influencias actuales han de sucederse otras con el curso del tiempo, y puede suceder con la omisión de la ley que un día una provincia provea de miembros a todo el Congreso, o lo sean los edecanes y domésticos de un general si, como la de San Juan, las que no quieran admitir la dádiva *Timeo Da-*

(1) Godoy, Carril, Daniel, Lloveras, Laspiur, Rojo, Aberastain, Cortínez, Rawson, Oro, Laprida, Lasiar, Presilla, Rufino, Zavalla, Merlo, Torres, Echegaray, Sánchez, Sarmiento, Salas, Tello, Gómez, etc.



naos, no ponen en sus constituciones particulares remedio y es-
torbos al posible abuso.

Pero aun esto no sería bastante. En la provincia misma es
preciso poner coto a las intrigas y suplantación de la expresión
genuina de la opinión pública. Los estados que componen la
unión americana están de ordinario divididos en distritos sena-
toriales para la elección de senadores y en subdivisiones para el
nombramiento de diputados, y varias de las constituciones traen
incorporada en sus cláusulas esta división. Una lista general de
candidatos trae ya un vicio insanable. "Cuando la población de
un territorio, dice De Barante, tiene que elegir, no ya un solo
representante, su propio representante, sino una lista numerosa,
es imposible que el sufragio sea libre y verdadero. Estas listas
son necesariamente compuestas de antemano. El oscuro y tran-
quilo elector no irá de ciudad en ciudad, de cantón en cantón,
a proponer la transacción que asegurará votos al candidato pre-
sentado por él, en cambio de la promesa, de que por su parte
hará dar los sufragios de su localidad a los otros candidatos ins-
criptos sobre la lista. Una operación tan complicada exige el celo
del espíritu de partido, la actividad de la intriga o el mecanismo
de la administración". (1)

El más frecuente, empero, de los obstáculos para la realidad
de las elecciones ha sido durante la pasada época el abandono
de las mesas electorales de parte de los electores, a causa de esa
misma falta de verdad y la violencia empleada para imponer los
que cuadraban a los régulos. Todos estos cínicos amañes han
de desaparecer necesariamente, no pudiendo ejercerse el poder
absoluto siendo las Legislaturas provinciales jueces de la vali-
dez de sus propias elecciones y estando garantidas por la cons-
titución. En cuanto a la elección de Diputados al Congreso fe-
deral, de cuya validez es él mismo juez, habrá de dictar leyes
para obtener evidencia de los hechos. El Congreso de los Esta-

(1) *Questions Constitutionnelles* par Mr. De Barante, 1819.



dos Unidos dictó una en 1852 (1) que es notable por los medios y garantías que da para rendir la prueba de nulidad, a quien quiera oponerla, constituyendo acción pública, haciendo parte acusada al diputado electo y obligando a todo juez o empleado público a actuar como sumariante en esta causa.

Todas las constituciones de los Estados Unidos privan de la ciudadanía a quien usó de cohecho, dolo o violencia, dejando además expedita la acción de los tribunales, y muchos tienen registros parroquiales en que están inscriptos los vecinos que tienen derecho a elegir; de manera que los jueces de las mesas que por la limitación de los círculos electorales pueden reconocer a los individuos vean si son electores los que como tales se presentan. La calificación previa, acreditada por boletos al portador, no remedia el inconveniente; verdad es que sólo la larga educación del pueblo puede estorbar lo que en materia de fraude las pasiones políticas enseñan en todas partes. En esto como en la creación de Senados las Provincias se encontrarán demasiado pequeñas y desprovistas de hombres y de hábitos para hacer fun-

(1) Ley de febrero 7 de 1851, del Congreso de los Estados Unidos.

“Acta para prescribir el modo de obtener evidencia en los casos de elecciones contestadas.”

“Desde la sanción de esta acta, cuando alguna persona intentase invalidar la elección de algún miembro de la Sala de Representantes de los Estados Unidos, comunicará en los treinta días después que el resultado de tal elección haya sido legalmente determinado, por escrito, al miembro cuyo nombramiento intenta invalidar, su intención de invalidar la dicha elección, y en el aviso que así diere especificará detalladamente los fundamentos en que apoya la invalidación. En todas las elecciones para el 32º Congreso hechas hasta hoy, toda persona que intentare contestarlas, puede dar aviso de ello en los treinta días después de la sanción de esta ley. El miembro avisado, en los treinta días después de recibido el aviso, responderá a dicho aviso admitiendo o negando los hechos alegados, y estableciendo específicamente los otros fundamentos en que apoya la validez de su elección, y enviará una copia de su respuesta al contestante.

Cuando el *contestante* o el miembro a quien se pasare tal aviso desee obtener testimonio, respecto a tal elección, puede acudir a cualquier Juez de cualquiera corte de los Estados Unidos, o a algún canciller, juez, o justicia de record, de algún estado, o a algún mayor, recorder, o sheriff de algún municipio o ciudad, siempre que el dicho empleado resida en el Distrito Congresal en que tuvo lugar la elección contestada, y cuando ninguno de tales magistrados residiese en dicho Distrito Congresal, a alguno de los dos jueces de paz residentes en dicho distrito, el



cionar sus constituciones e introducir las reformas necesarias; pero la Constitución federal supone la existencia de las Legislaturas provinciales, y de no organizarlas con los requisitos que la experiencia aconseja, montarían de nuevo una máquina que juega mal. La libertad y la seguridad individual es a ese precio, y si la elección no es el medio seguro de renovar las autoridades, la guerra civil reproducirá los gobiernos irresponsables que durante veinte años se han dividido el país para desangrarlo. Las provincias actuales son estados en germen, y las instituciones libres deben, como en la ordenanza de 1786, servir de base al desarrollo de la prosperidad y de la población. El arbitrario no ha producido nada hasta hoy, si no es la fortuna de dos o tres, en cambio de la ruina de pueblos enteros. ¿Las campañas no tienen vecinos que mandar a las Legislaturas? ¿No se interesan en la vida política? ¿Cómo es que toman parte tan activa en las revueltas internas que lo aniquilan todo?

cual ordenará, bajo apercibimiento, que se citen los testigos que fueren nombrados a comparecer ante él, en el tiempo y lugar señalados en el apercibimiento, para ser examinados respecto a la dicha elección contestada.

El dicho apercibimiento será notificado con copia en mano, o dejando en el lugar habitual de residencia, al menos cinco días antes del día señalado. Pero ningún testigo será requerido a asistir fuera del condado o parroquia en que reside, ni apercibido por ello.

Toda persona debidamente citada, que rehusase o descuidase asistir y testificar, a menos que se lo impida enfermedad o necesidad absoluta, pagará la multa de 20 pesos que serán cobrados con costas, por la parte a cuya instancia se ordenó el apercibimiento, y para su uso, en acción de deuda, ante cualquiera corte de los Estados Unidos; pudiendo ser además sindicado de mala conducta y castigado con multa y prisión. Y toda persona que rehusase o descuidase entregar papeles en su posesión relativos a dicha elección, o copias testificadas, si fuesen documentos oficiales, por orden de magistrado, será sujeto a las mismas penas.

La parte a cuya instancia se lanzó el apercibimiento dará, diez días al menos antes del señalado para examen, aviso por escrito a la parte opuesta, de su intención de examinar testigos, cuyo aviso contendrá el tiempo y lugar del propuesto examen, el nombre del empleado que conducirá el examen, el nombre y residencia de los testigos que van a examinarse, lo cual se hará dejando una copia a la que ha de ser notificada, o en su habitual lugar de residencia; pero ninguna de las dos partes dará aviso de tomar testimonios en diferentes lugares al mismo tiempo, o sin conceder un intervalo de cinco días al menos entre la conclusión del examen en un lugar y el principio en otro. En el examen, los testigos serán interrogados bajo juramento o afirmación (según la secta) por el



Para hacer sensible la idea, aunque estemos distantes de proponerla sino como esclarecimiento del caso, tomemos algunas disposiciones de la Constitución de Kentucky reformada en 1850. "Sección 5ª. La Asamblea General dividirá cada condado (1) de esta República en convenientes porciones electorales, pudiendo delegar poder para ello a las autoridades de condado que por ley se designase; y las elecciones de Representantes por los varios condados serán hechas en los lugares en que tienen su asiento las cortes, y en los varios recintos electorales en que los condados sean divididos: *Con tal que*, cuando la Asamblea crea que alguna ciudad o municipio tiene un número de votantes calificados igual a la proporción que esté por entonces fijada por ley, tal ciudad o municipio será investido con el privilegio de una representación separada, en una o en ambas cámaras de la Asamblea General, representación que conservará mientras conserve un número de votantes calificados igual a la proporción que de tiempo en tiempo sea fijada por

magistrado que *lanzó* el apercibimiento, o en su ausencia por cualquiera otro autorizado para ello, según el tenor de esta acta, tocante a todas las cosas relativas a esta elección que va a ser contestada, según sea propuesto por una u otra parte o sus agentes. Las preguntas y respuestas, debidamente atestadas, deben ser puestas por escrito por el magistrado, en presencia de las partes o sus agentes, si estuviesen presentes, y ser por él transmitidas inmediatamente, debidamente certificadas con su firma, y bajo sello al escribano de la Sala de Representantes, junto con una copia del apercibimiento y aviso, y de la prueba de haber transmitido dicho aviso y también todos los papeles relativos a dicha elección, y todas las copias juradas o certificadas de documentos públicos. Al tomar los testimonios, las partes se limitarán a la prueba o negación de los hechos alegados o negados en el aviso y respuesta, y ningún testimonio será tomado después de la expiración de los sesenta días, contados desde el día en que la respuesta del miembro avisado haya sido devuelta al contestante; pero la sala puede, a su arbitrio, conceder prueba suplementaria, que pueda rendirse después de la expiración de los sesenta días.

Los testigos que asistiesen bajo apercibimiento tendrán 75 centavos por cada día de asistencia y cinco centavos por milla, de ida y vuelta de viaje, que deberán ser declarados y certificados por el magistrado, y pagados por la parte que los citó; y el magistrado y el empleado que da el apercibimiento o aviso tendrán los mismos emolumentos que se acostumbra por iguales servicios en sus respectivos Estados, que deberán ser pagados por quien requirió tales servicios.

(1) División política del territorio, Departamento.



ley; pero no tendrá opción dicha ciudad o población, a la representación separada, a menos que el condado a que pertenece tenga también derecho a uno o más Representantes. Que siempre que una ciudad o población tuviese derecho a una Representación separada en una y otra Sala de la Asamblea General, y por su número tuviese derecho a más de un Representante, la dicha ciudad o población será dividida en manzanas contiguas, a fin de dar la forma más compacta a los Distritos de Representantes, tan iguales como se pueda al número de Representantes a que tal ciudad o población tenga derecho. Del mismo modo dicha ciudad o población será dividida en Distritos Senatoriales cuando, por la proporción, corresponda más de un Senador a dicha ciudad o población; y será elegido un Senador por cada Distrito Senatorial; pero ningún cuartel o división municipal será cortado por la expresada división de Distritos Senatoriales o Representativos, a menos que sea necesario para igualar los distritos electorales, senatoriales o representativos.

“Sección 6ª. La Representación será igual y uniforme en esta República, y será siempre regulada y verificada por el número de votantes calificados que contenga. En 1850, y también en 1857, y después cada ocho años, se hará una enumeración de todos los votantes calificados del Estado; y para asegurar igualdad y uniformidad en la representación, el Estado es dividido en diez distritos. El primer distrito será compuesto de los condados de Fulton, Hickman, Ballard, etc., etc.....

.

El número de Representantes, en las varias sesiones de la Asamblea General, será proporcionado entre los diez distritos, y los Representantes serán distribuidos, en cuanto sea posible, conforme al número de votantes calificados que tenga cada uno, entre los condados, poblaciones y ciudades contenidas en cada distrito; debiendo tenerse presentes para dicha distribución las reglas siguientes: Cada condado, población o ciudad que tenga el número requerido tendrá un Representante; si el doble, dos,



y así en adelante. En seguida los condados, poblaciones y ciudades que tengan uno o más Representantes, y un número mayor de votantes calificados sobre el número requerido, y los condados que tienen mayor número sin alcanzar al número requerido tendrán un Representante, en atención siempre al mayor número de votantes calificados: *Con tal que* cuando un condado no tenga suficiente número de votantes calificados para optar a tener un Representante, entonces el dicho condado puede ser agregado a algún condado o condados adyacentes, los cuales condados reunidos mandarán un Representante. Cuando se forme un condado nuevo de territorio, formará parte de aquel distrito que tenga el menor número de votantes calificados.

“*Sección 4.* No podrá ser Representante quien al tiempo de su elección no sea ciudadano de los Estados Unidos y haya cumplido la edad de veinte y cuatro años, y que no haya residido en el Estado dos años precedentes a su elección, y el último año en el condado, ciudad o población por la que puede ser elegido”.

“*Sección 16.* No podrá ser senador quien al tiempo de su elección no sea ciudadano de los Estados Unidos; no haya cumplido la edad de treinta años, y no haya residido en este estado los seis años anteriores a su elección, y el último de ellos en el distrito en que pueda ser elegido”.

“*Sección 8.* Todo ciudadano varón libre de edad de veinte y un años, que haya residido dos años en el estado y el año antes en el condado, ciudad o población en que ofrece su voto, será un elector; pero tal votante debe haber residido sesenta días en el recinto electoral donde ofrece su voto, y votará en dicho recinto y no en otra parte.

Sección 9. Los votantes, en todos los casos, excepto traición o atentado contra la tranquilidad pública, estarán exentos de arresto mientras asisten a las elecciones, van o vuelven de ellas”.

En otras Constituciones está previsto el caso de los que



han cambiado de domicilio, cuyo voto deben darlo en el punto desde donde vinieron a establecerse.

La Constitución de Maine, dada en 1828, fija la proporción de la representación a un representante por cada mil quinientos habitantes, que, como hemos visto, es la proporción de los Representantes de San Juan, en estos términos:

“3. Cada municipio que tenga mil quinientos habitantes podrá elegir un Representante: cada municipio que tenga 3700, dos; por 6,750, tres; por 10,500, cuatro; por 15,000, cinco; por 20,200, seis; por 26,250, siete; pero ningún municipio tendrá derecho a más de siete representantes y los municipios y plantaciones debidamente organizados que no alcancen a tener 1,500 habitantes deben ser arreglados, lo más convenientemente posible, en distritos que contengan aquel número, pero sin dividir para ello municipios: y cada uno de estos distritos puede elegir un Representante.”.....

“4. Ninguna persona será miembro de la Sala de Representantes, a menos que al comenzar el período por el que es electo haya sido cinco años ciudadano de los Estados Unidos, tenga veinte y un años, haya residido en este estado un año y por *tres meses* antes de la época de la elección haya residido y continúe residiendo en el municipio o distrito que representa”.

Siendo incumbencia general de las provincias constituirse, creemos que algunas provincias pueden aproximarse en cuanto la prudencia lo permita a estos modelos; pues, en medio de los hábitos de arbitrario arraigados, encontrarían, si no ubican la representación, dificultades para hacer de ella un elemento de orden, sin que se convierta en instrumento de tiranía. Supongamos, por ejemplo, que la provincia de San Juan hubiese de dictarse una Constitución. Hoy tiene veinte y dos Representantes, y dado que la población sea de treinta y cinco mil habitantes, que es la que se le atribuye constantemente hace treinta años, la representación sería de uno por cada mil quinientos. Como se ha visto en una nota precedente, es la proporción apro-



ximativa de Massachusetts, y como en los distritos de Minnesota, Iowa, etc., el número de Representantes es igual, de nueve a doce Senadores estarían en proporción. La provincia sería dividida en nueve distritos senatoriales y en veinte y cinco Distritos Representativos.

Para mayor elucidación del caso debemos añadir que es condición esencial del gobierno republicano representativo, según lo hemos establecido en su lugar, que el elector no haya de moverse de su localidad y vecindario para emitir su voto. Así es como en los Estados Unidos, a más de ubicar la representación según el número de habitantes que hay en barrios de las ciudades, en municipios y partes sobrantes de municipios, las plantaciones y campañas, y aun las fincas aisladas están afectas a alguna subdivisión electoral, pero votan en el mismo lugar de residencia por el representante de su circunscripción. Por ley de 1840 del estado del Maine se ordena "que los electores calificados de los lugares que no estén incorporados en circunscripción alguna pueden organizarse en plantación para el objeto de elecciones, de la manera siguiente: "Tres o más habitantes de un lugar no incorporado pueden presentarse por escrito a uno o más comisarios del departamento a que el lugar corresponde, el deber de los cuales será dar a uno de los solicitantes un edicto, ordenándole notificar y citar a meeting de electores en el dicho lugar, señalando en el mismo edicto los límites del lugar, en algún punto central, poniendo avisos al efecto en dos o más lugares de la dicha localidad, siete días antes del dicho meeting o reunión. Y en el día y lugar señalados se nombrará por boletos un presidente, cuyo deber será presidir la reunión. Y se nombrarán tres tasadores y un actuario al mismo tiempo por boletos, los cuales serán juramentados por el presidente o un juez de paz. Y los límites de las plantaciones así organizadas serán descriptos por dichos tasadores, así elegidos, y pasados al Secretario de Estado, quien deberá tomar razón de ellos".

En atención a estos principios administrativos, si quisiéramos



mos hacer aplicaciones de ellos a la Provincia de San Juan, que nos es más conocida, clasificaríamos así sus diversos centros de población, para la división electoral en veinte y cinco distritos Representativos, suputando prudencialmente la población respectiva, sólo para aplicación de los principios. Jachal municipio, con las plantaciones de Pismanta, Mogna, etc., tres representantes. Valle fértil, municipio, con las plantaciones de Tumanas, etc., dos representantes. Albardón, municipio con las plantaciones de Tapiecitas, etc., uno. Angaco, municipio, Punta del monte, etc., dos. Cairo, municipio, con Laguna, etc., dos. Concepción, municipio, con China, etc., dos. Santa Barba, municipio, con Arbol Verde, uno. Desamparados, municipio, con Marquesado, Ullun, Sonda, Puyuta, tres. Santa Lucía, municipio, con Alto de Sierra, uno. Trinidad, municipio, con Valdivia dos. San Juan, ciudad (la población urbana), tres. Posito, municipio, con Guanacache, Acequion, Cañada Honda, tres. Para la formación de Distritos senatoriales basta reunir dos de los Distritos Representativos en uno.

Hacemos simplemente indicaciones. La población está en aquella provincia de tal manera distribuída que, por ejemplo, el distrito Representativo rural que hacemos del Posito contiene mayor número de vecinos que ya han sido representantes, ministros, jueces y aun enviados diplomáticos, que la ciudad misma; y los hombres de buen sentido, o de educación y de caudal están proporcionalmente distribuídos en los otros lugares.

Llamamos municipio toda población y reunión de habitantes, pues este es el uso y significado que tiene en los países en que las autoridades emanan de la elección.

Este sistema de ubicación no tiene por objeto representar los intereses locales de cada sección, pues es esta función municipal que ha de arreglarse en cada sección. El objeto es puramente político, y es verificar el voto, circunscribir la acción electoral para hacer efectivos sus resultados. Un partido o una autoridad puede imponer una lista de representantes, improvi-



sar electores, y la suerte del país quedará en manos de quien tenga más maña o más poder. El peor inconveniente que de esto resulta es que entra a legislar una lista compuesta toda ella de individuos de una mesnada. No hay mayoría, sino pandilla, *tutti*. La discusión es inútil, todos están de acuerdo, o son cómplices, factores o instrumentos de una misma preocupación. Localizada la representación marcados sus límites, todos los males están remediados. Los electores son los vecinos conocidos de la circunscripción; pobres o ricos todos se conocen, y no puede introducirse entre ellos moneda falsa. El elegido es conocido de todos los electores, es vecino residente en el lugar, y quien no le da su voto por su capacidad política se lo da por el afecto que le tiene, lo que siempre es un principio legítimo de representación. Como nunca dejará de haber partidos, sin los cuales no hay actividad e interés en la cosa pública, los partidos lucharán en el distrito; y si hubiese un partido o un interés dominante en todo el país ese triunfará en muchas partes; pero no absolutamente en todas, con lo que habrá siempre cuatro u ocho representantes, que, aunque en minoría, puedan sostener el debate, discutir, oponerse al arranque de la mayoría. El Senado elegido en época anterior y compuesto de hombres sesudos, versados en los negocios, pondrá todavía un freno a los desbordes de esas mayorías que tantos desaciertos han autorizado. Este es, pues, el secreto de la libertad y del orden en estados que como aquellas provincias han llegado en medio de las conmociones al gobierno representativo, que poseen informe y embrionario; mal ajustado; formas y no realidades.

Sobre todo, esta es la receta segura y eficaz para extinguir el espíritu de revuelta y anular las tentativas de usurpación. De las elecciones que se efectúen en las Provincias va a depender en adelante la suerte de la República, y cuarenta años de guerra, de desastres, de tiranía, son sólo el preludio de nuevos trastornos, si no se radica un sistema claro, justo, sencillo de satisfacer las pasiones políticas del país. En la República Ar-



gentina no hay indiferentes a la política. El que no elige pelea, el que no aspira a la libertad, sueña con ser tiranuelo, enriquecerse de despojos, o ser consejero áulico de caudillos o medrar a su sombra.

Más que todos los razonamientos, obrará en el ánimo de los que quisieran tener instituciones reales el examen del mecanismo de las elecciones, tales como las practican los pueblos norteamericanos. Insertamos a continuación las leyes del Maine relativas a elecciones, donde el lector verá las precauciones exquisitas que se han tomado para asegurarse la validez y verdad del voto.

Reglamento de elecciones del Estado del Maine

ARTICULO I.

DE LAS LISTAS DE ELECTORES

Sección 1ª Los notables (1) de cada municipio formarán el día 11 de agosto de cada año una correcta lista, en orden alfabético, de aquellos habitantes de sus respectivos municipios que juzguen constitucionalmente calificados para votar en la elección de gobernador, senadores y representantes del gobierno del estado.

Sección 2ª En todo municipio donde los notables no son los tasadores, los tasadores formarán antes del 1º de agosto, según su juicio, una correcta lista de las personas calificadas como se ha dicho antes, y la entregarán a los notables para su información, a fin de que ellos la verifiquen y corrijan.

Sección 3ª En todo municipio que según el último censo de los Estados Unidos tuviese más de tres mil habitantes, los notables se establecerán en sesión abierta, con el objeto de recibir prueba de las clasificaciones de las personas que reclamen derecho a votar en alguna de las dichas elecciones, y para corregir sus dichas listas, por un tiempo razonable que no exceda de dos días, entre el 11 y el 18 de agosto de cada año, y darán aviso del tiempo y lugar de su sesión.

SECCION 4ª El 20 de agosto, si no antes, los notables de cada municipio depositarán anualmente en la oficina del actuario del municipio

(1) *Selectmen*. Hemos conservado esta voz, sin quererla traducir por corregidor, que la saca de su sencillo significado.



y fijarán en uno o más lugares del municipio una lista de los electores, preparada y revisada, como se ha dicho antes.

Sección 5ª Los notables en una sesión regular para corregir dichas listas, colocarán en ellas el nombre de toda persona que le sea conocida o les probasen ser calificada, como antes se ha dicho, ya sea que lo solicite o no dicha persona.

Sección 6ª Después de que dicha lista haya sido preparada y depositada en poder del actuario, y fijada, como se ha ordenado en las precedentes secciones de este capítulo, los notables no agregarán ni quitarán el nombre de ninguna persona, sino en los casos previstos en las cuatro secciones siguientes.

Sección 7ª En todo municipio que, según el último censo, contenga más de dos mil habitantes, los notables estarán en sesión abierta, con el objeto de corregir dichas listas, el viernes y sábado próximamente anterior al primer lunes del mes de setiembre, anualmente.

Sección 8ª En todo municipio que contenga más de dos mil electores, los notables estarán en sesión abierta por un tiempo razonable la víspera de alguna elección de gobernador, senadores o representantes en la Legislatura del Estado, o en Congreso, o de electores de Presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, y previamente si vieren causa, con el objeto de oír y decidir a solicitud de personas que reclamen el derecho de votar en tal elección. *Con tal que* si la elección estuviere designada para el lunes, la sesión previa se tenga el sábado en lugar del dicho día anterior.

Sección 9ª En todo municipio los notables estarán en sesión el día de dicha elección, para recibir y decidir sobre las solicitudes antedichas en algún lugar conveniente por un tiempo suficientemente largo, antes de abrirse la votación, según lo juzguen necesario, y oirán y determinarán las dichas solicitudes en todo tiempo antes de cerrarse las votaciones; *con tal que*, cuando la ciudad contenga cinco mil habitantes o más, no reciban tales solicitudes después de las tres de la tarde del dicho día.

Sección 10. Los notables darán noticia del tiempo y lugar de todas sus sesiones, requeridas y amortizadas en las tres precedentes secciones, para ser dados en el edicto para la convocación de los respectivos meetings de municipio.

Sección 11. Los notables de cada municipio harán una correcta lista alfabética de todos los habitantes de sus respectivos municipios, calificados para votar en la elección de empleados de municipio, y depositarán esta lista en la oficina del actuario, y fijarán una copia de ella, en uno o más lugares públicos de dicho municipio, el 20 de febrero, si no antes, anualmente.



Sección 12. Los dichos notables estarán en sesión, en algún lugar y tiempo conveniente, para ser por ellos notificados en el edicto de convocación de meeting, la antevíspera del día de elecciones anuales de empleados municipales en el dicho municipio, en el mes de marzo o abril anualmente, a menos que no caiga en domingo, en cuyo caso los notables estarán en sesión el sábado precedente o en la mañana del día de la elección, y por el tiempo que juzguen necesario para recibir prueba de las calificaciones de las personas que reclamen derecho a que sus nombres sean incluidos en dicha lista.

Sección 13. Los aldermen y tasadores de las ciudades prepararán listas de los votantes calificados de gobernador, senadores y representantes en la legislatura de estado, los diversos barrios en sus respectivas ciudades, de la misma manera que se requiere que preparen para los municipios los notables y tasadores, los aldermen haciendo oficio de notables y los *wardens* de ciudad se gobernarán por dichas listas.

ARTICULO II

DE LA NOTIFICACIÓN DE MEETING, Y PROCEDIMIENTOS EN LAS ELECCIONES, Y DEL ESCRUTINIO

Sección 14. Los notables de cada municipio por su edicto harán que los habitantes de él, calificados según la constitución, sean notificados y avisados siete días al menos antes del segundo lunes de setiembre, anualmente, para que se reunan en meeting en algún lugar conveniente, que se designe en dicho edicto, para dar en él sus votos para gobernador, senadores o representantes, según lo exige la constitución; y tales meetings serán anunciados en la manera legalmente establecida para avisar de otros meetings municipales de dicho municipio.

Sección 15. Ninguno de estos meetings se abrirá antes de las diez de la mañana, el día de la antedicha elección, a menos que el número de votantes calificados de cada municipio excediese de quinientos, en cuyo caso los notables podrán designar hora más temprana.

Sección 16. Los notables u otros empleados autorizados y requeridos por la constitución y leyes para presidir tal meeting tendrán entonces y después todos los poderes de presidentes de meeting municipal (como se ha previsto en el capítulo quinto), y será de su deber rechazar el voto de toda persona no calificada para votar.

Sección 17. Si los notables o una mayoría de ellos estuviesen ausentes de un meeting debidamente anunciado, o hallándose presentes descuidasen o rehusasen actuar como tales y desempeñar todos los deberes requeridos de ellos en meetings semejantes, los votantes calificados para



dicho meeting pueden elegir pro tempore cuantos notables juzgaren necesarios para constituir o completar el número requerido.

Sección 18. Durante la elección de tales notables pro tempore alguno de los notables presentes puede actuar como presidente: si no hubiese notables presentes, o en el caso de que los presentes descuidasen o rehusasen hacerlo, el actuario del municipio presidirá; y la persona que actuase como presidente tendrá todos los poderes y desempeñará los deberes de tal presidente.

Sección 19. Los notables pro tempore al aceptar el cargo jurarán desempeñar fielmente los deberes del dicho oficio, en cuanto se refiere a dicho meeting y elección; y levantar el acta e informe de los votos que la constitución o leyes requieran, y en todas las materias incidentales al cargo tendrá los poderes de notables y estarán sujetos a los mismos deberes y responsabilidades.

Sección 20. En cada meeting para la elección de gobernador, senador, representantes u otros empleados públicos, que requieran las mismas calificaciones en los electores los notables u otros funcionarios que presidan requerirán que los votantes calificados den sus votos por el funcionario o funcionarios que hayan de ser elegidos en una lista o boleta, o tantas boletas como funcionarios haya, según lo prefiera la persona que va a votar, designando el oficio de cada persona por quien vota, con tal que si el meeting así lo decidiese puedan votar por el representante o representantes a la legislatura del estado por boleta separada.

Sección 21. Los notables u otros funcionarios que presidan la elección, como queda dicho, tendrán y usarán la lista de confrontación requerida en este capítulo, en las mesas mientras se hace la elección de los dichos empleados; y también tendrán cajas para encerrar las boletas que serán suministradas a expensas del municipio; y ningún voto será recibido a menos que no sea entregado por el votante en persona, ni hasta después que el funcionario o funcionarios que presiden hayan tenido el tiempo de satisfacerse de su identidad, y hallado su nombre en la lista, marcándolo y verificando que el voto es uno solo.

Sección 22. Ninguna boleta será recibida en una elección de funcionarios de municipio o de estado, a menos que venga impreso o escrito sobre papel blanco, limpio, sin marca alguna de distinción o figuras en lo exterior, a más del nombre de la persona por quien se vota, y los oficios que han de llenar; pero ningún voto será desechado por estos motivos, después de haber entrado en la urna.

Sección 23. Siempre que a los notables parezca satisfactoriamente en algún meeting de municipio tenido para la elección de representantes a



la legislatura, después de un razonable número de ensayos, que no puede hacerse una elección conveniente de uno o de todos los representantes a que tal municipio tuviere derecho, el notable presidente manifestará su juicio a los habitantes reunidos, en un razonable tiempo después de los dichos ensayos, notificándolos en consecuencia; de cuya decisión y aviso levantará acta el actuario, y en ningún caso principiará una nueva votación después de las seis de la tarde.

Sección 24. Después que se haya dado dicho aviso y haya sido anulado, o después de las seis de la tarde, no habiendo entonces votación pendiente, se considerará como aplazado el meeting al mismo día de la semana próxima siguiente, y en el lugar y hora para que fué notificado el primer meeting, y los notables lo proclamarán así al meeting.

Sección 25. El día para el cual se difirió la elección se hará nueva prueba, y si no se hiciese elección entonces tendrán lugar los mismos procedimientos, según lo dispuesto en la precedente sesión, y el meeting se considerará como nuevamente aplazado al mismo día y hora de la semana siguiente, en el mismo lugar, y tal meeting y aplazamientos a semanas sucesivas pueden continuar teniendo lugar hasta que se efectúe y declare una elección.

Sección 26. Todos los meeting de municipio que se tengan para la elección de tesorero de condado o de representante al congreso o de electores de Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, o para la determinación de cuestiones expresamente sometidas al pueblo por la legislatura, en lo que respecta a la convocación y notificación de los meetings y su dirección, estarán sujetos a las reglas dadas en este capítulo para la elección de gobernador, senadores y representantes, a no ser que la ley lo disponga de otro modo.

Sección 27. Con el objeto de determinar alguna elección en este estado, el número total de personas que votarán en tal elección será averiguado primeramente, contando el número total de boletas separadas dadas en ella; y ninguna persona será considerada o declarada debidamente electa si no hubiese recibido una mayoría del número total de las boletas; y en todos los actos de elecciones será distintamente declarado el número total de votos; pero pedazos de papel blanco o nombres de personas no elegibles al empleo no serán contados en las boletas; pero se tomará razón de ello y constarán en el acta, y si en alguna elección un número mayor de candidatos que el número que debe elegirse obtuviese una mayoría del número total de boletas, un número igual al número que debe elegirse de aquellos que tengan mayor exceso sobre dicha mayoría, serán considerados y declarados ser electos; pero si el número total de los que han de elegirse no puede completarse de este modo en razón de



tener dos o más de estos candidatos un número igual de boletas, los candidatos que tengan estos números iguales no se considerarán electos.

Sección 28. Los actuarios de los varios municipios en el estado entregarán o harán entregar, en la oficina del secretario de estado, las actas de votos dados en sus respectivos municipios, para gobernadores, senadores, representantes al congreso y electores de Presidente y de Vicepresidente de los Estados Unidos, en los treinta días siguientes al meeting para la elección de dichos funcionarios, o depositarán la misma en alguna oficina de postas en este estado, dirigida al secretario de estado, en los catorce días siguientes, a fin de que sea transportada por la estafeta.

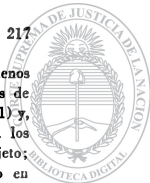
Sección 29. Si alguna de estas actas no hubiese sido recibida por el secretario en los treinta días siguientes a tal meeting, el secretario de estado notificará al procurador del departamento en que dicho municipio estuviese situado, y será deber de éste dar noticia inmediatamente al actuario de dicho municipio, y, a menos que reciba prueba satisfactoria de que el dicho actuario ha cumplido con lo requerido en la precedente sección, perseguirá la pena en seguida impuesta.

Sección 30. Siempre que un acta enviada en copia se haya perdido, o de un modo u otro haya sido destruida, los notables y actuarios de dicho municipio, al recibir informe de tal pérdida o destrucción, ordenarán se saque inmediatamente una copia del registro del meeting en que tal voto se hubiese dado, con su certificado sobre la misma hoja acreditando que es copia verdadera del registro, que verdaderamente exhibe los nombres de todas las personas por quienes se ha votado para los oficios designados, y el número de votos dados a cada uno en tal meeting, y que la dicha copia contiene todos los hechos que fueron relatados en la copia del acta original enviada.

Sección 31. Los notables y actuarios de municipio que se hallaron presentes al meeting y firmaron el acta original enviada firmarán el certificado mencionado en la precedente sección, designando su oficio al pie de sus nombres, y prestarán juramento de que dicha copia y certificado son verdaderos, ante algún juez de paz del departamento, que también dará certificado de dicho juramento en el mismo papel.

Sección 32. Las dichas copias y certificados serán sellados y dirigidos al secretario de estado con la naturaleza del contenido escrito en el sobre, y el actuario de dicho municipio hará que se entregue en la oficina del secretario de estado, tan pronto como sea posible.

Sección 33. Siempre que los notables de un municipio, no incluido con otro como distrito representativo, por algún medio tuviesen conocimiento de que el asiento de un representante ha vacado por muerte, re-



nuncia u otra causa, publicarán inmediatamente el edicto, dando al menos siete días de aviso anticipado para el meeting de electores calificados de dicho municipio, para elegir alguna persona que llene la vacante (1) y, en dicho meeting, se observarán los mismos procedimientos que en los meetings tenidos el segundo lunes de Septiembre para el mismo objeto; y, si necesario fuere, el meeting será aplazado, como se ha provisto en las secciones veinticuatro y veinticinco.

ARTICULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES, CON RESPECTO A CIUDADES, PLANTACIONES Y DISTritos REPRESENTATIVOS

Sección 34. Excepto cuando esté especialmente proveído en contrario, los reglamentos hechos en este capítulo con referencia a municipios y funcionarios de municipios serán aplicables a las plantaciones organizadas y a sus funcionarios; y los tasadores de tales plantaciones serán considerados notables para todos los objetos de este capítulo y sujetos a desempeñar todos los deberes bajo iguales penas.

Sección 35. Para todos los propósitos de elegir gobernador, senador y representantes de la legislatura de estado, o alguno de los funcionarios, excepto cuando esté de otro modo provisto expresamente, los habitantes de las ciudades de este estado permanecerán y continuarán siendo un municipio, y poseerán todos los derechos y poderes y estarán sujetos a todos los deberes, obligaciones y responsabilidades como todo otro municipio.

SECCION 36. *Los aldermen* de dichas ciudades serán, en virtud de su oficio, notables de ciudad, y el actuario de ciudad y tasadores serán, con la excepción arriba dicha, actuario y tasadores de municipio, para los objetos de dicha elección, y se considerará haber sido electos, como se ha dicho, funcionarios de ciudad y de municipios a un tiempo, debiendo ser debidamente juramentados como funcionarios de condado respectivamente.

Sección 37. Los condestables de ciudad (comisarios de cuartel) serán, con la misma excepción antedicha, considerados como condesta-

(1) Tan vagas y confusas son nuestras ideas del sistema representativo, que en 1841 en Chile, estadistas notables ponían en duda, y se oponían a ello, si el gobierno podía convocar a elecciones de nuevo diputado, en reemplazo de uno que había muerto. Véase el *Nacional*, de la época, suplemento al núm. 8.



bles de municipio, para los objetos de convocar todos los meetings de barrio para tales elecciones, y de mantener el orden en dichos meetings.

Sección 38. Para todos los objetos mencionados en las secciones 14 y 26, los habitantes de la ciudades se reunirán, como la constitución lo requiere, en meetings de barrio, para ser notificados y avisados, como se prevé para los meetings de municipio para objetos iguales. El warden (1) presidirá, y el actuario llevará los registros que la Constitución exige.

Sección 39. Si el warden se hallase ausente de tal meeting, o rehuse o descuidase presidirlo, podrá elegirse un warden pro tempore, durante cuya elección presidirá el actuario del barrio; y los wardens elegidos pro tempore, desde que hubieren aceptado el cargo, serán debidamente juramentados, y tendrán el poder, y desempeñarán los deberes de wardens de dicho meeting, y estarán sujetos a las penas.

Sección 40. Los electores calificados del barrio, compuestos de las islas dentro de la ciudad de Portland, pueden reunirse como está provisto en la sección treinta y ocho, y también para la elección de los funcionarios de ciudad, en cada una de dichas islas, que una mayoría de dichos electores calificados designe o haya designado, en algún meeting legalmente tenido con aquel objeto.

Sección 41. Los wardens de dicho barrio presidirán imparcialmente a tales meetings, recibirán los votos de todos los electores calificados, los clasificarán, contarán y declararán en meeting abierto, y en presencia del actuario, que hará una lista de las personas por quienes se hubiese votado, con el número de votos por cada persona al frente del nombre, y los oficios respectivamente, y en meeting abierto, y en presencia del warden, hará de ellos acta clara; y una copia clara de esta lista será certificada por el warden y actuario, sellada en meeting abierto y entregada al actuario del barrio número uno en la ciudad de Portland diez y ocho horas después de cerrada la votación, y todos los votos echados de este modo serán considerados como dados y pertenecientes al último barrio mencionado.

Sección 42. Al votar por representantes a la legislatura de estado en un barrio de alguna ciudad, los nombres estarán en la misma boleta con los otros funcionarios que hayan de elegirse en el meeting, por electores de igual calificación, a menos que el consejo de aldermen (notables), en su dictio notificando el meeting, requiera una boleta separada o boletas a los que son por ésta autorizados.

(1) Wardens, viene de ward, barrio, el oficial que preside a un barrio. En Buenos Aires creo que se llama Teniente Alcalde.



Sección 43. — Cuando la elección de tal representante no fuese efectuada, los aldermens convocarán nuevos meetings de los barrios para el objeto, para que se tengan en todos a un tiempo, en dos semanas después del primer tiempo, y se observarán en dichos meetings procedimientos iguales, como en el primer tiempo señalado, hasta que se haya efectuado la elección.

Sección 44. Será del deber de los aldermen de ciudad en sus respectivas ciudades, en todos los días de elecciones para los que se requiere una lista de votantes calificados, hallarse en sesión en algún lugar central y conveniente, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, debiéndose dar noticia de dicho lugar en el edicto convocando a meeting para tal elección, con el objeto de recibir prueba de la calificación de los votantes, cuyos nombres no hayan sido puestos en la lista; y cuando algún habitante produjese prueba satisfactoria, los aldermen darán a dicho habitante un certificado bajo sus firmas, dirigido al warden del barrio a que corresponda, exigiendo que se ponga el nombre de dicho habitante en la lista de barrio, y el warden con esto añadirá el nombre de dicha persona a la lista, y recibirá su voto.

Sección 45. En la sesión requerida en la sección precedente, cualquier número de aldermen, si fueren menos de tres, formará quórum.

Sección 46. Siempre que dos o más municipios fuesen, según la Constitución de este estado, clasificados para elegir entre ambos un representante a la legislatura, los notables del municipio más antiguo de tal distrito representativo señalarán tiempo y lugar de meeting de los notables de los varios municipios en dicho distrito, y darán razonable aviso a los dichos notables, para el objeto de examinar las copias de las listas de votos para representantes, en la manera prescrita por la Constitución, donde no haya sido de otro modo establecido tiempo y lugar para dicho meeting. Cuando estuviesen así reunidos, los notables de los municipios de aquel modo reunidos, por una mayoría de votos, contados por municipio, determinarán el tiempo y lugar para los futuros meetings, en el dicho distrito representativo, con el objeto arriba dicho, y tal tiempo y lugar será fijo, hasta que sea alterado por un voto semejante.

Sección 47. — Siempre que en tal meeting de notables, al comparar las listas de votos, apareciese que persona alguna ha sido electa, los notables de los varios municipios publicarán su edicto, en legal forma, para otro meeting, que habrá de hacerse tres semanas después del primero, en sus respectivos municipios en la misma hora y al mismo tiempo; y los notables de dichos municipios volverán a reunirse en los cuatro días después de esta segunda prueba, como está provisto en la Constitución. Si en tal meeting de los notables no hubiese resultado ninguna



elección, se repetirán los mismos procedimientos cada tres semanas, hasta que haya sido hecha y declarada una elección.

Sección 48. Siempre que los notables así reunidos juzguen que se ha efectuado una elección, darán a la persona de este modo elegida copia certificada de las listas de votos, en los diez días después de su elección, o antes si fuere requerido por la persona así elegida: pero no será necesario que el actuario del municipio las selle, ni ordenar que tales copias sean entregadas en la oficina del secretario.

Sección 49. Siempre que en un distrito los notables del municipio más antiguo fuesen debidamente notificados, o de otro modo estuviesen seguros de que ha vacado el asiento de Representante de dicho distrito, dando el tiempo conveniente para convocar meeting, en los varios municipios, señalarán tan pronto como sea posible día para otra elección a fin de suplir la dicha vacante, y lo notificarán en consecuencia a los notables de los otros municipios.

Sección 50. Los notables de los varios municipios convocarán meetings en los días señalados, y se guardarán las mismas formalidades, según la Constitución y las leyes lo prescriben, que para la elección de representantes, el segundo lunes de setiembre, y se reunirán en los cuatro días siguientes, para examinar la lista de los votos si se efectuase votación, dando copia de las listas a la persona electa, como queda previsto en la sección cuarenta y ocho. En otro caso se seguirán los procedimientos de la sección cuarenta y siete.

Sección 51. Siempre que una persona intente contestar, ante la Sala de Representantes, el derecho de alguna persona a tener asiento en ella que haya sido debidamente declarada, como teniendo derecho a ello, la primera notificará a la persona así declarada su tal intención, al menos veinte días antes del miércoles de enero, entregándole a él en propia mano, o dejándole en su último y ordinario lugar de residencia, por escrito, una especificación de sus objeciones a la validez de tal declaración; con tal que el meeting, en que la persona declarada pretende haber sido electa haya sido tenido al menos treinta días antes del primer miércoles de enero; y pueden oírse deposiciones, como está previsto en la sección veinte y cuatro del capítulo ciento treinta y tres.

(1) Sección 24. En caso de elección contestada de una persona declarada como miembro de la Sala de Representantes, cada parte puede citar cualquier testigo ante un juez para dar deposiciones, y estará este sujeto, en caso de desobediencia, a las mismas penas y responsabilidades de la sección trece.

Sección 13. Todo testigo puede ser compelido a asistir de la misma manera, y bajo las mismas penas que todo otro testigo ante la corte...



Sección 52. Siempre que una persona residente en un lugar no incorporado (labrantíos aislados), adyacentes a un municipio o plantación organizada en distrito representativo, diese o enviase su nombre a los notables de dicho municipio, o a los tasadores de dicha plantación, el 1º de junio o antes, tendrá derecho de votar en todas las elecciones de funcionarios del estado, de municipio, miembros del Congreso, electores de presidente y vicepresidente; con tal que bajo otros respectos sea elector calificado y continúe su residencia, como se ha dicho, o si se trasladase al dicho municipio; y lo regidores pondrán su nombre en la lista de votantes y recibirán su voto en consecuencia.

ARTICULO IV

PROVISIONES PENALES Y REGLAMENTOS TOCANTE A LA PUREZA DE LAS ELECCIONES

Sección 53. Si algún notable u otro funcionario de municipio, ciudad o plantación, o algún notable u otro funcionario elegido pro tempore, descuidase intencionalmente o rehusase desempeñar alguno de los deberes de él requeridos, o autorizase intencionalmente, o permitiese hacer alguna cosa prohibida, ya sea por la Constitución de este estado, o por las varias disposiciones de este capítulo, pagará la multa, por cada ofensa, de una suma que no baje de cuarenta pesos, ni exceda de ciento, la que será cobrada por las justicias, a beneficio del estado, y sufrirá prisión en la cárcel del departamento. por no más de nueve ni menos de tres meses, o uno u ambos castigos; excepto cuando esté expresamente de otro modo proveído en este capítulo.

Sección 54. Si algún condestable, u otra persona legalmente requerida para citar a los votantes calificados de una ciudad, municipio o plantación, a dar sus votos para gobernador, senadores o representantes de la legislatura de este estado o del congreso, o para tesorero de departamento, actuario, o electores de presidente o de vicepresidente de los Estados Unidos, rehusase intencionalmente o descuidase citar a dichos votantes, conforme a la ley, y pasar nota de dicho edicto en debido tiempo, perderá una multa de no menos de cincuenta ni más de

Toda persona obligada a asistir, que dejase de hacerlo, sin causa razonable, estará obligada al pago de los daños ocasionados a la parte agraviada; y tal falta de asistencia será considerada como menosprecio a la corte, y castigada como tal con una multa que no exceda de veinte pesos; (se paga al testigo el valor del salario de un día, y un tanto por milla, hasta treinta millas, no pudiendo ser llamado de más distancia.



doscientos pesos; para ser cobrados por demanda ante la justicia a beneficio del estado, la mitad, y la otra mitad a beneficio del querellante (1).

Sección 55. Si los notables de un municipio o los tasadores de una plantación descuidasen intencionalmente depositar las listas de votantes calificados en poder del actuario de municipio o plantación, y fijar dichas listas como se requiere en la sección cuarta, pagarán cada uno por cada omisión no menos de cincuenta ni más de cien pesos, y por cada día de descuido después del 20 de agosto y hasta la elección del siguiente pagarán separadamente treinta pesos.

Sección 56. Si dichos notables o tasadores descuidasen intencionalmente o rehusasen tener y usar la lista de confrontación, como está provisto en la sección veintiuna, o recibiesen algún voto prohibido por la sección veintidós, pagarán separadamente no menos de cincuenta ni más de cien pesos.

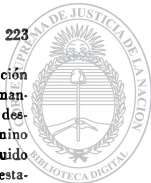
Sección 57. Las multas de las dos secciones anteriores serán cobradas en acción de deuda en nombre y a beneficio de los habitantes del municipio o plantación donde se cometiere la falta; debiendo ser entablada demanda y proseguida hasta sentencia final a pedido de cualquier votante calificado en dicho municipio o plantación, por el tesorero, a menos que éste no sea uno de los funcionarios delincuentes, y en tal caso por uno de los condestables.

Sección 58. Si un notable u otro funcionario de alguna ciudad, municipio o plantación, notable u otro funcionario elegido pro tempore descuidase intencionalmente o rehusase desempeñar los deberes impuestos por las secciones trece, treinta y una y treinta y dos, al recibir la noticia de la pérdida o destrucción de las actas de elecciones como allí está descripto, pagará la multa de no menos de cien pesos y no más de quinientos, que serán cobrados por demanda judicial a beneficio del estado.

Sección 59. El notable u otro funcionario, ya fuere permanente o pro tempore, que en tal caso hiciere un falso certificado, y prestase juramento de ser verdadero, sufrirá las penas y multas impuestas contra el crimen de perjurio, y quedará además inhabilitado por diez años para ejercer algún destino o empleo bajo la constitución y leyes de éste estado.

Sección 60. Toda persona a quien por el actuario le fuesen confia-

(1) Obsérvese que todas estas multas son a beneficio del Estado y no del municipio. Tiene esta disposición por objeto alejar el riesgo de taparse unos a otros entre vecinos, y poner al Estado en todas partes, al cuidado de la observancia de las leyes protectoras de la elección.



das las actas de los votos, de alguna ciudad, municipio o plantación para gobernador, o representantes en congreso, con el objeto de mandarla a la oficina del Secretario de estado, que intencionalmente descuidase poner en uso todos los medios de hacerla llegar en el término prescripto por la Constitución y las leyes, perderá por este descuido no menos de ciento y no más de quinientos pesos, a beneficio del estado, que serán cobrados en demanda judicial, o sufrirá una prisión en la cárcel del departamento, por un término que no pase de seis meses ni baje de dos, a discreción de la corte que tome conocimiento de ello.

Sección 61. Todo procurador de departamento que recibiese del secretario de estado un certificado de que el acta de votaciones de alguna ciudad, municipio o plantación en su departamento, para gobernador, senadores o representantes en congreso, no ha sido recibida a tiempo en la oficina del secretario de estado, debe inmediatamente averiguar, en cuanto sea posible, por defecto de qué funcionario de dicho municipio u otra persona tal descuido tuvo lugar, y exigir de tal funcionario u otro empleado, si juzga intencional la falta, o causada por negligencia culpable, la suma o sumas impuestas por omisiones semejantes; y si no fuesen inmediatamente pagadas, perseguir al delincuente conforme a las leyes; y todas las sumas de este modo recaudadas recaerán a beneficio del estado.

Sección 62. En caso alguno, ningún funcionario de ciudad, municipio o plantación incurrirá en pena o castigo, o hacerle sufrir daños en razón de sus actos oficiales o negligencias, a menos que no se muestre irracional, corrupto o intencionalmente opresivo; pero el descuido de preparar la lista de votantes, para depositarla en la oficina del actuario de municipio, o enviarla por la posta, como queda provisto por este capítulo, o convocar meeting de ciudad, municipio o plantación para elecciones, u ordenar que las actas de votos, o copias de ellas sean entregadas en la oficina del secretario, como lo exigen la Constitución y leyes de este estado, o hacer los registros que la ley exige son considerados como inexcusables, a menos que aparezca lo contrario.

Sección 63. Si en algún meeting para la elección de un funcionario público, donde es necesaria lista, alguna persona echase intencionalmente su voto, antes de que el funcionario presidente haya tenido tiempo de encontrar su nombre en dicha lista, o intencionalmente diese una respuesta falsa u aseveración a los notables u otros funcionarios encargados previamente de preparar dichas listas, o que estén presidiendo dicho meeting, a fin de que su nombre sea puesto en dicha lista, o su voto recibido; o si una persona diese más de un voto en



una misma votación, o se condujese desordenadamente en dicho meeting, pagará por cada falta una multa que no exceda de cien pesos ni baje de diez.

Sección 64. Si algún oficial de la milicia formase tropa, o diese alguna orden o voz de mando, en algún día de elección de algún funcionario público, excepto en tiempo de guerra o de peligro, por cada vez pagará no menos de diez ni más de trescientos pesos.

Sección 65. Las multas impuestas en las dos secciones precedentes pueden ser cobradas por demanda, la mitad a beneficio del estado, la otra mitad para el uso del querellante.

Sección 66. Si alguna persona por cohecho, amenaza u otros corruptos medios, directa o indirectamente tentase influenciar a un elector de este estado para dar su voto o boleta, o inducirlo a retirarlo, o perturbarlo o incomodarlo en el libre ejercicio del derecho de sufragio, en alguna elección de este estado, tenida en virtud de alguna de las disposiciones de la presente Constitución, o de este capítulo, será por demanda y convicción de ella, considerado criminal de mala conducta, y ser multado en no más de quinientos pesos, o ser echado en prisión, por un término que no exceda de un año, o ambas cosas, a discreción de la corte, y además será ineligible para ningún empleo del estado por el término de diez años.

Sección 67. Ninguna persona venderá o dará a vender o suministrará licores a la distancia de doscientos rods, de algún lugar, donde los habitantes de algún municipio o plantación en este estado estuviesen reunidos en legal meeting de municipio, para objetos de elecciones de estado, departamento, municipio o plantación o para elección de electores de presidente o vicepresidente de los Estados Unidos u otros negocios públicos, a menos que no sea figonero con licencia, o pulpero, en prosecución de su negocio ordinario, en su acostumbrado lugar de hacerlo.

Sección 68. Todo juez de paz, o notable de dicho municipio, o recaudadores de dichas plantaciones, que presencien o sean conocedores de la violación de alguna de las disposiciones de la precedente sección puede, por escrito, ordenar a un condestable del municipio decomisar los dichos licores o algún carruaje o buque que los contenga, o alguna tienda erigida en los dichos límites, con el objeto de poner licores en venta.

Sección 69. El condestable a quien se diere la orden decomisará tales licores, carruajes, buques y los materiales de la tienda o galpón, y los detendrá hasta veinte y cuatro horas después de aplazado el mee-



ting, para ser entonces entregado a la persona a su pedido, a quien fueron tomados los dichos artículos, o a su legítimo propietario, habiendo pagado tres pesos por la guarda de dichos artículos.

SECCION 70. Si éste no los pidiese en las veinte y cuatro horas, serán expuestos en venta en pública subasta, por el condestable que los tomó, y después de dar aviso cuarenta y ocho horas antes, fijado en lugar público, del tiempo y lugar de la venta, a menos que en ese tiempo sean redimidos, pagando la dicha suma, y un razonable gasto por el aviso.

Sección 71. Los productos de la venta, después de deducir los dichos gastos, y los gastos de venta, que deberán ser cobrados como en la venta de muebles por ejecución, serán pagados a la persona de quien se tomaron los artículos, o al legítimo propietario de ellos (1).

“Administración de justicia”

¿Cuáles son las atribuciones que la Constitución federal declara de la competencia de las legislaturas provinciales?

“Asegurar su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria gratuita.”

Para todos estos objetos de interés para cada habitante hay que arbitrar fondos, que precaver abusos, que vigilar, que discutir; y para proveer a ellos se necesita que haya una autoridad en que los contribuyentes mismos estén representados. Examinemos, si no, lo que aquellas atribuciones prescriben.

Ya hemos sentado los principios generales en que debe reposar la buena administración de justicia. Inamovilidad del juez, mientras no se le pruebe crimen, prevaricato, concusión; es decir, mientras observe buena conducta. Uno o dos jueces letrados, bien rentados, en lugar de los jueces llamados de orden, legos y amovibles, a más de los jueces de menor cuantía bastarían para la recta administración de justicia. La provincia de Santiago, con doscientos mil habitantes, es bien servida en lo civil por un juez de letras de turno, y todas las provincias de Chile se hallan en el mismo caso. En cuanto a Cortes de Apelación, la Constitución federal permite a una o más provincias

(1) *Revised Statues of the State of Maine*; chap. 9.



reunirse para objetos de administración de justicia y los que de tantas injusticias son víctimas hallarán su cuenta en provocar estas alianzas para ahorrarse dinero. Una Corte de Apelaciones para ser efectiva debe componerse de un número considerable de jueces doctos, de relatores, procuradores, abogados, sin cuyos requisitos la administración recta de la justicia es una quimera. Chile ha sido administrado durante veinte años por una sola Corte de Apelaciones, y hoy tiene tres para todo el país. Los tribunales federales, además, prestarán modelo, cooperación y foro. Si exceptuamos a Córdoba y Buenos Aires, no hay una sola provincia que se halle en aptitud de establecer con sus propios elementos una Corte de Apelaciones, y muchas hay, Santiago, San Juan, Catamarca, San Luis, Jujuy, que no pueden fundar un juzgado de letras, y que queden abogados para defender a las partes; y aunque en el papel se escriba, habrá una Corte, en el hecho resultará que hay un innoble remedo de tribunales superiores. Nosotros aconsejaríamos a San Juan asociarse a Mendoza, o ambas provincias establecer su Corte de Apelaciones en Córdoba. Otro tanto pudieran hacer las provincias del norte entre sí, y las litorales, por otro lado, hasta dejar el país dividido en distritos judiciales.

Siendo atribución del Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, y especialmente leyes generales para toda la Confederación sobre ciudadanía y naturalización, sobre bancarrotas, etc., etc., y dictar leyes para la introducción del juicio por jurados, las Constituciones de las Provincias como las Legislaturas ordinarias nada tienen que hacer a este respecto, pues sus mismos representantes en el Congreso Federal legislan en común sobre todos estos puntos y para todas las Provincias.

Para la administración de Justicia y la regularización de este ramo la codificación de las leyes será de un grande auxilio. Gran número de naciones han realizado esta obra, cuyo primer ejemplo lo dió la sagacidad de Napoleón; y tantas veces se ha ejecutado que sus procedimientos han tomado una



forma mecánica, si es posible decirlo. Como la legislación de casi todos los estados cristianos tiene por base el derecho romano, hay, salvo en casos excepcionales, un estrecho parentesco en todas las legislaciones, de donde proviene la facilidad de codificarlas, una vez codificada una de ellas. Hay hoy códigos franceses, belgas, prusianos, portugueses, brasileros, bolivianos, chilenos, y éstos traen ya el método y la materia preparada. Hay, en fin, códigos de códigos, o códigos concordados, citando en cada artículo los de igual tenor o propósito en otros códigos.

Gracias a estos auxilios que nos prestan las naciones que nos han precedido en obra tan útil, su ejecución está desembarazada hoy de dificultades, y es sólo el resultado de trabajo material, dirigido por el buen criterio de una comisión de jurisprudencia. La difusión, pues, de los códigos llevará a todas las provincias las nociones que de los principios del derecho y de las disposiciones legales son en ellas tan escasas, ya que no es posible improvisar de un golpe el número de abogados que hayan hecho estudios clásicos. Muy desde los tiempos de la colonización, observóse en Inglaterra que las colonias norteamericanas, faltas de imprentas entonces, hacían un consumo extraordinario de libros de jurisprudencia; y no se atribuye a otra causa el respeto a la ley, que es un distintivo de aquel pueblo, y su cuidado de tenerse al corriente de sus prescripciones. La libertad tiene por garantía la ley, y nada hay que más desenvuelva la actividad de un pueblo que el conocimiento de los límites en que debe circunscribir su acción para no agredir los derechos ajenos. De allí también proviene su aptitud y preparación para el juicio por jurados, que es a la vez una escuela de derecho para todos los vecinos, quienes interviniendo en las causas criminales, oyen las discusiones legales, hablan de ellas y aprovechan de este estudio práctico. De aquí proviene, en fin, la tendencia de todos los estados que componen la Unión a suprimir las garantías que la ley había creído necesario exigir del hombre que aspira a defender a la viuda y al huérfano. Como el Congreso federal no legisla sobre estos puntos, cada



estado dicta sus leyes según sus necesidades. La autoridad federal no podría intervenir por medio de la Corte Suprema, sino cuando fuese violado alguno de los principios establecidos por la Constitución. En todos tiempos, es verdad, han sido más fáciles allí en otorgar diplomas que en Europa, si bien la ley exigía haber sido, para obtenerlos, recibido *bachiller en leyes* en alguna Universidad. En 1836 Massachusetts, que es acaso el estado más ilustrado, concedió por una ley el derecho de ser abogado bajo la sola condición de someterse a un examen público ante un jurado de juriconsultos, nombrados a cada sesión por el juez. En el Estado de Nueva York, igualmente culto, para adquirir el derecho de defender basta rendir un examen, del que saldrá lucido todo hombre inteligente que se haya tomado el trabajo de recorrer las obras de derecho. “Si no estoy mal informado, dice un viajero moralizando sobre estas leyes, lejos de oponerse los abogados de Nueva York a la abolición de lo que habrían considerado como un privilegio, se han pronunciado altamente en favor de la nueva ley; pidiendo sólo que al mismo tiempo fuese abolida la tarifa que fijaba legalmente el precio de sus servicios, a fin de que la libre concurrencia fuese la ley en todo punto”. Citamos estos hechos no como modelos dignos de imitación, sino como resultados a que podemos llegar un día, por la codificación de las leyes, el jurado, las Legislaturas y la Constitución misma. El hecho es que en casi todas esas provincias que van a constituirse, los jueces son legos, y los hombres un tanto instruidos suplen la falta de abogados que en algunas de ellas sólo son conocidos de nombre o de reminiscencias.

“Educación gratuita”

Esta es una de las más bellas prescripciones de la Constitución, y con la que se ha puesto de un golpe a la altura de su época. Los estadistas norteamericanos, no obstante su respeto



por los fundadores de la Constitución federal, se avergüenzan hoy de su silencio sobre punto tan esencial. “La Constitución de los Estados Unidos, dice Horacio Mann, nada provee para la educación del pueblo; y creo que en la Convención en que fué forjada no se habló siquiera del asunto. Una moción para insertar una cláusula proveyendo el establecimiento de una Universidad nacional fué rechazada. Creo también que no ando errado si digo que las constituciones de sólo *tres* de los trece estados primitivos hacen parte de su ley fundamental la obligación de mantener un sistema de Escuelas gratuitas. ¿Puede preguntarse sobre qué esperanzas o razones se fundaban los fundadores de la Constitución para prometerse que los futuros ciudadanos de esta República serían capaces de sostener las instituciones o gozar de las bendiciones que ellos nos legaban? Cuán grandes hombres fueron, preciso es confesarlo, que esta verdad sencillísima se les pasó por alto. No reflexionaron que en el curso ordinario de la naturaleza todos los hombres instruidos, sabios y virtuosos desaparecen del teatro de la acción; y a ellos se les sucede una generación que viene al mundo enteramente desprovista de instrucción, de saber y de virtud. De aquí nace que cada generación nueva tiene que aprender todas las verdades de nuevo, y para sí misma; y la primera que deja de hacerlo lo pierde todo, y no sólo se arruina ella misma, sino que envuelve en su ruina a sus sucesores.”

¡Qué diremos nosotros, si en los Estados Unidos en 1840 podían articularse estas quejas, y mostrarse el temor de que una generación no educada viniese a envolver en su propia ruina a los que vienen atrás!

Pero las quejas de Mann contra las Constituciones de los Estados carecen hoy de justicia. Casi todos ellos han reformado desde entonces a acá sus Constituciones para poner en la ley fundamental como un principio constituyente la educación universal gratuita. Escogemos entre las disposiciones y declaraciones de varias constituciones modernas la muy reciente del Es-



tado de Indiana (1), porque no sólo es una muestra de la solicitud por la difusión de la instrucción, sino porque en el contexto mismo de la Constitución vienen apuntadas las fuentes de donde en todas las provincias argentinas pueden procurarse fondos para sostener la educación pública. "Artículo VII (de la Constitución de 1851.) — *Educación.* — Sección primera. — Siendo los conocimientos y el saber difundidos por toda una comunidad necesarios para la conservación de un gobierno libre, será del deber de la Asamblea General fomentar, por todos los medios convenientes, el progreso moral, intelectual, científico y agrícola, y proveer por medio de una ley de un sistema general y uniforme de escuelas comunes, donde se dará gratuitamente la enseñanza, y estarán abiertas para todos. El fondo de las escuelas comunes consistirá de fondos de municipios del congreso y de las tierras que le pertenecen;

"Del fondo depósito de los Estados Unidos;

"Del fondo de salinas y las tierras que a él corresponden;

"Del fondo de impuesto sobre los bancos, según la sección 114 de la carta del Banco del Estado de Indiana;

"Del fondo que produzca la venta de los seminarios de condado y del dinero y propiedades que pertenecían a ellos; y de las multas impuestas por infracción a las leyes penales del Estado, y de todos los decomisos que puedan ocurrir;

"De todas las tierras y otras propiedades raíces que vengan al Estado por falta de herederos y parientes con derecho a la herencia.

"De todas las tierras que hayan sido o puedan ser en adelante concedidas al Estado, cuando no se exprese objeto especial en la concesión, y los productos de su venta, incluyendo el producto de las tierras pantanosas concedidas al Estado de In-

(1) Este estado, que en 1850 tenía 988.734 habitantes, era parte de las tierras baldías cedidas por N. York al Congreso federal. En 1800 se estableció en él un gobierno territorial. En 1816 fué erigido en Estado y se constituyó. En 1851 enmendó su Constitución.



diana por el acta del Congreso del 8 de Septiembre de 1850, después de pagado el gasto de escogerlas y de secarlas.

“Podrán establecerse impuestos sobre las propiedades de corporaciones aplicables a objetos de escuelas comunes.

“3. El principal del fondo de escuelas será un fondo perpetuo que puede ser aumentado, pero nunca disminuído; y sus intereses serán inviolablemente apropiados al sostén de las escuelas comunes, y no a ningún otro objeto.

“4. La Asamblea General pondrá a provecho, de alguna manera útil, todas aquellas porciones del fondo común de escuelas que no han sido hasta ahora confiadas a los varios condados; y por medio de una ley proveerá a la distribución de los intereses entre los varios condados.

“5. Si un condado dejase de pedir su parte de intereses para el sostén de escuelas comunes, será capitalizado en beneficio de dicho condado.

“6. Los varios condados serán responsables de la preservación de la parte de dicho fondo que se les confíe, y del pago de sus intereses.

“Todos los fondos depositados en el Estado permanecerán inviolables y serán fiel y exclusivamente aplicados a los objetos para que fué creado el depósito.

“8. La Asamblea General proveerá, por medio de elecciones por los votantes del estado, de un Superintendente de Estado de la instrucción pública, que conservará su empleo por dos años, cuyos deberes y compensación serán prescritos por una ley.

“9. *Instituciones de Estado* Sección 1. Será del deber de la Asamblea General proveer por ley para el sostén de instituciones para la educación de sordo-mudos, y de los ciegos, y también para el mantenimiento de locos.

“2. La Asamblea General proveerá de casas de refugio para la corrección y reforma de delincuentes jóvenes.

“3. Los consejos de condado tienen poder para proveer de



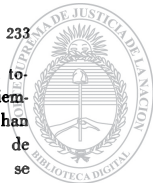
quintas como un asilo para aquellas personas que, a causa de su edad, enfermedades u otras desgracias tengan derecho a las simpatías y ayuda de la sociedad”.

Necesitamos agregar algunas palabras tanto en comentario de la cláusula de la constitución que analizamos, como en explicación de esta bellísima disposición constitutiva del Estado de Indiana.

Cuando la Constitución dice que la educación será *gratuita*, se entiende que en las escuelas no se cobrará a los niños estipendio alguno por la enseñanza. La educación debe ser costeadada por la Provincia; pero como la Provincia no tiene otros fondos que los que resulten de las contribuciones cobradas al vecindario, y éstas son de ordinario apenas suficientes para costear la administración, resulta en definitiva que los vecinos deben proveer a esa educación gratuita. Mas, como todos los padres de familia que tienen posibles han de gastar dinero en educar a sus hijos, en lugar de darlo a los maestros de escuela directamente, lo ponen en común para que las escuelas puedan no sólo educar a sus hijos, sino también a los de los vecinos que por sus cortas facultades no podrían hacer este gasto. No hay, pues, verdadera contribución, sino simple administración colectiva de los gastos que cada uno había de hacer individualmente.

Para proveer a esta necesidad primordial en la generalidad de los Estados, se ha ocurrido al expediente natural de destinar fondos del tesoro a este fin. Así se ha hecho también en la provincia de San Juan con vicisitudes varias, durante cerca de cuarenta años. Pero como este expediente no puede servir sino en escala muy limitada, ha debido acudir a la fuente de todo gasto público, que es el vecindario, que directa o indirectamente provee de fondos. En Nueva York, en Massachusetts se recaudan contribuciones de millones anuales para este objeto (1). En casi todos los Estados, empero, se ha recurrido a un expe-

(1) Por detalles sobre estos puntos pueden los curiosos consultar el *Monitor de las Escuelas Primarias* de Chile, que trata especialmente de esta materia, y *Educación Popular*.



diente que, en virtud de los efectos que produce, va cada día tomando mayores dimensiones y promete desobligar con el tiempo de toda erogación al vecindario. Muchos de los Estados han obtenido del Congreso de los Estados Unidos concesiones de tierras, las que vendidas van produciendo un capital que se pone a interés. El Congreso repartió entre los Estados, según sus poblaciones, unos cuarenta millones que tuvo de sobrantes una vez en el tesoro nacional, y esto es lo que se llama fondo depósito de los Estados Unidos, y sus réditos fueron consagrados exclusivamente al sostén de las escuelas (1). El rédito de estos fondos se reparte anualmente a las escuelas de todo el país y eximirá en parte, y un día eximirá del todo de pagar contribuciones para educar a sus hijos.

De este expediente y de los otros indicados en la Constitución de Indiana pueden echar mano las Legislaturas Argentinas, si pueden contar con que no sean desbaratados los fondos reunidos; y las tierras baldías comprendidas en su territorio con autorización del Congreso, o el Congreso reconociéndolas propiedad de las provincias, pueden ser destinadas a este objeto. Ya Mendoza ha dado el ejemplo, consagrando a la educación primaria un paño de tierras, otro a la educación superior, otro en fin a un hospicio. Tan bello ejemplo será imitado luego, y la práctica norteamericana se generalizará en un país donde no sabemos decir si hay por desgracia más tierra que habitantes.

Y a propósito de localización de la representación. Aquel expediente para asegurar la pureza del voto produce la generalización de la instrucción por todos los puntos del territorio. ¿Por qué ha de haber una escuela en el centro de una ciudad, para que aprovechen los hijos de los vecinos, pagada con fondos públicos a que han contribuido todos los habitantes? Cuando cada punto del territorio manda a la Legislatura un representante del mismo lugar, ese cuida de emplear en beneficio propio y de los suyos los fondos que vota; y como todos

(1) Fondos de escuelas de diversos estados.



los representantes se hallan en el mismo caso, el bien público, las mejoras, las escuelas, la instrucción, se difunden por todas partes con igualdad. De aquí ha nacido en los Estados Unidos el plan de las Bibliotecas de distrito, para la instrucción y solaz de todos los vecinos, en su propio lugar y residencia, habiendo ya país donde hay doce mil bibliotecas desparramadas de legua en legua, de manera que corresponde una biblioteca para cada tres mil habitantes, y un libro para cada dos habitantes varones, mujer, niños, etc.

“Su régimen municipal”

Cuando en los trastornos, frecuentes invasiones, y acefalías de gobierno, los ciudadanos se reúnen para patrullar las calles y estorbar el robo y el desorden, mientras llegan los vencedores, estos ciudadanos improvisan una municipalidad. El decurión y el celador de barrio son empleados municipales: el juez de aguas y el guarda de caminos son funcionarios municipales. La Municipalidad es la sociedad en relación al suelo, es la tierra, las casas, las calles y las familias consideradas como una sola cosa. Todo lo que se liga, pues, a la localidad en que residimos es municipal. La Municipalidad es la más antigua y la más persistente de las organizaciones sociales. Los bárbaros destruyeron el imperio romano y la municipalidad quedó viva bajo las ruinas. Las municipalidades convertidas en comunes restablecieron diez siglos después la libertad, comprándola de los señores feudales, conquistándola y haciéndosela otorgar por cartas reales. España se puso de pie contra la invasión francesa, en rededor y al llamado de las autoridades municipales. La base de todas las libertades en los Estados Unidos está en la municipalidad; cada aldea posee un gobierno completo, un sistema de instituciones propias, o de autoridades que de nadie dependen; y el condado, el Estado, el gobierno federal mismo se entienden con ellas, y a ellas confían la ejecución de las leyes de la legislatura provincial o del Congreso federal.



La Municipalidad fué la autoridad radical que trajeron los conquistadores a estos países; pero la desagregación de la población en las campañas, no ofreciéndole poblaciones compactas por base, estorbó que echase raíces profundas en América, y el estado de guerra casi continuo la subordinó luego a los poderes militares y a los agentes de la corona.

La aglomeración y fijeza de la población son, pues, requisitos indispensables para la existencia de esta institución. El sistema de pastoreo actual es su antípoda; no puede haber municipio en las campañas; los habitantes no pueden ayudarse y acorrerse entre sí, que es el objeto y el instinto del espíritu municipal. La organización municipal supone reunión de familias, intereses locales comunes a muchas personas. La municipalidad abolida, olvidada como institución, nace de sí misma, en fuerza de los intereses comunes. De esto hemos visto un ejemplo en la provincia de San Juan. Allí existe la organización municipal sin nombre todavía, pero con todos sus caracteres. La agricultura ha reunido poblaciones rurales en todos los terrenos que riegan diversos canales de irrigación, Angaco, Posito, Cairo, Albardón. La distribución de las aguas, el mantenimiento de los canales, interesa a todos los vecinos. Nadie es indiferente a esta cuestión suprema de que depende su subsistencia y su bienestar. Durante muchos años la distribución de las aguas estuvo abandonada a la autoridad gubernativa, incapaz por su esencia de satisfacer a esta necesidad puramente local. Los terrenos regados por el canal de Angaco estaban en la mayor parte inundados por los derrames y la distribución de las aguas del Posito, desde su principio más bien organizado que los otros, daba lugar a litigios sin fin. Para mostrar cómo nació la administración municipal de las aguas, necesitamos indicar la causa perenne de aquellas desavenencias. El canal tiene cerca de seis leguas de largo, y las primeras poblaciones se hicieron en terrenos exquisitos que estaban al fin del canal. El agua se distribuye a los propietarios por compuertas que la miden en grados, y que un juez de aguas cuida, guardando las llaves de



aquellas puertas por donde el agua se escapa. El buen éxito de las primeras plantaciones empezó a traer pobladores a los terrenos pedregosos, pero más próximos al origen del canal, cosa que como se operaba muy paulatinamente no llamó al principio la atención de los primitivos pobladores, que iban poco a poco quedando atrás de los otros que se colocaban en primeras aguas. Pero a medida que la población crecía a lo largo del canal, los antiguos poseedores empezaban a sentir las consecuencias de la escasez e irregularidad con que les llegaban las aguas. De aquí nacía un interés vivísimo en la administración común, y querellas interminables. Un vicio fundamental del sistema de reparto, muy engañoso en apariencia, agrava más aquella desventaja de los antiguos y más lejanos pobladores. La distribución de aguas del canal de Maipo en Chile se hace por regadores de agua. La *toma* de cada propietario consiste en una base de calicanto, construida en el borde del canal de donde parte la acequia regadora; pero construido de tal manera que forme una línea paralela con el nivel del agua del canal, midiéndose los *regadores*, por las pulgadas de espesor que tiene el agua en la toma al entrar en la acequia particular. En San Juan, la toma tiene un marco de madera acanalado en que juega una compuerta, que se sube o baja a voluntad. Los regadores de agua se miden por la abertura que la deja escapar entre el travesaño que está a ras del suelo, y la parte inferior de la compuerta levantada y fijada a la altura requerida. Supongamos que cuatro pulgadas de abertura hagan una suerte de aguas, y ocho pulgadas dos suertes. ¿Créese que el que está al principio del canal tiene igual cantidad de agua con cuatro pulgadas de abertura que el que está al fin con la misma cantidad? No se ha contado con el empuje que da a los líquidos la presión. Si en un tonel se abren agujeros iguales en su costado, uno en la parte baja y otro en la superior, por el que está en la parte baja, sufriendo la presión de todo el líquido contenido en el tonel, se escapará en igual tiempo una cantidad



de líquido diez veces mayor que por el agujero de igual tamaño que está al nivel de la superficie del líquido.

Estas causas naturales obrando, las cuestiones que suscitan las quejas que levanta el canal del Posito, han sido durante una serie de años una fuente diaria de malestar. El gobierno político nombraba jueces, y favorecía a sus parciales. Se rentaban ingenieros de aguas con contribuciones pagadas por el distrito, y la malversación por una parte y el arbitrario por otra no hacían sino agravar el mal. Los poderosos política o pecuniariamente tenían siempre razón; el juez de aguas era algún capataz de ministro o de representante. Los vecinos pidieron al fin se les dejase nombrar sus autoridades por elección, administrar sus fondos, y entender en sus propios negocios. Obtenido el permiso, la municipalidad del Posito nació bajo el nombre de Comisión de aguas. Los vecinos indiferentes a la política, inasistentes a los comicios públicos, acuden a la elección de miembros de la comisión con la actividad de verdaderos partidos. La elección de Juez de aguas, de celadores de tomas, trae afanados a los vecinos. El resultado ha justificado la bondad de la institución. Las aguas se distribuyen hoy equitativamente en cuanto depende de la voluntad; los jueces son íntegros; la comisión vigilante; y el vecindario pronto para erogar contribuciones, a veces fuertes en proporción de los haberes.

Los vecinos de Angaco, Cairo y Albardón formaron sus comisiones sucesivamente, y se proyectaba introducir en la población urbana y suburbios el mismo sistema. Los que tan satisfechos estaban de sus resultados ignoraban tan sólo que estaban instituyendo municipalidades, como aquel que escribía prosa sin saberlo.

Sucedió otro tanto con las escuelas. El gobierno de los paisanos rudos había destruido los establecimientos de educación, vendido las propiedades legadas para este objeto especial. La Legislatura de San Juan creó una Junta promotora de la educación, incorporándola, y dándole poderes para dirigir, inspeccionar y administrar lo que a la educación se refería, sin



subordinación al poder político. Este es el Consejo de Educación que existe en todos los Estados de la Unión, y la base de la organización municipal de las escuelas. Si al lado de cada comisión de aguas se pone una comisión de escuelas, y funcionarios para la conservación de caminos, guarda de cercos, etc., y se toman medidas de seguridad y policía, las municipalidades de Angaco, Posito, Albardón, Cairo, etc., quedarán definitivamente constituidas, desde que hayan demarcado los límites y circunscripción de cada municipio; pues el municipio no lo demarcan límites arbitrarios o convencionales, sino que viene ya formado del conjunto de familias que tienen intereses comunes, una ciudad; sus suburbios, una villa, sus alrededores, un lugarejo y las fincas y plantaciones rurales que se continúan en un paño de tierra. Una ciudad para proveerse de agua potable, alumbrado de gas, mantener serenos, policía de seguridad, etc., tiene una municipalidad, porque el bien o el mal es común y no puede decirse desde esta calle adelante principia un nuevo orden de intereses, etc.

Hablando nuestro honorable concollega de la Universidad de Chile don Ramón Briseño, en su elaborada Memoria sobre el derecho público chileno, del régimen español en América, dice: "además en cada capital de provincia debía haber un cuerpo municipal llamado *Ayuntamiento o Cabildo*, cuya institución era ciertamente la mejor garantía de la seguridad individual de sus habitantes y de su recta administración. Estos cuerpos, compuestos de Regidores perpetuos, de alcaldes que administraban justicia y de otros oficios llamados porta-estandarte (alférez real) procurador, alguacil, etc., eran unas asambleas populares que reunían el gobierno interior, la policía, la administración de justicia en los casos ordinarios, el manejo de los fondos municipales, y otras muchas e importantes facultades. Así es que sus atribuciones y prerrogativas eran muy vastas, y aun superiores a las de los ayuntamientos de la Península, de donde fué tomada esta forma de gobierno, con el objeto, en su princi-



pio, de oponer una fuerte barrera a la ambición y tropelías de los encomenderos y señores territoriales (1).”

De acuerdo con los privilegios y seguridades dadas en España a las tradicionales costumbres municipales, las leyes del siglo XVI establecieron que todas las ciudades, villas y lugares se gobernasen por las ordenanzas y costumbres que tuviesen, que se les guardasen los usos y privilegios de elegir los oficios de regidores, jurados, escribanos, fieles, mayordomos y otros oficiales de sus ayuntamientos, bastando el transcurso de cuarenta años para fundar la posesión del fuero, y el Rey don Juan II, en otra del siglo XV, dijo: “que las ciudades y villas y lugares, que tienen el privilegio o costumbre antigua *de dar y proveer los oficios de consejo* de cada ciudad, villa y lugar, así como regimientos y escribanos y mayordomías, y fieldades y otros oficios, *que son de los dichos consejos*, que los puedan libre y desembarazadamente dar y proveer, y persona alguna no se entrometa en ello; y si algunas cartas contra ello mandaremos dar, aunque tengan cualesquier cláusulas derogatorias *que non valgan* (2).”

Vese, pues, por las reales ordenanzas citadas, que no sólo era en España general a lugares, villorrios, caseríos, villas y ciudades la propia administración municipal, según la situación de las poblaciones, sino que el sistema municipal era ejercido en la plenitud de su esencia, *sin que persona alguna se entrometa en ello*. Pero al establecerse las primeras colonias españolas en América alteróse la institución sacándola de su objeto y haciendo de por vida sus empleos, lo que los convirtió en negocio, e hizo a los ayuntamientos agresivos para invadir atribuciones (3), haciéndose ellos mismos centros de intrigas,

(1) *Memoria histórica-crítica del derecho público chileno desde 1810 hasta nuestros días*, presentada a la Universidad de Chile por don Ramón Briseño, Miembro de la Facultad de Humanidades, 1849.

(2) *España bajo el poder arbitrario* por el Dr. don Pedro de Urquinaona.

(3) *Memorias secretas* de don Jorge Juan y don Antonio Ulloa.



de corrupción y de tiranía. Pero aun así, los ayuntamientos no se establecieron sino en las ciudades de cierta nota o antigüedad, sin formar un sistema general de administración, no permitiendo la falta de villas y la general desagregación de la población multiplicarlas en el resto del territorio. Cuando las Provincias unidas del Río de la Plata desconocieron toda autoridad central, Buenos Aires introdujo en sus instituciones el sistema representativo; y no habiendo en la Provincia otra municipalidad que la de Buenos Aires, la Junta de representantes era un duplicado de esa misma municipalidad con mayores atribuciones. "La nueva administración, dice Núñez hablando de Las Heras, empezó por salvarse de los inconvenientes que tanto se habían tocado de no dar a las cosas un sentido fijo, y aun denominarlas con una nomenclatura viciosa; y sobre este principio introdujo el de que el país sólo podía regirse por el *sistema representativo republicano* (2)." La creación de las Legislaturas provinciales introdujo, pues, en la práctica el sistema representativo, tal como lo practican todas las repúblicas modernas, y sólo desde entonces pudo decirse que existían las formas republicanas, pues los Congresos, comunes a todas las formas de gobierno bajo los nombres de Estados Generales, Dietas, Asambleas, Parlamentos, no habían sido sino de tarde en tarde convocados. Es curioso notar cómo las tentativas de arbitrario han venido a estrellarse contra esa práctica saludable, y los lamentos de los que hubieran deseado que la república representativa no existiese aún, para darse el gusto de introducirla a su manera, como aquellos médicos que deploran la buena salud de sus prácticas, lo que le estorba curarlos. En los Estados Unidos existe la municipalidad, la Legislatura provincial y el Congreso; pero cada uno con distintas funciones y poderes. Hay, por ejemplo, en Massachusetts trescientas treinta municipalidades, y una de ellas en Boston. La Legislatura provincial, o del Estado viene a ser la Municipalidad de las Muni-

(2) Noticia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

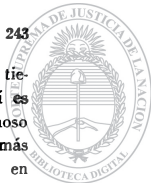


cialidades, así como el Congreso es la representación de la población de cada estado. Concíbese que en Boston, en Nueva York, puede existir una municipalidad de la ciudad y una Legislatura del Estado, porque esta última es precisamente la representación de las otras. En las provincias argentinas no sucede así. Una legislatura es una municipalidad legislando, y no le da otro carácter la constitución que analizamos. Si pues se restableciesen las antiguas municipalidades con sus atribuciones, prerrogativas y restricciones según las leyes españolas, sería preciso suprimir las legislaturas que hacen doble juego en algunos puntos, y cuya presencia no sospechó la legislación española. La municipalidad en los estados federales para coexistir con las Legislaturas de provincia, el Poder Judicial independiente y el Poder Ejecutivo debe, pues, basarse en otros principios que los cabildos coloniales que obraban en esfera distinta. Resucitar la legislación municipal española es establecer el caos, y el conflicto de todos los nuevos poderes, creados y deslindados posteriormente. Ni la palabra cabildo ha de nombrarse si se quiere evitar la confusión y el desorden. En cuantos escritos hemos visto sobre este punto, las ideas emitidas se resienten de las nociones tradicionales o de falta de atención a la situación nueva. En la ley del Congreso dictada para la ciudad de Buenos Aires se habla de establecer más tarde otras municipalidades subalternas. ¿Qué clase de jerarquía hay entre municipalidades? Cuál habla de establecerlas en las cabeceras de departamento! La municipalidad existe o debe existir dondequiera que hay habitantes. El municipio o ayuntamiento no tiene tamaño especial, ni lo traza el legislador. Existe antes que él, o se forma a su vista. Una ciudad capital es un municipio; una ciudad, una villa, una aldea son municipios, una campaña cultivada es un municipio, y aun las fincas y habitaciones separadas constituyen para ciertos respectos el municipio, porque no se concibe que haya habitantes que no estén clasificados en demarcaciones municipales. "Los términos de decurias, ciudades y *will*, dice Blackstone, en el len-



guaje de la ley, tienen igual significado. Créese que al principio se encontraba una iglesia en cada uno de estos lugares. Verdad es que por la alteración del tiempo y del lenguaje, la palabra villa (town) se ha hecho hoy un término genérico que comprende las diversas acepciones de ciudad (civitas) burgos y ciudades ordinarias. Y Christian añade: "Créese que todo lugar donde hay un condestable (alguacil) es un municipio (township)." La municipalidad de una ciudad no puede sin impropiedad y sin desnaturalizar los objetos de la institución administrar los asuntos municipales de las aldeas y lugares vecinos. ¿Por que se introduciría el régimen municipal en las ciudades grandes y no en las pequeñas? ¿Por qué en las cabeceras de departamento, y no en los pies?

No teniendo nosotros facultad inventiva en materias tan delicadas, y hallándose nuestros pueblos en situaciones idénticas a las que nos prestan el mecanismo de nuestras instituciones federales, hemos debido acudir a las fuentes vivas de la municipalidad para ver cómo sirve a los fines de la organización federal, sin chocarse con el sistema representativo y sirviéndoles de base, por el contrario. Es tan normal en los Estados Unidos el municipio que es medida de tierras, designándose con este nombre el *township* cierta extensión de seis millas por costado en cuadro. Toda agregación de población es, pues, un municipio, palabra que preferimos a corregimiento, por adaptarse más a la generalidad de su aplicación en aquellos países. Cuando la población está diseminada sin un centro de agregación se llama *plantación*, y, aunque no tiene todas las autoridades municipales de las ciudades y municipios, tiene representación de tal y obra separadamente. Los *settlements*, establecimientos de campo aislados, adhieren a alguna plantación, municipio o ciudad vecina. La división en departamentos es sólo para la administración civil, judicial y política, y no se mezcla sino en raros casos con lo que es puramente municipal en la parte comprendida en su territorio. El municipio obra por sí y para sí; tiene poder de imponer multas y establecer con-



tribuciones. Así es como la Municipalidad de Nueva York tiene contribución de escuelas, de aguas, alumbrado, etc. Así es como se ha construido por aquella municipalidad el famoso acueducto de Croton, que pasa con razón por la primera y más estupenda obra pública de los tiempos modernos, y mayor en su conjunto a los celebrados acueductos romanos. Tan poderosa municipalidad requiere organización más sólida y eficaz que las comunes, y tiene adoptada la división de senado y legislatura en la manera de elegir sus miembros y de renovarse, a fin de que intereses tan altos encuentren en su gestión y administración, tradiciones, plan seguido, capacidades especiales y continuación de trabajos y obras emprendidas. Sólo en la instrucción primaria gasta al año más de trescientos mil pesos, y sus créditos pendientes ascienden a millones. Las municipalidades pequeñas pueden imponer contribuciones hasta mil pesos en algunos estados en que esta facultad está limitada. El capítulo V de los Estatutos revisados del Maine produce lo siguiente:

De los meetings de los empleados de municipio y de sus límites

Sección 1. Todo meeting (cabildo abierto) de municipio (corregimiento), excepto en los casos mencionados en las dos subsiguientes secciones, será convocado por un edicto firmado por los notables (regidores) de dicho municipio.

Sección 2. El primer meeting municipal tenido en algún municipio será convocado y notificado según el acta de incorporación de dicho municipio; y si nada estuviere prescripto, por un juez de paz en el mismo departamento, o cuando un municipio, aunque haya sido organizado, está desprovisto de empleados, puede convocar un meeting, pidiendo al objeto el edicto al juez de paz, en petición firmada por tres vecinos del lugar; pero cuando, por razón de muerte, remoción o renuncia de los notables, no quedase una parte mayor en funciones, la mayor parte de los que se conservan en ellas tendrán el mismo poder para convocar a meeting municipal, como una mayoría de los elegidos.

Sección 3. En caso de que los notables rehusasen sin legítima



causa convocar a meeting municipal, en alguna ocasión pública, diez o más votantes legales en dicho municipio podrán pedir a un juez de paz del mismo departamento, para lo que queda por esta ley autorizado, a dar, orden bajo su firma para convocar a meeting. Y cuando diez o más votantes calificados en el municipio requiriesen por escrito que los notables inserten una materia particular o asunto en el edicto para convocar a meeting municipal, la insertarán en el primer edicto que publiquen para un meeting, o convocarán un meeting para el expreso propósito de tomarla en consideración.

Sección 4. En uno y otro caso el edicto especificará el tiempo y lugar en que ha de tenerse el meeting: y en distintos artículos declarará los asuntos sobre que se ha de acordar en dicho meeting; y no será acordado otro negocio, materia o cosa que pueda tener efecto obligatorio u operación legal.

Sección 5. El edicto será dirigido a algún condestable (1) del municipio o a algún individuo a su nombre, indicándole avisar y notificar a todas las personas calificadas por ley para votar en tal meeting, para reunirse en el lugar y tiempo señalado.

Sección 6. El dicho meeting será notificado por la persona a quien va dirigido el edicto, poniendo una copia certificada del dicho edicto en algún lugar público y notable de dicho municipio, siete días antes del meeting; a menos que el municipio haya indicado, o indicase por voto, en meeting legal, otro modo; para lo que tiene por ésta poder

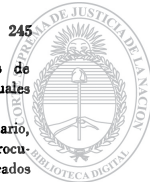
Sección 7. En uno y otro caso, la persona que notifica el meeting hará su informe sobre el edicto, exponiendo la manera de dar aviso y el tiempo en que fuere dado.

Sección 8. Toda persona que por la constitución de este estado esté calificada a votar para gobernador, senadores y representantes, en el municipio o plantación en que reside, tendrá derecho a votar en la elección de todos los empleados de municipio o plantación, y en todos los asuntos y negocios del mismo.

Sección 9. Los meetings anuales en el estado serán celebrados en el mes de Mayo o Abril y los votantes calificados en cada municipio elegirán, por un voto mayor, un actuario, tres, cinco, o siete personas, habitantes del municipio, para notables, guardianes de pobres, si no hubiese otras personas nombradas para ello, tres o más tasadores (2), dos o más guarda-cercos, tesoreros, inspectores de caminos, inspectores de

(1) Es el funcionario ejecutivo municipal; notifica órdenes; arresta, cobra multas. Equivale al alguacil.

(2) Tasador de impuestos: el vecino encargado de hacer el tanteo y distribución de las contribuciones según los posibles presuntos o verificados de cada uno.



maderas, inspectores de escuelas, vendedores de cueros, medidores de leña y cáscara, y otros empleados que sea de uso nombrar, los cuales serán debidamente juramentados.

Sección 10. La elección de presidente (Corregidor Mayor), actuario, notable, tesorero, comisión de escuelas (comisión de aguas), y procurador de municipios se hará por boletas; y la de los demás empleados se hará por boletas, o de otro modo acordado por votación del municipio.

Sección 11. Durante la elección de notables en algún meeting municipal, el actuario presidirá; pero si se hallase ausente, presidirá uno de los notables o uno de los tasadores; y en defecto de ellos un condestable puede hacer legalmente el oficio de actuario, recibiendo y contando los votos para presidente; y el presidente después de electo puede pedir a los votantes den su voto por un actuario pro tempore, que será juramentado por el presidente o un juez de paz.

Sección 12. El actuario antes de entrar en el desempeño de su oficio jurará ante el presidente o un juez de paz registrar con exactitud todas las materias votadas en este y otros meetings durante el siguiente año, y hasta que otro actuario haya sido electo y juramentado en su lugar; y también desempeñar fielmente todos los deberes de dicho oficio.

Sección 13. El actuario del municipio o dos de los notables harán para ello una lista de los nombres de todos aquellos que hayan sido nombrados a empleos, y de quienes por ley se exige juramento, y la entregarán a un condestable, con un edicto dirigido a él; y requiriéndole citar en los tres días de haberla recibido a todas las personas en ella nombrada a comparecer ante el actuario del municipio, a prestar el juramento de oficio, por ley requerido; y en el término de diez días de haber recibido su edicto, el condestable lo devolverá, o pagará en caso de no hacerlo seis pesos para el uso del municipio; y el municipio le concederá una razonable compensación por sus servicios.

Sección 14. Toda persona así notificada que descuidase comparecer a prestar el juramento requerido, en los dichos siete días, que el dicho actuario está autorizado a recibir, será multado en cinco pesos que pagará al actuario, quien informará de ello y perseguirá el cobro (excepto sobre aquellos empleados para cuya omisión se proveen penas diversas), dos tercios en beneficio del municipio y un tercio para el ejecutor.

Sección 15. Cuando un empleado de municipio, plantación o parroquia haya sido juramentado por el actuario de dicha corporación anotará su propio certificado de ello en toda forma y detalladamente,



y cuando los dichos empleados sean juramentados por otra persona o magistrado, dará éste un certificado a la persona juramentada en toda forma y detalladamente del juramento administrado por él, oficialmente firmado; y la dicha persona entregará este certificado al actuario del municipio, plantación o parroquia, y lo anotará detalladamente en los siete días después de haberlo recibido; y si el actuario o la persona juramentada descuidase su deber a este respecto será penado en cinco pesos que pagará en beneficio del municipio. Los derechos del actuario por anotar cada certificado serán de cinco centavos (medio real), que el municipio debe abonarle.

Sección 16. Cuando por razón de no aceptación, muerte o renuncia de una persona elegida para un empleo municipal, en algún meeting anual o en otra época, o a causa de demencia u otra causa que la inhabilite, ocurra una vacante o falta de empleados, el municipio puede proceder a nueva elección de empleados; y éstos serán debidamente juramentados, si el caso lo requiere, y tener el mismo poder que si fueran electos en meeting anual.

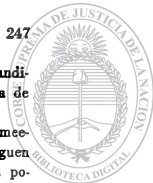
Sección 17. En todo meeting municipal se elegirá al principio un presidente, y prestará juramento de desempeñar los deberes de su oficio fiel e imparcialmente, ante un juez de paz, o ante la persona que preside el acto mientras es elegido: el dicho presidente dirigirá las operaciones del meeting; y cuando una votación declarada por él fuese puesta en duda, inmediatamente después de su declaración por siete o más, procederá a verificarla matriculando los votantes, o por otro medio que el meeting indique.

Sección 18. Ninguna persona hablará en dicho meeting antes de obtener para ello permiso del presidente. ni cuando otra persona está hablando; y todos guardarán silencio cuando lo mande el Presidente, so pena de un peso por cada infracción de tal orden, en beneficio del municipio.

Sección 19. Si alguna persona, prevenida por el presidente, persistiere en actos desordenados, el presidente puede mandarle retirarse del meeting; si rehusase, pagará tres pesos, a beneficio del municipio, y el presidente puede mandarlo sacar del meeting por un condestable, y tenerlo arrestado por tres horas, a menos que el meeting haya sido antes disuelto o aplazado.

Sección 20. Los meetings de municipio para la elección de gobernador, senadores y representantes se harán como la constitución lo prescribe; y las anteriores secciones no serán aplicables a dichos meetings.

Sección 21. El presidente u otra persona que presida un meeting no recibirá votos doblados, o enrollados; y no permitirá a ninguna persona, sin el consentimiento del votante, leer o examinar el nombre o nombres



escritos en su boleta, con la mira de descubrir el número de los candidatos, antes que se cierre la votación por el presidente, bajo la pena de veinte pesos, cobrables por demanda ante la justicia.

Sección 22. Los votantes calificados de algún municipio en un meeting legal de municipio pueden acordar y votar las sumas que juzguen necesarias para el mantenimiento y sostén de las escuelas y de los pobres, y para hacer y reparar caminos públicos y vecinales, y puentes, comprar y cercar cementerios, y otras cargas necesarias, y pueden dar las órdenes y decretos, para el prudente manejo de los negocios del municipio, según lo juzguen conducente a su buen orden y tranquilidad, e imponer multas que no excedan de cinco pesos por una infracción, y con tal que dichas órdenes o decretos sean aprobados por los comisarios de departamento, y con tal que en todos los cobros de multas por infracción de los decretos de un municipio o ciudad, los costos de la prosecución sean a cargo de dicho municipio o ciudad, y sean pagados por su tesoro.

Sección 23. Los habitantes de un municipio son declarados un cuerpo político y como tal pueden licitar y nombrar agentes y procuradores.

Sección 24. Los límites de cada municipio permanecerán como hasta aquí están establecidos, y la línea divisoria entre los municipios será recorrida una vez cada cinco años, excepto en los casos abajo especificados.

Sección 25 y 26 (*manera de hacer la visita*).

Sección 27. Cuando un municipio se presentase a la corte suprema judicial asegurando que existe una controversia sobre linderos entre dicho municipio y otro vecino, y pidiendo que sean recorridos por comisionados nombrados por dicha corte, la corte puede, después de ponerlo en conocimiento de las partes interesadas, nombrar tres comisionados, quienes después de dar aviso del tiempo y lugar de la reunión a las personas interesadas, deben reconocer y determinar la línea o líneas en disputa, describirlas por direcciones y distancias, y hacer poner y mencionar en su informe linderos y señales correspondientes para el establecimiento permanente y dar informe por duplicado de sus procedimientos; uno de los cuales será enviado a la corte, y el otro a la oficina de la secretaría de estado; y las líneas que así fueren fijadas y aceptadas serán consideradas en toda corte de justicia y para todo objeto las verdaderas líneas divisorias entre los dichos municipios.

Sección 28. La corte puede conceder a los comisionados una adecuada compensación por sus servicios y decretar que se colecten, conforme a la ley, en dichos municipios en proporción.



CAPITULO VII



..... Bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Art. 6. El gobierno federal interviene con requisición de las legislaturas o gobernadores provinciales, o sin ella, en el territorio de cualquiera de las provincias, al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior.

Art. 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Confederación, si ellas no prefieren salir fuera del territorio argentino.

Art. 110. Los gobernadores de provincia, y los funcionarios que dependen de ellos, son agentes naturales del Gobierno general para hacer cumplir la contribución y las leyes generales de la Confederación.

Estas cláusulas establecen de un modo general la acción gubernativa del poder federal en el territorio de las provincias. El caso en que interviene está designado. ¿Cómo interviene? A tres poderes distintos está cometida la decisión del caso de la intervención. Puede ser requerido el poder federal a ejercerla por la legislatura de una provincia: puede serlo igualmente



por el gobernador de ella; o por fin, a falta de estas autoridades, el poder federal puede intervenir aún no siendo requerido “*al solo objeto* de restablecer el orden público perturbado por la sedición.”

Esta última atribución del ejecutivo federal está implícita en la constitución de los Estados Unidos, y se comprende en la legislación ordinaria de los Estados particulares, pues es condición necesaria para la felicidad común que el orden constitucional sea mantenido contra la sedición; y que una parte del territorio, amenazada de ataque o peligro exterior, sea amparada por las fuerzas y poder del todo. Como lo hemos hecho sentir más de una vez, el aislamiento y separación en que se halla cada provincia requiere que haya más que en parte alguna un poder general que preste su auxilio a las autoridades contra la sedición. Un estatuto de Eduardo III en Inglaterra contra las asonadas, incorporado en la legislación común de sus colonias, traía desde antes de establecerse la constitución norteamericana, fijado el sentido de la frase *leving war*, por los casos a que el dicho estatuto la aplicaba, entrando entre ellos la sedición. Blasktone comentando la frase, hacía consistir el caso de sedición “en la universalidad del designio, por ser una rebelión contra el estado, y usurpación de los poderes del gobierno, y una insolente invasión sobre la autoridad del rey”. Así se hace notar que un alboroto para atacar una casa particular no es un acto de hacer armas; pero si se hiciere con el confesado designio de atacar todas las casas, entonces la universalidad del designio constituye el acto de hacer armas. Durante la administración de Wáshington fueron convictos varios individuos de participar en una combinación general para resistir por la fuerza la ejecución de la ley de sisas; y no ha mucho el ministro Webster declaró su opinión, de que si algunos se combinasen y confederasen entre sí y por fuerza de armas o por fuerza de número, resistiesen efectivamente a una ley del Congreso, en su aplicación a un individuo particular, con el confesado propósito de hacer la misma resistencia a la misma ley, en su apli-

cación a todos los demás individuos, era hacer guerra a los Estados Unidos, y nada menos que traición”.

La disposición constitucional que nos ocupa es de una grave trascendencia, por la latitud de poderes que parece encerrar, o por la tendencia de todo poder general a extender su jurisdicción. ¿Puede el poder de la federación decidir, sin requerimiento de la Legislatura o del gobernador de una provincia, que hay sedición en ella, no obstante existir la legislatura provincial? Si pudiera, concibese desde ahora, a cuánto arbitrario estaría sujeta la organización del país. No es fuera de propósito señalar que en el curso de los acontecimientos políticos, ha de ocurrir necesariamente que las autoridades emanadas del sufragio en una provincia sean en cuanto a miras políticas y espíritu de partido antipáticas a las autoridades nacionales, emanadas igualmente del sufragio de otra época anterior. Este antagonismo, muy frecuente en los Estados Unidos, es una de las bellezas del sistema federal, por donde ninguna preponderancia de opinión es absoluta en todo el estado. Ningún mal hace tampoco este caso a la federación en general, por cuanto sólo puede hacerse sentir su existencia por el color político de los diputados que enviará al Congreso general la provincia donde ocurra. ¿No será de temer que el ejecutivo nacional vea la sedición donde sólo hay la oposición a su sistema o un obstáculo a sus miras de partido, o una resistencia a influencias personales, sin salir de los límites del derecho y de la independencia provincial? ¿Qué requisitos constituyen la sedición en una provincia, para que su existencia sea verificada por el gobierno federal, colocada a trescientos o cuatrocientas leguas del teatro de los sucesos? Creemos hallar en el texto de la Constitución las reglas que deben regir el caso, ya que ellas están de acuerdo con el sentido común y la soberanía de las legislaturas. De la colocación sucesiva de los tres poderes que pueden obrar, resulta que mientras exista la legislatura constitucional de una provincia y ella no requiera la intervención del gobierno federal, el caso de sedición no existe. A falta de la legisla-





tura, por estar impedida de reunirse, el gobernador de una provincia puede requerir la intervención, y sólo a falta de estas dos autoridades, la una en pos de la otra, por haber sido derrocadas, el gobierno federal podría obrar sin requisición al solo objeto de restablecerlas. Toda otra interpretación destruye la federación y entroniza el arbitrario.

El Congreso de los Estados Unidos fijó el sentido de esta cláusula en la ley que en 1798 dictó para autorizar al presidente a convocar la milicia para sofocar sediciones en los estados.

La parte que hace a nuestro propósito dice así... "Y en el caso de una insurrección en algún estado contra su gobierno, será lícito al Presidente de los Estados Unidos, a requisición de la legislatura de dicho estado o del ejecutivo (cuando la legislatura no puede ser convocada), citar el número de milicias de otro estado o estados, a los cuales se pedirá según lo juzgue suficiente para sofocar dicha insurrección. Sección 2ª. Que dondequiera que las leyes de los Estados Unidos encuentren oposición, o la ejecución de ellas sea obstruida en algún estado, por combinaciones demasiado poderosas, para que sea posible destruirlas por el curso ordinario de los procedimientos judiciales, o por los poderes de que para este acto están investidos los mariscales (comisarios federales), será lícito al Presidente citar la milicia de dicho estado o de otro estado o estados, en cuanto sea necesario para suprimir tales combinaciones, y hacer que las leyes sean debidamente ejecutadas; y el uso de la milicia así citada puede ser continuado, si necesario fuere, hasta pasados treinta días después del comienzo de la próxima sesión del Congreso. *Con tal que* dondequiera que, a juicio del Presidente, sea necesario usar de la fuerza militar así convocada, el Presidente por medio de una proclama ordene previamente a los insurgentes retirarse pacíficamente a sus moradas, en un tiempo limitado".

"Sección 9. Que los mariscales de los diversos distritos y sus tenientes tengan los mismos poderes para ejecutar las leyes



de los Estados Unidos, que los sheriffs y sus tenientes tienen por ley en los diversos Estados para ejecutar las leyes de los respectivos estados.”

Por ley de 1807, declaróse ser permitido al Presidente usar para el mismo fin y en los casos que fuere lícita su intervención, la parte de las fuerzas navales o de tierra de los Estados Unidos que juzgase necesarias, habiendo primero cumplido con los requisitos de la ley anterior.

Todavía podríamos citar una prueba negativa de que la mente de nuestra constitución es la misma que la de los Estados Unidos, e igual su aplicación. En un proyecto de Constitución que corrió impreso antes de su discusión, se proponía que la confederación interviniese *sin requisición* en el territorio de las provincias al solo objeto, etc. El Congreso, rechazando con razón esta falsificación, se aproximó al texto original, “a requisición de las legislaturas, o del gobernador o sin ella”, entrando por tanto en la jurisprudencia administrativa de los Estados Unidos.

Podemos, pues, con toda seguridad aplicar a nuestro caso la doctrina que establece Story citando a Tucke, a Rawle, a Elliot y otros comentadores: “No es fuera de propósito observar, que todo pretexto para mezclarse en los negocios privados de un estado, so color de protegerlo contra la violencia doméstica, está alejado por aquella parte de la disposición que hace necesaria la requisición que la legislatura o autoridad ejecutiva en el estado en peligro ha de hacer al gobierno general, antes que su intervención sea en ningún caso (*at all*) propia. Por otra parte este artículo pone una inmensa y adicional fuerza a la disposición de un gobierno de estado, en caso de rebelión interior o de insurrección contra la autoridad legal. Los estados del *sud*, más expuestos a este peligro (por los esclavos) deben adherir tenazmente a una constitución, de la que asistencia tan efectiva pueden prometerse en sus más críticos períodos”.

Como se ve por el tenor de la ley citada, el poder federal



no decide el caso de la intervención, sino cuando se trata de hacer cumplir una ley del Congreso, pues para ello no necesita ser requerido por autoridades provinciales, sino que es de su incumbencia obrar por aquella regla que todo gobierno debe bastar a su objeto.

En corroboración de esta interpretación la Constitución argentina añade: "Art. 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la confederación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino."

Esta misma disposición y limitación del estado de sitio a arrestar las personas o trasladarlas de un punto a otro está expresa en la constitución de los Estados Unidos en este artículo: "El privilegio del escrito de *Habeas corpus* no será suspendido a menos que, en caso de rebelión o invasión, la seguridad pública lo requiera". Reputan con razón el paladium de las libertades públicas el derecho al escrito del *Habeas corpus*, por el cual un preso o arrestado se presenta a la justicia pidiendo se le ponga en libertad, y ésta si ha sido preso aquel por quien no tiene autoridad para ello, o sin causa suficiente. expide un edicto, diciendo al que lo retiene en prisión: "Os mandamos que el cuerpo de N. de F. que está en nuestra prisión de..... (nombrándola) bajo vuestra custodia (si es el alcaide) lo conduzcais ante nuestra corte inmediatamente después de recibir el escrito". Esta garantía aunque sin forma tan eficaz está implícita en nuestra constitución, donde dice: "Nadie puede ser detenido o preso sino según las prescripciones de la ley," idéntica cláusula a la que el jurisconsulto Dupin en la constitución francesa llama el *Habeas corpus francés*. Así, pues, nues-



tro estado de sitio, en la limitación de sus efectos, corresponde a la suspensión del derecho al escrito de *habeas corpus*.

“Se declarará en estado de sitio”

La declaración de *estado de sitio*, tomada de las constituciones francesas *état de siège*, es, en su aplicación restringida a privar la libertad a las personas, una traducción en el lenguaje técnico, jurídico, de la suspensión del *habeas corpus* inglés, el efecto como el propósito es igual, aunque la una frase niegue y la otra afirme. La Constitución de Chile ha incorporado sabiamente en sus disposiciones el *habeas corpus*, explicándolo detalladamente.

El art. 143 de la Constitución de Chile de 1833 dice así:

“Todo individuo que se hallare preso o detenido ilegalmente (basta que él se considere tal) por haberse faltado a lo dispuesto en los arts. 135, 137, 138, 139 podrá ocurrir por sí o cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, reclamando que se guarden las formas legales. Esta magistratura ordenará que el reo sea traído a su presencia, y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención.”

Habría sido de desear que nuestra constitución hubiese aclimatado así el *habeas corpus*, sin el cual las garantías de la seguridad individual son ilusorias. En los Estados Unidos se ha hecho tan rígido el uso de este soberano remedio contra toda posible vejación, que en algunos estados tiene multa de cuatro mil quinientos pesos el juez que no proveyese inmediatamente el escrito de *habeas corpus*. Pero las constituciones particulares todas de los estados han agregado todavía otro seguro, que se halla en nuestra legislación ordinaria. Tal es el derecho acordado de dar fianza de cárcel segura por toda acusación de delito que no traiga pena capital, y aun en éstos fundada en sospecha vehemente o comienzo de prueba. El artículo 15 de la



Constitución de Tennessee (y en todas las otras hay uno idéntico) dice: "Que todos los presos puedan dar fianza de cárcel segura con garantías suficientes, excepto por delitos capitales, cuando la prueba es evidente, o la presunción grande; y el derecho al *habeas corpus* no será suspendido, excepto cuando en caso de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera." Estos son, pues, los únicos efectos del estado de sitio nuestro. La Constitución de Nueva York añade: "en ningún caso sino por la legislatura", cosa que está prevista en la Constitución argentina, prohibiendo a aquélla conceder facultades extraordinarias a los gobernadores. La de los Estados Unidos establece que: "ningún magistrado o tribunal exigirá fianzas excesivas." Estas dos disposiciones son el baluarte de las libertades públicas. Arrestado un ciudadano, presenta en el acto escrito de *habeas corpus* a sus jueces naturales, y éstos ordenan inmediatamente al alcaide lo produzca ante ellos. Si hallaren que el arresto ha sido indebido lo ponen en libertad; si fuese a efecto de presunción o acusación de crimen que no sea capital, o siéndolo, no hubiere prueba o fuerte presunción de culpabilidad, el acusado ofrece fianza de cárcel segura, y aceptada, queda siempre en libertad, pronto a presentarse al llamado del tribunal.

Estas disposiciones de pura tramitación judicial y de antemano establecidas por las leyes ordinarias vendrían mal en el texto de una constitución si no tuviesen por objeto limitar la acción del poder político. La constitución de Mayo de San Juan dada en 1825, durante la administración de don Salvador M. del Carril, abolida y quemada en auto de fe público por Carita (apodo) y el Padre Flores, otorgaba, con respecto a la inviolabilidad del domicilio sin allanamiento judicial, el derecho de resistir hasta la última violencia; lo que años después creía aplicable un juez al caso de un compadre del gobernador acusado de homicidio voluntario y asesinato, de uno que se había introducido en su corral de ovejas. El Juez entendía que este era el caso de la inviolabilidad del domicilio.



Esta disposición de la Constitución es de toda importancia en un país donde los régulos no se curan de guardar formas para impartir órdenes gubernativas de prisión, pagos, contribuciones forzadas, etc. Ocurriónos una vez estando parados en una ventana conversando, acercárenos un paisano a decirnos de orden del gobernador que entregásemos cien pesos de contribución. Otra, un cajista de la imprenta del Estado de que éramos Director, nos intimó multa de veinte y seis pesos de orden del gobernador, y fuimos a la cárcel por haber desobedecido a la autoridad. Otra, nos mandó llamar el gobernador con un pariente, como solía hacerlo muchas veces para conferenciar. El Gobernador se había ausentado en la mañana, y dejado orden de prender a todos los que concurriesen a su cita. Sólo dos caímos en la trampa. Pero el despotismo ha tenido entre nosotros su poesía, sus aspiraciones de llegar al *nec plus ultra* de poder, de terror. Provincias hay en que se ha establecido y aun creemos que dura, que orden gubernativa alguna se comunique por escrito, ni por funcionario conocido. El mozo de manos, un pasante cualquiera, un soldado, un quidam, intima órdenes de pago, a nombre del gobernador, lleva a prisión, fusila, degüella, sin dar lugar a la menor queja. ¡Oh Beccaria!, no habríais podido escribir vuestro inmortal libro *De los Delitos y de las Penas*, si hubiérais visitado Entre Ríos.

La libertad de los individuos es lo mismo. Medio San Juan ha estado en *presidio* como procedimiento ordinario de ejecución de una contribución forzosa.

“Es de grande importancia para el público, dice Blackstone a este respecto, que la libertad personal sea mantenida. Si se dejase una vez al magistrado, aun al de carácter más elevado, el poder de aprisionar arbitrariamente a aquellos a quienes él o sus agentes juzgasen oportuno arrestar, muy luego todos los otros derechos, todas las otras inmunidades serían anodadas. Algunas personas han pensado que los ataques injustos hechos contra la propiedad y aun contra la vida causan menos perjuicios al bien general de la sociedad que aquellos que son



dirigidos contra la libertad personal. Privar a un hombre de la vida, o confiscar sus bienes por la fuerza, sin acusación, sin juicio, sería un acto de despotismo tan notorio, tan monstruoso, que de un extremo a otro del reino se levantaría un grito universal contra la tiranía; pero cuando un hombre es secretamente arrastrado a una prisión, cuando sus sufrimientos son ignorados u olvidados, es un abuso del gobierno arbitrario más peligroso, cuanto menos público es y menos llama la atención. Sin embargo, si el Estado se halla en un peligro real, esta medida misma puede ser algunas veces necesaria. Felizmente, por nuestra Constitución, no pertenece al poder ejecutivo determinar si el peligro del Estado es bastante grande para que sea oportuno adoptar esta medida. Sólo el parlamento o el poder legislativo puede, cuando lo juzgue conveniente, suspender el acta de *habeas corpus* por un tiempo corto y limitado, y autorizar a la Corona para hacer prender a las personas sospechosas, sin dar de ello razón alguna.” Y más adelante:

“Para que una prisión sea legal debe ser pronunciada sobre proceso, por un tribunal de justicia, u ordenada por algún funcionario judicial que tenga poder para enviar a prisión. Su orden debe ser dada por escrito, debe ser firmada y sellada por el magistrado, y contener los motivos de la prisión, a fin de que se pueda examinarlos, si hay lugar a un *habeas corpus*. Si los motivos no están expresados, el alcaide no está obligado a detener al preso.”

Pero la Constitución argentina limita la facultad del Congreso de declarar el estado de sitio y en su defecto del Presidente a los casos de invasión, y de conmoción interior *que pongan en peligro el ejercicio de esta constitución y de las autoridades creadas por ella*, que es el mismo caso en que el Presidente de los Estados Unidos puede intervenir sin requisición de las Legislaturas o en su defecto de los gobernadores de estado. Este es un punto esencialísimo y privativo de las constituciones federales. El poder federal no es árbitro en todas las conmociones interiores de las provincias, sino en aquellas que tienen



por objeto obstruir o impedir la ejecución de las leyes de la Federación. Distingúense en todas las transacciones públicas de los Estados Unidos las autoridades de los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos, las tierras de los Estados Unidos, de las autoridades, leyes y tierras de los estados que componen la Unión. Las autoridades provinciales no son creadas por la Constitución de la Confederación Argentina, sino por sus constituciones provinciales, las cuales autorizan a sus legislaturas respectivas a declarar en estado de sitio la Provincia, a convocar la milicia al objeto de suprimir insurrecciones, hasta que no pudiendo conseguirlo por sus propias fuerzas, pide la Legislatura o si no pudiese reunirse, el gobernador, la intervención del Presidente y de la milicia de otras provincias, o de las tropas de línea y marina del Estado. Si una provincia por sus autoridades constituidas declarase no obedecer la Constitución, o una ley del Congreso, o invadiese a otra provincia, el caso de *hacer armas*, o de estorbar la ejecución de esta constitución está demasiado patente para que requiera dilucidación.

Es de gravísima consecuencia fijar estos puntos, por cuanto afectan la paz general y pueden comprometer una guerra civil, o dar lugar a avances del poder federal que destruyan toda independencia de las provincias. Un hecho reciente aunque anterior a la Constitución puede dar la medida de estas necesarias distinciones. La Legislatura de San Juan depuso del mando al gobernador que se había perpetuado por la intimidación, la corrupción y la intriga durante veinte años. El Director, sin tomar conocimiento de los hechos, y requerido por el gobernador depuesto, declaró *sediciosa* a la Legislatura con el ultraje de llamarle en nota oficial club de anarquistas, y convocó la milicia de las Provincias vecinas para sofocar la pretendida insurrección. Las consecuencias de este acto están todavía sangrando para que nos detengamos a apreciarlas. En 1830 ocurrieron disturbios en Harrisburg, capital política de Pensilvania, y a causa de elecciones dudosas, dos Legislaturas se formaron a un tiempo. El senado fué asaltado por un

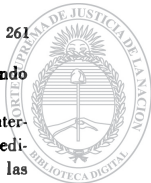


tumulto con la intención de intimidarlo, y hubo de cerrar sus sesiones, y los tumultuarios crearon una Comisión de Salud Pública. El desorden reinó muchos días, y la casa de gobierno fué cerrada. Citóse la milicia, que acudió al llamado, y su presencia bastó para alejar toda tentativa de violencia, reuniéndose en seguida la Legislatura, y arreglando a su manera las cosas. El Presidente de los Estados Unidos no intervino en el asunto, por más que algunos diarios creían llegado el caso.

La cuestión irritante de la esclavatura ha sido ocasión ahora poco de conmoción profunda en los Estados del Sud, dejándose oír por todas partes gritos de guerra civil y de ruptura de la Unión. La Legislatura del Mississippi fué unánime en recomendar la resistencia a la abolición de la esclavatura en el distrito de Columbia donde legisla el Congreso. Los mensajes dirigidos por los gobernadores de los Estados a las Legislaturas respiraban el mismo espíritu, y en las revistas de las milicias recomendaban en proclamas ardientes tener listas y limpias las armas para servirse de ellas luego. Todos estos actos públicos muestran la situación respectiva y las limitaciones que ejercen los estados sobre la ingerencia del poder federal en sus actos interiores.

Estas consideraciones son más graves en la República Argentina con motivo de las distancias que median entre unas provincias y otras, lo que podría dar al auxilio del gobierno federal el carácter de una invasión, y las probabilidades de encender una guerra civil, si no viniese reclamada por sus Legislaturas, razón por la que debe ser muy precavido en el uso de sus atribuciones y precederlas de pasos conciliatorios, y del requisito de proclamaciones, para que se retiren los insurrectos, cuando lo sean tales para autoridades federales.

Las Provincias tienen en su seno elementos de disolución que han de estar pugnando largo tiempo por manifestarse. Uno de ellos es el conato de aventureros y caudillejos a perpetuarse en el poder o zafarse de toda sujeción a las leyes, no obs-



tante que la Constitución ha provisto a este caso estorbando que puedan armarse de poderes discrecionales.

Del examen precedente resulta que el poder federal interviene en las provincias, con requisición: 1º para sofocar sediciones, sobre asuntos puramente domésticos, y cuando las autoridades provinciales lo reclamen: 2º sin requisición para sostener las leyes del Congreso, en caso de que encontraren resistencia, y después de haber probado los medios judiciales que la Constitución provee; 3º con requisición o sin ella, cuando los principios republicanos representativos fuesen violados, pues la garantía ofrecida por el poder federal para su conservación importa la acción necesaria para hacerla efectiva.

La Constitución de los Estados Unidos, de donde han sido tomadas estas disposiciones, establece de una manera tan concisa como pertinente esta intervención de la Unión en los estados. Desgraciadamente los perifrasedores, dividiendo la oración y el artículo original en dos, se olvidaron en el segundo de la generalidad que abraza el antecedente. "El Congreso, dice el original, garantiza a cada estado de esta Unión una forma republicana de gobierno; y protegerá a cada uno de ellos contra invasiones y a pedido de la Legislatura o del ejecutivo (cuando la Legislatura no pueda ser convocada) contra violencias domésticas".

Los objetos a que ha de aplicarse la garantía y la protección del gobierno nacional no pueden ser más claros; como está exenta de toda tergiversación la manera de requerir la interposición.

Oigamos ahora a los comentadores norteamericanos. "La falta, dice Story, de una disposición de esta naturaleza (en sus tres fases) fué mirada como un defecto capital en el plan de la Confederación. Sin una *garantía*, no podía reclamarse del gobierno nacional como un derecho la asistencia que los estados deben esperar de él, para repeler los peligros domésticos que pudieran amenazar las constituciones de los Estados. La *usurpación puede levantar su estandarte y hollar las libertades*



del pueblo, mientras que el gobierno nacional puede legalmente limitarse a mirar con pesar e indignación tales desmanes. Una facción feliz puede erigir una tiranía sobre las ruinas del orden y de la ley.” Veamos ahora la traducción perifraseda de esta disposición. El final del art. 5 trae: “Bajo estas condiciones (gobierno republicano representativo) el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.” Y el art. 6 “El gobierno federal interviene, con requisición de las Legislaturas o gobernadores provinciales o sin ella, en el territorio de cualquiera de las provincias *al solo* objeto de restablecer el orden público perturbado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior.”

Nótese que el *solo objeto* abraza dos objetos distintos, y excluye, por la separación de un tercero, la ejecución de la garantía al goce y ejercicio de las instituciones republicanas. La *sedición* es sólo una manera de destruir la libertad; la usurpación del poder reprime también la insurrección de los oprimidos. Se ha perdido la claridad del texto original, dando lugar a tergiversaciones que pudieran tornarse en favor del arbitrario, prestando asidero contra la constitución misma a los cabecillas que tratarían de atacarla.

Las tiranías restablecidas en San Juan y Tucumán, que el Congreso desaprobó altamente, y cohonestó el Director, muestran la necesidad de atender a todos los casos de la garantía. Así lo entendió el diputado Lavaise de Santiago, en carta dirigida al Director.

¿Cómo determinaría el Congreso el caso de hacer efectiva la garantía de un gobierno republicano representativo? Por acción pública, por notoriedad de los hechos. Todo ciudadano tiene derecho a denunciar la violación de los principios fundamentales del gobierno, de que dependen su seguridad y su bienestar, y es por esta causa que en el caso de nulidad de elecciones las leyes de los Estados Unidos hacen parte a quien quiera contestarlas, y ordenan a todas las autoridades reciban



la información que ofrezca para producir la prueba. La notoriedad del hecho es igualmente base de acción; pues si, por ejemplo, ocurriere en alguna provincia que se perpetuase un gobernante veinte años, no obstante haber sido depuesto por la Legislatura, habido alzamientos populares, actos que demuestran que no es voluntaria su aceptación: si su reelección se hiciese en violación de ley dictada con antelación, y en previsión y temor del caso, y derogada sólo la víspera de la reelección, y para ese solo caso, ¿podrá decirse que el gobierno republicano representativo no está violado en aquella provincia, y puede ser otra cosa que una farsa la Constitución aquella en que tolerando el gobierno federal este escándalo, declare sin embargo que garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, republicanas representativas?

Fijada así la mente de la disposición que analizamos, y el alcance del Estado de sitio, réstanos averiguar por qué conducto oficial sabe el gobierno federal cuándo ha llegado el caso de intervenir sin requisición.

“Los gobernadores agentes naturales del gobierno general”

La Constitución Argentina declara a los gobernadores de Provincia agentes naturales del Poder Ejecutivo general, confiándoles las atribuciones que la Constitución norteamericana pone en manos del mariscal de los distritos judiciales; y en este punto, como se ve, ambas constituciones se separan profundamente. El sistema norteamericano mantiene en las provincias o estados una autoridad federal que por su posición está fuera de las influencias locales, y que en el cumplimiento de su deber es única y constantemente el ejecutor de las leyes federales. El gobernador de una provincia, electo por ella, y subordinado a la Legislatura, puede a cada momento hallarse complicado en el desempeño de obligaciones emanadas de fuentes tan distintas. Las decisiones de los tribunales federales pue-



den ser contra él o contra la provincia de su mando; y por tanto embarazarlas. En los tumultos de Boston de 1851, para sustraer de la acción del tribunal a un negro fugado, el agente del gobierno de los Estados Unidos acusaba a las autoridades locales de haber, por su morosidad intencional, dejado escapar al reo de los tribunales de los Estados Unidos. Porque aquí sucedía precisamente el caso que hemos previsto, y es que todas las autoridades de Massachusetts, Legislatura, Gobernador, tribunales y los diarios y el público eran ultra-abolicionistas, querían cohonestar el atentado de arrebatar un reo a los tribunales federales y dejar impunes a sus perpetradores, que eran ellos mismos.

La ejecución de las leyes de la Confederación Argentina en las provincias puede, pues, quedar a merced de la interpretación que el espíritu e interés de cada provincia quiera darles, faltándole al gobierno general aquella unidad de acción tan necesaria para mantener el respeto y eficacia de las leyes. Otra clase de inconvenientes puede resultar de esta aglomeración de facultades y dependencias, y es que las leyes de la Legislatura provincial no sean fielmente obedecidas por el gobernador, con achaque de sus deberes federales, de manera que pueda muy bien ocurrir que al ejecutivo nacional le opongan los gobernadores dificultades como provenientes de su provincia, y a sus Legislaturas, como provenientes del gobierno federal, no habiendo más en el fondo que el arbitrario que dejan dos jurisprudencias rigiendo el mismo caso, y neutralizándose la una por la otra. Conocido y natural es el subterfugio casuístico *obedezco pero no cumplo*, que ha creado un caso análogo de dos jurisdicciones diversas teniendo por agente al mismo individuo. Si, pues, la Constitución, haciendo a los gobernadores, como en los gobiernos unitarios, agentes naturales del poder general se propuso enfrenar su acción o hacerla concurrir mejor a la unidad común, creemos que mejor hubiera conseguido este objeto teniendo en las provincias autoridades suyas, independientes de toda influencia, ejecutado en lo que es privativo



de la federación, y obrando en todas las provincias bajo un mismo sistema.

La incompetencia de la agencia federal confiada a los gobernadores de provincia puede hacer sentir sus desastrosos efectos en el caso del cobro de las contribuciones que el Congreso imponga, escollo en que ya tropezó la Confederación de los Estados Unidos; pues, dependiendo de las autoridades provinciales la ejecución de la ley, la desempeñaban mal, tardíamente y a veces se abstenían insidiosamente de darle cumplimiento. No es a nuestro juicio, el sistema federal lo que conculca esta disposición, sino todo gobierno posible. El gobierno de la República no está presente en todas partes, no obra por sí mismo sino por delegación en otros gobiernos que por egoísmo, por espíritu provincial estarán muchas veces interesados en eludir sus disposiciones; y por egoísmo y miras personales también se interesarán otras en exagerarlas, aprovechando del apoyo que el poder general les presta para zafarse de toda sujeción a sus Legislaturas, y de todo miramiento a la opinión.

¿Cómo obra el gobierno federal en los Estados Unidos, en el territorio de cada uno de los que los componen? Por medio de los agentes judiciales del ministerio público, nombrados y revocables por el poder ejecutivo, y responsables de sus propios actos por acción judicial. Ya hemos visto en la ley para la convocación de la milicia que al *marshall* se confieren los mismos poderes del *sheriff* de condado. Para inteligencia de las disposiciones que establecen esta agencia en los Estados Unidos, debemos decir que el *sheriff* es un funcionario civil que ejerce el poder del ejecutivo en cada condado o departamento, mantiene el orden, ejecuta las sentencias de los tribunales, aprehende sin orden escrita reos y perturbadores de la paz. Cuando los tribunales federales fueron instituidos según la misma disposición de la Constitución Argentina, creóse, al lado de cada corte de distrito y en cada estado, un *marshall*, (mariscal), funcionario de los Estados Unidos con sus tenientes mariscales en cada punto inferior, encargados de la ejecución de



las leyes de los Estados Unidos, en cada uno de los estados particulares. El mariscal rinde una fianza de veinte mil pesos, para responder de los daños que sus actos facultativos puedan originar; dura cuatro años en su destino; ejecuta las sentencias de los tribunales federales; tiene bajo su guarda los reos, sobre causas que atañen a éstos; hace cumplir las leyes de la Unión; requiere fuerzas para mantener el orden; tiene encargo de sofocar insurrecciones; ejecuta las ventas de bienes de deudores a los Estados Unidos; levanta el censo, y es, en una palabra, el agente del gobierno federal y de sus tribunales.

En la Sección 27 de la ley de setiembre 24 de 1789, estableciendo las cortes judiciales de los Estados Unidos, *se ordena además*, “Que en cada distrito haya de nombrarse por el término de cuatro años, pero que puede ser *revocado ad libitum* un mariscal, cuyo deber será asistir a las cortes de distrito y de circuito, cuando estén en funciones, y también a la corte suprema en el distrito en que dicha corte reside, y ejecutar por todo el distrito todas las órdenes leales que se le impartan, y que sean emitidas bajo la autoridad de los Estados Unidos; y tendrá poder para exigir *toda la necesaria asistencia* en la ejecución de su deber, y nombrar, donde necesario fuere, uno o más tenientes que podrán ser removidos de su empleo *ad libitum*, por las cortes de distrito o de circuito que se hallasen en el distrito; y antes de entrar en el desempeño de sus deberes, el mariscal se obligará al fiel desempeño de ellos, por sí y por sus tenientes, ante el juez de la corte de los Estados Unidos, unida y separadamente, con dos buenos y seguros fiadores habitantes y propietarios de dicho distrito, a la aprobación del juez de distrito, por la suma de veinte mil pesos, y prestará ante dicho juez, y también sus tenientes, antes de entrar en el desempeño de sus deberes, el siguiente juramento: “Yo A. B., juro solemnemente o afirmo que ejecutaré fielmente todas las órdenes legales (las que no reputa tales no las obedece) dirigidas al mariscal del distrito de... bajo la autoridad de los Estados Unidos, *dar informes verdaderos*, y en todas las cosas



desempeñar leal y ciertamente, sin malicia o parcialidad los deberes de mariscal (o teniente) del distrito de... durante la continuación de dicho oficio, y no cobrar otros derechos que los legales. Así Dios me guarde.”

De los poderes y autoridad del *sheriff* en Inglaterra, dice Blasckstone: “Como guardián o conservador de la paz del rey, el *sheriff*, tanto por la ley común, como por *comisión especial*, es el primero en la provincia, es superior en rango a todos los nobles del condado, mientras ejerce su oficio. Puede hacer prender y echar en prisión a cualquiera que turbe la paz o intente turbarla, y obligar a toda persona bajo fianza a firmar el compromiso de guardar la paz del rey. Puede y debe *ex officio* perseguir, hacer prender y retener presos a los traidores, asesinos, ladrones u otros malhechores. Está comisionado para la defensa del condado contra los enemigos del rey, en caso de invasión; y para llenar este objeto, así como para la conservación de la paz, tiene bajo sus órdenes a todos los habitantes del país, lo que se llama el *posse comitatus*, el poder o las fuerzas del condado; y todo hombre de edad de más de quince años, y de un rango inferior a los pares, está obligado a acudir a su llamado, so pena de multa y prisión”. Entre los estatutos del Maine, comunes en esto a todos los otros estados, la sección 32 del capítulo 104, dice: “Todo *sheriff*, teniente de *sheriff*, coroner o condestable, estando en la ejecución de los deberes de su oficio, en casos criminales, o para la preservación de la paz, para aprehender o asegurar a alguna persona, por turbarla, tendrá autoridad para requerir ayuda para ello; y tendrá autoridad para requerir igual ayuda en caso de escape o fuga de personas arrestadas en procesos civiles; y toda persona así requerida por auxilio de parte de alguno de los dichos funcionarios, que descuidase o rehusare hacerlo, pagará para uso del condado, después de convicto, no ~~menos~~ de tres ni más de cincuenta pesos, y si el culpable fuese insolvente, o no pagase inmediatamente la multa, la corte puede castigarlo con prisión que no pase de treinta días”. Pero es más perentoria la disposi-



ción que provee para el caso de insurrección, pues estos poderes del sheriff y sus oficiales son los que las leyes de los Estados Unidos hicieron pasar al mariscal de las cortes federales para hacer efectivas las leyes de la Unión en los estados, sin ponerse el gobierno federal, en el cumplimiento de los actos gubernativos, a merced de autoridades provinciales que estarán dispuestas o no a llevarlas a cabo; y como la ley del caso expresa que para sofocar insurrecciones tenga el *marshall* los mismos poderes que en cada estado tiene por ley el *sheriff*, bastará citar el tenor de una de estas leyes para completar la idea de la agencia del poder federal en los Estados particulares. Se expresa así: “Si algunas personas, en número de doce o más, armada alguna de ellas de palos u otras armas peligrosas, o si algunas personas en número de treinta o más, ya estuvieren o no armados, se reuniesen ilegal, tumultuaria o amotinadamente en alguna ciudad o municipio, será del deber del mayor y de cada uno de los aldermen de dicha ciudad, o de cada uno de los notables del dicho municipio, y de cada juez de paz residente en dicho municipio, y *también del sheriff* del departamento, y de *sus tenientes*, ir adonde están las personas así reunidas, o acercarse a ellas, en cuanto su seguridad lo permita, y en nombre del estado (o de los Estados Unidos el *marshall*), ordenar a todas las personas reunidas dispersarse pacíficamente; y si las personas así reunidas no se dispersasen inmediata y pacíficamente, será del deber de cada uno de los magistrados y funcionarios nombrados pedir ayuda a todas las personas presentes, para arrestar y custodiar a las personas ilegalmente reunidas, a fin de poder proceder con ellas con arreglo a la ley”.

“Sección 6. Si alguna persona rehusare prestar la ayuda requerida para prender a las personas así ilegalmente reunidas, o rehusare dispersarlas inmediatamente cuando le fuere ordenado, como queda establecido en la sección precedente, *será* ella misma considerado como uno de los reunidos tumultuaria e ilegalmente, y será castigado con multa que no exceda de



quinientos pesos, y prisión en la cárcel del departamento, que no pase de un año”.

“Sección 9. Cuando una fuerza armada fuese requerida, como se provee en las secciones precedentes, obedecerá la orden de reprimir tal asamblea ilegal y tumultuaria, y prender y arrestar a las personas comprometidas en ella, según se le ordene por el gobernador, o alguno de alguna corte de record (juez letrado), o *el sheriff* del condado (y en igual caso el marshall de los Estados Unidos) o uno de los dos magistrados o funcionarios, mencionados en la sección quinta.

Es, por otra parte, contra los principios fundamentales de gobierno, confiar la ejecución de las leyes y la gestión de los intereses de un poder a autoridades y agentes que no dependen inmediatamente de él. En los gobiernos unitarios, como el de Chile, la ejecución de las leyes y decretos está confiada a los intendentes, cuya nominación y remoción es facultad del Presidente de la República; pero en estados federales los gobernadores de las provincias ni son electos ni removidos por el Presidente, de donde resultará o que se introduciría subrepticamente la influencia del gobierno federal en los negocios provinciales, o que quedarían sus disposiciones a merced de la buena voluntad de agentes sobre quienes no ejerce autoridad alguna y pueden contrariarlo.

No es difícil desde ahora presagiar la serie de conflictos y de desórdenes que puede traer este sistema bastardo que da al gobernador de una provincia dos naturalezas distintas, dos orígenes a su autoridad, dos respaldos opuestos y dos inspiraciones diversas.

Así la Constitución de Chile provee que el Presidente podrá: “9. Destituir a los empleados por ineptitud, u *otro motivo* que haga inútil o perjudicial su servicio; pero con acuerdo del Senado, si son jefes de oficinas y empleados superiores, etc.”

Mucho escándalo causó en la cámara en 1848 el aserto de un ministro de gobierno, declarando facultad del ejecutivo destituir a un empleado *per no petarle su figura*. Sin embargo, debe



saberse que la frase misma es el axioma inglés, expresivo en toda su rudeza un poco brutal, de las atribuciones del poder administrativo. En los mismos términos se expresó un ministro inglés en el Parlamento, sin alarmar las susceptibilidades de pueblo tan quisquilloso en materia de avances del poder. La Constitución de los Estados Unidos dice: "El Presidente, Vicepresidente y todos los oficiales civiles de los Estados Unidos serán removidos de sus empleos a virtud de acusación y convicción de traición, cohecho y otros altos crímenes, y mala conducta." Dejamos a un lado por sobreentendido que los agentes civiles del ejecutivo pueden ser removidos *ad libitum*. Pero aun en el caso de acusación ¿quiénes son empleados civiles del gobierno nacional?

"Todos los empleados de los Estados Unidos, dice Story, que tienen su *nombramiento* del gobierno nacional, ya sean ejecutivas o judiciales sus funciones, en los departamentos más altos como en los más humildes del gobierno, y con excepción de los oficiales del ejército y de la marina, están sujetos a acusación, en el sentido que la Constitución expresa"... "En 1779 se suscitó la cuestión de saber si un Senador era un funcionario civil de los Estados Unidos en el sentido de la Constitución, en cuanto podía estar sujeto a acusación. El Senado declaró entonces que no; y por tanto el mismo principio se aplicaría a la Sala de Representantes. El fundamento de esta decisión fué que un Senador no deriva su *nombramiento del gobierno nacional*, sino de la Legislatura de estado (o provincia); y que la cláusula se refería sólo a aquellos empleados civiles que tenían su *nombramiento del gobierno nacional*, y eran responsables de su conducta ante él". (1).

Y no es menos deplorable, en la disposición que analizamos, la subversión de los principios de gobierno, que la falsificación subrepticia de las palabras. ¿Por qué llamar *natural* una

(1) *A familiar exposition of the Constitution of the United-States, etc., by Joseph Story.*



agencia que no nace de la esencia de las instituciones, y requiere para existir disposición expresa de la Constitución? Son agentes naturales el subdelegado del delegado, el gobernador del Intendente y el teniente de su capitán; pero es viciar las ideas más sencillas y falsificar todas las nociones estampar en una Constitución calificativos que no emanan de la esencia de las cosas. Un gobernador electo por una provincia para su gobierno interior no es agente natural del gobierno general de la Nación. Podrá serlo convencional, en virtud de disposición expresa en que tal encargo se le confiere o delega. Y esta idea nos trae otras que forman un tipo especial. ¿Qué habría sido de la Constitución de un país que llama a su gobierno *confederación*, y hace simples agentes *naturales* del gobierno general a los gobernadores de los estados confederados; e interviene *sin requisición* en dichos estados donde tiene en las mismas autoridades sus agentes *naturales*? Sólo falta añadir a estas zancadillas que el dicho gobierno, siendo católico, *adopta* el culto católico, para que en toda ella hubiese quedado el sello de la falsía de las palabras y del dolo de los propósitos.

Una Constitución no es una trampa ni una celada tendida a las preocupaciones populares, con ciertos resortillos secretos o inapercibidos, por donde se ha de hacer en la práctica fracasar todas las pomposas declaraciones que se ostentan en su frontispicio. Una Constitución es la Suprema Ley de un pueblo, es el Decálogo de los preceptos políticos y el paladium de las libertades, como la regla de los actos de los poderes públicos.

“La responsabilidad de los agentes del poder, dice M. Vivien, forma una de las condiciones esenciales de la libertad pública. Todo ciudadano dañado en su persona o sus bienes por un acto de la autoridad tiene derecho a una reparación si el agente que ha hecho el daño no obraba en virtud de ley, y para asegurar su ejecución. Si el agente inferior ha obedecido a una orden, la responsabilidad debe remontar hasta el autor de la orden. ¿A quién pertenece resolver esta cuestión, a la autoridad judicial o a la administración? Consideraciones sa-



cadadas de la forma misma de nuestras instituciones (la completa centralización) han hecho proclamar la competencia exclusiva de la administración; sólo ella puede verificar si el agente obedecía a una orden, o seguía su propia impulsión (1). La doctrina es excelente cuando el agente depende de la administración central, o ha sido nombrado por ella, o puede ser suspendido. Pero en el caso en cuestión, ¿ante quién son responsables los llamados *agentes naturales* del Presidente?

La Constitución francesa de 1848 decía del Presidente: "art. 64: nombra y revoca... los prefectos y... los agentes secundarios del gobierno"; y M. Dupin, en su comentario, inculca "*nombra y revoca. Sin esto no sería responsable.*" El art. 69 añade: "tiene derecho de suspender, por un término que no pase de tres meses, los agentes (municipales) del poder ejecutivo, elegidos por los ciudadanos... La ley declarará los casos en que estos agentes revocados pueden ser declarados inelegibles para las mismas funciones" (por medio de un juicio).

Y M. Dupin explica así la mente de la disposición: "*Derecho de suspender.* Aunque elegidos estos agentes por los ciudadanos, siendo al mismo tiempo, bajo ciertos respectos delegatorios del poder público, muchos servicios que tienen relación con el interés general del Estado serían comprometidos por la resistencia, la negligencia o la impericia de estos agentes, si fuese permitido suspenderlos... *Inelegibles:* De otro modo las localidades (las Provincias en nuestro caso) podrían establecer contra la administración superior una lucha que sería sin desenlace, y no sin escándalo, con perjuicio de la cosa pública."

Aun en los proyectos de reformar las bases del gobierno republicano se encuentra el respeto a este principio de la dependencia de los agentes públicos. "Para formar el vínculo, dice Billard en su organización de la República, que une las diversas circunscripciones territoriales con el gobierno central,

(1) *Etudes administratives* par Vivien, membre de la Chambre des Députés, 1846.



debe instituirse un ministerio público cerca del Consejo (Legislatura) de cada Departamento (Provincia). Su misión será denunciar, sea al Consejo de la Nación, sea al Consejo Departamental, los actos de que uno u otro debería conocer, y requerir la observancia y la aplicación de la ley. Este ministerio público, establecido en cada departamento, es investido de sus poderes por el Consejo Nacional, *sólo el cual podrá suspenderlo, revocarlo u ordenar que se le encause (1).*"

En presencia de autoridades tan imponentes, y de definiciones tan precisas, nos vemos forzados a inquirir a qué forma de gobierno pertenece aquel cuyos agentes no son nombrados ni revocables por el poder de quien se les llama agentes naturales? ¿En qué autoridad y en qué principios se fundó el que tan peregrina innovación osó introducir no ya en la forma, sino en la esencia misma del poder público? ¿Es esto por ventura lo que han dado en llamar gobierno mixto de federal y unitario? ¿O son estas sólo las babas que se han pegado los trozos robados por escribientes y copistas a esta u la otra Constitución, desnaturalizándolas todas a un tiempo, por no comprender las bases del poder, ni el mecanismo práctico de esas constituciones? Constitúyese un estado, desconstituyendo lo único que puede hacer efectiva la Constitución, que es el poder del ejecutivo y la responsabilidad de sus agentes? ¿Puede hacerse efectiva ley ni medida alguna sin que los agentes *naturales* dependan del poder en cuyo nombre han de obrar?

"Tachábase a la Confederación de los Estados Unidos, dice Story, la carencia de todo poder para dar *sanción* a las leyes. El congreso no tenía poder para exigir obediencia a sus disposiciones. No podía ni imponer multas, ni ordenar prisiones, ni retirar privilegios, ni declarar decomisos, *ni revocar funcionarios infieles a su deber*. No había en la Confederación autoridad expresa para el ejercicio de la fuerza. La consecuen-

(1) *De l'organisation de la République depuis Moïse jusqu'à nos jours*. 1846.



cia natural era que las resoluciones del congreso eran desatendidas, no sólo por los estados, sino por los individuos. Los hombres obedecían más bien a sus intereses que a sus deberes, cuidándose poco de persuasiones que no apoyaba compulsión alguna, o de recomendaciones dirigidas sólo a la conciencia o al patriotismo.”

Dirásenos que para eso se ha nombrado al presidente; pero presidente o congreso es lo mismo, cuando se trata de hacer cumplir las leyes en las provincias. ¿Quién obra en nombre del presidente? ¿El Gobernador? Pero el gobernador es la provincia, es electo por ella y para ella. Si se trata de contribuciones, de contingentes, la provincia será juez de lo que buena-mente puede hacer. Si se trata de levantar el censo, la provincia elevará las cifras a las nubes para darse representantes en congreso.

Marshall, en la vida de Wáshington, observa con razón que “un gobierno autorizado a declarar la guerra, pero forzado a esperar de estados independientes los medios de sostenerla; capaz de contraer deudas empeñando para ello la fe pública, pero dependiente de trece soberanías para mantener su crédito, sólo podría salvarse de la ignominia y del desprecio cuando fuesen administradas por hombres exentos de las pasiones propias de la naturaleza humana.” Lo que motivó en los Estados Unidos estas observaciones ha ocurrido con diversos nombres durante cuarenta años en la República Argentina. Sin ir más adelante, en 1826, antes de la Constitución, estaba reconocido en las Provincias el Congreso, y el sostén de la guerra del Brasil confiado a los gobernadores de provincia, *agentes naturales* del presidente. ¡Sábase cómo cumplieron con su encargo! Dada la Constitución, el gobierno central, por una anomalía a que lo condenaba el predominio de los caudillos que tiranizaban las provincias, hizo sus *agentes naturales* a los gobernadores que él no creaba ni elegía; y los gobernadores, sus agentes natos, los echaron abajo. El Tirano, reconociendo gobernantes propios de las provincias a los mismos caudillejos alzados con el po-

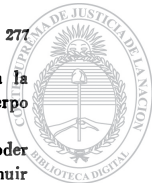


der, los hizo *agentes naturales* de su despotismo, fomentando revueltas en Santa Fe, Mendoza, Córdoba, toda vez que no eran de su amaño, y corrompiéndolos con dádivas y halagos en caso contrario. El resultado para las Legislaturas provinciales de este apoyo exterior dado al gobernador fué su avasallamiento y anodación. Pero, aun así, el mal radical de este orden de cosas estaba disimulado más bien que curado. Nunca los tiranuelos de provincia le ayudaron ni con dinero ni con tropas a la guerra que él sostenía en nombre de la Nación; en cambio, nunca pudo estorbar ni las revueltas ni las luchas intestinas, como no estorbó que uno de ellos depusiese, por serle imposible suspenderlo. El Directorio formado después de la caída del Tirano quiso seguir el mismo camino, y para hacer agentes naturales del poder federal restableció a varios de los caudillejos muy versados ya en esta naturalísima agencia. La medida surtió el efecto, en cuanto a oprimir como antes las legislaturas y zafarse de toda sujeción de la opinión pública, pero falló en cuanto a obtener contingentes de ejército ni fondos para apoyar su política. ¿Va a continuarse el mismo sistema? Los que tal medida proponen, ¿de dónde tomaron el ejemplo? ¿De gobiernos federales? No. El gobierno federal confía a sus propios funcionarios la ejecución de las leyes. ¿De gobiernos unitarios? No: el gobierno unitario *nombra, paga, revoca* a su beneplácito, y *castiga* a los gobernadores o intendentes de provincia. La medida bastarda que analizamos, sin precedentes en la economía de los gobiernos, con un pasado de males en nuestra propia práctica, tiende a perpetuar el federalismo con nombre de unidad de 1825, o el unitarismo con nombre de federación que prevaleció hasta 1852; es decir la anarquía y disolución nacional, sostenida en tiranías internas, y la República Argentina no se ha ensangrentado y aniquilado cuarenta años sino por ensayar en industria, distribución de la tierra, formas de gobierno lo que pueblo ninguno ha intentado.

Nos hemos detenido en este punto, porque, en el vínculo que una a los gobiernos de provincia con el gobierno nacional



para hacer un estado homogéneo, está la Constitución de la República Argentina. Trátase de constituir un país desagregado durante cuarenta años, pues en 1811 apareció el mal. El congreso de 1813 sucumbió en su presencia: el de 1816 no pudo reunir varios de los fragmentos de la nacionalidad dispersa, y la prolongación del mismo en 1818 cedió ante la dificultad creciente. En 1823, en las instrucciones que se dieron al Deán Zavaleta para solicitar de los gobernadores de las provincias la convocación de un congreso, se le decía: "El fin que se propone conseguir este gobierno es el de reunir todas las provincias del territorio, que antes de la emancipación componían el virreinato de Buenos Aires, en cuerpo de una nación administrada bajo el sistema representativo, por un solo gobierno y un cuerpo legislativo"; añadiendo: 3º, que "el comisionado hará entender que el juicio decisivo del gobierno de Buenos Aires es que las personas que mejor pueden servir a la organización del cuerpo nacional son aquellas que se hallan gobernando los pueblos (los caudillos López, Ibarra, Quiroga, Bustos, Ortiz, etc.); que sobre esto no hace, ni cree que deba hacerse excepción; que en su virtud estima uno de los primeros deberes apoyar todos los gobiernos existentes, y que se establezca el principio de que no se haga en ellos alteración o mutación de personas hasta la instalación de gobierno y cuerpo legislativo nacional." El resultado mostró la falacia de estas esperanzas. La representación nacional abrió sus sesiones, dictóse una constitución y no se reunió por eso el virreinato en un cuerpo de nación. Reuniólo Rosas bajo su despotismo, teniendo por agentes naturales, aunque negando el hecho, a los capitanejos de provincia; pero una tiranía no es una constitución. Caído Rosas, el Directorio se propuso, no ya sólo reconocer los gobiernos existentes, sino restablecer los depuestos, a fin de hallar instrumentos más idóneos y dúctiles para la ejecución de la obra. Puede la política justificar estos contrasentidos cuando son coronados por el éxito; pero una constitución pide cosas claras, permanentes, y en la que analizamos no ve-



mos dar un paso sobre los pasados desaciertos, ni resuelta la dificultad de la deseada reunión del territorio en un cuerpo de gobierno.

La disposición constitucional que hace agentes del poder federal a los gobernadores provinciales no hace más que huir el cuerpo a la dificultad sin resolverla. Los hechos no se han desmentido nunca. Cuatro constituciones se han dado, y lo que sucedía en tiempo del Presidente sucedió en tiempo del Restaurador y continúa sucediendo en tiempo del Directorio. Las palabras cambian, la esencia es la misma; poder sin poder, aunque tengan una constitución o el terror por base. No. Es preciso constituir el poder federal; hacerlo entrar al interior y abrir sus oficinas al lado de las oficinas provinciales de gobierno: es preciso que se le vea, que obre por todas partes en la esfera de sus atribuciones y que el pueblo que lo sostiene y nombra le obedezca en cambio de la segura protección que le presta. Los agentes para mensura y venta de las tierras; los empleados de aduana, tasadores y colectores de impuestos; los procuradores fiscales en lo civil y en lo criminal; los comisarios para prestar fuerza y ejecución a las sentencias de los tribunales, aprehender y custodiar reos, intimar, en nombre de las Provincias Unidas o la Federación, a los insurrectos la orden de dispersarse, comunicar con el ejecutivo e instruirle de los obstáculos que la ejecución de las leyes encuentra; todos estos funcionarios no deben estar sometidos a los gobernadores de provincia, ni éstos intervenir en el ejercicio de sus funciones. El pueblo obedece a las autoridades federales, lo mismo que a las provinciales, como obedecemos al juez de paz y al cura, a nuestros padres y al subdelegado, según la naturaleza especial de las funciones de cada autoridad.

No apuntamos en esto novedad alguna. Queremos sólo que la federación sea federación, que el gobierno nacional sea gobierno, y que cada poder se mantenga en sus propios límites; pues que, no conociendo antecedente en que apoyarnos, no nos atrevemos a inventar esos extraños expedientes, que, como



el que reprobamos en la Constitución, conculcan todos los principios reconocidos, bautizando con el nombre de gobiernos mixtos lo que merecería mejor el nombre del batiburrillo.

¡Cuán distinta organización presenta la Unión Americana! El poder ejecutivo nacional ignora o puede ignorar quién gobierna en cada uno de los estados particulares: para él no existen tales demarcaciones territoriales; las subdivide o agrupa, según que a los intereses de la administración conviene. La administración federal no coincide en sus divisiones y departamentos con las demarcaciones de los Estados o provincias que la componen. De los Estados de Ohio, Indiana, Illinois y Michigan hace un circuito judicial. Parte del Kentucky entra en el circuito 5º y parte en el 8º. De Alabama ha hecho dos distritos. Los treinta y un estados entran en once departamentos militares: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland forman el tercer departamento. Parte de Wisconsin entra en el 2º y parte en el 6º. Estos departamentos se refunden en cuatro divisiones militares, cuyos cuarteles generales están para la oriental, en Troya (Nueva York, cuya capital provincial es Albany), en Nueva Orleans para la occidental, y en Sonoma (California) para la del Pacífico.

Para la administración de justicia los treinta y un estados están divididos en cuarenta y seis distritos con un juez federal a la cabeza.

Como hemos visto, hay estado dividido en tres, hay otros en dos distritos. Al lado de estos jueces hay un escribano, un fiscal o procurador de los Estados Unidos, y aquel marschal o comisario de que hemos hablado antes, y que representa la acción ejecutiva, con todos los poderes del sheriff, esto es del gobernador o subdelegado chileno. Del ministro del Tesoro dependen ciento doce colectores de derechos de aduanas, distribuidos en todos los puertos, y con todos los oficinistas y guardas a sus órdenes. Un Solicitador General es el jefe inmediato de estos funcionarios federales, los cuales requieren el auxilio del marschall para perseguir contrabandos e infraccio-



nes, mientras que el Solicitador General imparte sus órdenes a los Procuradores de los Estados Unidos, a fin de que gestionen los intereses federales ante las cortes de distritos. Doscientos cuarenta maestros de postas situados en las principales ciudades, bajo la inmediata dependencia del Maestre de Posta general residente en Wáshington, presiden y dirigen diez y ocho mil postas, teniendo a sus órdenes igual número de funcionarios. Mantiene la Unión ciento dos fuertes con guarnición en todos los Estados fronterizos, y ocho arsenales navales, uno en Boston, como si dijéramos en Corrientes; otro en Nueva York, como si dijéramos en Santa Fe o Entre Ríos, bajo la autoridad exclusiva del gobierno federal.

En los doce estados donde la Unión tiene todavía tierras en venta mantiene sesenta y ocho oficinas de ventas de tierras, con doble número de receptores y registradores, los cuales reciben órdenes directamente del Agrimensor General que reside en Washington. El país inculto está igualmente clasificado en diez distritos, formando Ohio, Indiana y Michigan uno, y cada distrito está bajo las órdenes de Agrimensores de distrito. Dos veces al año salen de Washington los jueces supremos, y se distribuyen por los estados que forman los circuitos que a cada uno les están asignados, y reuniéndoseles el juez permanente del distrito, forman la corte de circuito para la decisión final de las causas. ¿Concíbese en este orden de cosas lo que puede hacer un gobernador de provincia o estado, como agente (*natural*) para mayor irrisión del caso) en los asuntos federales? Ningún gobierno de estado puede tener marina ni tropas de línea, y el presidente es el jefe verdaderamente natural de la milicia de los estados. Si pues el Marshall o el procurador de los Estados Unidos piden en una provincia fuerza para la ejecución de las leyes, piden lo que es suyo, lo que de ellos depende inmediatamente. Los Estados Unidos no obran en los estados particulares en nombre del Presidente, sino en nombre de algo más alto, las leyes de la Unión, mandadas cumplir por jueces supremos, casi superiores en dignidad al presidente mis-



mo. ¿Qué prestigio puede hacer valer un Presidente ante la Justicia mayor actual que ha visto transcurrir cuatro presidencias, o ante el juez Mc Lean, que hace veinte y cuatro años que está administrando justicia?

Debe, además, tenerse presente que la esencia del gobierno federal es ser puramente exterior, no ejerciéndolo en el interior sino una influencia reguladora a la par que protectora y tutelar. Nombra y recibe embajadores, manda el ejército y la marina, recauda los derechos de exportación, celebra tratados, hace la guerra o conserva la paz. Todo esto tiene su teatro en el exterior, en los mares, en las fronteras o en la capital. Para el interior sólo tiene la obligación de garantizar las instituciones esenciales de la república, de prestar su auxilio a las autoridades constituídas, y de dirimir las cuestiones que se versan entre intereses que no sean de la competencia exclusiva de cada provincia. La República Argentina hace cuarenta años que se gobierna así. La acción del poder de Rivadavia en el interior fué sólo una influencia: la de Rosas ha sido sólo una influencia armada de puñales, pues nadie lo representaba directa y oficialmente en las provincias.

La adopción de una constitución federal sólo añadiera a su manera de ser, regularizar por la permanente o periódica existencia de un Congreso general, la influencia desastrosa que por delegación ejerció el Tirano, y por medio de los agentes del poder federal, independiente en sus actos y procedimientos de gobernadores, legislaturas y juzgados provinciales.

Por consecuencia de los principios que hemos tratado de esclarecer resulta todavía otro mal, que el que intercaló esta malhadada falsificación del poder administrativo estuvo lejos de preveer, y es que siendo los gobernadores de provincia los más altos funcionarios en la categoría de los *agentes* del Presidente, resulta forzosamente que le están sometidos todos los agentes federales subalternos en el distrito de su mando. Agentes de aduana, procuradores federales, ejército, oficinas de venta de tierras y de correos, todo depende de él.



Resulta, además que el presidente no puede nombrar agentes subalternos, puesto que no podría responder el agente *natural*, de la ejecución de sus actos si él no lo nombrara. En los Estados Unidos el Maestre de posta nombra a sus tenientes; el Agrimensor general de tierras, agrimensores de distrito, ingenieros, geólogos y prácticos reglamentando sus funciones y deponiéndolos por mala conducta o ineptitud: el mariscal es *ad libitum* removible por el Presidente de la República, y sus tenientes por las cortes de distritos; y es preciso que sean muy severos los principios administrativos, para que en los Estados Unidos la ley diga. AD LIBITUM!

La Constitución argentina ha roto, pues, el vínculo de unión que forma la Unidad de los Estados Unidos: ha violado todos los principios en que reposa la administración ejecutiva, la responsabilidad de sus actos, nombrando, revocando y castigando a sus agentes, al mismo tiempo que ha destruido la representación nacional suprimiendo la cláusula de la constitución de los Estados Unidos que hace necesario requisito el ser habitante por lo menos el Diputado de la provincia que lo elige, y librando el Congreso a merced de las influencias gubernativas.

Durante la tiranía de Rosas, la falta de responsables agentes oficiales del gobierno general en las provincias aconsejó lo que es la fuente de todos los males de un país, el agente oficioso, el espión, por donde un individuo sin carácter público alguno era sin embargo entendido que estaba en correspondencia con el tirano y recibía de él órdenes; tiranía subalterna más deplorable que la pública, porque no responde de sus actos, no muestra títulos, ni instrucciones, ni órdenes, haciendo pasar por mandatos imperativos venidos de lo alto lo que son sólo antojos propios e intereses de su mezquina condición. Más subversivo fué aún el expediente adoptado, para el mismo fin, de reconocer en cada provincia dos o más jefes y oficiales de milicia provincial como jefes de línea, y pagarles salario el Tirano, a quien iban a demandar esta gracia; pues entonces el

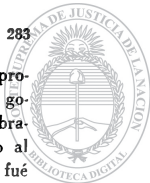


gobernante se sentía sometido a sus subalternos, temeroso de que lo denunciasen como menos ferviente y sumiso sostenedor que ellos mismos.

Pero la peor de las medidas de compensación que trae este funesto sistema es que el jefe del Estado necesita en las provincias tornarse en conspirador para deshacerse de esos *naturales* agentes que le da el *acaso* (¡oh subversión de ideas!). La historia es rica de ejemplos. Rosas conspiró contra el general Heredia en Salta; contra Cullen en Santa Fe; contra Rodríguez en Córdoba; contra Segura en Mendoza. Peor ha sucedido después de su caída. El Director, necesitando agentes *naturales* que cuadrasen a sus miras personales, desaprobó la revolución de Córdoba en 8 de mayo de 1853, y la aprobó solemnemente en 18 del mismo, cuando recibió las más completas seguridades de adhesión, subordinación y sumisión. Estando seguro de tener un agente, declaró buena la deposición de López, porque “los pueblos estaban cansados de tiranos”. Restableció en seguida al tiranuelo de San Juan por un acto de arbitrariedad incalificable en virtud de ser “gobierno legal”, tanto era su deseo de asegurarse agentes *naturales*! Procedió idénticamente en Tucumán, consintiendo y sancionando con su tolerancia y aprobación la revuelta que restableció al caudillo anti-guero, contra la voluntad del Congreso, y el deseo de todos los gobiernos del interior, excepto el de San Juan, que se hallaba en el mismo caso. Fomentó iguales tentativas de subversión frustradas en Salta, Santiago, Corrientes, recientemente en Córdoba y últimamente en Mendoza, para restablecer los antiguos caudillos, cuyos gobiernos había declarado legales.

Ultimamente la necesidad de proporcionarse agentes naturales en Buenos Aires le hizo descender hasta asociarse en persona a una revuelta de turbas, acaudilladas por desalmados, y destrozar la provincia de Buenos Aires.

No es sólo la intención torcida de la política lo que en un año ha mantenido en trastorno la República, sino el vicio fundamental del gobierno confederado, que necesita ser conspira-



dor, intrigante, revolucionario él mismo, siempre que estas propensiones y conatos le suministren para agente natural un gobernante tal en cada provincia como el que él había nombrado personalmente. El otro Tirano puso todavía un remedio al absurdo de la situación respectiva de los gobernantes, y fué reservarse el derecho de aprobar o desaprobado los gobernadores que eligiese el pueblo en las provincias; medida monstruosa y sin ejemplo en la historia de los absurdos humanos, pero remedio heroico a la imposibilidad del sistema administrativo. Así el gobernador actual de La Rioja permaneció gobernante sin la aprobación del Tirano, que ensayó en vano dos revoluciones para revocarlo, de la misma manera que el Director tuvo que reconocer la deposición de su mayor General en Corrientes, y hacer al gobierno de Buenos Aires el 16 de setiembre de 1852 y el 16 de julio de 1853 las cortesías más amables y cariñosas por impotencia.

Y esta imposibilidad es la que ha estereotipado en la Constitución el artículo de mentira y torpe aseveración que dice: "Los gobernadores de provincia son agentes *naturales* del Presidente para la ejecución de las leyes, etc."

Mentira en las palabras, mentira en el sistema y bases de la Constitución; reato puesto a las facultades del Presidente en lo que es vital, y que lo fuerza a subvertirlo todo; corromper un gobernante aquí por promesas y dones secretos: auxiliar o tolerar las conspiraciones que tiendan a librarlo de un mal agente allá; a hollar pueblos y Legislaturas en donde quiera que la agencia pacífica de la ley le quite un agente que le venía de perlas; derramar clandestinamente el oro del estado para proporcionarse prosélitos; y trabar la marcha pública de los negocios por las maquinaciones secretas de agentes privados encargados de corromper, de espiar, de intimidar y de cohechar en las provincias.

Esta es la situación que tal artículo de la Constitución hace al poder federal, y que medió siglo de historia nuestra, y diez de la Confederación norteamericana habían hecho sentir en sus



deplorables efectos. El año de Directorio transcurrido no se distingue en otra cosa sino en su afán de procurarse agentes, y para ello echar por tierra todas las instituciones fundamentales. Para propiciarse y seducir agentes, fué la convocación insólita de San Nicolás, fuente de las calamidades de que somos víctimas; para asegurarse *agentes* expidió el nefasto decreto del 16 de julio, en que, para reponer un gobernante, llevó su desacato la autoridad pública hasta declarar insurrecta a la Legislatura, de donde emanaban sus propios poderes; parricidio político, como el del hijo que declarase infame o hereje a su propio padre.

Pero toda esta cadena de males que nos ha labrado durante cuarenta años, era efecto de los hechos; y precisamente constituir el poder general y ligarlo con los provinciales era el objeto de la Constitución. La de los Estados Unidos llena admirablemente su objeto; la de Chile, según su naturaleza, perfectamente el suyo. Habríalo llenado la Constitución nuestra sí. desechando hasta el fin como lo había hecho desde el principio, sugerencias desprovistas de autoridad, se hubiese atendido a las que resultaban del contexto de la constitución misma que le servía de modelo. Pero la cláusula intercalada entre el juego de aquellas piezas hará saltar la máquina, causando el mismo estupor y asombro que causó a uno de los miembros del congreso constituyente al ver saltar hechas trizas barras de hierro, gruesas como el puño, por haber introducido el ligero mimbres que le servía de bastón entre los engranajes de una prensa. Para añadir o quitar piezas a una máquina es preciso saber por lo menos los principios de la mecánica, por miedo de que poniendo una palanca en dirección contraria al juego de las ruedas se haga estallar todo el mecanismo. Se ha prohibido librar a la circulación máquinas de vapor sin previo examen de peritos. ¿Por qué sería prohibido a todo el que halla en ello su cuenta lanzar al público proyectos de constituciones? ¿Hace más estragos, por ventura, un caldero roto que una constitución falsificada, produciendo la corrupción, las revueltas, la tiranía



por los mismos medios que se ofrecen como salvadores? ¿Vióse constitución que haga conspirador, traidor, revoltoso, anárquico al gobierno toda vez que la conspiración, la revuelta, la traición, la anarquía puedan procurarles un agente *natural*?

Esto es unitario como en Chile, dicen. Sea, pero pasar esa cláusula a la constitución federal es no sólo cambiar los frenos, sino poner el freno en la cola; y aun para hacer constituciones es preciso en América saber cómo se enfrenan y por dónde los caballos.

No terminaremos este capítulo sin repetir el epígrafe que va al frente de este ligero ensayo.

“¿Queremos ser federales?”

“Seámoslo al menos como los únicos pueblos que tienen esta forma de gobierno. ¿Queríamos, acaso, inventar otra forma federal desconocida hasta hoy en la tierra?”.

No hay medio: o el Presidente elige y revoca sus funcionarios, y entonces es unitario el gobierno y la Constitución cae, o el Presidente se reserva la facultad de aprobar o no las elecciones de gobernadores de las provincias, como al Tirano, y entonces las Legislaturas y las libertades provinciales son mera farsa, y la Constitución una burla. O el Presidente intriga, conspira y revuelve las provincias para deshacerse de los malos agentes que le den las elecciones provinciales, como lo hicieron el Tirano y Urquiza, y la anarquía se perpetúa y la Constitución es inútil, o se entra de plano en el sistema federal, uniendo las provincias entre sí por los funcionarios federales electos, pagados y revocados por el poder federal, y la Constitución es revisada para borrar de ella el obstáculo que ha levantado contra toda posible administración.

Y la Revisión de la Constitución es arca de alianza que salva del naufragio adonde marcha fatalmente la República.

Por la Revisión las Provincias continúan constituidas.

Por la Revisión, Buenos Aires puede aceptar como antecedente y base de una nueva discusión la obra ya consumada.



Por la Revisión, se subsanan los vicios de ilegitimidad que tuvo la Constitución por base.

Por la Revisión, se constituye el poder federal, anulado en la presente Constitución.

Por la Revisión, se convoca un verdadero y legítimo Congreso Constituyente, en proporción de la población, y no en conformidad a miras torcidas y amaños de la política, causa de la división actual.

La Constitución de los Estados Unidos fué revisada. En un capítulo aparte llamado ENMIENDAS tiene al fin los reparos que hicieron los Estados para aceptarla. No hay que darse prisa. Un año de tropezones aconseja no apurarse demasiado.

La Revisión ahorra un año de desmoronamiento lento de todo el mal obrado y los azares de un porvenir, para las provincias, oscuro e incierto.

Intervención del poder federal, "al solo objeto de sofocar insurrecciones," a requisición del gobernador de la provincia de Tucumán, Espinosa, apoyada por el Congreso y negada por el Director Provisorio, para restablecer al caudillo dejado por Rosas, a fin de servirse de él como agente.

¡VIVA LA CONFEDERACION ARGENTINA!

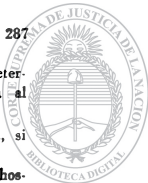
Excmo. señor don Manuel A. Espinosa.

Santa Fe, Febrero 3 de 1853. (1).

Mi muy querido amigo:

¿Para qué he de gastar tiempo en decirle lo sensible que me ha sido la noticia del trastorno ocurrido en Tucumán? Pero sí será útil avisarle que una indignación general se ha hecho sentir en todos los Diputados al Congreso Nacional. A todos los tengo instruidos, y no consentirán que un gobierno fundado sobre una carta constitucional ayer jurada, como el de V. E., venga por tierra. Hoy marchó a la ciu-

(1) Comunicaciones inéditas.



dad del Paraná a verme con el señor Ministro Peña, para que se determine por el Director la cuestión Tucumana, o para que la someta al Congreso. ¡Ojalá suceda lo último!

Se dice que el Director estará pasado mañana en el Paraná, si así lo verifica, andará este negocio más breve.

En todo caso ustedes deben obrar, y no perder momento en hostilizar a Gutiérrez; sostengan la guerra, aunque sea en un punto de la Provincia, que la resolución de la autoridad nacional hará el resto.

He recibido el paquete de anoche: los que me venían incluidos han sido, el del gobierno de esta provincia entregados en mano, y los dirigidos al señor Ministro Peña, remitidos hace una hora por el señor Gobernador Crespo.

Dicho señor y su ministro el señor Leiva están decididos a secundarnos en la cuestión de Tucumán: porque ese sentimiento es universal.

He leído muchas veces las tres cartas, una de 24 y dos de 20 de enero: en cuanto a la primera, haré dar postas libres al chasque; de las otras, felicito a V. por la noble cooperación que por segunda vez se ofrece a nuestra desgraciada provincia el señor Gobernador Taboada, y por la buena disposición que manifiesta el de Salta. La noticia de haber derrotado Castillo la mayor parte de las fuerzas de Juarez es de la mayor importancia, como también la de mantenerse fiel el comandante de Trancas con su regimiento.

Sírvase V. decir al señor Taboada que he llenado sus órdenes; instruyendo a los Diputados de Santiago de todos mis comunicaciones; y que ellos son mis colaboradores más entusiastas en favor del gobierno constitucional de Tucumán.

He determinado demorar el chasque para que lleve volando, como ha venido, la resolución del Director; y entretanto voy a pedir al señor Crespo haga encaminar hasta Córdoba estas comunicaciones, que Lavaisse recomendará lo mismo al señor Guzmán.

No tengo más tiempo: adiós mi fino amigo, y que la Providencia le ayude son los votos de su invariable amigo. Salustiano Zavalía (Diputado por Tucumán).

Adición — Ayer por la mañana, instruido por una carta del Dr. Frías escrita desde Santiago, dirigí una larga comunicación al general Urquiza empenándolo a resolver la contienda de Tucumán en favor del gobierno constitucional; y mañana repetiré desde el Paraná.



Al Excmo. señor Director provisorio de la Confederación Argentina,
Brigadier General don Justo José de Urquiza—

Santa Fe, 2 de Febrero de 1853.

Mi querido general y amigo. — Con motivo de haber leído una carta que desde Santiago del Estero dirige al Dr. Zavallía el señor Frías, comunicándole la noticia de una revolución estallada en Tucumán, y sabiendo que el señor gobernador Taboada escribe a mi colega el señor Gorostiaga sobre este mismo asunto, no he podido permanecer indiferente a mi patria, al país de mi nacimiento también, y a la situación general de la República. — Estas razones, mi general, me ponen en el caso de hablarle con la lealtad y franqueza que acostumbro, sin ocultarle un ápice de mis sentimientos, y mis pobres vistas a este respecto.

Así como en la revolución de septiembre en Buenos Aires he visto siempre el espíritu disolvente de la demagogia y anarquía, no he podido dejar de ver renacimientos del caudillaje y despotismo en los esfuerzos de los antiguos mandones del interior para conservar el puesto a despecho de los pueblos oprimidos.

Estos gérmenes disolventes y los males extremos que por desgracia no faltan en la República es preciso sofocarlos y cortarlos de raíz. Es necesario, mi general, adoptar a este respecto medidas eficaces y energicas, porque en estas circunstancias las contemporizaciones nos pierden; el país puede hundirse en un abismo de un momento a otro, y las calamidades que nos amenazan, si perdemos la bella oportunidad en que nos hallamos, serían incalculables. — En la reciente revolución de Tucumán, como en la situación triste de San Juan, veo amenazada la República de estos males. Pero, contrayéndome al caso especial de Tucumán, debo manifestarle francamente que si toma incremento la fortuna de los prosélitos o adeptos del señor Gutiérrez, si éste recupera por un motín militar el puesto perdido, en el acto se introduce la división y la anarquía en las Provincias vecinas. El general Gutiérrez es personalmente desafecto a los gobernadores de Santiago y Salta, como estos lo son también a él. Colocado Gutiérrez en el puesto, van a renacer antiguos celos y prevenciones de estas dos provincias contra el antiguo mandón de Tucumán, celos que por fortuna habían desaparecido completamente y reinaba la mayor armonía entre los tres gobernadores vecinos establecidos nuevamente a favor de la libertad y del orden constitucional. — He visto, mi general, el acta levantada por los revolucionarios de Tucumán, y le puedo asegurar que a mi pobre juicio no aparecen en ella bases ni principios. Las firmas que se hallan consignadas son (a excepción de pocas) enteramente desconocidas y de



gente baja. Han aclamado al Director y al Congreso, es verdad; pero esto no es sino un pretexto y una farsa. Qué ¿no marchaba en este mismo sentido el gobierno del señor Espinosa? ¿No prestaba el mayor acatamiento y sumisión a estas dos autoridades, ¿No ha dado relevantes pruebas de patriotismo y adhesión a la causa de la organización Nacional el nuevo Gobierno de Tucumán? ¿Con qué fin, pues, se sublevaran estos señores, que muy bien podían venir a ostentar su patriotismo poniéndose a las órdenes de UE, y ocupando un lugar honroso en las filas del Ejército Nacional? — Por otra parte ¿qué tienen que ver los intereses del señor Gutiérrez con los del Gobierno de Santiago del Estero? ¿A qué fin reinstiga a un comandante de ésta para que altere en ella el orden? ¿No es el señor Taboada entre los gobernadores uno de los más ardientes sostenedores de los principios proclamados en el inmortal programa de UE?. A fe que UE. sabe cuán sólidas garantías ha dado a este respecto el Gobierno de Santiago. — Debo también, mi general, manifestarle que todos los Diputados que nos hallamos reunidos en ésta hemos mirado el suceso de Tucumán con el más profundo dolor, no tanto por la deposición de un Gobierno que aseguraba la tranquilidad de aquella provincia, cuanto por el desobedecimiento de las órdenes del Directorio, tendientes a conservar el *statu quo* después de la destitución del general Gutiérrez, y más aun por la violación escandalosa que para efectuar ese movimiento se ha hecho del primer estatuto constitucional que se había dado a aquel pueblo, circunstancias muy sensibles en momentos que tratamos de formar hábitos constitucionales para sacar al país del abismo en que lo habían sumergido los Gobiernos irresponsables creados por Rosas. — Concluiré, mi general, protestándole que no me mueve más interés que el bien general de la patria al emitirle mis sentimientos en esta carta. No me anima ningún espíritu de partido, quiero sí, que se conserve pura e íntegra la reputación de la autoridad nacional, que no se disminuya un punto el crédito e influencia que ella tiene en todos los pueblos. — Las miradas y esperanzas de éstos están fijas en la autoridad de UE. y en la del Congreso instalado a la sombra protectora de esa misma autoridad. Yo, pues, como diputado, como patriota y como amigo de UE. me esforzaré en sostenerlas a todo trance. — Adiós mi general, que la Providencia lo ilumine, y que marche con mayor y más feliz éxito en las nuevas medidas que respecto de Buenos Aires ha adoptado UE. — Son mis más fervientes votos. — Con este motivo lo felicita también por ello cordialmente y del modo más ardoroso su afectísimo y muy leal amigo.

Benjamín José Lavaisse (Presbítero)

(Diputado por Santiago del Estero.)

Al Excmo. señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Santiago, don Manuel Taboada.

Santa Fe, Febrero 3 de 1853.

Mi querido amigo y compatriota.

Ya debe usted figurarse que escribiéndole en el aniversario de la inmortal victoria de Caseros, que trajo la ruina a los tiranos y caciques todos, debo hacerlo animado de sentimientos de profunda indignación, cuando por cartas de usted y del señor Espinosa recibidas ayer sabemos que estos miserables tratan de restablecerse.

Aun antes de haber visto cartas de usted y las copias del señor Arias remitidas al Dr. Zavallía, había dirigido una carta al señor Director, de cuyo contenido se impondrá por la copia que le adjunto. Esta comunicación va recomendada al señor Guzmán para que la pase a usted con la mayor brevedad.

Creo excusado hacer a usted reflexiones sobre este asunto, y manifestarle cuánta es la indignación y profundo desagrado que hemos sentido los Diputados todos al saber el escandaloso atentado de los amotinados de Tucumán contra una autoridad establecida por una constitución provincial recientemente jurada.

Usted, el señor Espinosa y el señor Arias deben proceder inmediatamente a tomar medidas serias y eficaces para contener a los sublevados, que sin miramientos a la presencia del Congreso Constituyente, y faltando al debido respeto no sólo a la autoridad de éste, sino también a la del Director, que mandó conservar el *statu quo* después de la deposición del señor Gutiérrez, han dado un escándalo a la República próxima a constituirse.

No esperen ustedes órdenes para proceder de esta manera. Qué, ¿no están ustedes en su perfecto derecho para repelar ese motín? ¿No tienen ustedes órdenes terminantes del Directorio a este respecto? Y sobre todo, ¿no se ve amenazada la tranquilidad de todas las provincias del Norte con la presencia de Gutiérrez en Tucumán? Obren ustedes con energía y decisión: mientras tanto recibirán ustedes órdenes del Directorio o del Congreso: ¡Ojalá! se someta este asunto a la deliberación de este último! ya verá usted el resultado, y adonde va a dar el cacique Gutiérrez. Asegúrcelos esto a todos esos compatriotas refugiados en esa provincia.

Probablemente marcharé acompañado del Dr. Zavallía al Paraná, allí hablaremos con el señor Director, y uniendo mi pobre voz a la esforzada de mi colega el señor Corostiaga podemos hacer mucho. Esto se halla en esa desempeñando una comisión del Congreso.





Adiós, compatriota; comuníqueme usted los resultados que obtenga en la nueva campaña que tiene que emprender esa provincia para restablecer otra vez la paz en la vecina y hermana de Tucumán. Espere usted que mi patriotismo agotará todos sus esfuerzos en favor de una causa tan justa, y cuente con la cooperación de su más leal amigo y afectísimo servidor, *Benjamín J. Lavaisse*. (Diputado por Santiago).

Postscriptum — Después de escrita ésta hemos recibido la última correspondencia, y con este motivo le manifesté francamente al general en otro párrafo de carta la urgencia y necesidad de alejar a don Celedonio Gutiérrez de aquel teatro, como el único obstáculo a la pacificación de toda la provincia del Norte. Inculco mucho en la probabilidad de un plan por parte de Gutiérrez, Sarabia y demás caudillos de Rosas para entronizarse de nuevo, y en las funestas consecuencias que acarrearía a la Nación la rehabilitación de estos caudillos.

VIVA LA CONFEDERACION ARGENTINA

Salta, Encro 20 de 1853.

A la II. Junta General de la provincia.

Es lleno de amargura que pongo en conocimiento de U. II. haber tenido lugar el 16 del corriente un motín en la ciudad de Tucumán proclamando Gobernador *legal* al general don Celedonio Gutiérrez, nombrando Gobierno Provisorio hasta la llegada de éste a don Agustín Aldurralde, y derrocando a la autoridad de S. E. el coronel don Manuel Alejandro Espinosa, autoridad reconocida por todos los gobiernos de la Confederación y mandada respetar por S. E. el Director Provisorio.

Se adjuntan los documentos relativos a aquel suceso. El número 1º es la contestación que he dado a la circular del Gobierno provisoriamente nombrado en Tucumán; en ella encontrará U. II. el juicio formado por este gobierno respecto de aquel lamentable y escandaloso acontecimiento. La actitud en que pone la provincia, y los procedimientos que expresa mi contestación y tengan tal vez lugar, de acuerdo con los gobiernos limítrofes, son, SS. RR., en cumplimiento de las órdenes que recibí en Palermo de San Benito de S. E., el Director Provisorio de la Confederación; órdenes dadas de conformidad a las atribuciones que le confiere el art. 14 de la ley nacional de 31 de Mayo, y que el gobierno está en el estricto deber de ejecutar. Las obligaciones que impone el acuerdo de San Nicolás no pueden quedar reducidas a meras frases, ni la obediencia que prescribe a una simple cortesía, nu-



cho más, señores RR., cuando vuestra convicción y la del gobierno, según todas las resoluciones vigentes, es que en el cumplimiento de aquella ley y obediencia a la autoridad que establece está vinculado el orden general de la República y su organización constitucional (1).

El N. es la comunicación que se ha recibido del Gobierno de Santiago conforme con este Gobierno relativamente a la rebelión de Tucumán. Notarán los SS. RR. que se intentó en los mismos momentos anarquizar aquella provincia y la posición en que le coloca para proceder conforme a sus deberes y a órdenes que expresa tener también recibidas de S. E. el Director Provisorio.

Me he dirigido a S. E. el Director Provisorio dándole cuenta del acontecimiento y resolución tomada.

Espero la cooperación de U. H. para cumplir más fácilmente con mi deber.

Dios guarde a U. H. M. A. — *Manuel Arias.*

El lector argentino sabe lo que importaron y produjeron todos los buenos deseos de las piezas anteriores. El gobernador Espinosa, legítimamente electo por el pueblo de Tucumán, empujado por los diputados al Congreso, apoyado por los gobiernos de Salta y Santiago, pereció con centenares de individuos, ante la ley del más fuerte; ardió la guerra civil, fué esclavizada una provincia y el supremo magistrado de la República dejó burlado al Congreso, inmoladas las víctimas, y dió su aprobación moral a la muerte de Espinosa, como la había dado a la de Alvarez, ambos sus sostenedores. La pluma se cae de la mano al reproducir indignidades tales.

(1) Nótese que el gobernador ha obrado sin órdenes de la Legislatura, y se apoya en las que recibió del Director *verbalmente*. Aquí está el agente natural. Lo más gracioso es que obraba contra la *nueva* voluntad del Director.

INDICE

DE LOS CAPITULOS, DOCUMENTOS Y CUESTIONES CONTENIDAS EN ESTE VOLUMEN



	Pág.
Prólogo de la presente edición	7
Prólogo de la edición de 1853	27
<i>Manifestación de los argentinos residentes en Santiago en 1852, y firmas que las suscribieron en Valparaíso, Copiapó, Lima, etc.</i>	41
<i>Predmbulo, declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Argentina de 1853</i>	47
 CAPITULO I. El Preámbulo	 53
“Confederación”	57
“En cumplimiento de pactos preexistentes”	68
“Para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”	71
“Constituir la unión nacional”	75
“Afianzar la justicia”	81
<i>Providencia oficial del Dictador Francia</i>	85
“Consolidar la paz interior”	100
“Proveer a la defensa común”	100
“Promover al bienestar general”	103
“Asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestros hijos y todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”	105

<i>Intervención del poder federal, "al solo objeto de sofocar insurrecciones", a requisición del gobernador de la provincia de Tucumán, Espinosa; apoyada por el Congreso, y negada por el Director Provisorio, para restablecer al caudillo dejado por Rosas, a fin de servirse de él como agent:</i>	286
--	-----





la Constitución, leyes o tratados de los Estados Unidos, está dentro del poder judicial confiado a la Unión.

En el primer proyecto de Constitución de los Estados Unidos, la cláusula era: "la jurisdicción de la corte suprema se extenderá a todos los casos que se susciten en virtud de las leyes sancionadas por la Legislatura de los Estados Unidos". Las otras palabras "la Constitución" y "tratados" fueron añadidas después sin aparente objeción.

A los casos que la Constitución americana ha designado como de la competencia especial de los tribunales de justicia nacional, la Constitución Argentina ha añadido dos más que son de una importancia y consecuencia capitales. Es el 1º de entre éstos el de *conflicto* (1) entre los *poderes públicos de una provincia*. Cada página de nuestra historia, o más bien toda nuestra historia versa sobre los conflictos de autoridades. Es la parte viva durante el gobierno español en toda la América, y después de la independencia, más que conflictos son atropellamientos, de parte de los poderes armados, sobre los que no podían oponer resistencia. Cómo, si no de este modo, puede explicarse el predominio de esos gobernantes que se han perpetuado, durante veinte años ya sin escándalo, a fuerza de ser común el hecho? El conflicto con las legislaturas no se ha obviado por la mayor parte, sino destruyéndolas, intimidándolas y haciendo imposible todo reclamo, por la falta de tribunal, fuera del alcance de la intimidación y el cohecho, ante quien hacer valer el derecho hollado. Este vacío se ha propuesto llenar la Constitución, dando a los poderes emanados del pueblo, que se ven agredidos, o embarazados en el ejercicio legítimo de sus funciones, un recurso para restablecer sus derechos, y sacar de la esfera provincial en que quedan de ordinario sepultadas estas violaciones, para que pueda estatuirse sobre ellas. Esta disposición es no sólo conforme con nuestros antecedentes históricos, sino un remedio su-

(1) *Conflicto de atribuciones*. "Es una contestación entre una autoridad administrativa y una judicial, sobre el punto de saber si es a la una o a la otra a quien pertenece el conocimiento del asunto que ha dado lugar a ello." *Répertoire Universel de jurisprudence*, verbo *conflict d'attributions*.